

LAS RELACIONES ENTRE MOVIMIENTOS SOCIALES, ONG Y PARTIDOS POLÍTICOS EN AMERICA LATINA

AMERICA LATINA 2006-2007

INFORME SOBRE DEMOCRACIA Y DESARROLLO: UNA MIRADA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL



ALOP | ASOCIACION LATINOAMERICANA
DE ORGANIZACIONES DE
PROMOCION AL DESARROLLO A.C.

Comité Ejecutivo 2005-2008

Presidente

Silvio Caccia Bava
(Pólis, Brasil)
scbava@polis.org.br

Secretario Ejecutivo

Jorge Balbis
jbalbis@alop.or.cr

Secretarios Regionales:

Región Centro América, México el Caribe

Oscar Azmitia
(Prodesa – Guatemala)
oscarazmitiagt@yahoo.com

Región Andina

Luis Miguel Sirumbal
(Cedal – Peru)
lms@cedal.org.pe

Región Cono Sur y Brasil

Miguel Santibañez
(Jundep – Chile)
corpjundep@123.cl

Punto Focal Género

Patricia Boyco
(SUR – Chile)
patriciaboyco@sitiosur.cl

Fiscalía

Eloisa Ulibarri
(Fuprovi – Costa Rica)
fuprovi@fuprovi.org

Antena Bruselas

Camilo Tovar
abruselas@alop.ngonet.be

Secretaria Ejecutiva

Benjamín Franklin # 186 – Col. Escandón M. Hidalgo, México D.F. 11800, México.
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C. – ALOP
Tel. (52 55) 5273 3400. Fax: (52 55) 5273 3449. info@alop.org.mx

Maio 2008

Impresso en Brasil
Por: Maxprint Editora e Gráfica Ltda

Diseño Editorial: Erica de Carvalho



Trabajamos por la
democratización y la equidad
en nuestras sociedades

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	09
2. POBREZA Y DESIGUALDAD	13
I. LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA Y DE LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA	14
3. MOVIMIENTOS SOCIALES, ONG Y PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA SOBRE SUS RELACIONES	19
I. MOVIMIENTOS SOCIALES EN 2006: EL MAPA DE LOS CONFLICTOS	20
II. ARTICULACIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS COMUNES ENTRE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL	27
III. RELACIONES Y TENSIONES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS	30
IV. NUEVOS GOBIERNOS “PROGRESISTAS” EN AMÉRICA LATINA	36
4. INFORME SUBREGIONAL CAMEXCA: MÉXICO, AMERICA CENTRAL Y CARIBE	39
I. INTRODUCCIÓN	40
II. UN MARCO REFERENCIAL Y AXIOLÓGICO	40
III. ANÁLISIS POR PAÍS Y REGIONAL	42
IV. SINTESIS SUB REGIONAL	62
5. INFORME SUBREGIONAL: PAÍSES ANDINOS	69
I. EL MAPA DEL CONFLICTO Y SUS RESOLUCIONES	70
II. LA SUBREGIÓN ANDINA: ANÁLISIS DESDE LOS PAÍSES	73
III. A MODO DE CONCLUSIÓN: POSIBILIDADES PARA UN CAMBIO SOCIAL EN LA SUB REGIÓN	88

6. INFORME SUBREGIONAL: CONO SUR Y BRASIL	91
I. INTRODUCCIÓN	92
II. EL CONO SUR EN UN TIEMPO DE CONTINUIDADES Y CAMBIOS	92
III. LA AGENDA PENDIENTE DEL COMO SUR	97
IV. LAS MOVILIZACIONES DEL PERÍODO YSU IMPACTO	99
V. ALIANZAS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES	101
VI. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL	103
VII. TENSIONES LATENTES Y EXPLÍCITAS ENTRE LOS ACTORES	104
VIII. CONCLUSIONES	105
IX. ANEXO	107
7. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA	113
8. ANEXOS	125
ANEXO 1: METODOLOGIA Y AMUESTRA PARA LA REALIZACIÓN DEL IDD	126
I. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	126
II. GUIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS	129
III. GUIÓN PARA EL ANÁLISIS SUBREGIONAL DE LAS ENTREVISTAS	130
ANEXO 2	132
I. SOBRE LA(S) IDENTIDAD(ES) Y EL PAPEL DE LA ALOP	132
ANEXO 3: RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS	139



1. PRESENTACIÓN

La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción del Desarrollo – ALOP – presenta en esta publicación su III Informe “Democracia y Desarrollo: una mirada desde la sociedad civil”, comprendiendo el periodo 2005-2007. El IDD es el resultado de un amplio esfuerzo colectivo que articuló la realización de una encuesta con la realización de una campaña, que se expresó por debates públicos y seminarios sobre los resultados de la encuesta.

Considerado por ALOP su principal eje de trabajo, el IDD pretende colaborar con la producción de conocimientos, con la producción de análisis de la realidad, de las negociaciones y conflictos latinoamericanos, en una perspectiva de contribuir hacia el fortalecimiento y articulación de actores colectivos comprometidos con la ampliación de la democracia y con la construcción de un desarrollo humano y sostenible.

Los cambios políticos acelerados por que pasa Latinoamérica, los procesos de integración y sus conflictos, el rol cada vez más importante de la sociedad civil en estos cambios, hizo con que ALOP decidiera por la realización de una encuesta sobre las relaciones entre ONGs, movimientos sociales y partidos políticos comprometidos con el cambio social. En cada país, las ONGs asociadas se reunieron y decidieron cuales organizaciones y movimientos sociales entrevistar.

Este trabajo tiene un objetivo específico: investigar y debatir el rol de las ONGs en este escenario de profundos cambios en Latinoamérica.

Para enfrentar la polisemia que viene adquiriendo este término ONG, queremos enfatizar que aquí se trata de una parte del mundo de las ONGs, de los grupos de ciudadanos que se organizan por la defensa y ampliación de los derechos humanos, de las ONGs involucradas con la ampliación de la democracia y con el desarrollo en nuestro continente.

Las movilizaciones sociales se amplían y ganan nuevos contornos en Latinoamérica en estos últimos años. Para comprender como se estructuran y el rol que tenemos en ellas, realizamos una amplia encuesta con 125 entrevistas realizadas en 17 países del continente, centrada en las movilizaciones ocurridas en 2006.

ALOP se involucró integralmente en la realización de este trabajo. Todas las asociadas fueron invitadas a participar y realizaron entrevistas, en cada país una de ellas se responsabilizó por sistematizar y analizar la encuesta en ámbito nacional. Estos Informes Nacionales son de extrema valía para múltiples interpretaciones. Por este motivo, ALOP pone a disposición de los interesados los Informes Nacionales, disponibles en el CD que acompaña esta publicación.

Los Informes Nacionales, por su vez, fueron sistematizados y analizados en sus dimensiones sub-regionales: México, Caribe y Centro-América; Región Andina; Cono Sur y Brasil y son presentados en esta publicación.

Tanto en el ámbito nacional, cuanto sub-regionalmente, los informes fueron presentados en una primera versión y debatidos en talleres y asambleas respectivamente, con la participación de las asociadas y de invitados que fueron entrevistados anteriormente. Finalmente se realizó un seminario latinoamericano, con la asistencia de intelectuales y movimientos sociales invitados, en que se han discutido los resultados de destaque de la encuesta como un todo.

Ese proceso, en sí, ya es un importante resultado del trabajo colectivo de ALOP y viene atender una demanda de su última Asamblea General, en 2005, que resolvió abrir una discusión sobre la puesta al día de sus compromisos, de su agenda, de su rol como actor político y su identidad como Asociación.

El diálogo con estos 125 entrevistados, líderes en sus organizaciones y movimientos, trae hacia el centro del debate de ALOP los conflictos, los dilemas, las dificultades y también las conquistas y los avances de lo que podemos llamar de un campo político, popular y democrático en Latinoamérica. Un campo plural, heterogéneo, de muchas voces, pero que ha logrado articularse de una manera sorprendente en los últimos años. En muchos de los casos analizados hay un periodo de movilizaciones que se impulsan por un facto político de la coyuntura y que suman una grande variedad de actores colectivos. ¿Pero es posible hablar de una agenda común?

Otra ventaja con la realización de esta encuesta fue la apro-

ximación y el diálogo de las asociadas de ALOP con todas estas organizaciones y movimientos sociales entrevistados y que se hicieron presentes en los debates. Un reconocimiento de parte a parte que refuerza o abre nuevas condiciones para la construcción de solidariedades y de iniciativas conjuntas. ALOP, como actor político regional, reconoce la importancia cada vez mayor del trabajo en red, de las alianzas, de participar en articulaciones regionales y globales en la perspectiva de la incidencia política conjunta.

Como parte de este proceso de investigación sobre la presencia de nuevos actores en la escena pública y en la política, ALOP realizó otra encuesta, en paralelo al IDD, sobre la participación política de las mujeres en el parlamento. Los importantes resultados de esta encuesta, realizada en el mismo periodo, se presentan en un capítulo específico en este libro.

Con la publicación de este Informe sobre Democracia y Desarrollo, ALOP quiere socializar los resultados de este trabajo y colaborar con la discusión pública sobre los conflictos y oportunidades que involucran las relaciones entre partidos políticos, ONGs y movimientos sociales que están comprometidos con las agendas de la democratización y del desarrollo de nuestro continente.

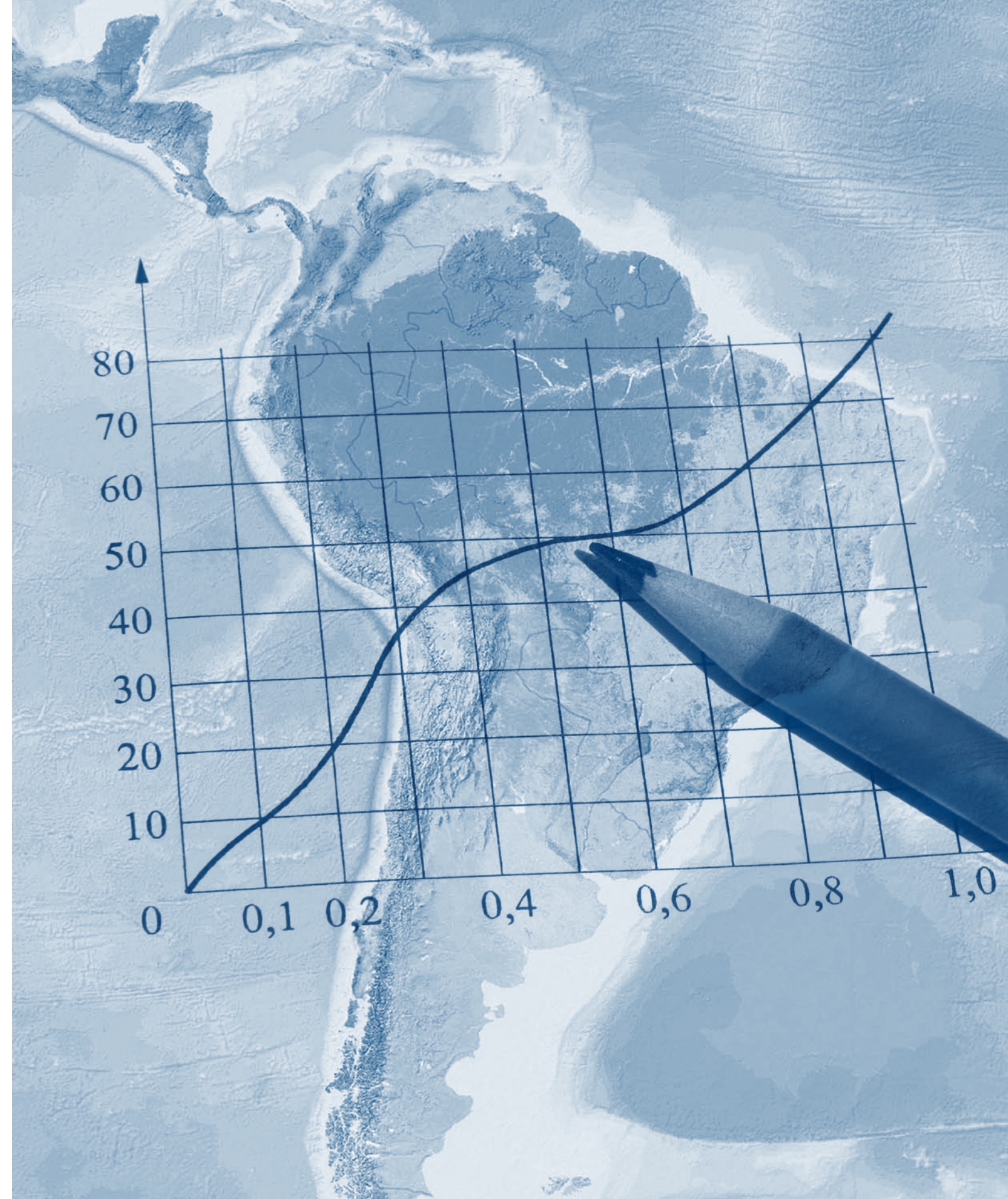
Queremos agradecer a los movimientos sociales, partidos políticos y ONGs que han colaborado con nosotros, queremos agradecer a los relatores de los informes nacionales e sub-regionales, queremos agradecer a las agencias de cooperación EED, ICCO, 11.11.11., Oxfam Novib, que tornaron posible esta encuesta y su debate, queremos agradecer, en especial, al conjunto de nuestras asociadas por su trabajo y su dedicación.



p/ Comité Ejecutivo
Silvio Caccia Bava
Presidente

NOTAS

1. La relación de las organizaciones y movimientos sociales entrevistados está en el Anexo III.
2. Por razones que no dependen de nuestra voluntad la encuesta no se realizó en la República Dominicana y en Cuba, países donde Alop también tiene asociadas.
3. Ver a este respecto en el Anexo II el documento-base sobre la identidad de ALOP a ser presentado y discutido en la Asamblea General de mayo de 2008, en São Paulo.



2. POBREZA Y DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA

I. LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA Y DE LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA

Pese a todas las políticas de combate a la pobreza anunciadas por gobiernos y por instituciones multilaterales, la mejora reciente que se anuncia en las condiciones de vida de la población latinoamericana es muy relativa. Y se puede decir que parte de estos resultados positivos no se deben a políticas de gobierno, sino a las remesas de los emigrantes, que tienen cada vez más importancia en la composición del PIB de países de la zona.

Fueron los 90 los años de ajuste estructural. Fueron años duros, en que la pobreza salta del 40,5% de la población en 1980 al 48,3% en 1990, registrando 200 millones de latinoamericanos sin posibilidades de atender a sus necesidades básicas. La década siguiente reduce el porcentaje de pobres al 42,5% del total de la población en 2000, pero eleva en números absolutos los pobres a los 207 millones de personas. El siglo XXI no trae mejoras. Una mirada más detenida, año a año, muestra la ineficacia de los gobiernos considerados en su conjunto de enfrentar a la pobreza. Se llega al año del estudio, en 2006, con prácticamente los mismos números del comienzo del siglo: 205 millones de pobres.

Con pequeñas variaciones, el segmento más pobre, los llamados indigentes, se mantiene constante hasta 2003. Desde ahí lo que existe son estimaciones que señalan una mejora y que esta mejora, al parecer, se debe a nuevos gobiernos como los de Venezuela y de Brasil, que adoptaron políticas específicas de atención a los más pobres.

CUADRO 1

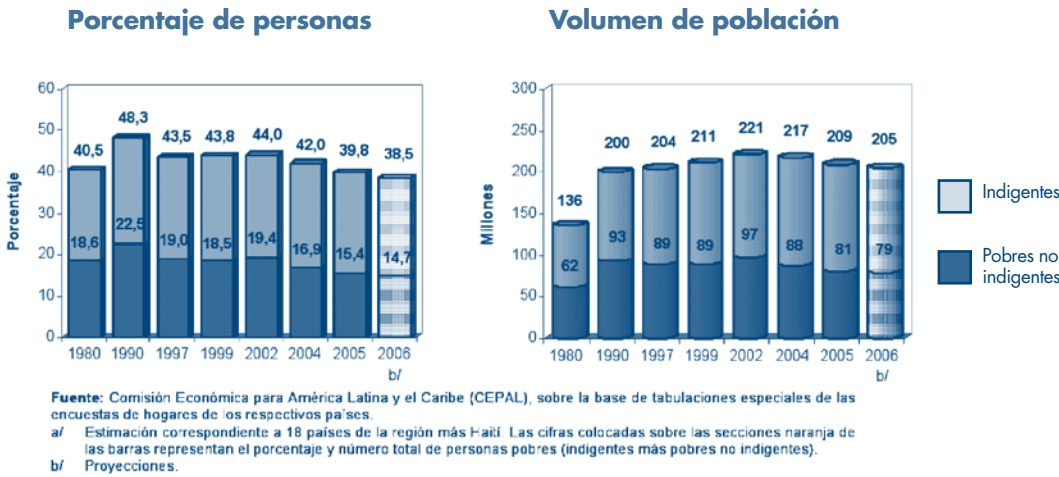
Incidencia de la Pobreza y la Indigencia en América Latina – 1980-2006

AÑOS	POBLACIÓN POBRE¹		POBLACIÓN INDIGENTE	
	Porcentaje	Personas	Porcentaje	Personas
1980	40,5	136,0	18,6	62,4
1990	48,3	200,2	22,5	93,4
1994	45,7	201,5	20,8	91,6
1997	43,5	203,8	19,0	88,8
1999	43,8	211,5	18,5	89,4
2000	42,5	207,1	18,1	88,4
2001	43,2	213,9	18,5	91,7
2002	44,0	221,4	19,4	97,4
2003	44,3	226,0	19,2	98,0
2004 ²	42,0	217,0	16,9	90,0
2005 ²	39,8	209,0	15,4	88,0
2006 ³	38,5	205,0	14,7	79,0

FUENTE: CEPAL (2006). Panorama Social de América Latina (2006)

- 1. Personas en hogares en situación de pobreza; abarca la población en situación de indigencia.
- 2. Estimación correspondiente a 19 países de la zona.
- 3. Datos estimados

América Latina: Evolución de la pobreza y la indigencia – 1980-2006



En otros estudios se pueden averiguar estimaciones que identifican una situación aún más grave. El número de personas pobres en la zona, en este caso, se acerca a los 230 millones, de los cuales más de 102 millones se consideran indigentes o viven bajo estado de pobreza extrema. (Bathiany et al., 2004)¹.

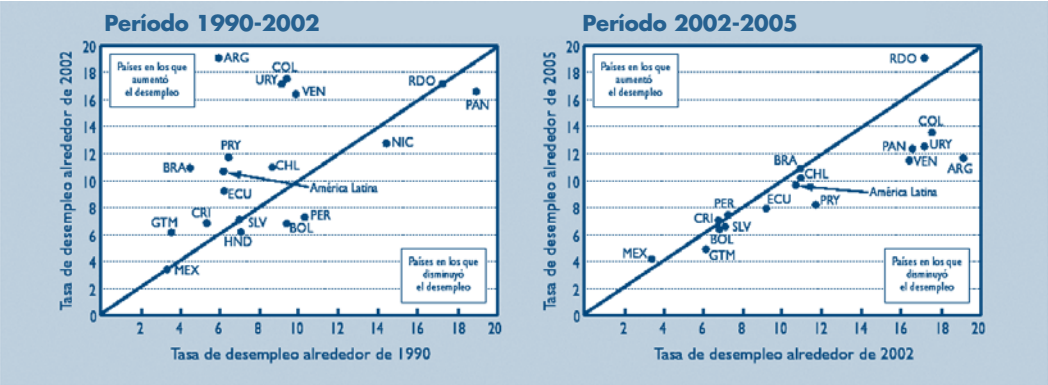
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO

Uno de los indicadores del empeoramiento en las condiciones de vida de los latinoamericanos fue la evolución de la tasa de desempleo. Aunque en algunos casos aislados haya habido una ligera mejora en las tasas de desempleo urbano, en la mayoría de los casos, las tasas siguieron igual o registraron un empeoramiento considerable. Al

contrastar las tasas de desempleo en el año 1990 con las del 2002, se observa que en países como Guatemala y El Salvador hubo una mejora en los índices de parados. No obstante, en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Colombia se ha observado un empeoramiento alarmante en las tasas de desempleo, llegando casi a triplicar en el caso argentino (que tenía una tasa de desempleo urbano en 1990 del 7,4% y llegó a registrar al comienzo de la década el 19,7%).

En el conjunto de la región, también se observó la elevación de la tasa de desempleo urbano del 8,8% al 10,4%. Aun en Chile, considerado el ejemplo de “éxito” de implementación del modelo neoliberal, la renta per cápita y los sueldos reales no superaban los de 1973, período de apretura promovida por la dictadura.

América Latina (18 países): Evolución del desempleo entre las personas de 15 a 64 años, Zonas Urbanas, 1990-2002 y 2002-2005^a (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a En la cifra regional no se incluyen datos de Nicaragua por no contar con información del último periodo sobre este país; en Honduras, los datos disponibles para el último periodo son de 2002 y 2003, situación que no permite reflejar el proceso de recuperación del empleo, motivo por el cual, junto con Nicaragua, no figura en el gráfico de la derecha. En las cifras de Colombia, Panamá y República Dominicana se incluyó el desempleo oculto (en 2005 la encuesta de este último país permite separar el desempleo oculto del abierto, que era del 8,0%); la cifra de Argentina corresponde al Gran Buenos Aires, la de Bolivia a ocho ciudades principales y El Alto, la de Paraguay a Asunción y el Departamento Central y la de República Bolivariana de Venezuela al total nacional.

² La tasa de desempleo regional basada en las cifras oficiales de los países registra una disminución del 11,0% al 9,1% entre 2002 y 2005.

El análisis de los datos sobre la informalidad en el mercado laboral son también desoladores respecto a los efectos de las políticas neoliberales en las economías de la región. Se intensificó la precarización del mercado laboral, con la tasa de informalidad alzándose del 40% en 1980 al 52% en 1990 y asomándose al borde del 56% en 1995.

Junto a eso, se destaca la reducción de la parcela de asalariados dentro del total de ocupados urbanos, que bajó del 71% al 67,5% entre 1990 y 2002, juntamente con el aumento del desempleo. El sueldo mínimo real correspondía al 87% del existente en la década de los 80 y el porcentaje de familias pobres subió del 35% al 43,2% en ese período.

Pese a la inexistencia de datos para esta década, la situación hasta el año 2003 parece no haber mejorado significativamente.²

Apenas no se agravó más este cuadro a causa de la solidaridad entre las familias pobres. Los trabajadores que no encontraban trabajo en sus países migran, principalmente a los Estados Unidos. Y transfieren parte de sus rendimientos para auxiliar a sus familias en los países de origen.

Los datos disponibles indican que unos 25 millones de latinoamericanos han sido forzados a migrar desde sus países de origen en búsqueda de trabajo y se encuentran diseminados por todo el mundo. Según estudio hecho en 2004 por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) – organismo perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – el principal destino de estos migrantes son los Estados Unidos,

donde viven 16,7 millones de adultos nacidos en Latinoamérica y alrededor de 10 millones les envían periódicamente dinero a sus familias, por lo general, de poca renta.

Según el estudio, México es el principal beneficiario, con un ingreso de remesas de cerca de US\$ 10 mil millones, casi la tercera parte de las transferencias enviadas a América Latina y al Caribe. Los países de América Central recibieron US\$ 5,5 mil millones; los países caribeños, US\$ 5,45 mil millones; y los países andinos, US\$ 5, 4 mil millones al año. Según el informe del BID, los flujos financieros relativos a estas remesas se elevan por una media ponderada del 7,05% al año. Se calcula que las remesas, en 2005, a El Salvador y a Ecuador correspondieron, respectivamente, al 13% y al 15% del PIB Nacional. En algunos casos, representa más del 10% del PIB de los países destinatarios.

Pero el principal indicador es la desigualdad en la distribución de la renta. A excepción del África subsahariana, son las más altas tasas de desigualdad del mundo. Si miramos el conjunto de la zona, los 10% más ricos de la población detienen el 48% de la renta total mientras los 10% más pobres reciben apenas el 1,6% (BIRD, 2006)⁴.

Los datos de los países, tomados individualmente, registran que el 20% más rico se apropia en media de un 45 al 55% de la renta nacional, llegando al extremo del 61,6% en el caso brasileño. Ya el 20% más pobre de la población detiene en media del 3% al 6% de la renta nacional, una vez más con Brasil liderando el ranking de país más desigual del mundo, donde el 20% más pobre detiene la irrisoria marca del 3,5% de la renta nacional.

DISTRIBUCIÓN DE RENTA EN LOS HOGARES URBANOS

(porcentaje de la renta nacional total)

		1980	1981	1984	1986	1987	1988	1989	1990	1992	1994	1995	1998	1999	2000	2003
País																
Argentina	20% más pobres	6.8			6.4				6.2	5.9	5			6		
	20% más ricos	45.4			48.7				50	47.5	51.1			51.6		
Bolivia	20% más pobres							3.4		4.5	5.4			5.1		
	20% más ricos							54.3		53.5	51.5			49.5		
Brasil	20% más pobres					3			3.3					3.5		
	20% más ricos					60.8			59.2					61.6		
Chile	20% más pobres					4.4			4.7	4.9	4.7		4.6		4.9	5
	20% más ricos					55.9			55	55.2	55.6		54.9		54.8	54.2
Colombia	20% más pobres	3.4			3.8				4.6	4.1	3.7			4		
	20% más ricos	58.8			51.4				51.8	51.4	57.2			54.8		
Costa Rica	20% más pobres		6.7				6.4		5.7	5.6	5.8			5.6		
	20% más ricos		40				43.3		40.7	42.5	43.5			43.8		
Ecuador	20% más pobres								5.9		5			4.7		
	20% más ricos								45.8		46.3			51.2		
El Salvador	20% más pobres											6.2		5.6		
	20% más ricos											46		45.6		
Guatemala	20% más pobres				3.9			3.7	4.8				5.5			
	20% más ricos				52			53.5	53.2				52.1			
Honduras	20% más pobres								3.9	4.5	4.4			4.6		
	20% más ricos								16.1	17.4	15.3			16		
México	20% más pobres			7.8				6.2		6.4	6.8		6.7		6.7	
	20% más ricos			41.2				51.4		50.4	49.6		49.9		49	
Nicaragua	20% más pobres												3.5			
	20% más ricos												54.3			
Panamá	20% más pobres				4.3			4.2			4.6			4.8		
	20% más ricos				48.9			52.9			51.6			50.4		
Paraguay	20% más pobres				5.8				6.8	5.7	6.1			5.9		
	20% más ricos				48.9				44.3	45.6	49.8			46.6		
Perú	20% más pobres													5.8		
	20% más ricos													48.9		
Uruguay	20% más pobres		6.8		7.3				8.2	9	8.9			8.7		
	20% más ricos		46.4		48.3				44.5	40.5	40			41.5		
Venezuela	20% más pobres		7		5.6				5.7	5.7	6.2			4.4		
	20% más ricos		37.8		45.2				44.6	44.8	46.4			47.		

Fuente: CEPAL/BADEINSO (acceso en nov./2007)

Las consecuencias de las políticas impuestas por el Consenso de Washington penalizaron fuertemente a la población latinoamericana y brindaron el telón de fondo para la interpretación de los cambios electorales que vemos los últimos años. La crisis política y económica asoló la región a comienzos de este siglo, principalmente en Ecuador en 2000 y en Argentina en 2001 y fue la primera señal de estos cambios.

Es en este contexto que surgen nuevos actores colectivos, resurgen los movimientos sociales, y se constituyen las nuevas mayorías políticas, al menos nuevas mayorías electorales. En muchos países, en estos últimos años, se han elegido a gobiernos de nuevo tipo, más comprometidos con los sectores populares, defensores de la soberanía nacional, movilizados en la búsqueda de una integración regional autónoma. Es evidente la relación entre esta gran insatisfacción social, los resultados de las elecciones y las estrategias adoptadas. Lo que no es evidente es el proceso que permitió esta abertura a nuevas agendas, a nuevas posibilidades.⁵

Algunos analistas identifican que este nuevo período de América Latina es una ventana de oportunidad para que se enfrente a la cuestión de la pobreza y de la desigualdad. Que hay una coyuntura de factores que permitiría cambiar el curso de la historia. Otros, evidentemente, no reconocen un nuevo período y reafirman la permanencia del modelo neoliberal y de sus impactos sociales y políticos. Las movilizaciones del 2006, que serán nuestro objeto de atención, tendrán distintas interpretaciones, como se verá.

NOTAS

* Sociólogo, coordinador ejecutivo del Instituto Pólis, presidente de Alop.

** Sociólogo, mestre en ciência política, especialista en movimientos sociales y participación política.

1. Batthyány, Karina; Cabrera, Mariana e Macadar, Daniel (2004), Caderno Ocasional 04: A Pobreza e a Desigualdade na América Latina. Instituto do Terceiro Mundo, Uruguai: Soledad Bervejillo

2. Sader, Emir e Jinkings, Ivana; (coord), (2006), Latinoamericana: Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. Rio de Janeiro: Boitempo Editorial.

3. Informaciones relativas al año de 2004.

4. Banco Mundial, BIRD, (2006), Redução de pobreza e crescimento: Círculos virtuoso e vicioso.

5. Silvio Caccia Bava; "A democracia em disputa"; Le Monde Diplomatique Brasil; ago de 2007.



3. MOVIMIENTOS SOCIALES, ONG Y PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA SOBRE SUS RELACIONES

I. MOVIMIENTOS SOCIALES EN 2006: EL MAPA DE LOS CONFLICTOS

El estudio se planteó tratar del tema de la relación de los movimientos sociales, ONG y partidos políticos con base a experiencias concretas, buscando así evitar los discursos genéricos, de carácter más ideológico-programáticos. A la vez, se planteó traer a la discusión acontecimientos recientes que puedan explicitar identidades y diferencias en las relaciones entre los distintos actores involucrados. Con este criterio se han enfocado las principales movilizaciones sociales ocurridas en cada país durante el año de 2006, aunque dichos acontecimientos formen parte de procesos más largos que ganan significado político en su lectura más abarcadora.

Para aportar con una evaluación más informada de la situación actual ha sido necesario identificar el mapa de los conflictos en este año de 2006, que se pudo extraer de la investigación. ¿Qué demandas traen los movimientos sociales este año? ¿Alrededor de qué disputas organizan su expresión colectiva? Este mapa nos permite utilizar algunos ejemplos de movilizaciones para analizar con más detalle cómo se da esta relación, a veces tensa y conflictiva, a veces complementaria, entre movimientos sociales, partidos políticos y ONG en este escenario de cambios de América Latina.

Las informaciones recolectadas en la investigación nos muestran un escenario distinto de la interpretación de muchos analistas, que hablan de una América Latina derrotada frente al neoliberalismo, donde las fuerzas de cambio social se encuentran fragmentadas, desarticuladas, incapaces de actuar en el escenario público.

El mapeo de las movilizaciones y conflictos sociales ocurridos en América Latina en 2006 sorprende. Muestra un amplio mapa de resistencias y de movilizaciones portadoras de propuestas de cambios más o menos radicales, según el país.

Las redes de ciudadanía, que se articulan cada vez con mayor amplitud, se hacen cargo de politizar y diseminar estas movilizaciones que, al que parece, tienen además, a partir de sus victorias, un efecto inductor de fomento a otras movilizaciones. Se nota un esfuerzo crítico por parte de estos actores de la sociedad civil de articular los temas y las movilizaciones locales al modelo de desarrollo, más precisamente a las políticas neoliberales.

Y al comienzo de los años 90, inaugura este tipo de postura la experiencia del movimiento zapatista, e indica la posibilidad de la conexión de sentidos entre las movilizaciones locales y la globalización de las luchas contra el neoliberalismo.

“En 1994, en AL, declara el zapatismo guerra al neoliberalismo. El MST amplifica el impacto del zapatismo. Y se suceden grandes movilizaciones de campesinos e indígenas en Bolivia, Ecuador y Perú, además de algunas zonas de Colombia y de Chile. Las luchas de los piqueteros en Argentina ocurren a la misma época en se inscriben en la misma tendencia general. Las numerosas manifestaciones mundiales contra el neoliberalismo desde Seattle, los impresionantes progresos adquiridos por el Foro Social Mundial, todo ello ha demostrado la comunicación existente entre las luchas sociales y procesos políticos”.¹

Sin embargo hay que decir que el escenario no permite que nos ufanemos. Muchas de dichas movilizaciones no han logrado los propósitos pretendidos, como impedir la firma de los TLC con Estados Unidos en varios países. Por otro lado, han contribuido para cambiar una cultura de aceptación de las políticas que “vienen desde arriba” y para una mayor articulación entre distintos actores de la sociedad civil que se organizan para la defensa de derechos.

En algunos casos, con destaque para los entrevistados bolivianos, cuando preguntados sobre las principales movilizaciones ocurridas en sus países, estos entrevistados mencionaron como iban enganchados sus entidades y movimientos en los procesos electorales, revelando ya en este momento una particular relación de estos movimientos con los partidos políticos que llevaron, por ejemplo, a Evo Morales y a Rafael Correa a la presidencia de sus países.

En estos dos países de la región andina surgen nuevos partidos políticos muy vinculados a los movimientos sociales, expresión de sus demandas y de su presencia en la escena pública. Esta es la región que más expresa polarización política en toda América Latina, donde, según Touraine, se decide la vida política del continente y su capacidad de inventar un modelo político y social capaz de operar sobre una situación extraordinariamente difícil. “Es en Bolivia que podemos percibir con más claridad las posibilidades de establecer un vínculo entre la lucha contra la desigualdad y la lucha por la democracia”.²

Hay que considerar para este análisis que 2006 es un año de elecciones en América Latina. Son 10 países de la zona que, en ese año, eligieron a nuevos presidentes, esto en una coyuntura marcada por la aparición de lo que algunos llaman de nuevas mayorías políticas. Procesos electorales que, en varios casos, van a revelar nuevas relaciones de los movimientos sociales con la política, e indicar la posibilidad de nuevas relaciones del Estado con la sociedad civil.

Si consideramos el período de diciembre del 2005 a diciembre del 2006, las elecciones en Bolivia, en Chile, en Costa Rica, en México, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, trajeron una nueva atmós-

fera a América Latina. Aun en países como México, Perú y Colombia, donde sectores claramente conservadores ganaron las elecciones, la coyuntura ha cambiado. El fraude electoral en las elecciones mexicanas, por ejemplo, llevó a más de un millón de personas al frente del palacio presidencial en un acto simbólico de darle posesión como presidente a López Obrador, el candidato de la oposición. En Colombia se forma la Cumbre Nacional Itinerante, una amplia coalición de movimientos y organizaciones de la sociedad civil que protesta contra la firma del TLC y la elección de Uribe y moviliza, el día 15 de mayo, a 50.000 personas en defensa de la vida, del territorio, de la dignidad, de la autonomía, y de la soberanía nacional.

En los primeros momentos de sus gobiernos, Evo Morales y Rafael Correa buscan reforzar sus lazos con los movimientos sociales e imprimir en sus gobiernos la marca del cambio social cuando convocan referendos para la institución de Asambleas Constituyentes. Buscan el respaldo de las organizaciones indígenas y de los sectores populares de una manera general, que conquistan con el voto el derecho de que estos países elaboren nuevas Constituciones.

Según algunos entrevistados, ahí está una oportunidad para que los movimientos sociales y sus organizaciones influyan en el diseño de un nuevo Estado, de un nuevo pacto social, en la perspectiva no de una reforma, sino de una verdadera refundación democrática. Por esas mismas razones la reacción de los sectores conservadores se hace sentir de manera más polarizada, expresándose, en el caso de Bolivia, por la resistencia ofrecida por gobiernos de las provincias a las políticas del gobierno central, por movimientos separatistas que defienden la autonomía política de sus provincias.

Hacía falta volver mucho en el tiempo para encontrar otro ejemplo tan impresionante de un vínculo fuerte entre los movimientos sociales y acciones propiamente políticas de transformación social de las instituciones y de la sociedad. Sería este el caso de los grandes movimientos campesinos, los cuales surgieron aún antes la revolución de 1952 en Bolivia y su

relación con el gobierno de Víctor Paz Estensoro.

“En 1952 – durante el apogeo de la Guerra Fría y la imposición en el resto de AL de regímenes de derecha “anticomunistas” – Bolivia, sorprendentemente, vivió una de las experiencias revolucionarias más radicales de la historia de AL.

Provocados por un fraude electoral oficialista, los trabajadores mineros y los campesinos, conducidos por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con el apoyo del Partido Obrero Revolucionario (POR), trotskista, se movilaron en una revolución violenta contra el Estado, el ejército y la oligarquía minera y latifundista. En combate abierto derrotaron al ejército regular y lo disolvieron. El gobierno revolucionario del MNR, presidido por Víctor Paz Estensoro, decretó la nacionalización de las minas de estaño y una reforma agraria que los campesinos ya ejecutan por su cuenta. En pocos años esta revolución se moderó por presiones internacionales y necesidades de financiación y apoyo técnico. Pero los gobiernos de Paz Estensoro y sus sucesores hasta 1964 se pueden clasificar como gobiernos de izquierda.”³

Aun falta comprender de hecho la historia de las movilizaciones sociales en América Latina; su dinámica trae una agenda de conflictos que se reiteran en sus temáticas de lucha contra las desigualdades y por más democracia, pero que amplían sus temáticas y ganan nuevas formas de expresión en la actualidad.

Si se observa más atentamente algunos de esos conflictos, se puede percibir que los procesos de globalización reforzaron algunas agendas que tienen como eje temas que habían desaparecido en los años 90, como el de la soberanía nacional y de las nuevas alternativas de desarrollo. A estos temas, a los que se puede llamar recurrentes, se suman nuevas proposiciones que permiten identificar pistas de interpretación sobre las apuestas que hacen estos movimientos sociales como estrategia política: la democratización de la democracia, el control social sobre los gobiernos.

ECUADOR: LA DISPUTA POR LA RENTA DEL PETROLEO Y POR LA CONSTITUYENTE

El 15 de mayo de 2006, el gobierno de Ecuador rompió el contrato que le concedía a la empresa norteamericana OXY (Occidental Petroleum Corporation) derecho de extracción de petróleo en el país. Resulta que los movimientos sociales ecuatorianos presionaron por esta rescisión, con protestas y grandes movilizaciones populares al inicio del 2006.

Su primer evento tuvo lugar el 17 de enero, bajo el mandato del gobierno provisional de Alfredo Palacio. Sindicatos petroleros, de los profesores, consejo de ingenieros y geólogos, organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles, congregados en el Frente Patriótico por la Soberanía Petrolera, organizaron marchas y bloqueos en las grandes vías. Las ac-

tividades se expandieron por casi todo el territorio nacional, con destaque para Esmeraldas, donde 1200 personas marcharon por las principales calles. En la provincia de Imbabura hubo dura represión policial en la paralización de la vía Panamericana Norte.

El Frente exigió la revisión de los contratos petroleros con base en la manifestación del Fiscal General del Estado, que desde 2004 alertaba sobre la violación sistemática de la Ley de Hidrocarburos y de la Constitución ecuatoriana por parte de la empresa.

En marzo del mismo año, la Confederación de las Naciones Indígenas de Ecuador - CONAIE y la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa de Ecuador - ECUARUNARI, que aglutinan federaciones indígenas y campesinas, coordinaron una jornada nacional de tres semanas. Las movilizaciones tuvieron la participación de estudiantes, profesores

y amas de casa, además de consolidar una participación masiva de sectores sociales urbanos.

Bloqueos de carreteras, huelgas, marchas, cierre del comercio y levantes populares movieron las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y Zamora. A la vez, marchas salidas de Imbabura, en la sierra, y de las provincias amazónicas de Morona-Santiago y Pastaza siguieron rumbo a Quito. La catedral de Quito fue tomada por movimientos sociales, hubo protestas delante de la embajada norteamericana. La jornada estuvo marcada por una violenta represión, se estiman 30 heridos y 100 detenidos.

Otros puntos centrales de la pauta de estas movilizacio-

nes eran la realización de la Asamblea Constituyente y el fin de la negociación del TLC con EE.UU., negociación que acaba por romperse con la expulsión de OXY. Aparte de ello, el movimiento exigió la retirada de la marina norteamericana de la base aérea de Manta y la suspensión de la participación ecuatoriana en el Plan Colombia.

En abril de 2007, un referendo aprueba por 81% de los votos la creación de una Asamblea Constituyente. La campaña que se sigue para la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente moviliza a Ecuador con debates y manifestaciones. El Movimiento Alianza País, que había elegido al presidente Rafael Correa y había rechazado disputar sillas en el Congreso, sale victorioso, conquistando la mayoría absoluta de las sillas. Su promesa es la refundación democrática de Ecuador.

En una dinámica distinta, movimientos sociales de varios otros países buscan ampliar y fortalecer la participación ciudadana en canales de participación. La visión de democracia que se diseña en la aspiración de estos nuevos actores políticos, principalmente en el Cono Sur, como apunta el informe sub regional de la investigación, tiene como eje las propuestas de descentralización de la gestión pública y de participación institucionalizada de la ciudadanía en los procesos de decisión. Propuestas que se han construido a lo largo de los años. Que vienen de un acúmulo de experiencias de gestión de gobiernos locales y regionales por estos nuevos actores. Experiencias con más de una década, con destaque para las experiencias de Brasil, pero que también se implementan, por ejemplo, en Perú.

Discusiones sobre estos nuevos aires en América Latina estimularon el Foro Social Mundial, realizado este año de 2006 en Venezuela, y que ha sido marcado por un clima de integración y solidaridad continental. El Foro trajo a la discusión el tema estratégico de la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo para la región, discutió la integración con soberanía, matriz energética, defensa de los recursos naturales, nuevos mecanismos de comunicación y de financiación del desarrollo, entre otros.

Los registros que nos brinda la investigación nos permiten identificar la existencia de amplios movimientos sociales, ya sean de ámbito nacional o regional. Movimientos que demuestran una nueva capacidad que tienen los sectores organizados de la sociedad civil de actuar en la política. Lo nuevo – este nuevo vigor y politización de los movimientos sociales – guarda una estrecha relación con “la pérdida de legitimidad de algunas instituciones democráticas – partidos y parlamentos – aporta de manera significativa para el fortalecimiento de los movimientos sociales y de las organizaciones que los sostienen. Favorece además el surgimiento de nuevos movimientos sociales”.⁴

El telón de fondo del resurgimiento de los movimientos sociales, desde dicha perspectiva, es “la crisis del modelo neoliberal, que culmina con el corralito en 2001 en Argentina.

Esa crisis trajo consecuencias importantes en lo tocante a la constitución de nuevos sujetos políticos: generó nuevos actores sociales como los piqueteros en Argentina, los pequeños agricultores endeudados de México, los jóvenes y una variedad de movimientos de identidad, movimientos altermundialistas; potenció fuerzas sociales ya existentes como los campesinos en Brasil y en México, los indígenas en Ecuador, Bolivia, partes de México y América Central; atrajo a las filas de contestación contra el neoliberalismo a grupos y sectores sociales de las clases medias, por cuenta de sus efectos empobrecedores y excluyentes”.⁵

Otros analistas no identifican esta tendencia, reafirmando la disyuntiva entre democracia y desarrollo y señalando el desplazamiento de la disputa democrática de las cuestiones estratégicas. En este caso, los movimientos sociales se referirían más a temas inmediatos y que no portaban ese carácter transformador, limitándose a expresar demandas de carácter más corporativo, no presentando una capacidad de intervenir en la política. Esta misma disyuntiva permitiría comprender las contradicciones aparentes presentes en varios gobiernos, que se identifican con el discurso de la izquierda, pero practicaría políticas de derecha, es decir, dan continuidad a las políticas neoliberales.

Resulta importante observar que las lecturas de la situación de América Latina se diferencian si consideradas las distintas regiones del continente. En la zona comprendida por México, América Central y el Caribe, la visión expresada por el estudio y por sus por analistas es de un período de resistencias y de grandes dificultades para asegurar la garantía de derechos. En la zona andina, polarizada entre izquierda y derecha, la lectura es de que las instituciones democráticas existentes no dan cuenta de procesar el conflicto y atender a las demandas sociales y, por ello, resulta necesaria la refundación democrática, con toda la radicalidad que ésta pueda contener. En el cono sur, donde las instituciones democráticas han podido absorber, en alguna medida, los nuevos actores políticos, el conflicto se procesa principalmente a través de canales de participación y su horizonte es la realización de reformas, en los marcos de las institucionalidades vigentes.

Estas diferencias expresan distintas dinámicas del conflicto social, pero encuentran su denominador común en lo que José Nun, en un texto clásico, llamaba la “rebelión del coro”.⁶

Aunque que en muchos casos las reivindicaciones y propuestas de los movimientos sociales no hayan salido victoriosas, como pasa en las luchas contra los TLC, los acontecimientos del 2006 permiten identificar, en concreto, lo que son las luchas de resistencia contra las políticas neoliberales y contra una integración subordinada al proceso de globalización. Y nos permiten identificar igualmente, en varios países, avances en los procesos de democratización de la sociedad y del Estado.

La evolución de los precios internacionales, tanto del petróleo como de minerales abundantes en América Latina provocó un especial interés por parte de las grandes empresas transnacionales, que han promovido un intenso proceso de adquisiciones en la región, generando un movimiento de resistencia popular en el sentido de la defensa de los recursos

naturales como factores de desarrollo nacional, en el sentido de la defensa del empleo y del trabajo y contra la contaminación ambiental que traen dichos proyectos.

Panamá, Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, en 2006 tienen movilizaciones contra la concesión a empresas de minería transnacionales de regiones de explotación en sus países.

Se puede incluir en este cuadro de movilizaciones en defensa de los recursos naturales tanto la nacionalización del petróleo en Bolivia, que se realiza bajo presión de los movimientos sociales como la disputa entre Uruguay y Argentina con relación a las industrias de producción de papel y celulosa y la contaminación de las aguas que estas producen.

El caso de las “papeleras”, como quedó conocido este contencioso, merece atención. Él da indicaciones de cómo se está centralizando el tema ambiental y la participación ciudadana.

ARGENTINA: EL CASO DE LAS “PAPELERAS”

Al comienzo de 2005 el gobierno uruguayo autorizó a las empresas Ence, española, y Botnia, finlandesa, que construyeran sus fábricas en una ciudad a las orillas del río Uruguay.

En diciembre de 2006, la fábrica de celulosa española Ence se retiró de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, por presión de las movilizaciones promovidas por la ciudadanía organizada.

La iniciativa vino de Gualguaychú, al otro margen del río, ciudad argentina localizada en la provincia de Entre Ríos, que tiene el derecho de mutua administración de las aguas y denuncia los graves impactos ambientales que advendrán de la implantación de las papeleras. Para oponerse a la iniciativa y denunciar el impacto ambiental, los daños ambientales, Gualguaychú organizó la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualguaychú.

El 3 de enero de 2006, con el apoyo de comunidades vecinas, los integrantes de la Asamblea hicieron un bloqueo de 45 días sobre el puente internacional General San Martín, entre Argentina y Uruguay. El 1° de mayo, volvieron a cerrar el puente alrededor de 100 mil residentes de la zona, liderados por organizaciones sociales y ambientales.

A consecuencia de dichas movilizaciones, pasados tres días, el gobierno argentino de Néstor Kirchner demandó al país vecino a través de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por violación del Estatuto del Río Uruguay. Además, se comprometió ante los integrantes de la Asamblea que no permitiría la construcción de las fábricas, las cuales aguardaban respuesta para su pedido de crédito junto al Banco Mundial.

El día 12 de noviembre de 2006, aproximadamente 7 mil

vehículos formaron una caravana a paso lento por la carretera 14, que comunica Gualguaychú con el interior del país, bajo la consigna “Gualguaychú en alerta contra la financiación del Banco Mundial”. Ese organismo internacional, no obstante, estimó que el proyecto no comprometería el medio ambiente y aprobó el crédito necesario para que la fábrica finlandesa Botnia terminara su construcción en Fray Bentos.

Al día siguiente, delegaciones de diversas provincias del país, encabezadas por las asambleas de Gualguaychú y Colón, protagonizaron una marcha por las calles de la capital. Alrededor de 4 mil personas se dirigieron a la Plaza de Mayo para reivindicar la soberanía argentina y que se impidiera la implantación de Botnia. Aunque el gobierno argentino hubiese ratificado su posición contraria al establecimiento de las fábricas, se cerró movilización con la entrega de una carta al presidente solicitando comprometimiento con la lucha ambientalista y que impidiese la construcción de la papelera.

Las presiones no se dirigieron apenas al gobierno argentino: en 26 de diciembre la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualguaychú, asociada con organizaciones ecológicas, convocó a la sociedad para un boicoteo a las playas uruguayas. “Veranea en la Argentina” era el eslogan, dirigido a los más de 600 mil argentinos que suelen veranear en el país vecino.

En enero de 2007, se bloquearon simultáneamente tres puentes a Uruguay, causando serios perjuicios económicos a Uruguay. En marzo, impulsado por la fuerte oposición popular, el Poder Legislativo argentino aprobó una ley que prohíbe la exportación de madera argentina a Uruguay.

La permanencia de la fábrica Botnia fue sometida al juicio de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, que deberá responder en 2008 a la demanda de reubicación presentada por el gobierno argentino.

Otro conjunto de movilizaciones, también relacionada con la temática ambiental, se da alrededor del tema del agua, considerada un recurso estratégico cada vez más escaso.

El agua se hace objeto de disputas y movilizaciones en prácticamente todo el continente como parte de un proceso de resistencias desde hace ya varios años, pero que en 2006 se manifiesta en Costa Rica, Nicaragua, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia. Son movilizaciones contra la privatización del agua potable y por la protección de los recursos hídricos como bien público.

La contaminación ambiental entra una vez más en la agenda de las movilizaciones por cuenta de la acción criminal de empresas multinacionales detenedoras de monocultivo de exportación, que utilizaron pesticidas como el Nemagon, que causó enfermedades a miles de personas y centenares de muertes entre los agricultores de Nicaragua y de Pana-

má. Las comunidades se han movilizado demandando la prohibición del uso del pesticida, servicio de salud e indemnizaciones. Las movilizaciones de campesinos contra las fumigaciones de las plantaciones de coca en Colombia y en Ecuador tiene el mismo sentido de solicitud de reparación de daños y prohibición de la continuidad de las prácticas de contaminación.

El mapa de los conflictos del 2006 trae además a la discusión el tema de la concentración de la propiedad de la tierra, el que por sí es ya un tema de conflictos históricos, pero que se hace más agudo a fuerza del modelo agro exportador basado en cultivos extensivos de soya y caña de azúcar. Esos procesos generan la expulsión de los pequeños agricultores familiares, aumentando la presión por nuevas políticas de asentamientos rurales y por la reforma agraria. Este año, trabajadores campesinos sin tierra se movilizan, promueven ocupaciones, realizan marchas, en Paraguay, Brasil y Bolivia.

El mapa de los conflictos apunta además para el tema de la precarización de los servicios públicos y para la descalificación de su funcionalismo.

El predominio de la lógica del mercado, del interés de las grandes empresas, hizo que las políticas públicas de educación y salud se debilitaran. Con la óptica privatista, el Estado promovió el deterioro de estos servicios públicos. El objetivo era forzar la migración de parte de la población con capacidad a que pagara por estos servicios a las escuelas privadas y seguros privados de salud. Ese deterioro se dio por la reducción del sueldo real de sus trabajadores, por el corte de verbas públicas, por la pérdida de la calidad en la enseñanza y de la atención de la salud públicas.

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay registraron movilizaciones de profesores de la enseñanza pública por reajustes de sueldos, verbas públicas para la educación y por una mejor calidad de la educación. Reivindicación que en Chile se sostiene también por la movilización de 400.000 estudiantes de la secundaria, en el movimiento que se vino a conocer como "revolución de los pingüinos".

Honduras, Nicaragua, Chile, Paraguay y Brasil tienen movilizaciones de médicos y enfermeras de los servicios públicos por reajustes de sueldos.

Pero hacia más allá de las luchas por la afirmación de derechos que se expresan en demandas específicas, varios países tienen grandes movilizaciones contra la propuesta de acuerdos comerciales con los Estados Unidos – los TLC – que implican una integración subordinada y la destrucción de la capacidad productiva de los pequeños y medios productores en países como Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Declaraciones de líderes de cooperativas de pequeños productores rurales de Costa Rica muestran una gran preocupación por la destrucción de sus negocios a fuerza de la posible aprobación del TLC. El local y el global se articulan en estas interpretaciones y movilizan a estos trabajadores rurales para que se involucren en agendas de ámbito nacional e internacional.

Hay que observarse que estas reacciones se deben al cambio de estrategia de EE.UU. después de noviembre de 2005, cuando en Mar Del Plata, durante encuentro de los presidentes del MERCOSUL, estos presidentes, en conjunto, rechazaron la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas – el ALCA. EE.UU. intensificaron sus políticas de promover TLC con cada país, buscando establecer relaciones bilaterales.

En el mismo registro de las movilizaciones que tratan de cuestiones nacionales y estratégicas, de las alternativas de desarrollo, están las movilizaciones en Panamá contra la ampliación del canal.

**BRASIL:
LA LUCHA POR LA TIERRA**

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra es el más importante movimiento social de Brasil y cuenta con más de dos millones de militantes. MST protagonizó diversas movilizaciones en 2006 y 2007, no apenas en la lucha por la reforma agraria, sino que trata además de problemáticas estructurales que hacen aún más precarias las condiciones de vida de los trabajadores rurales. Por medio de la movilización, con destaque para las cooperativas agropecuarias y de prestación de servicios, MST logró, además del asentamiento de miles de familias, hacer efectivas algunas políticas públicas volcadas al atendimento de las necesidades de los trabajadores rurales en las áreas de la salud, asistencia técnica y educación de jóvenes y adultos.

En noviembre del 2006, más de 6.000 trabajadores ocuparon el muelle del puerto de Maceió, capital del Estado de Alagoas, en el nordeste brasileño, para reivindicar la posesión de las tierras de la quebrada empresa Agrisa, foco de lucha hace más de cinco años de las familias de agricultores que allí residían. La ocupación permaneció hasta que el presidente del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) asumió el compromiso de ingresar en juicio el monto

para la compra de la central.

En abril de 2007 el movimiento organizó movilizaciones que sumaron más de 16 mil familias en 23 estados. Durante todo el mes se efectuaron más de 80 ocupaciones, además de protestas que se expresaron por la ocupación de predios públicos y bloqueos de carreteras. En Bahia, 5.000 personas marcharon 110 kilómetros desde Feira de Santana hasta Salvador y, con ello, lograron una audiencia con el gobernador local.

En 14 de junio de 2007, por ocasión del encerramiento del V Congreso de MST, más de 20 mil trabajadores rurales marcharon por la reforma agraria en Brasília.

Durante la Jornada Nacional de lucha por la Reforma Agraria organizada por MST entre los días 24 y 28 de septiembre, hubo una serie de movilizaciones en las principales ciudades de Brasil reivindicando el asentamiento de 150 mil familias sin tierra. En Curitiba, 1300 trabajadores camparon durante 4 días delante del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria - Incra y lograron la firma de un convenio de asistencia técnica para los asentamientos del Estado de Paraná. El convenio beneficiará 13 de las 17 mil familias asentadas en el Estado. Los trabajadores también conquistaron créditos de habitación y liberación de canastas básicas retrasadas.

**COSTA RICA:
MOVILIZACIÓN CONTRA EL TLC**

El 1º de mayo de 2006, una marcha con la participación de organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas, manifestó su oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Lo mismo se repitió el día 09 de julio y en los meses siguientes, destacándose las manifestaciones de los trabajadores del puerto de Limón.

En ese período, el movimiento ganó la adhesión de muchas organizaciones de la sociedad civil. Los días 23 y 24 de octubre los manifestantes volvieron a las calles de todo el país y suman ya alrededor de 60.000 personas, entre agricultores, profesores, empleados públicos y sectores de la cultura, convocados por la Coordinadora Nacional contra el TLC. La acción demandaba que el gobierno retirase de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para aprobación del Tratado, así como su agenda de implementación, que incluía proyectos como la abertura de las áreas de telecomunicaciones y de seguros al capital internacional.

En diciembre se consolidó una forma de organización más amplia, el Frente Nacional de Apoyo a la Lucha Contra el TLC (FNA). El Frente reunió el sindicato de funcionarios pú-

blicos, sindicatos de profesores, sindicatos de trabajadores de la industria, organizaciones campesinas, movimiento de productores, movimiento cooperativo, movimientos comunitarios, ambientalistas, movimiento indígena, empresarios nacionales, comunidades de la Iglesia Católica, organizaciones de mujeres, movimientos culturales y artísticos, organizaciones estudiantiles, universidades públicas incluyendo sus consejos y casas rectorales, partidos políticos, intelectuales y políticos independientes, hombres y mujeres. En ese proceso también se forma el Frente Legislativo, con 17 diputados e incluso un embrión de un partido identificado por el nombre de Frente Reformista.

El FNA plantea una firme oposición al TLC y a sus propuestas privatistas. Critica la forma antidemocrática como se discute el TLC en el Congreso, reafirma la defensa del Estado Social de Derecho construido en el siglo XX, soberano y atento a las necesidades de la población. Las movilizaciones traen además a la discusión el tema de un proyecto de desarrollo alternativo para el país.

Estas movilizaciones lograron una importante victoria: la autorización del Superior Tribunal Electoral para la formulación de una petición de iniciativa popular para la realización de un referendo. El movimiento sale a las calles y promueve una campaña en la cual consigue recolectar 132.000 firmas

para encaminar una petición en favor de la realización de un referendo popular sobre el TLC. Con esa presión, el gobierno del presidente Óscar Arias acoge la realización de un referendo nacional, realizado en septiembre de 2007, quitando del estrecho espacio del Congreso esta deliberación.

Las movilizaciones contra la aprobación del TLC con Estados Unidos han sido las más grandes de la historia del país. En su punto más alto, en febrero de 2007, las manifestaciones reunieron a alrededor de 150.000 personas en San José. En varias otras ciudades se formaron barricadas de protesta contra el TLC. Hace falta tener en cuenta que Costa Rica es un país con poco más de 4 millones de habitantes.

El Frente desarrolló una campaña nacional y contó con el empeño y la militancia de incontables organizaciones, pero

no alcanzó la victoria en el referendo. Perdió por un pequeño margen, habiendo el SÍ sacado el 51,6 % de los votos. De nuevo el papel de los medios actuó en favor de los sectores dominantes, así como hablaron más fuerte los caudalosos recursos públicos y empresariales destinados a la campaña del SÍ, en favor del TLC.

La declaración de un entrevistado valora el proceso positivamente, aun con la derrota en el referendo: “lo innovador en esta coyuntura es la unidad que produce la oposición al TLC y los puentes que se extienden entre las organizaciones, eso al lado de la conciencia de la necesidad de producir conjuntamente una alternativa para el país que se contraponga al modelo que impulsan los sectores pro TLC”.

PANAMÁ: LA CAMPAÑA CONTRA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL

Las movilizaciones son organizadas y lideradas por el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales – el FRENADESO. Creado en 2005, éste organiza la campaña contra la ampliación del canal y moviliza a la población para, en un primer momento, conquistar el derecho a un referendo sobre el tema, y en un segundo momento, participar en el referendo.

Se trata de una articulación que congrega las más importantes organizaciones populares del país, reuniendo a los principales sindicatos de trabajadores rurales y urbanos, asociaciones comunitarias, estudiantiles, indígenas, profesionales y de mujeres.

Presionado, el Gobierno convocó la “Mesa de diálogo para el desarrollo”, espacio de aclaración que precedió el referendo. Finalmente, bajo la continuidad de las presiones, el gobierno acepta la realización del referendo.

La campaña callejera por el “no”, organizada por FRENADESO, logra dimensión nacional y hace este Frente reconocido como la articulación de movimientos y entidades con más capacidad de movilización y llamamiento nacional en Panamá. El movimiento se planta contra la ampliación del canal porque éste perjudica a los más pobres y apenas le favorece al gran capital.

Los sectores empresarios, con apoyo financiero de los EE.UU. y el enganchamiento de los medios, se movilizan en favor del “sí”. Se estima que la financiación estatal y de los grupos financieros de la campaña en favor de la ampliación del canal se haya alzado a los 2 mil millones de dólares.

Pese a todos los esfuerzos de movilización, la abstención en el referendo es del 57% y, de los que votaron, apenas el 22% se declararon contra la ampliación del canal.

Aun derrotada en el referendo, en la opinión de un líder entrevistado, FRENADESO ha ido adquiriendo, por sus movilizaciones en la escena nacional, un espacio en la coyuntura, un espacio histórico junto a la población panameña, que lo reconoce como la verdadera oposición en Panamá.

“La jornada más importante del 2006 fue la participación en el proceso de referéndum, donde FRENADESO se constituye el referente de las fuerzas patrióticas y populares por el “Voto NO” a la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. Es la fuerza que logra una campaña a nivel nacional con núcleos distribuidos en todo el territorio, con la distribución de más de 2 millones de volantes, afiches y pancartas, todo reproducido con recursos del movimiento popular; contra la oligarquía criolla, contra los partidos políticos, contra el propio Tribunal Electoral, contra las estructuras formales de poder económicos, los esbirros del poder, la Iglesia, los medios de comunicación”.

Varias declaraciones identifican el enganchamiento de los movimientos sociales en los procesos electorales de algunos países como movilizaciones populares. Esa postura se expresa además en la candidatura de representantes de estos movimientos para el parlamento y en la elección de Evo Morales. Son acontecimientos que identifican una forma de “entrada” de los movimientos sociales en la política, una nueva relación de los movimientos sociales con los partidos políticos.

Las identidades de propósitos de cambios sociales son, a veces, compartidas entre gobiernos, partidos y movimientos sociales, en algunos países. Este alineamiento de intereses y de formas distintas de ejercicio de poder abre un nuevo período que trae el debate sobre el futuro, sobre nuevas alternativas de democracia y de desarrollo.

“Lo que pasa en la zona es, en verdad, la búsqueda de opciones, de caminos que se abran a nuevos esfuerzos que brinden respuestas diferentes, capaces de superar la exclusión social y política de una gran mayoría de personas”.

Estos movimientos sociales, a su vez, se presentan como expresión de un amplio arco de organizaciones de la sociedad civil, que se organizan en frentes contra el “enemigo común”. Se crean articulaciones de ámbito nacional o regional que agregan una infinidad de redes menores, asociaciones, sindicatos, entidades, movimientos sociales, ONG. Son estas articulaciones nacionales que politizan las demandas sociales, les dan un sentido común y las condensan en las movilizaciones que registra el estudio. ¿Cómo se da la relación entre entidades y movimientos sociales tan distintos, ¿cuándo se organizan en estas movilizaciones nacionales?

II. ARTICULACIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS COMUNES ENTRE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Figuraba en el guión de la entrevista una pregunta específica sobre alianzas, articulaciones o una agenda común de movilización con otro(s) movimiento(s) social(les), ONG o partido(s) político(s). Se les solicitó a los entrevistados que señalaran los principales logros y retos que han representado estas articulaciones para su entidad.

Un primer punto relevante destacado por diversos entrevistados ha sido la importancia de determinados eventos de la coyuntura política para la conformación de alianzas y articulaciones entre los movimientos y entidades sociales. Eventos

como los referendos convocados sobre la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. en Costa Rica, o sobre la ampliación del canal en Panamá, o las Constituyentes que se instalan en Bolivia y en Ecuador, tuvieron un papel fundamental como “inductor” de la articulación entre movimientos sociales y ONG; y contaron además con la participación de algunos partidos políticos.

En los dos referendos estaban en juego medidas de carácter nacional y con amplias implicaciones para diversos sectores de la sociedad. El TLC en debate en Costa Rica legisla sobre regímenes impositivos, compras gubernamentales, derechos de autor e incluso sobre el medio ambiente. Hecho este que “auxilió” la confluencia de varios movimientos sociales y entidades, involucrados con las más diversas áreas, desde sindicatos hasta las ONG ambientalistas y feministas, en un frente único de movilización contraria a la firma del Tratado.

Se constituyó un “Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC”, que fue fundamental para vincular, ante la opinión pública y entre los movimientos sociales, la firma del TLC con la profundización del modelo económico de concentración y exclusión social basado en la producción para la exportación. El TLC representaría una amenaza a los derechos sociales existentes, constituyéndose un “enemigo común” de las organizaciones sociales.

“La cosa ha sido muy transversal alrededor del Tratado de Libre Comercio. Porque el tratado toca tantas áreas y tantas aristas de muy diversos sectores yo pienso que nos ha dado un empujón importante en términos de aglutinar movimientos, con la ventaja de que se ha abordado desde plataformas institucionales y no desde los sectores por separado, esa ha sido la característica principal. Se ha venido consolidando en los movimientos sociales una perspectiva común, que a veces se plantea de forma diversa, pero me parece que todos estamos hablando de lo mismo. Básicamente lo que estamos diciendo en términos de movimientos sociales, es que hay una enorme diferencia del modelo actual con el modelo que se desarrolló después de la década de los 40 para acá que era un modelo típico de Estado benefactor, con políticas sociales, con integración económica de muy diversos sectores, con políticas públicas dirigidas a eso, etc.

En Costa Rica ha habido un proceso de entender que aquí hay enemigos comunes, propuestas comunes y esto ha generado un racionamento que se ha ido consolidando, que se han ido aglutinando en relación de esa necesidad de construcción de una alternativa. En respeto a la evolución de los movimientos sociales estamos de búsqueda de canales de comunicación y de formas de racionamento diversas a las que existían antes, ésta es una cosa importante.”

Ya en Panamá, FRENADESO es otro importante ejemplo de articulación de movimientos y entidades sociales y genera, según declaración de un entrevistado, la posibilidad de una articulación más permanente.

“Los panameños hemos ido aprendiendo y superando la concepción de que solo hay que reunirse coyunturalmente, estamos aprendiendo a actuar en alianza con el movimiento popular, el movimiento obrero. Hay una instancia de coordinación entre los sectores que ahora mismo hacemos alianza, y es el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Desde el año 2003 hemos iniciado una lucha en alianza y creemos que en esa instancia está los destinos y posiblemente la esperanza de el logro de los objetivos.

FRENADESO es una organización que está compuesta por diversas organizaciones, entre las cuales figuran campesinos, indígenas, obreros, educadores, intelectuales, religiosos; es un espacio abierto a toda la población panameña. Nos propusimos la acumulación de mayor fuerza social, organizando al movimiento comunal y campesino, indígena a nivel nacional. La presencia de FRENADESO al nivel nacional también tiene sus repercusiones a nivel internacional, en distintas actividades en el escenario internacional hemos logrado nosotros ubicarnos como el referente de la lucha social en Panamá. Estamos convencidos y vamos madurando la idea de que a través de esta estructura de coordinación entre el sector popular podemos lograr los objetivos”.

Situaciones de graves crisis económicas, como las que llevaron a la deposición de tres presidentes en Argentina en 2001 y 2002 y que llegó a afectar el vecino Uruguay, además del conflicto armado en Colombia, que dura ya más de 40 años, se señalaron además como acontecimientos que “facilitaron” la articulación de los movimientos y entidades sociales. El Frente Nacional de lucha contra la Pobreza, en Argentina, y la “Concertación para el Desarrollo”, en Uruguay, así como las articulaciones de las organizaciones sociales por el acuerdo humanitario con la guerrilla y por una salida política para el conflicto colombiano, son procesos que estimulan además la construcción de agendas comunes de defensa de la ciudadanía.

“Las plataformas (de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, de cooperación internacional, de iniciativas de paz) son una experiencia promisorio e inédita de articulación de ONG y sectores sociales en Colombia. A

partir de este trabajo mancomunado, en muchos campos de incidencia política ya no se concibe en el país una acción de impacto que no esté concertada y animada por diversas instituciones. En los últimos tiempos, estas plataformas han ampliado su estrategia de acción mancomunada hacia otros sectores de la sociedad civil que representan otros intereses: Iglesia, gremios empresariales, federación de municipios, Sistema y Consejo Nacional de Planeación, etc.”.

En reciente investigación sobre la relación de los movimientos sociales y los partidos políticos en América Latina, Christian Mirza señala una tendencia que el estudio de Alop también identifica: “redes y Foros aportan para legitimar y potenciar las capacidades de cada integrante, llevando a la definición de un mínimo denominador común que condensa los intereses de la mayoría popular. En estas articulaciones que incorporan además partidos políticos, se reafirma la fuerza y validez de las movilizaciones sociales aportando para el aumento de su capacidad convocatoria y de movilización ciudadana”.⁸

Además de aumentar la incidencia propiamente política de los movimientos y entidades sociales, estas articulaciones tienen como “subproducto” la creación de redes de contacto intra personales y la generación de confianza entre los actores sociales. Además de ello, las articulaciones también posibilitan el intercambio de experiencias de lucha y movilización.

Acorde a un entrevistado de Costa Rica: *“Se ha venido haciendo un esfuerzo importante de relaciones públicas entre liderazgos de los distintos movimientos y de nuevos liderazgos en los diversos movimientos que generan casi anillos de interrelación personal y de cooperación y confianzas personales. Ese sustrato de nuevos liderazgos que vienen desde la concertación nacional, desde los distintos procesos, ayuda a tejer esa interacción y a minimizar conflictos y a maximizar oportunidades”.*

Conflictos locales y regionales pueden además resultar importantes en la articulación de los movimientos y entidades sociales y la creación de agendas comunes. En este caso específico tenemos el ejemplo de las movilizaciones que “movieron” el estado mexicano de Oaxaca en el año de 2006.

sado de corrupción, logró tener contra sí los movimientos y entidades sociales, que salieron a las calles en apoyo a las reivindicaciones de los profesores. Se formó así APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) como foro de debate, articulación y organización política. APPO está integrada por comunidades, ONG, sindicatos, estudiantes, profesores y campesinos, y pasó a exigir no apenas la renuncia del gobernador como también la salida de las fuerzas federales de seguridad.

Aunque originada de una movilización entorno a una cuestión puntual y regionalmente localizada, APPO logró un alto nivel de movilización al unificar campesinos, indígenas y estudiantes. APPO consiguió también amplia repercusión nacional e internacional dado que las movilizaciones contra el gobernador del estado se conjugaron con las movilizaciones

al nivel nacional contra el fraude en la elección presidencial, que eligió al candidato gubernista Felipe Calderón.

Para los entrevistados, sin la vinculación entre los eventos locales y las movilizaciones nacionales, difícilmente APPO hubiera conseguido la dimensión que alcanzó. Así, APPO y las movilizaciones contra la elección de Calderón lograron articular diversos movimientos y entidades sociales entorno del rechazo a un tema más estructural y relacionado con el sistema político mexicano, caracterizado como autoritario, corrupto y antidemocrático.

“Oaxaca es expresión de un problema estructural nacional que tiene que ver con el régimen político, que tiene que ver con el autoritarismo, que tiene que ver con el derecho a la represión tramposa y sucia que han hecho distintos niveles de gobierno. Pero al mismo tiempo tiene que ver con un proceso cultural muy específico de Oaxaca. Como lograr no solo este proceso de unidad sino mantener el vínculo con la dinámica unitaria nacional, me parece que ese es otro de los fenómenos importantes de Oaxaca, de la APPO, del magisterio y de todos los espacios particulares en que todos son miembros de algún circuito nacional.

El movimiento de Oaxaca tiene la oportunidad de pensar más allá de sus sectores. Hablar de la transformación profunda, completa, integral, histórica de Oaxaca, de Oaxaca convertirse en el referente del tipo de construcción democrática y de desarrollo que se requiere, es una situación inédita. Es como los movimientos sociales sean actores en este rediseño de forma de democracia participativa que fortalece dinámicas culturales y de participación política”.

La figura del gobernador Ulises Ruiz y la represión desmesurada que éste entabló contra el movimiento, actuaron como elementos en la construcción del símbolo de un “enemigo común” a los diversos actores sociales, capaz de conjugar las diversas agendas de reivindicaciones entorno a las movilizaciones por su renuncia.

Aunque en varios países de la región el sistema democrático electoral y las elecciones se hayan utilizado como herramientas para la construcción de alternativas políticas, la experiencia específica en México conduce a que algunos movimientos y entidades sociales vean cada vez menos el Estado y los canales institucionales de representación como espacios legítimos para procesar el conflicto y elaborar alternativas para su superación.

Otros entrevistados ya señalan los límites de estas articulaciones interpretando que los movimientos sociales se preocuparían más de sus demandas específicas y de sus intereses “corporativos” que de buscar consensos básicos con los demás movimientos sociales. Para los defensores de ese punto de vista, la sociedad civil en América Latina estaría fragmentada en sus luchas locales y específicas y les faltaría superar estos intereses más inmediatos para

Los entrevistados ven APPO como ejemplo de cambio cualitativo en las luchas sociales tanto en México como en América Latina. La novedad representada por APPO está en la capacidad de reconocer las diferencias entre las diversas posturas e ideas y a la vez buscar los puntos y agendas comunes para esos actores, en una acción propositiva, de construcción de la democracia participativa a partir de la movilización de los movimientos sociales.

Además de ello, APPO se ha mostrado capaz de integrar formas diferentes de organizaciones y de demandas, y mantener una estructura de decisión relativamente horizontal, sin que la “capture” el protagonismo de los partidos políticos. Con ello, adquirió una “autoridad moral” y una “capacidad de resistencia” que asocia las diversas dinámicas y reivindicaciones de los actores involucrados con un proyecto de transformación social “por fuera” del sistema político, en el cual la mayoría de la población ya no se siente representada. Hay una percepción bastante generalizada de que este sistema no trataría de los problemas de la población de forma correcta y justa.

“Son logros cualitativos de un proceso vivo, de un conflicto vivo y no resuelto. Pero mas que ver al conflicto no resuelto yo lo que noto es, a la rearticulación y movilización social no terminada ni valorada pero que esta en juego y que es una luz de esperanza para México.

La misma declaración registra además los límites de dichas articulaciones ciudadanas y plantea el tema de las fronteras entre las movilizaciones sociales y la capacidad de elaboración de propuestas políticas.

Esta articulación no tiene todavía la capacidad de ser el actor de la transformación con una propuesta. Yo diría que la APPO tiene autoridad moral reconocida a nivel nacional, la gana más por su capacidad de resistencia y su confrontación valiente al Estado, que por su capacidad de ganarle al Estado o de proponer. Hay mas autoridad moral que autoridad política, la autoridad política pasa por un proyecto con estrategia, con discurso, con bases diversas programáticas y dinámicas, etc.”

pensar en proyectos más colectivos y de largo plazo.

Como afirma un liderazgo argentino: *“La preocupación por la justicia, la preocupación por la democracia, alguna cosa puntual, entonces cuando tenés eso fortificado, el resto enriquece. La pluralidad siempre enriquece. Pero no podés tirar consignas a lo pavote...no podés poner todas las cosas que tenés para decir, eso es para los que tienen una sola vez para decir...nosotros no, tenemos una inmensa posibilidad para decir.”*

Otra dificultad es mantener las articulaciones para allá del evento de coyuntura que posibilitó la unión de esos movimientos sociales. Para algunos entrevistados hace falta una entidad capaz de no apenas tomar la iniciativa de proponer la alianza sino también de organizarla para que se pueda mantener actualizada. La falta de recursos financieros y de infraestructura fue señalada como limitación de las articula-

APPO

El movimiento tuvo inicio con el rechazo del gobernador del estado, Ulises Ruiz, en garantizar aumento de sueldos y mejoras en las condiciones de trabajo de los profesores de la red pública del Estado. Con ello, los profesores salieron en huelga, durante la cual han sido duramente reprimidos y han tenido sus principales liderazgos perseguidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Los profesores ocuparon entonces el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez, desde donde lideraron una amplia lucha de resistencia contra la represión y por la renuncia del gobernador.

Con la represión contra los profesores, el gobernador, elegido por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y acu-

ciones de los actores de la sociedad civil.

Declaración tomada en Costa Rica indica esta cuestión: *“Nos falta mucha capacidad de alianza institucional, nos faltan fondos, trabajamos con las uñas, no tenemos financiamiento. La frustración es de no contar con un equipo con mas gente, que muchas veces no es un tema de fondo si no de capacidad de tejer las alianzas y contar con amigos y con profesionales.”*

Estas mismas dificultades las reconoce un liderazgo brasileño: *“Cada vez más sabemos que hay que trabajar más en red. Y es una forma también de fortalecer nuestro trabajo. No conseguimos hacer articulaciones con América Latina y hay una gran dificultad de hacer articulaciones a nivel nacional porque estas articulaciones tienen un costo, ellas tienen el costo del personal, de las personas que se pasan horas haciendo la articulación”.*

En su mayoría, las articulaciones entre los movimientos y entidades sociales dentro del período analizado nacieron de eventos de la coyuntura política que “facilitaron” la organización de diversos actores sociales entorno de una agenda común de movilización. Se observa que estas alianzas son contingentes y se organizan de forma horizontal. Aunque en algunos casos hubieran participado los partidos políticos, hay siempre un cuidado de tratar de garantizar la autonomía de estos movimientos sociales y de las redes de ciudadanía que los sostienen y evitar que los mismos asuman el protagonismo político y “utilicen” la movilización conjunta en beneficio de sus intereses político electorales.

Aún según las tesis elaboradas por Mirza a partir de su encuesta, él encuentra elementos para afirmar un carácter propositivo de los movimientos sociales. *“La mayor autonomía de los movimientos sociales con relación a los partidos políticos habilita los movimientos para que generen, produzcan y brinden alternativas de construcción democrática sobre nuevas bases, en la medida en que sectores sociales integran estos movimientos y los sostienen, dándoles representatividad y legitimidad”*⁹.

III. RELACIONES Y TENSIONES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Muchas declaraciones compiladas en la encuesta traen en sus discursos un amplio rechazo del sistema político electoral y de los partidos políticos tradicionales, caracterizados como ineficientes, oligárquicos, corruptos y vinculados a los intereses económicos de las elites nacionales y extranjeras.

El rechazo de la “partidocracia” llevó a extremos. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, llevó a que el partido victorioso de Rafael Correa, con pocos meses de existencia, decidiese no

presentar candidatos a las elecciones para el Congreso Nacional en repudio a la “politiquería” dominante en el país, sacudido por diversas crisis económicas e institucionales en los últimos años.

Aun en otros casos, como el boliviano y venezolano, donde las mayorías que han elegido a los actuales presidentes han elegido además a los representantes para el legislativo, hay un gran rechazo de los partidos tradicionales.

“Nosotros antes de ser un partido político nos habíamos propuesto participar como organización campesina y no se nos han permitido. La ley de la Corte Electoral no nos ha permitido, y nosotros como MAS nos hemos tenido que convertir en un partido político, nosotros no queríamos ser partido político. Nosotros teníamos una sigla Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos pues justamente que como herramienta nos permita participar en ese escenario democrático para llegar a esos espacios de decisión, eso fue la propuesta de hace tiempo. No lo pudimos lograr y nos convertimos en un partido político y ahí creo que el MAS es el único que se ha quedado como verdadera representación de los movimientos sociales que como tal queríamos participar.

MAS es lo nuevo, una respuesta a la demanda de nuevos actores colectivos por representación política. un intento de respuesta al problema de que la democracia “realmente existente” es incapaz de procesar los conflictos sociales y solucionar los graves problemas de un déficit social acumulado agravado por más de una década de implementación del modelo neoliberal.

Un análisis del panorama general presentado por los entrevistados lleva a la conclusión, juntamente con otras valoraciones realizadas recientemente, de que el problema de la representación y de la legitimidad política de los partidos sigue puesta en cuestión. *“No se constituyó un lazo entre los movimientos sociales, fundados en los trabajadores, en sectores urbanos e, incluso, en grupos étnicos, y partidos políticos que acepten colocar claramente las luchas sociales dentro de un marco institucional que podríamos llamar, al menos formalmente, democrático”*¹⁰.

Entrevistados de movimientos sociales, ONG e incluso pertenecientes a partidos políticos, rechazaron los partidos existentes y su manera de hacer política. Los partidos se caracterizan como actores interesados apenas en ascender posiciones de poder para gozar de la prebendas de éste, como cargos importantes en la administración pública y prestigio social.

Como relata un Integrante de la Junta de Buen Gobierno, del movimiento zapatista, en México: *“Con relación a los partidos políticos, de ninguna manera los adherentes a La Otra Campaña no se está a favor de ningún candidato o partido y se seguirá al margen de este sistema político. Ese es como un consenso global entendido en La Otra Campaña. Los problemas que se han encontrado con las alianzas, pues es la articulación de planes entre distintos sectores, esta articulación no se va dando de manera continua y formal, de una organización o de un sector a otro, sino es por su propia forma y por su propio modo.*

El reto es conjuntarse y coordinar estas estrategias que permitan ejercer el poder fuera de él, lograr una organización mejor, y no solamente como una decisión del EZLN, sino como una decisión en consenso con todos los adherentes: tomar en nuestras manos la tarea de organizar nuestro país de manera diferente, ese es un gran reto, la forma de cómo ejercer esto. El plantear movilizaciones conjuntas que se ha tenido, es el encuentro de los zapatistas con los pueblos del mundo.”

La búsqueda por llegar a posiciones de poder haría que varios partidos políticos establecieran alianzas “pragmáticas” e incluso “oportunistas” con los más diversos sectores de la sociedad, incluso con los grandes intereses económicos y sectores conservadores. Esta característica estaría presente tanto en partidos dichos de “derecha”, como también en los ubicados a la “izquierda” del espectro ideológico. En varios informes nacionales de la investigación se registra que diversos partidos “progresistas” habrían “utilizado” el apoyo de los movimientos sociales y de sectores progresistas para elegirse, de la misma forma como se aliaron con las elites económicas y políticas.

El comprometimiento de estos partidos con los intereses del “statu quo” explicaría o no el interés en promover reformas sociales profundas, dejando de lado las agendas de reivindicaciones de los movimientos sociales. Y, más todavía, estos partidos progresistas habrían perdido la “autoridad moral” ante las organizaciones sociales en la medida en que reprodujeron los mismos “vicios” de la política tradicional contra los cuales estos mismos partidos y la gran mayoría de los movimientos sociales habían luchado a lo largo de sus trayectorias.

Pondera un entrevistado mexicano: *“Bueno, con los partidos políticos hay un problema que no tiene que ver sólo con este momento, con esta etapa. Creo que tiene que ver más con la situación por la que atraviesan los partidos políticos en general y que es precisamente parte de los temas de la transformación. Los partidos en general, si bien se le sigue reconociendo como instrumentos necesarios, los partidos atraviesan por una crisis, que tiene que ver en el caso de los partidos que se ubican dentro del campo de la izquierda, con una pérdida de autoridad moral, con una carga de reproducción de vicios contra los que se han venido luchando pero que ahora ya también se reproducen dentro de estos partidos.*

Esto también se expresa en la lucha por hegemonías internas dentro de los partidos, la disputa por cargos de representación popular, candidaturas, en fin, cargos en los gobiernos y eso es un problema histórico en los partidos políticos. Tiene que ver con la transformación misma de los partidos políticos.

Algunos pensamos que debían de tener la capacidad los partidos de lograr conquistas, precisamente como Frente Político, tratando de ver estas luchas electorales como la posibilidad de ganar terreno en la lucha en general, no para sus partidos o para sus corrientes al interior del partido, sino para el movimiento. El contenido de las propuestas en esos procesos electorales tendría que estar vinculados a la lucha del movimiento no a cuestiones particulares locales, sólo viendo la posibilidad de ganar la elección por ganarla.”

La búsqueda por el poder conduciría además a que los partidos adoptaran una visión de corto plazo, en gran medida preocupada apenas por garantizar sus intereses y mantener el poder. Eso imposibilitaría que los partidos políticos establecieran alianzas y compromisos más estratégicos con los sectores de la sociedad civil empeñados en promover cambios sociales.

En la opinión de un liderazgo chileno: *“Yo creo que es más fácil [la construcción de una agenda común] con las organizaciones de la sociedad civil, que con los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una mirada bastante cortoplacista, digamos, que tienen que ver con las elecciones y obtener el poder. Entonces, no se arriesgan mucho a grandes cambios sociales, a cambios sociales que en el fondo se producen a largo plazo. Ya no hay partidos políticos con ideología, con una ideología clara detrás, o sea, eso ya no existe. Yo creo que con los movimientos sociales y con las organizaciones se podría llegar a una agenda común en ciertos temas, yo creo que no en todos, en ciertas esferas, digamos.”*

Las críticas contra el oportunismo de los partidos dichos de izquierda se repiten en la declaración de este liderazgo argentino: *“Hay un espectro de partidos políticos más progresistas, pero para lograr sus objetivos partidarios no solamente se alían con los sectores progresistas en la sociedad civil que buscan el cambio social, sino que buscan la alianza de turno para ganar las elecciones. ¿hasta dónde podemos aliarnos? Sabemos que muchos partidos políticos que han llegado a ganar las elecciones en Latinoamérica han hecho alianzas problemáticas. En el caso de Nicaragua se alían los sandinistas con la contrarrevolución que atacó al sandinismo hace 15 ó 20 años, ¿están todos juntos! No sé si las mujeres podríamos sostener esas alianzas, si las ONG podríamos sostener esas alianzas sin inhibirnos. Creo que tenemos que reinventar la política. Crear una agenda común con los sectores más progresistas de la sociedad, comprometidos con el cambio social creo que es necesario.”*

El rechazo de los partidos políticos y su lógica de acción es uno de los principales motivos indicados por uno de los entrevistados de México para adoptar una postura no apenas de rechazo de la política tradicional, sino de empeño en la construcción de un “contrapoder”, es decir, de promover la lucha política al margen de las elecciones y de las instituciones del sistema político y, consecuentemente, fuera del ámbito de los partidos políticos.

Expresando la disconformidad con el resultado de las últimas elecciones en México, un liderazgo declara lo siguiente: *“En el balance que se tiene de la democracia que prevalece en nuestro país podemos decir que hay una degradación de las instituciones y una degradación política del sistema, que las elecciones que acaban de acontecer en el 2006 fueron elecciones antidemocráticas y fraudulentas., la democracia finalmente se convirtió en un fraude. Se compra y se consume la mentira que impide la mirada crítica y un análisis profundo, eso es lo que se percibe y se ve como un balance de la situación de la democracia de nuestro país.*

Los retos que se generan ante este balance es la necesidad de generar poderes desde abajo y a la izquierda, construir una nueva forma de hacer política, distinta a los sistemas de partidos. No se puede esperar a que los de arriba abandonen sus privilegios y gobiernen con justicia, mucho menos que se quiten para dejarle el poder al pueblo, esto representa un gran reto de tomar en nuestras manos la tarea de organizar al país de una manera diferente.”

El rechazo a de participar en las disputas electorales y el intento de buscar nuevas formas de actuación política “por fuera” de las instituciones democráticas es una posición asumida, en este año de 2006, por la “Otra Campaña”, protagonizada por el movimiento zapatista. En cierto sentido se puede decir que esa posición la comparten los integrantes de la APPO, de Oaxaca, cuando dicen que quieren asumir la construcción de la nueva sociedad con las propias manos.

La idea del “contrapoder” social encuentra eco en reflexiones que estudian otras realidades continentales y se coloca como un tema relevante en la agenda mundial, ante el desgaste de las democracias por todo el mundo. Pierre Rosanvallon, por ejemplo, presenta la idea de la “contrademocracia”, entendida como una forma de democracia diseminada por el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral. Algo que, en su visión, visa prolongar y ampliar los efectos de las instituciones democráticas legales.

Su argumento se basa en una comprensión de que no vivimos un momento de apatía de la sociedad civil, o de declive del papel de la ciudadanía, sino de una mutación en su comportamiento, que se funda en procesos de controles sociales sobre los gobiernos, de sondeo de las políticas, de revelar la sociedad a sí misma, dándole sentido y forma a un mundo en el cual los individuos tienen una dificultad creciente para orientarse¹¹.

Otro motivo ampliamente citado por los entrevistados para rechazar la lógica partidaria es el alejamiento de los partidos políticos de las necesidades de la población, incapaces de representar las demandas de amplios sectores de la sociedad dentro del sistema político.

“Los partidos políticos siempre están viendo una alianza de organización indígena con una finalidad política, es decir, votos. Si no reportas votos sencillamente no es útil una alianza. Hay esfuerzo evidentemente para buscar alianzas con muchas organizaciones sociales en el país y tenemos vínculos que han estado acompañando o tratando la temática sobre los pueblos indígenas”, declara un liderazgo chileno.

La misma visión surge en la declaración de un liderazgo mexicano: “Nosotros hemos observado que los partidos políticos en lo que se refiere a sus expresiones, tanto nacional como estatal, están muy desvinculados de la lucha de los pueblos, son fundamentalmente proyectos eminentemente electoreros, que se aparecen desgraciadamente cada proceso electoral a visitar a los pueblos y a conocer de sus realidades, pero ya cuando el pueblo les da su respaldo, y ellos gozan ya de los espacios ya sea legislativos o ejecu-

tivos, no hacen gran cosa por cambiar la realidad.”

Encontramos la misma crítica también en Brasil: “No tenemos hoy un parlamentario o un partido que acompañe el día a día de los movimientos sociales. No conozco a ningún partido que acompañe sus luchas, sus dificultades, o que discuta, por ejemplo, la coyuntura política con los movimientos sociales, yo no conozco. Hace ya bastante tiempo que no me invitan a ningún debate de esa índole.”

Esta lógica instrumental, de utilización de los movimientos sociales se reconoce además como un problema en la relación de los partidos políticos con los movimientos sociales y las organizaciones que los soportan. Los partidos buscan “ocupar” los espacios de discusión y deliberación construidos por la sociedad civil y “conquistar” los movimientos y entidades sociales, lo que dificulta las alianzas formales con los partidos.

Aunque reconozca que una gran parte de los miembros de los movimientos sociales está vinculada a partidos políticos, la mayoría de los movimientos sociales ha elegido no establecer alianzas formales con los partidos. Se priorizó el mantenimiento de la autonomía y el papel fiscalizador de los movimientos sociales. Además de mantener su autonomía, algunas entidades sociales evitaron establecer alianzas con partidos políticos para evitar posibles “fendas” internas e incluso para conservar la reputación del grupo ante la población.

“En Venezuela se produjo una debacle de lo que significa una organización de partidos políticos y desgraciadamente los partidos políticos de los tradicionales, los que eran más fuertes antes de que surgiera Chávez, se habían metido en todo lo que significa las redes sociales invadiendo espacios que no eran competencia de los partidos políticos. Me refiero a sindicatos me refiero a gremios profesionales me refiero a colegios profesionales me refiero incluso a elecciones de autoridades universitarias, representantes estudiantiles, movimientos estudiantiles, es decir, a toda esa sociedad que tiene derecho a una expresión libre sin ataduras o intromisión partidaria para la decisión de los asuntos que le son propios y por los cuales nacen y se organizan a esa sociedad intermedia que no tiene nada que ver con la toma del poder sino más bien esta organizada para defenderse del poder. Este tipo de organizaciones no gubernamentales fue invadido indebidamente por la actividad de los partidos políticos.”

Los mismos argumentos se presentan en Argentina: “Definitivamente no buscamos alianzas con partidos. Esto fue durante muchos años fuente de una tensión permanente, una discusión muy clara sobre si éramos el brazo social de un partido político o éramos una expresión de la sociedad. La decisión final fue que somos una expresión de la sociedad. Esto nos liberaba para relacionarnos con cualquier partido político, pero no en términos de alianza”.

Declaraciones de Bolivia traen también este rechazo de las alianzas con partidos políticos. “No con partidos políticos, lo que sí vamos a tener es alianzas con organizaciones sociales, las otras organizaciones afines a nosotros como la Central Obrera Boliviana. Aquellas organizaciones que están con el gobierno se están equivocando, si alguien no fiscaliza el

gobierno alegremente todo medida que lance puede ser equivocada si nadie no le dice nada. Nosotros estamos haciendo alianzas con otras organizaciones, pero no políticas, hemos intentado de alguna manera hacer alianza con algunas agrupaciones ciudadanas para que de alguna manera nuestra propuesta en el tema de la tierra y agropecuario y pecuario sea introducido en la Asamblea Constituyente. Nosotros no tenemos alianzas políticas, solamente nuestros aliados son las otras organizaciones sociales como mineros, fabriles que están afiliados a la Central Obrera Boliviana.”

Este rechazo a establecer alianzas con partidos políticos crea problemas en el sentido de como los movimientos sociales y las organizaciones que los sostienen construyen las mediaciones con el mundo de la política, con las instituciones democráticas de gobierno.

Aunque varios de estos entrevistados hayan presentado diversas críticas a la lógica partidaria y a la política existente, ellos reconocen que el contacto con parlamentarios y con algunos miembros de los partidos políticos resulta fundamental en la movilización social. Este contacto permite el intercambio de informaciones relevantes y el apoyo de parlamentarios de alguna manera comprometidos con las agendas de reivindicación de los movimientos y entidades sociales. Estos contactos con parlamentarios se asemejan a una práctica de lobby y presión en los órganos legislativos con vistas a la aprobación de leyes favorables a las demandas de ONG y movimientos sociales.

“La Asociación Brasileña de ONG – Abong – no busca alianza con partido político porque su acción, por definición, es apartidaria. Lo que buscamos es la interlocución con ese campo más progresista, campo de izquierda, que básicamente afina con nosotros con relación a temas de derechos humanos. Buscamos alianzas en varios momentos para presionar por la aprobación de proyectos de ley. Entonces obviamente eso nos hace transitar en ese medio partidario, pero mucho más a partir de los mandatos que de los mismos partido. No buscamos interlocución con los partidos específicamente.”

Un liderazgo sindical uruguayo reafirma la importancia de la acción junto a parlamentarios, pero también la distancia con relación a los partidos políticos: “Alianzas con los partidos políticos esta Federación históricamente no ha tenido nunca, no es nuestro estilo. Lo que hemos buscado si es informar para sensibilizar para que a la hora de votar tengan la información y la visión acabada de un sindicato. Simplemente hemos recurrido a los organismos representativos del Estado, como por ejemplo al Parlamento. Asistimos a las comisiones para informar y hacer nuestras demandas pero como representantes y no como partidos políticos. Hemos mantenido entrevistas con algún partido político para discutir algunos temas, como las jubilaciones para los trabajadores. Mantuvimos reuniones con el Partido Nacional y con el Frente Amplio, pero no nos recibieron nunca de los otros partidos.”

La relación con los parlamentarios está valorizada y se destaca en esta declaración cuánto se disocian las imágenes del parlamentario y del partido. en la visión de un liderazgo argentino: “Se buscan alianzas con los representantes. Vas

al Congreso. Y te metés con todos, y encontrás enseguida aliados. Nos acercamos a los políticos como representantes, más que a los partidos políticos. Llevamos ideas a las Comisiones de Derechos Humanos de las Legislaturas. También lo hemos hecho con los jueces, con los fiscales, con los procuradores. Y bueno, hay quienes escuchan. Hay quienes nos enseñan a nosotros.”

“Los parlamentarios tienen nichos de acción. Entonces, hay parlamentarios más sensibles y más preocupados de los temas de la discriminación, tienen una mayor sensibilidad y con esos parlamentarios nosotros por cierto tenemos una interlocución privilegiada. Pero es transversal, son alianzas mucho más cercanas con un grupo de parlamentarios que es bastante transversal. El año pasado durante las presidenciales nos reunimos con todos los candidatos, desde la Presidenta hoy día, hasta Lavín. Entonces, yo diría que hemos tenido la habilidad”, declara un liderazgo chileno entrevistado.

La mayoría de los entrevistados que destacaron estos aspectos, de la importancia de la relación con parlamentarios, está vinculada a movimientos y entidades sociales con sede en el cono sur del continente, incluyendo a Brasil y excluyendo a Paraguay. Una posible respuesta para esta correlación sería que los partidos políticos de la sub región, pese a todos los problemas y “vicios” oriundos de la lógica partidaria indicados por los entrevistados, aún serían capaces de canalizar y procesar de alguna manera las demandas de la sociedad. Además de ello, si miramos el proceso de redemocratización de estos países, ocurridos en la década de los 80, los partidos políticos tuvieron un papel fundamental en la transición desde los regímenes militares a los gobiernos civiles y también en el establecimiento de las reglas del sistema político democrático.

Si observamos los nuevos presidentes “progresistas” electos recientemente en estos países (Michele Bachelet en Chile, Lula en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay), son todos miembros de importantes partidos políticos con una larga trayectoria de participación en el sistema político institucional, comprometidos con las reglas del juego de la democracia representativa existente.

Hecho este que se relaciona en gran medida con la percepción de diversos entrevistados de que los cambios que ocurren en la sub región del cono sur tienen otra cualidad, o al menos, un ritmo más lento que en la sub región andina. La elección de estos gobiernos por mantener las “reglas del juego”, tanto en la política como en la economía, puede además estar vinculada a la crítica de varios entrevistados de que estos gobiernos serían de “izquierda”, pero sus políticas permanecerían de “derecha”.

Hay otro importante grupo de entrevistados que reconoce la importancia de los partidos políticos como actores relevantes e indispensables en la política latinoamericana. A estos se consideran piezas fundamentales en la democracia como mecanismos de representación de las demandas de la sociedad. También se consideran imprescindibles en lo tocante a la promoción de los cambios sociales.

En la opinión de un liderazgo chileno: “Yo no estoy por negar los partidos, porque yo creo que los partidos tienen que existir, que son un mecanismo de representación que es consustancial a la democracia. Pero hay que diferenciar el rol estrictamente político partidario del rol como agente político que tu podías desarrollar desde la sociedad civil. Y hay que fortalecer esa sociedad civil con capacidad de acción política, con capacidad de movilización, con capacidad de propuesta fundamentalmente. Si logramos eso, tenemos una democracia mucho más profunda, una democracia de verdad participativa.”

Pese a toda la crisis del sistema político mexicano, un liderazgo entrevistado reafirma la importancia de los partidos políticos: “Por nuestra parte entendemos que intentar cualquier cambio sin tomar en cuenta a los partidos o al Congreso sería absolutamente inocente. No hay manera de ir adelante si no se logra una relación con los partidos, pero entendemos también, con toda claridad, que tiene que ser una relación de iguales, de respeto, porque ya la experiencia del corporativismo, de la afiliación masiva a los partidos, francamente ha resultado absolutamente ineficaz para las organizaciones sociales y sobre todo para los sindicatos”.

Se mencionaron también algunas experiencias de “nuevos” partidos políticos que surgieron en la escena política latinoamericana en los últimos años. En común en las palabras de los entrevistados está el énfasis en la ruptura con la política tradicional que representarían estas experiencias. El MAS (en Bolivia), Alternativa Democrática (en Ecuador), el Partido Acción Ciudadana (en Costa Rica) y la Unificación Democrática (en Honduras) estarían hoy más cercanos a las organizaciones populares y movimientos sociales, respetando su identidad e independencia, y preocupados por sus demandas y reivindicaciones.

El énfasis está en la formulación de un nuevo modo de hacer política, no comprometida con intereses sectoriales, sino con los intereses de la mayoría de la población y con el bienestar común. El rescate de la capacidad de los partidos políticos de representar a los anhelos y expectativas de la población y, así, profundizar la democracia representativa es la gran apuesta colocada en estas experiencias de renovación de los partidos políticos.

En las palabras de un liderazgo boliviano: “El MAS es el

único partido político que realmente representa a las grandes mayorías y que esta reivindicando los derechos fundamentales de un pueblo. Si hablamos de partidos políticos no coincidimos con ellos y por eso no tenemos aliados políticos aunque se trata de coordinar, no lo logramos.

En el MAS lo que se pregona son los intereses sociales, los intereses comunes, lo que nos importa es el bienestar común y no el de unas cuantas personas que se benefician y lo más importante para nosotros es la vida humana. No conozco los principios de los otros partidos, me parece que no tienen principios y lo que si se refleja más en los partidos políticos tradicionales o de derecha son intereses sectoriales. Por ejemplo en PODEMOS la mayoría es gente pudiente, empresaria, gente que maneja grandes extensiones de tierra, latifundios, entonces ellos tienen sus intereses sectoriales o personales.”

“Alternativa Democrática en Ecuador es un proceso de construcción de partido político. Estamos hace de los años reivindicando la necesidad de un sistema de partidos políticos, reconociendo que los partidos políticos hoy no tiene el monopolio de la representación societaria de las democracias representativas.

Nuestro posicionamiento en medio de esta crisis, es que hay que darle repuestas políticas: de mayor organización, de profundización de la democracia no solamente en términos institucionales, de hacerse cargo de lo público, recuperar además esas nociones de lo público.”

En la evaluación de una entrevistada hondureña: “Creo que necesitaríamos de un partido social, de manera que todas estas fuerzas sociales, movimientos sociales, nos uniéramos para poder enfrentar a la campaña que tienen los de los partidos tradicionales que prácticamente son lo mismo. Va a pasar mucho tiempo. Pero sí, necesitamos unirnos para formar un nuevo partido. Entonces necesitamos como nuevas opciones dentro de los movimientos sociales.”

El énfasis se pone en la formulación de un nuevo modo de hacer política, comprometido con los intereses de la mayoría de la población y con el bienestar común, profundizar la democracia representativa y combinarla con la participación directa de los ciudadanos es la gran apuesta que se coloca en estas experiencias de renovación de los partidos políticos.

EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO – MAS

Se puede considerar el MAS como uno de los principales ejemplos de estas nuevas formas de organización política en América Latina. Fundado en 1997, el MAS tuvo una ascensión electoral meteórica, alzándose al segundo lugar en las elecciones presidenciales del 2002, con el 20,9% de los votos. En 2005, tras las movilizaciones contra la exportación del gas boliviano a Chile y por la nacionalización de los hidrocarburos (que quedó conocida como la “guerra del gas”), el MAS obtuvo la presidencia con el 53,72% de los votos. Aunque se haya originalmente pensado como un brazo político del movimiento campesino e indígena – el MAS buscaba participar en el sistema político como una organización campesina y no como un partido político. En virtud de la ley de la Corte Electoral, que estipula el monopolio de la representación política en el sistema político a los partidos políticos, el MAS se convirtió en partido para ser una “herramienta que le permitiría al movimiento campesino participar en esta escena democrática para llegar a los espacios de decisión”.

Como “brazo político” de los movimientos sociales, el MAS tuvo y tiene importante apoyo de organizaciones del movimiento campesino, a ejemplo de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia).

Ya al comienzo de la década de los noventa, había dentro de

Ya en Ecuador tenemos el ejemplo de Alternativa Democrática (AD), que es un movimiento político formado en 2005 con objeto de ser un partido. La principal propuesta de AD es promover el cuestionamiento de la política por medio de la política, criticando ferozmente a los partidos políticos (la partidocracia). Esta crítica no se da en el sentido de que no deberían existir los partidos, sino que los mismos deberían adoptar nuevas prácticas. Sin el cambio en las prácticas no resulta posible construir un nuevo partido y una nueva práctica política. AD se presenta como una alternativa a los partidos de izquierda existentes, que han sido incapaces de aglutinar las diversas demandas de la sociedad civil.

AD reivindica la ruptura con las viejas estructuras. Se plantea construir una democracia más amplia que la simple “democracia liberal instrumentalista”, con vistas a obtener la igualdad y ser capaz de catalizar a las demandas de la sociedad. El empeño en promover la ruptura con el sistema político actual llevó AD a invertir toda su capacidad en conquistar la mayoría en la Asamblea Constituyente, instalada en 2007, lo que de hecho pasó. Entiende la Constituyente como un espacio fundamental para promover cambios.

En Venezuela, escenario de importantes cambios políticos y de una amplia polarización social entorno de la figura “polémica” del presidente Hugo Chávez, también hay un gran rechazo a los partidos políticos tradicionales y a la política tradicional que dominó el país. También hubo ahí un proceso constituyente empeñado en promover cambios profundos en el país. La nueva Constitución, promulgada en 1999, rede-

la entidad una propuesta de crear un instrumento político propio de los campesinos para participar directamente en la vida política nacional, para, desde el Estado, promover cambios.

La creación de este nuevo instrumento político era necesaria, para sus defensores, en virtud de la incapacidad e incluso de la indisposición de los partidos políticos en promover los cambios necesarios.

Esta propuesta, no obstante, no fue consenso y acabó por producir una “fenda” de la entidad entre dos lados, uno de ellos que respalda y defiende el gobierno de Evo Morales y sus propuestas, y el otro que decidió mantener “una distancia más que prudente” del gobierno, como relata el informe nacional de Bolivia.

El partido tuvo un papel fundamental en la convocación del referendo que creó la Asamblea Constituyente, a la que se identifica como el principal espacio de actuación no apenas del MAS, sino además de los movimientos sociales.

Para uno de los entrevistados, la Constituyente significa “la gran esperanza de las organizaciones sociales para que se pueda dar el cambio definitivo. En la elaboración de las leyes no participábamos nosotros y en la construcción del Estado no hemos sido partícipes. Ahora si podemos participar y nuestros asambleístas están para dar el verdadero cambio y por tanto la Asamblea es un cambio de Estado”.

finió varios aspectos de la relación entre Estado y Sociedad.

Estos procesos tocan fondo en las relaciones Estado y sociedad civil. Buscan redefinir relaciones de poder y los mecanismos de procesar los conflictos sociales en nuevas bases. Son procesos constituyentes que requieren, para operar las rupturas necesarias a la democratización de la democracia, la “existencia de sujetos sociales, sujetos históricos, que imaginen y anhelan la democracia, que se organicen y luchen por ella, que se constituyan en las condiciones económicas, culturales y políticas existentes”¹².

Este mensaje trae claramente la idea de que los cambios sociales deseados – la democratización del poder y la reducción de las desigualdades – apenas pueden venir de la presión de los sectores sociales que luchan por su inclusión social y política, en una lógica que dice que la reducción de la desigualdad depende de la ampliación de la democracia.

De nuevo esta investigación coincide con otros estudios, que apuntan para una conciencia de los entrevistados de que el futuro de América Latina no depende de sus gobiernos, sino de la capacidad de los movimientos sociales de promover rupturas que abran nuevos horizontes.

“Apenas la participación sustantiva de la sociedad civil y particularmente de los movimientos sociales en la refundación de la democracia latinoamericana consolidará un modelo de convivencia y construcción de relaciones igualitarias en el plan económico y político”.¹³

IV. NUEVOS GOBIERNOS “PROGRESISTAS” EN AMÉRICA LATINA

Al parecer, nunca se valoró tanto la democracia en el continente. El análisis de estas elecciones del 2006 permite identificar la aparición de nuevas mayorías políticas, como señala el informe andino, que eligen a gobiernos representativos de las grandes mayorías excluidas del sistema político.

El tema de las nuevas mayorías políticas es muy importante. Son ellas las que abren nuevas posibilidades históricas, que permiten el alejamiento de las elites tradicionales del aparato del Estado y la disputa por los recursos públicos. La conformación de estas nuevas mayorías se da en los enfrentamientos con los “enemigos comunes”, como se puede verificar en el análisis de las movilizaciones sociales, en los procesos de construcción de frentes nacionales de lucha, de grandes articulaciones entre movimientos sociales. Se trata de toda una subjetividad que se va construyendo, una representación del mundo y de sí mismos en un plan colectivo que va creando nuevas capacidades de intervención en la escena pública y de la política.

Esta percepción la expresa un liderazgo venezolano entrevistado: *“Todo ese sentir, indigenista, obrero, de pobres, de mujeres, de lo que nosotros nos decían que era minorías, ganó expresión en los recientes procesos electorales y nos enseñó que somos mayoría. Los resultados electorales están diciendo que somos mayoría, que ese cuento de las minorías es un discurso maniqueo, somos mayoría y por eso se ha tomado terreno y donde no se ha logrado alcanzar ese terreno es precisamente porque hicieron un gran esfuerzo una gran inversión para que no se lograra eso.”*

“Nuestra causa de campesino, indígena, no había sido equivocada. Nosotros hemos decidido luchar por los intereses nacionales y la sociedad boliviana y aquellos que están descontentos actualmente son los que sienten que se afectan sus intereses porque ellos siempre vivieron de los beneficios y de poder sacar de la noche a la mañana miles y millones de dinero.”

Nosotros vivimos hace años sin tener miles sino con lo justo para nuestra casa, para nuestra supervivencia y ahora que pudimos ganar mediante la democracia, mediante la votación de la conciencia boliviana, yo veo que ahora nos dan la razón y como dirigentes campesinos somos bienvenidos y nos dicen ustedes son la razón, ustedes son la esperanza. Nosotros vemos que los otros sectores quieren acompañarnos, quieren estar a nuestro lado yo creo que vamos a conseguir esa conciencia de las organizaciones en Bolivia y porque no decirlo de los otros países también”.

Como resalta el informe sub regional andino, en el caso de

Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, hay una tendencia a enfatizar el carácter “revolucionario” y “transformador” de los actuales gobiernos, que proponen la “refundación” del país.

En Ecuador, se apunta el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y culturas indígenas como un importante aspecto del respeto y valorización de la pluralidad en la democracia, así como de la defensa del derecho de los pueblos latinoamericanos a los recursos naturales (petróleo, gas, recursos hídricos, coca) y la mayor preocupación con el tema social, es decir, más énfasis en políticas de promoción de la equidad social.

Existen incluso los que identifican en los procesos de cambios en curso en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela, la construcción de un proyecto del “socialismo del siglo XXI” respaldado por el voto popular.

“Nosotros miramos con muy buenos ojos el proceso de Venezuela, puesto que pensamos es una alternativa que se consolidó a través de la democracia y no por la vía de la insurgencia. Chávez nos demuestra como se puede acceder al país por la vía de los mecanismos que establece la democracia como es el voto popular. El proceso de Venezuela cada vez más se viene consolidando y, en estos momentos, se viene planteando una propuesta de un socialismo para el siglo XXI, donde uno entiende que las propuestas como el mismo socialismo y el mismo marxismo son cambiantes. Creemos que esa estrategia es una manera de preservar el tejido social, de preservar la lucha política, es una manera de preservar a nivel de Latinoamérica como se logra acceder al poder por la vía democrática.”

Ya en el Cono Sur los cambios en curso actualmente tendrían un carácter más limitado y reformista. El informe sub regional resalta la capacidad de los sistemas políticos de abrirse a procesos participativos y la poca capacidad que tienen los gobiernos de absorber los aportes y propuestas de esta participación. Y asigna también las tensiones inherentes a políticas de alianzas electorales y de gobiernos que acaban por bloquear iniciativas de cambio.

Un ejemplo ilustrativo son las palabras de un entrevistado vinculado al PT en Brasil. Aunque reafirme que la reelección del actual gobierno del presidente Lula en 2006 represente la continuación de la ruptura con el neoliberalismo en lo que atañe a la política de gobierno, el entrevistado resalta que los cambios en curso tienen limitaciones debido al amplio arco de alianzas de partidos políticos de varias posiciones ideológicas que apoyan el gobierno del presidente Lula.

Aún según este entrevistado *“para evitar que los partidos de centro derecha “dominen” la coalición, alejen el gobierno de los proyectos del mismo partido que tiene hegemonía en el gobierno, el PT debe buscar mayor apoyo y articulación con los sectores de la sociedad civil”.*

En la opinión de los entrevistados del Cono Sur vinculados a movimientos sociales, los diagnósticos son más “comedidos” con relación a los cambios implementados por los gobiernos “progresistas”. Se destacan: mayor permeabilidad del Estado a las demandas de las organizaciones sociales, una

acción más “propositiva” de los movimientos sociales y la posibilidad de un trabajo conjunto con órganos estatales, un papel más activo del Estado tanto en la promoción de políticas de redistribución como en la inducción del desarrollo económico, la importancia de las políticas sociales para romper con los “vicios” de la política tradicional como, por ejemplo, el clientelismo.

En cuanto a los entrevistados que apuntaron aspectos “positivos” de los nuevos gobiernos de izquierda, su mayoría está vinculada a entidades de la sociedad civil, principalmente a movimientos sociales. Al parecer, los movimientos sociales son los principales “entusiastas” de los nuevos gobiernos “progresistas” y son los que más ponen sus esperanzas en los cambios en curso.

Las relaciones de la sociedad civil con el Estado se modifican. La postura de oposición sistemática desarrollada como prácticas de resistencia por los movimientos sociales durante el período de los regímenes autoritarios se reemplaza por el apoyo a las políticas del gobierno, políticas esas que se formulan para atender a las demandas sociales.

“Estas movilizaciones y acciones que tomamos es un apoyo a nuestro gobierno indígena. Antes, con los anteriores gobiernos, la decisión era pelear pidiendo algunas peticiones de acuerdo a las necesidades. Hoy tenemos que trabajar así juntos; es posible como hermanos porque nuestro presidente Evo Morales necesita apoyo. Si nosotros, las organizaciones nacionales indígena originarios, no damos este apoyo, las decisiones del gobierno no se han de cumplir, pero si nosotros le vamos a dar el apoyo material y moral que le damos hacia la Asamblea Constituyente, todo esto se tiene que lograrse.”

Tenemos 10 asambleístas que estamos participando en la Asamblea Constituyente y nosotros también tenemos una propuesta hecha de una Constitución Política del Estado. Todo lo que nosotros sentimos de nuestras bases está escrita, esta documentada, se va entregar a los 10 asambleístas que tenemos. Ellos van a defender esa propuesta, lo van a tener que meter como sea en la nueva Constitución Política del Estado que se ha de hacer.”.

Por declaraciones de argentinos y brasileños queda clara la disposición de los movimientos sociales en colaborar con los gobiernos en la perspectiva de la conquista de derechos.

“El movimiento nacional y popular es el garante de profundizar un Estado propio mucho más estratégico y que realmente sea soberano y enmarcado en el contexto latinoamericano de integración como el que se está dando. Sentimos la necesidad de ir conformando un gran movimiento que apoye este proceso, a este gobierno que quiere hacer transformaciones en este país. La decisión de ser parte y apoyar a este gobierno, y la apertura que hace el gobierno hacia las organizaciones sociales, porque se empieza nutrir de compañeros, creemos que es un avance”.

En este bloque que evalúa positivamente a los gobiernos de izquierda se juntan los entrevistados vinculados a partidos políticos que apoyan institucionalmente estos gobiernos. Son

palabras de entrevistados vinculados al MAS (Movimiento al Socialismo) en Bolivia, al PT (Partido de los Trabajadores) en Brasil, y al Partido Socialista en Venezuela.

En cuanto a los diagnósticos “negativos”, en su mayoría son oriundos de entrevistados vinculados a partidos políticos, tanto de izquierda, de centroizquierda como también de centro-derecha. Estas palabras se localizan especialmente entre los entrevistados del Cono Sur. La “desconfianza” con relación a los nuevos gobiernos “progresistas” vendría de la práctica de “alistamiento” de amplios sectores de la sociedad civil a través de los programas sociales orientados, y de sus liderazgos para ocupar posiciones y cargos en el aparato estatal.

“Lo primero que hay que desatar es el yugo de los pobres, hay que hacer ciudadanos a los pobres, por eso los planes sociales universales son básicos para una reforma política con una reforma social. Si no hay plan universal, es decir, que va todo a ricos y pobres, aunque el dinero va destinado el 80% a los pobres, sin planes de ciudadanía amplios y universales, en realidad se produce el clientelismo la cooptación y en consecuencia la esclavitud”.

En la ponderación de varios entrevistados, la principal crítica que se hace a estos gobiernos es de que se presentan como “gobiernos de izquierda” a la vez que seguirían implementando las políticas neoliberales/de derecha.

Habría en gran parte de América Latina un amplio cuestionamiento sobre la capacidad de la democracia tal como se presenta solucionar los graves problemas sociales que afligen a los países de la región. En particular la crítica se dirige a la alianza con partidos políticos tradicionales, representantes de la élite, que tradicionalmente trata como privado lo público.

Entre los que presentaron una visión “crítica” del actual momento político latinoamericano, es decir, reconocen los puntos positivos y negativos de los nuevos gobiernos “progresistas”, hay un predominio de entrevistados vinculados a ONG, una vez más oriundos de la región andina. Estos gobiernos se caracterizan por los entrevistados “críticos” como populares, preocupados tanto por “escuchar más a la sociedad” como por mejorar los derechos sociales. No obstante, estos gobiernos habrían alistado a los liderazgos de la sociedad civil, restringiendo las libertades de expresión y asociación y apenas estarían administrando las antiguas políticas de derecha con un nuevo “ropaje” de izquierda, retardando con ello la movilización social.

“Yo veo como una encrucijada que refleja “a lo ecuatoriano” lo que esta pasando en América latina: una potencialidad de cambio y también una subsistencia de una fuerza de contención de reacción social de la derecha del país, esto genera una incertidumbre de por donde va a despuntar”.

Hay una cuestión de fondo que se contempla en la observación de algunos entrevistados, pero que habrá que afrontar-se en el debate sobre las potencialidades y límites de acción de gobiernos “de nuevo tipo”, que es *“el escaso poder que en América Latina tienen los gobiernos democráticamente electos y, en general, los estados, para avanzar en la demo-*

cratización de sus respectivos países”.¹⁴

De todas maneras, aun con sus grandes diferencias, algunos analistas perciben el surgimiento de una agenda común en el plan de la política externa asumida por los gobiernos electos por esa nueva base social. Se trata de la búsqueda de la autonomía, de la búsqueda de diversificación de las relaciones exteriores, de la definición del interés nacional y de nuevos proyectos de desarrollo, de la creación de una alianza latinoamericana, de la restricción del poder norteamericano.¹⁵

Si esta es la agenda construida por un conjunto de gobiernos elegidos que diseñan un nuevo cuadro geopolítico en América Latina, los resultados de la investigación traen a la discusión el papel de los movimientos sociales, de los partidos políticos y de las ONG en este escenario. En los capítulos siguientes, que presentan análisis regionales, vamos a reunir más elementos para el debate.

NOTAS

* Sociólogo, coordinador ejecutivo del Instituto Pólis, presidente de Alop.

** Sociólogo, mestre en ciência política, especialista en movimientos sociales y participación política.

1. Borón, Atilio. A esquerda latinoamericana no começo do século XXI: novas realidades e urgentes desafios. OSAL – ano V, nº 13, janeiro-abril de 2004.

2. Touraine, Alain. “Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?”; Nueva Sociedad nº 205

3. Boersner, Demetrio. Gobiernos de izquierda en América Latina: tendencias y experiencias; Nueva Sociedad; nº 197.

4. Mirza, Christian Adel; “Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias”; CLACSO; Bs.As.; 2006.

5. Borón, Atilio. A esquerda latinoamericana no começo do século XXI: novas realidades e urgentes desafios; op. cit..

6. Nun, José. “A Rebelião do Coro”. In: Desvios, nº 2, São Paulo, 1983.

7. Aravena, Francisco Rojas. El nuevo mapa político latinoamericano. Nueva Sociedad, nº 205.

8. Mirza, Christian Adel. “Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias”; CLACSO; Bs.As.; 2006.

9. Mirza, Christian Adel. “Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias”. CLACSO. Bs.As.; 2006.

10. Touraine, Alain. “Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?”; op. cit. ”

11. Rosanvallon, Pierre; “La contre-démocratie – la politique à l’âge de La défiance”; Ed Seuil; Paris; 2007.

12. Grzybowski, Cândido; “Democracia, sociedad civil y política en América Latina: notas para un debate”: in PNUD....

13. Mirza, Christian Adel. “Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias”; CLACSO; Bs.As.; 2006.

14. O'Donnell, Guillermo. Acerca Del Estado En América Latina Contemporánea: diez tesis para discusión”; in UNDP; “La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas”; Buenos Aires; 2004.

15. Russel, Roberto e Toakatlian, Juan Gabriel. “A América Latina e suas opções estratégicas frente aos Estados Unidos”. in Revista “Política Externa”; vol. 16, nº 3; ; Ed. Paz e Terra; dez 2007/jan/fev 2008.



4. INFORME SUBREGIONAL CAMEXCA: MÉXICO, AMERICA CENTRAL Y CARIBE

I. INTRODUCCIÓN

El presente es el Informe Sub Regional, correspondiente a México y Centro América (CAMEXCA), sobre la Democracia y el Desarrollo en América Latina, elaborado por ALOP, construido desde la perspectiva de actores claves que representan visiones alternativas a las hegemónicas en sus respectivos países y en la sub región.

La metodología ha sido basarse principalmente en los Informes Nacionales que oportunamente fueron elaborados, pero contrastándolos con los contenidos generales de las entrevistas realizadas a los actores escogidos y retroalimentándolo con los aportes recogidos en dos reuniones celebradas en San José (mayo de 2007) y en ciudad de México (agosto de 2007). El procedimiento seguido ha sido el que a continuación se refiere.

Se hizo una primera sistematización de contenidos, que permitiera enterar a las organizaciones de la Sub Región sobre los elementos más relevantes que contienen los Informes Nacionales. Este primer trabajo fue objeto de una discusión en una reunión en San José Costa Rica, en mayo del año en curso, que permitió retroalimentar con diversos criterios lo elaborado.

Después de dicha retroalimentación se hizo una lectura general de las entrevistas realizadas en cada país, con el propósito de fortalecer la visión originaria que debe expresarse en el Informe Sub Regional.

Con base en esa lectura de las entrevistas y las observaciones recibidas en la reunión de San José, se relevaron los Informes Nacionales y se elaboró un Primer Borrador, el cual fue discutido en una reunión de la Sub Región realizada en Ciudad de México los días 30 y 31 de agosto de 2007.

A partir de dicha retroalimentación se elaboró el presente trabajo, que constituye el Segundo Borrador del Informe Sub Regional (CAMEXCA), el cual se ha remitido a la Presidencia de ALOP para una última revisión, previo a su utilización para la elaboración del Informe Regional.

Hemos incorporado un Marco Referencial y Axiológico, donde se plantea la inspiración y propósitos del Informe, la definición conceptual que le da sentido a la Democracia y al Desarrollo que aspiramos, así como su relación recíproca, y a la situación socioeconómica prevaleciente en la región, donde están las bases materiales de las inconformidades existentes a nivel popular con el modelo de democracia que tenemos.

Consta el presente Informe de cuatro apartados sustantivos.

El primero está referido al Contexto, el segundo a las luchas sociales y sus innovaciones, el tercero a los desafíos que enfrentan los movimientos sociales y un último capítulo donde se trata el tema de la integración regional. Cada numeral es tratado desde dos perspectivas. La primera es nacional, donde se intenta recuperar lo más relevante de cada país; y la segunda es Sub Regional (CAMEXCA), donde se consolidan los elementos comunes recogidos en las síntesis nacionales.

La intención ha sido recuperar en lo esencial la riqueza de lo particular nacional y, al mismo tiempo, ubicar los elementos comunes en la Sub Región. El propósito que inspira el presente trabajo ha estado presente en su elaboración y se refiere a la necesidad de provocar la reflexión y la discusión sobre los principales logros y retos que enfrentan los sectores progresistas del continente para formular e impulsar una alternativa viable a la situación prevaleciente, tomando en cuenta el contexto histórico social en el que nos encontramos.

Al final, hacemos una SÍNTESIS SUBREGIONAL.

A lo largo de la investigación realizada se evidencia una reiteración de temas y sus respectivos contenidos, la cual encontrará el lector reflejada en el presente Informe Sub Regional.

II. UN MARCO REFERENCIAL Y AXIOLÓGICO

El Informe sobre la Democracia y el Desarrollo constituye básicamente una herramienta de un proceso político que pretende impulsar ALOP en la Región para contribuir a que se logre la articulación entre Democracia y Desarrollo. Este proceso no puede ser “imparcial”. Se construye desde la perspectiva e intereses de los sectores populares, expresada a través de las entrevistas realizadas a connotados dirigentes de organizaciones sociales latinoamericanos, que en el presente caso corresponde a la Sub Región de México y Centroamérica..

Este Informe parte de la inconformidad existente con el modelo de democracia prevaleciente, el cual se encuentra restringido a una limitada visión representativa, expresada a través de procesos electorales.

El tránsito en la región de regímenes autoritarios militares y de conflictos armados a democracias electorales y a la firma de Acuerdos de Paz que plantearon agendas democráticas, sin duda ha significado un paso positivo; pero transcurrida más de una década, la insuficiencia de lo logrado se hace manifiesta y el modelo democrático electoral se ha convertido en una camisa de fuerza para la participación social, así como para el logro del desarrollo nacional y regional.

La relación entre Democracia y Desarrollo debe ser indisoluble, siempre que se entienda el carácter multidimensional e integral de la primera. El contenido social, político y económico de la Democracia es el correspondiente con una visión del Desarrollo centrada en el ser humano, donde la economía y la política converjan virtuosamente en favor de los sectores populares, secularmente excluidos, tanto de la democracia como del desarrollo.

La Democracia, por lo tanto, no se agota en su dimensión representativa y, menos aún, limitada por la absolutización del componente electoral y por la mercantilización que actualmente condiciona su realización. La igualdad que implica la Democracia tiene una contradicción estructural con la desigualdad que supone el capitalismo, especialmente desde la perspectiva neoliberal que ve en el mercado la esencia de la realización humana y en la intervención del Estado, vía regulación de la economía, una perversión que debe evitarse o reducirse al mínimo.

La búsqueda del necesario crecimiento económico no puede asimilarse, por sí mismo, al desarrollo, pues la realidad histórica constata que no existe el supuesto efecto de derrame. Es más, el crecimiento económico tiende a distribuirse en correspondencia con la brecha de desigualdad existente.

Pero además, las políticas neoliberales aplicadas en América Latina tampoco han tenido el éxito pretendido, en términos del supuesto crecimiento económico que provocarían. La estabilidad macroeconómica que se proclama no tiene efectos sustanciales en el desarrollo humano de la población. Algunos de los indicadores favorables existentes en las políticas macroeconómicas están relacionados con el aporte que dan a la economía nacional y a las economías familiares las remesas familiares que envían los pobres latinoamericanos que han sido obligados por las circunstancias socioeconómicas de sus respectivos países a emigrar, principalmente a los Estados Unidos. Sería muy difícil la situación macroeconómica de muchos de los países latinoamericanos si no existiera este fenómeno, además del beneficio que implica en términos del destinatario final de estos ingresos porque ellos si alcanzan a los sectores populares.

Ahora bien, en términos de desarrollo humano, pensado en los códigos de disminución de la pobreza y la indigencia, los resultados son muy limitados.

Es más, los “éxitos” recientemente reportados por CEPAL (2007) en relación a la disminución de la pobreza y la indigencia apenas logran alcanzar la triste meta de empezar a reducir el porcentaje de pobres e indigentes que se reportaba hace veintisiete años. Al respecto, dicha Comisión afirma que “... el último cuatrienio (2003-2006) ha sido el de mejor desempeño social en América Latina en los últimos 25 años.... la tasa de pobreza ha descendido por primera vez bajo el nivel de 1980...”¹, agregando en esta misma dirección que “... esta mirada a largo plazo muestra que la región ha demorado 25 años en reducir la incidencia de la pobreza a los niveles de 1980”². El colmo de esta apreciación “positiva” está dado en el entusiasmo con el cual la CEPAL afirma que con las recientes cifras porcentuales de

reducción de la pobreza y la indigencia “... el número de pobres proyectado para 2006 sería similar al de 1997, lo que representaría una recuperación del nivel previo a la crisis asiática”³.

Sin embargo, estos supuestos avances porcentuales al convertirse en cifras absolutas, es decir en seres humanos, expresan que los pobres en América Latina en el año 1980 eran 136 millones y que los indigentes eran 62 millones; mientras en el año 2005 esa cifra ascendía a 209 y 81, respectivamente; o sea que en 25 años el continente tenía 73 millones más de pobres y 19 millones más de indigentes. Palidecen así las leves mejoras porcentuales ocurridas en ese período de 25 años, que significan haber pasado de 40.5% de pobres y 18,6% de indigentes en 1980, a 38,5% y 14.7% respectivamente en 2005, pues en la realidad una mejora del 2% de pobres y del 4% de indigentes deben contrastarse con las cifras absolutas anteriormente citadas.

Relacionando la pobreza y la indigencia con la situación de desigualdad predominante en el continente, CEPAL también reporta en el Informe citado, alguna mejoría en la distribución del ingreso, cuya significación es realmente muy limitada. Comienza en esta argumentación por reconocer la inequidad históricamente prevaleciente en la región. Al respecto afirma que “Una de las características más sobresalientes de América Latina ha sido históricamente la acentuada inequidad de la distribución del ingreso, así como su falta de flexibilidad ante el cambio. Esa desigualdad no solamente excede a la de otras regiones del mundo, sino que además se mantuvo invariable durante la década de 1990 e incluso empeoró a comienzos de la presente década”⁴. En su esfuerzo por transmitir una percepción positiva, CEPAL argumenta que “A partir de las encuestas de hogares más recientes disponibles, se observa que en los últimos años varios países lograron mejoras distributivas que, aunque reducidas, al menos representan un avance respecto de la inflexibilidad ante el cambio o incluso el deterioro de los períodos anteriores”⁵.

Vale decir que los años a los que se refiere CEPAL como positivos son básicamente los correspondientes a la primera década del siglo actual, calificando lo sucedido como “una incipiente tendencia al mejoramiento distributivo”. Pero además, esta situación se reconoce que no sólo es limitada, sino que muy heterogénea en la región, pues mientras Uruguay y Panamá en sus áreas urbanas lograron reducciones del coeficiente de Gini del 8%, Honduras lo logró en sólo 4%; frente a Ecuador que vió aumentado dicho coeficiente en un 10% y Argentina, Costa Rica y Venezuela que presentaron un deterioro del Gini de entre el 4% y el 7%. Como se ve, las mejoras no pueden calificarse de significativas y, por consiguiente, poco impactan en la disminución de la pobreza y la indigencia.

De lo que se trata en la presente argumentación sobre Democracia y Desarrollo, es subrayar la necesidad de su correspondencia, evidenciando, por lo tanto, que la experiencia concreta en América Latina es que este tipo de democracia está divorciada de las posibilidades de desarrollo, pensado en términos de las condiciones socioeconómicas de la población.

Pero aún sin recurrir a esta relación que debe ser inherente entre Democracia y Desarrollo, la cual está ausente en la región latinoamericana, y pensando únicamente en factores de índole política, es evidente que la democracia reducida a su dimensión electoral, además completamente mercantilizada, es incapaz de contener la demanda de participación real de la ciudadanía.

Es más, de acuerdo a lo manifestado en los talleres de validación realizados durante el proceso de producción de este Informe, se dijo de manera reiterada que esta democracia representativa, tal como existe, se ha convertido en una “camisa de fuerza” para dicha participación.

Desde la perspectiva de los sujetos cuyos puntos de vista expresa este Informe (que son los liderazgos alternativos), la inconformidad con la actual democracia representativa no significa una desvalorización de la democracia como tal, sino que la recuperación de su sentido integral y multidimensional.

Sin embargo, la posibilidad de rescatar esta naturaleza de la democracia está determinada por la capacidad que tengan los actores alternativos para construir agendas comunes y definir estrategias y formas de lucha acordadas entre ellos y ellas y apropiadas a las condiciones prevalecientes. El reto fundamental al que responde este Informe y que demanda la realidad regional y de cada país en particular es la construcción de las alianzas estratégicas entre movimientos sociales, ONGs y partidos políticos progresistas. Estos son los actores alternativos a los que hacemos referencia. En síntesis, este Informe tiene razón de ser en función de su posible aporte a la realización de este propósito, pero no sólo a niveles nacionales, sino que básicamente pensando en una perspectiva latinoamericana.

Las alianzas que procuramos deben poder conjugar la lucha de resistencia con la lucha por la transformación, haciéndolas complementarias en función de recuperar la utopía que guía el rumbo estratégico de los cambios estructurales que se buscan. Sin embargo, esta visión de carácter histórico no debe limitar la flexibilidad táctica que se requiere y, por lo tanto, la construcción de coincidencias con otros actores diversos en función de objetivos concretos.

III. ANÁLISIS POR PAÍS Y REGIONAL

1. EL CONTEXTO

1.1. CONTEXTOS NACIONALES

México, durante el año 2006, atravesó por una coyuntura social y política sin precedentes en la historia contemporánea del país. El momento que emblemiza la crisis del régimen político en México, se dio con motivo de las irregularidades ocurridas en el proceso electoral del 2 de julio de 2006. Por primera vez se colocaban en juego dos proyectos de nación. La respuesta de la derecha fue estereotipar la opción democrática, calificándola de irracional y populista, frente a la opción conservadora que era promovida como la racional y democrática. Esta situación coyuntural estuvo marcada por una degradación de las instituciones públicas y por una fuerte crisis del régimen político.

El gran saldo del proceso electoral es el de una polarización social y política como nunca antes había vivido el país. Hay un esquema de gobernabilidad incipiente y frágil con el nuevo gobierno, que acentúa el contraste entre una conducción neoliberal de la economía y el malestar social provocado por la enorme desigualdad.

En relación a la situación económica, México presenta desequilibrios profundos, resultado de más de veinte años de implementación de políticas económicas neoliberales y más de diez años de la firma del TLC con EUA. Es lamentable que el crecimiento de la economía del país dependa únicamente de dos rubros: el petróleo, cuyo precio oscila en el mercado mundial y las remesas. En lo que respecta al campo mexicano, la crisis económica es ostensible. El reflejo de los desajustes referidos es la acentuación de la desigualdad social, la exclusión y la pobreza y sus consecuentes brotes de insatisfacción social. En contraposición a lo anterior, la situación macroeconómica es apreciada como positiva.

Es fácilmente predecible el rumbo del nuevo gobierno: incremento al presupuesto público en materia de seguridad y fuerzas armadas, inversión externa a través de la reactivación del Plan Puebla Panamá, intolerancia frente a la legislación, en especial en el tema del aborto, criminalización de la participación social y protesta pública.

En el año 2006 las demandas sociales hicieron crisis al ser ignoradas o muchas veces reprimidas por el gobierno federal.

Se observan dos fenómenos de deterioro social: el incremento de la pobreza rural y el aumento de los procesos migratorios con todas sus implicaciones económicas, sociales y

políticas, tanto en México como en los Estados Unidos..

La agudización de la pobreza, el proceso creciente de la exclusión social, la sistemática violación de los derechos humanos, la crisis de las instituciones, son sólo algunos rasgos del actual escenario nacional.

México está en la ruta de la descomposición política. La crisis de las instituciones y de la democracia representativa por la que atraviesa México alcanza también a los partidos políticos.

Por otra parte, en los últimos tiempos, se han desplegado, como nunca antes en la historia del país, los poderes fácticos. Nos referimos a los medios de comunicación (que se legalizan como tales con la aprobación de la Ley de Medios que entregó el espacio radioeléctrico a dos monopolios), la jerarquía eclesial de la iglesia católica y los grupos económicos financieros.

También es importante señalar que el sistema de seguridad pública federal fue ampliamente rebasado por el crimen organizado

En **Guatemala**, el 9 de septiembre fueron las elecciones generales (Ejecutivo, Legislativo y Municipalidades). La convocatoria fue el día dos de mayo, pero los partidos políticos iniciaron su campaña desde varias semanas antes, sin que el Tribunal Supremo Electoral ejerciera su autoridad para poder evitarlo.

Los resultados más significativos de esa contienda electoral fueron los siguientes: el abstencionismo mejoró de manera leve (casi el 60% de los empadronados emitieron su voto); en general, hubo tranquilidad en las elecciones, los resultados no fueron cuestionados; debe haber una segunda vuelta donde competirán los candidatos que las encuestas señalaban como punteros; la izquierda tuvo un resultado adverso, pues de los tres partidos que de una u otra manera eran identificados con este signo ideológico, uno desapareció (con aproximadamente un medio punto porcentual de votos) y entre los otros dos no llegaron al seis por ciento de los sufragios.

Las opciones con posibilidades reales de gobernar no constituyen ningún reto para los intereses de las cúpulas empresariales.

En términos legislativos, los partidos de derecha hegemonizan, ya que la presencia de la izquierda es marginal (tendrán seis diputados, de 158).

El problema más relevante en la percepción ciudadana es la situación de inseguridad que se vive diariamente, expresada en los continuos hechos delictivos realizados por la delincuencia común y organizada. El crimen organizado constituye un verdadero poder paralelo y ha cooptado gran parte de la institucionalidad del Estado.

En términos macroeconómicos, se tienen resultados positivos, pero lamentablemente esto no se refleja en la vida cotidiana de las personas; de hecho, el problema estructural de la ine-

quidad en la distribución de la riqueza se mantiene intacto aún cuando está consistentemente demostrado que el modelo económico basado en el “derrame de las ganancias” es un fracaso. Además, los éxitos macroeconómicos no serían posibles sin la existencia del flujo financiero que permiten las remesas enviadas a sus familiares por los guatemaltecos migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Este tema de las migraciones tiene gran potencialidad de ser aglutinador por los elementos simbólicos que en él están implicados.

El panorama evidencia un país profundamente golpeado por las inequidades y con la clase política y el sector económicamente dominante interesados en organizar sus feudos de poder, en el marco del proceso electoral actualmente en marcha. Las negociaciones que les permitan posicionarse de mejor manera para el período post-eleccionario seguramente ya se habrán realizado.

En el 2006 se cumplió una década de la Firma de los Acuerdos de Paz. Hay un saldo negativo en el cumplimiento de los aspectos sustantivos y estructurales de los Acuerdos. En esta década se ha evidenciado reiteradamente que sectores oligárquicos tradicionalmente allegados al control del Estado trabajaron en el desgaste de esta estratégica agenda política que evidentemente encaminaría al país por procesos de desarrollo importantes para la transformación social, cultural, económica y ambiental.

Pese a lo anterior, debe reconocerse que en materia de Acuerdos de Paz lo más destacable en los últimos años ha sido la aprobación del Decreto No. 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, que dan a los acuerdos y a la agenda de la paz un fuerte soporte legal, al convertirlos, jurídicamente, en compromisos de Estado.

Sin embargo, en la realidad, se sigue manifestando la tendencia de liberar los mercados de la intervención del Estado. Se busca reducir la intervención del mismo y legislar para beneficio de los sectores de poder económico, creando las condiciones para que en el país se instale sin restricciones el capital transnacional articulado con el capital nacional

La izquierda participó en estas elecciones a través de dos partidos que se definen como tales (URNG Y ANN) y otro (Encuentro por Guatemala, EG) que se ha cuidado de no asumir públicamente tal identidad, pero donde participan personas con historias de vida relacionadas con los sectores populares. En EG confluyen dos corrientes, una encabezada por Nineth Montenegro y otra por la premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchú. En el caso de URNG es importante señalar un limitado esfuerzo de ampliación que se ha expresado en la constitución del grupo MAIZ (Movimiento Amplio de Izquierda), de cara a la participación en las elecciones de septiembre. Pasadas las elecciones, actualmente sólo sobreviven EG y URNG, el primero obtuvo apenas un tres por ciento de los votos y el segundo con dificultades rebasó el 2%. La presencia de Rigoberto Menchú como candidata presidencial fue altamente significativa, tomando en cuenta la historia de discriminación y exclusión hacia los pueblos indígenas, pero el resultado electoral es, obviamente, una gran derrota.

Los movimientos sociales continúan manifestando desconfianza y rechazo hacia los partidos, con lo cual éstos no logran tener capacidad de intermediación política.

En **El Salvador**, después de 15 años de haberse firmado la paz, se constata una gran decepción, en cuanto a este proceso, puesto que precisamente en el año 2006, la crisis social, económica y política llegó a su punto más alto. Los dos elementos más perceptibles de esta decepción son los niveles de delincuencia existentes y la crisis económica que viven amplios sectores de la población.

El panorama político está dominado por una polarización entre los dos principales contendientes: el FMLN y ARENA. Los intentos por conformar una opción política de centro que despolarice el panorama no han tenido éxito. Tampoco se ha dado entre las dos fuerzas mayoritarias un acuerdo de agenda de nación que oriente al país estratégicamente.

Ante esta polarización y la conflictividad social que la misma ha significado, algunos sectores conservadores llaman a “preservar la paz”, pero entendida como un llamado a la desmovilización de la protesta.

Otras opiniones, convergentes desde diferentes perspectivas políticas, afirman que hay un “Estado fallido”, por su incapacidad para garantizar la seguridad, pero también para garantizar el ejercicio de la ciudadanía para la mayoría de la población, mientras que una minoría opulenta se beneficia de ello. Ante esta situación existe el riesgo que la población acepte soluciones autoritarias, apremiada por sus condiciones de vida.

“El conflicto principal que se observa en el escenario nacional, en el período actual, es entre la política neoliberal y represiva del partido gobernante, ARENA, y entre amplios sectores de la sociedad civil, agobiados por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y las acciones de una política cada vez más represiva”.⁶

El proceso de “democratización” está en retroceso. Lo que se tiene es una democracia pensada desde la perspectiva electoral, sin considerar que la democracia no sólo tiene una connotación política, sino que también tiene una económica, social, de derechos.

En el ejército de nuevo hay un discurso del tiempo de la guerra fría. Está surgiendo otra vez el militarismo y un alineamiento participativo con la estrategia militar a nivel mundial de los EUA.

La dolarización, la privatización de los activos del Estado y el Tratado de Libre Comercio con EUA, han colocado al país en la crisis actual. Sin embargo, hay una disminución de la pobreza en el país, a pesar de la política económica existente. Esto se debe fundamentalmente a las remesas familiares enviadas por los migrantes salvadoreños en EUA.

En **Honduras**, en enero de 2006 tomó posesión un nuevo gobierno, habiendo sustituido los liberales a los nacionalistas.

En términos de la economía, el país experimentó el mayor crecimiento desde el año 2000, alcanzando un 5.6%. La mayor contribución a este crecimiento viene dada por la expansión del consumo interno, lo cual refleja el aporte de las remesas familiares que significaron el 26% del PIB, siendo la cuenta nacional más dinámica desde hace ya más de una década.

Uno de los principales problemas es la inseguridad, que se percibe principalmente como producto de las pandillas. Esto ha exacerbado la violación a los derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales y sumarias, por ejemplo).

Honduras, igual que muchos países de la región, vive la paradoja de tener mecanismos democráticos de elección de gobiernos, sin que ello tenga consecuencias en la reducción de la exclusión social.

Se argumenta por los entrevistados una relación entre la forma de gobierno y el desarrollo. Sobre la democracia se perciben dos temas: como forma de gobierno (procedimiento y cultura) y como la realización del bien general, como desarrollo de la sociedad.

Como expectativa, la población cree que con democracia se puede llegar a ser desarrollado. Sin embargo, la legitimidad de la democracia tal como se practica en la actualidad es, en general, cuestionada. De igual manera, se manifiesta la inconformidad por la insuficiencia del Estado para atender a los más vulnerables y en los mecanismos para democratizar las oportunidades de acceso a los recursos.

Las reformas democráticas electorales también ha sido un espacio de lucha social y política, donde se registran fuertes tensiones, por las contrarreformas que buscan realizar los partidos tradicionales. Se perciben a estos partidos políticos como actores que tienen prácticas poco democráticas y que monopolizan la vida democrática, que priorizan sus intereses partidarios frente a los nacionales.

La existencia de un partido diferente, como el Partido de Unión Democrática, ha significado mayor mediación política de los intereses que expresan los movimientos sociales, pero esto no se traduce en apoyos electorales significativos hacia dicho partido.

En **Nicaragua**, durante el año 2006 hubo un crecimiento del PIB del 4%, con una tasa de inflación del 7.5% y un déficit fiscal del 0.7% del PIB.

Pero a pesar del crecimiento económico y de los profundos cambios revolucionarios ocurridos en el pasado, el espacio político institucional y de equidad con justicia social está plagado de limitaciones y retos.

La fragmentación de los actores y los enormes niveles de pobreza hacen compleja la posibilidad de encontrar una agenda y estrategia común.

En **Costa Rica**, como es sabido, el modelo de desarrollo se modificó con los procesos de ajuste estructural, lo cual tuvo repercusiones en las luchas sociales y políticas que debieron replantear sus estrategias.

La comprensión de esta realidad ha ido madurando en las organizaciones sociales, en el sentido de entender que el problema que enfrentan los sectores que representan tiene que ver directamente con el modelo de desarrollo y que enfrentarlo implica contar con una alternativa de país viable. Se comprende también que para formular tal alternativa y viabilizarla políticamente, es necesario tender puentes con otros sectores, ya que un solo movimiento no tiene el arrastre ni los recursos suficientes para liderar un esfuerzo de este tipo. Baste decir que en Costa Rica ningún movimiento tiene un liderazgo que sobresalga ante la diversidad de organizaciones y, por lo tanto, ninguno arrastra, desde el punto de vista numérico, un sector de población significativo.

En ese contexto de orden estructural, el año 2006 estuvo marcado por dos escenarios articulados. El primero fue la realización de dos contiendas electorales: la elección de presidente, diputados y regidores, y diez meses después la elección de alcaldes. Y, el segundo, fue el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la subsiguiente discusión legislativa para su aprobación o rechazo.

Por primera vez en Costa Rica, una iniciativa gubernamental y de un sector importante del empresariado nacional articulado con el mercado trasnacional o con intereses en negocios asociados con servicios que presta el Estado, ha suscitado una oposición unida de todos los movimientos sociales existentes en el país. Nos referimos al TLC.

El rechazo al TLC ha unido y movilizado a sindicatos de funcionarios públicos; a todos los sindicatos magisteriales; a los sindicatos, asociaciones y trabajadores y trabajadoras de las instituciones autónomas; a las diferentes organizaciones campesinas; a movimientos de productores y de empresarios asociados al mercado nacional y centroamericano; al movimiento cooperativo; al movimiento orgánico y agro ecológico; al movimiento comunal y a organizaciones locales vinculadas con salud y administración de acueductos rurales; al movimiento indígena; a diversos sectores organizados de la iglesia católica, sobre todo aquellos asociados a las pastorales sociales; al movimiento ecuménico; a las diversas organizaciones ecologistas y conservacionistas; al movimiento cultural y artístico independiente; a las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas; a las organizaciones estudiantiles universitarias; a las universidades públicas, sus consejos universitarios y sus rectorías; a diversas agrupaciones juveniles; a los pacifistas; a la Defensoría de los Habi-

lantes; a partidos políticos; a intelectuales y políticos independientes y a hombres y mujeres que sin estar organizados desconfían en lo que el Tratado propone.

Las movilizaciones de oposición que se han producido han sido multitudinarias (las mayores en la historia del país), pero también con la mayor diversidad de participantes y con una inusitada creatividad de expresión.

Esta coyuntura se caracteriza por un elemento trascendental en la realidad socio política costarricense, cual es la unidad que genera la oposición al TLC y los puentes que se tienden entre organizaciones, a la par de la conciencia de producir conjuntamente una alternativa de país que se contrapone al modelo que impulsan los sectores pro Tratado. Lo que se está defendiendo es el Estado benefactor que se logró construir en Costa Rica (o lo que queda de él) y que las políticas neoliberales pretenden desarticular.

Por su parte, el gobierno recurrió a la estrategia de deslegitimar la pertinencia de las luchas sociales para definir el futuro del TLC y referirlo a la institucionalidad, a la Asamblea Legislativa, es decir a la dimensión representativa de la democracia, donde tenían mejores posibilidades de contar con la correlación de fuerzas que requerían para su ratificación.

Es importante señalar que el TLC toca dos fibras de particular sensibilidad en la realidad y el imaginario de los costarricenses: el monopolio estatal de la energía y las telecomunicaciones (ICE) y el régimen de seguridad social (la “Caja”).

En **Panamá**, en los últimos años, se ha restringido la participación social, se ha coartado el derecho a la organización social y se ha profundizado la inequidad. Impera la “democracia restringida” que impone la globalización, desde cuya perspectiva democracia equivale a libre mercado, que, paradójicamente, cada vez es más excluyente. Se afirma que “Los mercados secuestraron a la democracia”, ya que avanzan hacia la mercantilización de la totalidad de la vida social.

No existe en Panamá un real proceso de democracia y ello restringe las posibilidades del desarrollo nacional. Esto ha provocado un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las movilizaciones sociales, para exigir participación en las decisiones políticas.

La imagen progresista que tiene el actual gobierno panameño no es correspondiente con su práctica concreta. Su discurso es distinto a su alineamiento con las políticas económicas neoliberales y con los intereses de los Estados Unidos, particularmente en términos del Canal.

Entendemos por “Real Democracia”, que no es la existente en Panamá, una donde haya: ciudadanos libres que participen, separación efectiva de los poderes del Estado, organizaciones sociales que deliberen e influyan pero al margen del gobierno, medios de comunicación libres e independientes

y una opinión pública con peso. Pero además, se considera que la lucha por la democracia es contra la dominación y explotación de los muchos por unos cuantos, es la lucha por un orden social tendiente a la justicia y la igualdad.

No hay democracia donde no existe democracia económica. De igual manera, donde no hay democracia el desarrollo está negado.

1.2. CONTEXTO SUB REGIONAL

Lo primero que habríamos de definir desde la perspectiva regional, es que el nuevo contexto existente se ha construido a partir de la transición de regímenes autoritarios militares y de la existencia de conflictos armados en Centroamérica, a la pacificación y a modelos de participación política donde prevalece la dimensión participativa de la democracia, con muchas limitaciones. Asimismo, en el caso de México, la diferencia política sustancial ha sido la alternancia en el poder político, al haber sido derrotado electoralmente el PRI, así como la configuración de un nuevo mapa político electoral con la presencia de tres fuerzas políticas principales, ubicándose una expresión democrática como la segunda. Sin embargo, esta alternancia, en la práctica, significó la continuidad y profundización de las políticas económicas neoliberales iniciadas por los últimos gobiernos priistas, así como el abandono de una política internacional independiente. Y en términos más recientes, el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno actual, dados los hechos sucedidos en el último proceso electoral.

Estructuralmente, la Sub Región en su conjunto ha sufrido los embates a nivel social de las políticas económicas neoliberales, particularmente en el marco de los procesos de “integración” correspondientes con los intereses de los Estados Unidos y expresados en los tratados de “libre” comercio que se han firmado.

En la región de Centroamérica y México prevalecen los gobiernos conservadores, adscritos a las estrategias norteamericanas hacia la región. Esto implica no sólo la subordinación en términos de política económica, sino que también a la política de seguridad hemisférica del gobierno de los EUA, con sus implicaciones militares y policíacas. Sin embargo, es necesario subrayar la existencia de un gobierno sandinista en Nicaragua, cuyo desempeño está aun por verse, aunque se esperaría que no fuera correspondiente con la derechización imperante. En el caso de Panamá, hay un gobierno que tiene una imagen progresista, por herencia familiar, así como un discurso progresista, pero que desarrolla una práctica de gobierno de derecha, incluyendo su posición respecto del Canal.

Es importante hacer ver que ante el debilitamiento que han sufrido los Estados, producto de la implementación de los llamados “procesos de ajuste estructural”, y la hegemonía de las políticas basadas en la beligerancia y apertura de los merca-

dos, los sectores sociales y políticos progresistas han asumido la reivindicación de su fortalecimiento, pero de cara a su rol central en el desarrollo y no únicamente con el propósito de funcionalizar los mercados. Estos sectores progresistas han asumido, en muchos casos, la defensa de la institucionalidad del Estado, pero en términos de garantizar su capacidad de intervención con fines redistributivos, regulando vigorosamente al mercado, así como en su rol de garantizar los derechos humanos en su integralidad. No se trata pues, de una defensa indiscriminada de la institucionalidad.

Asimismo, es relevante la irrupción de protagonismos asumido por actores sociales y políticos con identidades no ancladas fundamentalmente en las contradicciones de clase. Algunos de ellos han estado presentes históricamente, tal el caso de las mujeres, pero invisibilizados, habiendo ahora asumido prácticas que los ubican en primer plano en los escenarios nacionales y regionales.

En este marco, podemos resaltar como comunes a la región de México y Centro América, los siguientes elementos:

En primer lugar, y como sustancialmente significativo, la consolidación de democracias representativas que no logran resolver dos cosas centrales. Por una parte la persistencia e inclusive aumento de los niveles de pobreza, pobreza extrema y exclusión, en correspondencia con el incremento de la brecha de desigualdad. Y, por la otra, una incapacidad del modelo representativo para contener (en términos de contenido no de sujetar) la demanda ciudadana de participación, así como la crisis de la institucionalidad correspondiente con esa democracia representativa.

En el mismo sentido en que avanza el desgaste de la democracia representativa se produce un creciente agotamiento de los partidos políticos en su rol de intermediación política de la sociedad, dada la pérdida constante de legitimidad que sufren entre la población.

Se reconoce el logro de metas macroeconómicas, con la particularidad del peso que tienen las remesas familiares en la estabilidad lograda. Pero paralelamente a estos logros, hay déficit sociales fundamentales. Las políticas neoliberales no han cedido, a pesar de que ni siquiera han alcanzado los logros económicos pretendidos explícitamente por dichas políticas. El efecto generalizado es que continúa sin superarse el problema estratégico de la debilidad de los Estados.

La preponderancia de las políticas que privilegian el mercado ha llevado a que éste “secuestre a la democracia”, como lo manifestó uno de los entrevistados en Panamá, ya que las fuerzas del mercado han avanzado hacia la mercantilización de la totalidad de la vida social, de hombres y mujeres y de la propia naturaleza.

Las inconformidades sociales que produce la situación prevaleciente han sido enfrentadas por la vía de la represión abierta o encubierta, particularmente impulsando una estrategia de criminalización y, cuando es posible, de judicialización de la protesta social. Entendemos por criminalización el intento por tipificar como delitos las diversas formas de

protesta social, recurriendo para el efecto tanto al uso de la fuerza pública como a la acción jurídica ante los órganos jurisdiccionales para lograr la legalización de la represión de las organizaciones inconformes y de sus acciones.

A nivel socio político, esta estrategia de criminalización de la protesta social argumenta elementos que responden a una concepción de gobernabilidad que la reduce a la capacidad del Estado para implementar sus políticas sin oposiciones que las inviabilicen.

También es común en la región, un cierto grado de rebalse de las capacidades del crimen organizado que no puede ser enfrentado por la debilitada institucionalidad del Estado. En correspondencia con esta realidad, se ha incrementado la inseguridad ciudadana hasta el punto de convertirse en una de las principales demandas ciudadanas.

De igual manera, se manifiesta en la región un proceso de polarización social que tiene cada vez más una expresión en la arena política, a lo cual denominamos “politización de la polarización social”, entendida como una creciente (aunque con desiguales desarrollos en los distintos países) toma de conciencia de los actores sociales sobre la necesidad de transitar de la protesta a la lucha por el poder, con diferentes estrategias y formas de lucha, no reduciéndolas a la participación político partidaria.

Sin embargo, hay una lamentable dispersión muy significativa de los actores sociales y políticos, en correspondencia con la incapacidad de formular una agenda de consenso que responda a la realidad estructural de los respectivos países y de la región. Hay una relación entre estas debilidades de los actores y agendas diferentes o sin formular, visiones estratégicas distintas y tácticas no compartidas

Especial mención requiere la situación de Costa Rica, porque es la excepción regional, en términos de la convergencia que se ha logrado producir en torno a la lucha contra el TLC, lo cual es tremendamente significativo, no solo en términos cuantitativos, sino que fundamentalmente cualitativos, por el tipo de reivindicaciones que en esta lucha están implícitos (el modelo de desarrollo que prevalecerá en los próximos años). Pese a esa cualidad, la debilidad estaría en que no hay propuesta alternativa, más que la defensa de lo que las políticas neoliberales pretenden terminar de desarticular en este país.

2. LAS MOVILIZACIONES SOCIALES

2.1. LAS MOVILIZACIONES SOCIALES NACIONALES, SUS INNOVACIONES

En **México**, en el 2006, hubo emergencia de movimientos sociales y ciudadanos que desarrollaron propuestas, proyectos y esquemas novedosos de participación social, los cuales irrumpieron en el escenario público nacional (Atenco,

La Otra Campaña, la Convención Nacional Democrática, APPO). Hay nuevos protagonismos, así como vitalidad de los movimientos locales y regionales en todo el país, pero aun carecen de un hilo conducto que los una. Hay ausencia de unidad estratégica.

Las relaciones entre los movimientos sociales y los partidos políticos (cuando existen) son tensas y conflictivas, pero hay un incipiente reencuentro. Se les critica a los partidos la priorización de sus intereses particulares, de grupo. Las alianzas con las ONGs suelen ser desde una perspectiva de aporte técnico, pero se está avanzando hacia una visión como sujetos.

En México estamos ante un repunte de los movimientos sociales, de rearticulación de diferentes fuerzas sociales y políticas, que es incipiente, pero ágil. Lo novedoso de este proceso es la confluencia de diversos actores que tienen y mantienen plataformas, modos de lucha y de accionar diferentes, pero que se vinculan. Ejemplo: lucha contra hidroeléctricas, en la cual convergen organizaciones de diversa naturaleza. Están presentes temas novedosos, como por ejemplo, gestión democrática del agua y cambio climático (ambiente en general) y luchas contra los megaproyectos.

Hay, en estos movimientos sociales, una horizontalidad, son movimientos de bases, existiendo un tejido de actores con iniciativa y visión propia de la política, donde concurren una variedad de representaciones de luchas locales y regionales. Suelen estar Integrados por organizaciones sociales de izquierda que no participan en partidos políticos, ni en procesos electorales. Pero también ha habido un movimiento social de resistencia pacífica al fraude electoral.

Los movimientos sociales construyen formatos diferentes de diálogo y negociación.

Existen en las luchas sociales nuevos actores, tales como jóvenes, mujeres, colonos, organizaciones de vecinos (principalmente de zonas marginadas), ciudadanos independientes, pueblos indígenas, organizaciones que tienen reivindicaciones particulares.

A pesar de las diferencias entre los movimientos sociales y los partidos políticos, se está dando una vinculación de demandas y de actores, alianza que potencializa las reivindicaciones históricas y los sujetos sociales y políticos. Las nuevas expresiones de los movimientos sociales toman necesidades particulares de los sujetos (mujeres, jóvenes, habitantes de colonias marginales, preferencia sexual), así como identidades étnicas y culturales. Hay una profunda discusión sobre su identidad organizativa y el tipo de relación con los partidos y con el Estado. Una característica importante es la masiva participación en marchas.

Es particularmente significativa la importancia que han tenido las articulaciones territoriales en la conformación de protestas sociales y la construcción de movimientos sociales.

En **Guatemala**, los sectores sociales evidencian una sectorización en sus luchas, aunque en su discurso suelen mantener

una coincidencia relativa a la lucha contra el sistema. Esta visión parcelada de las luchas sociales ha sido alimentada desde la cooperación internacional, ya que ella persiste en sus esfuerzos por priorizar y apoyar la construcción de agendas sectarias (sectorialmente formuladas e impulsadas).

Los entrevistados reconocen que hay un déficit de capacidad organizativa y movilizadora de los sectores medios que es perjudicial, ya que dichos sectores expresan posiciones de rechazo hacia los movimientos sociales, posición que es alimentada desde el discurso mediático.

Las principales movilizaciones que se han dado han sido alrededor de los temas de la salud, la educación y las luchas rurales, principalmente campesinas y comunitarias (tierra, contra la represión, contra la minería a cielo abierto). En el caso de las dos primeras, aunque hubo un sustrato importante de reivindicaciones salariales, el planteamiento político fue mucho más amplio, en términos de cobertura y calidad de la educación y la salud para la población.

Hay un cierto contingente del movimiento popular que expresa un rechazo a la participación político-electoral porque no ha tenido una buena relación con los Partidos Políticos (PP) y ha habido desencuentros con los PP de izquierda.

Es deseable, y se ha logrado en cierta medida, romper con esa visión de subordinar al movimiento popular al partido y de querer tener una estructura vertical hacia los movimientos sociales.

Las alianzas no han avanzado y más bien se han desdibujado o descartado. Ni las alianzas de derecha ni de izquierda avanzaron o se concretaron en 2006. La posibilidad de que se defina una alternativa popular y revolucionaria corre el riesgo de quedarse estancada indefinidamente. El resultado de los desencuentros entre las izquierdas es una permanente resta de fuerzas que bien podrían incorporarse a las luchas sociales. No se ha logrado encontrar la piedra angular que permita el equilibrio de fuerzas o la unidad de criterios dentro de la amplitud de los pensamientos de izquierda.

También ha habido involucramientos individuales de conocidas personalidades democráticas de algunos en partidos de derecha, con la idea de incidir desde adentro, pero han sucumbido en este intento.

En lo referente a aspectos organizativos, el esfuerzo más significativo en este período fue la constitución del MICSP (Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular), como un espacio articulador, donde, según uno de los entrevistados “Se logró consensuar tres áreas prioritarias, el área de desarrollo rural y acceso a tierra, el área vinculada con política fiscal y presupuestaria y el área de política laboral”. Sin embargo, el MICSP se estancó en el año 2006 y prácticamente llegó a desarticularse.

En general, no ha habido capacidad de incorporar nuevos sectores a las luchas sociales, siendo lo novedoso las luchas comunitarias por reivindicaciones muy concretas que los afectan directamente (minería, agua,...).

Los resultados de los esfuerzos de convergencia han sido únicamente unidades de acción, coyuntural y que corresponden a una práctica de resistencia, pero no se logra consolidar un polo social único con una visión de transformación. No existe una agenda común de lucha.

Otro esfuerzo importante para articular una agenda programática del pueblo maya, en el cual participan varias comunidades y organizaciones indígenas es el denominado “Proyecto E por una agenda nacional del pueblo maya”, aunque aún es muy poco conocido.

En **El Salvador**, las entrevistas expresan que “Las principales movilizaciones han sido: contra la explotación minera, la construcción de represas y contra la longitudinal del norte, por el agua, las celebraciones del 1 de Mayo, por la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, por el aumento del salario, la celebración del día del y la sindicalista salvadoreña, los lisiados de guerra”. Las reformas democráticas electorales también han sido un espacio de lucha. En él se registran fuertes tensiones, por las contrarreformas que buscan realizar los partidos tradicionales. Y en relación a los temas con capacidad movilizadora, las entrevistas expresan que “Los factores identificados como posibles movilizadores son: libertad de asociación y acción, lucha por la seguridad ciudadana y la paz, la democracia, el agua y por la mejora de la calidad de vida”.

Es importante subrayar que las organizaciones sociales salvadoreñas tienen el denominador común, de acuerdo a su discurso, de estar en contra de las políticas neoliberales. También coinciden en que “El punto fundamental es modificar, cambiar el régimen político y éste es el principal reto que tienen las principales fuerzas políticas, sociales y económicas coincidentes”. Sin embargo, la realidad lo que presenta es un movimiento social fragmentado.

Los grandes medios generan una imagen negativa de las organizaciones sociales y de sus luchas.

Las organizaciones sociales tienen una aspiración de autonomía frente a los partidos políticos (de izquierda). Existen nuevos actores alrededor de nuevas reivindicaciones, tales como el agua, la explotación minera, la defensa del medio ambiente, la salud, el consumo, los negocios informales y la “piratería”. Está emergiendo un movimiento social de los trabajadores informales.

Los ONGs como actores sociales son importantes, pero tienden a sustituir el rol que corresponde a otros, principalmente al Estado y a los partidos.

El movimiento social actual no tiene proyecto estratégico (contrario a lo que sucedió en los años anteriores, durante el conflicto), aunque “hay alianzas, a veces coyunturales y a veces más permanentes que, sin duda, contribuyen a una lógica de defensa de los derechos sociales desde la diversidad de actores de la sociedad civil”. Se considera que “Las alianzas

locales pueden generar alianzas más perdurables a escala nacional e internacional”. De igual manera, se considera que las alianzas con los partidos políticos deben buscarse y concretarse, pero con aquellos realmente comprometidos con el cambio, para darle fuerza política a las iniciativas. Esta opinión es adversada por quienes se esfuerzan por no darle connotación partidaria a sus iniciativas.

Falta, o al menos por ahora no se identifica, liderazgo político creíble, capaz de convocar y cohesionar un amplio movimiento de actores diversos en contra de la conducta neoliberal, represiva y, por lo tanto, antipopular y antidemocrática de los gobiernos de ARENA. Lo que resulta evidente es que las movilizaciones nacionales que más amplitud e involucramiento de personas tienen son las que poseen una base gremial-económica. La cooperación internacional es bastante influyente en el tipo de organizaciones que se impulse y ha contribuido a apartar a los movimientos sociales de los partidos, pues ella impulsa el criterio de la separación entre ambos.

Los actores sociales relevantes tienen amplias relaciones internacionales.

En **Honduras**, las movilizaciones nacionales que más amplitud e involucramiento de personas tienen son las que se basan en reivindicaciones económicas de tipo gremial. Este es el tipo de movilizaciones que prevalece en las acciones de las organizaciones sociales. Las organizaciones gremiales relevantes, en términos de capacidad de movilización, tienen una cobertura geográfica nacional y recursos propios. Las luchas sociales que antes tuvieron como protagonistas a los sindicatos obreros agrícolas e industriales, a partir de los años noventa tienen como actores a trabajadores de los servicios que se califican como trabajadores inmateriales (educación, servicio de salud), con diversidad de características socioeconómicas a su interior. Es decir que, sin ser una clase social en el sentido clásico, su lucha y resistencia los unifica en lo común que tienen, que es la prestación de servicios profesionales que se rigen por un Estatuto.

Una dificultad para los movimientos sociales relacionados con la prestación de servicios de salud y educación es que sus acciones reivindicativas, aunque son ante el Estado, en la práctica afectan a los sectores mayoritarios, pobres, que son los usuarios de dichos servicios públicos.

Durante el año 2006, el uso y explotación inadecuada y no sostenible de los recursos naturales concesionados fue también fuente de movilizaciones que involucraron no solo a los perjudicados directamente sino que también a la Iglesia Católica, pasando a tener una importancia regional y nacional, no sólo local.

También se incluyen entre los actores sociales con nuevos y protagónicos roles a las étnias (en las cuales hay un rescate de la lucha por la tierra), las mujeres (luchas de equidad y de representatividad en los órganos de gobierno), los

trabajadores y propietarios del sistema de transporte público (contra el control monopólico de los combustibles y la manipulación de los precios), y las comunidades rurales (defensa de los recursos naturales de la explotación no sostenible, en especial en las zonas forestales y en las áreas donde se explota la minería).

Estos actores, en sus roles más beligerantes “... han tomado también como frente de lucha la ampliación de la democracia, como forma de gobierno, en donde se abra a la participación y la descentralización del poder; y la equidad, principalmente en una sociedad con una carga de pobres en donde la vivencia de lo democrático es paradójica con la desigualdad en la distribución de los frutos del progreso.”.

Hay, entre las organizaciones sociales la convicción de que sin movilizaciones que presionen al Estado, sus reivindicaciones no son consideradas.

El ámbito de convergencias de los movimientos sociales son las reivindicaciones por la democratización política y social. Se reconoce que las alianzas son cruciales para todos, pero hay desconfianza hacia lo tradicional y hacia el sectarismo. Hay planes de movilización conjunta por sectores, pero todavía falta un espacio de discusión de lo común en medio de la diversidad de intereses prevalecientes en los movimientos sociales.

A nivel de lo democrático procedimental, se plantea la debilidad de una cultura democrática, que está ausente en el país, lo cual se expresa en las mismas organizaciones y sus bases.

Es evidente la necesidad de construir una fuerza política para la transformación, pero lamentablemente se deja ver la ausencia de liderazgo nacional para organizar lo común.

La construcción de redes en Honduras siempre ha funcionado mejor a nivel de lo político que a nivel de lo social y gremial. Las ideologías, más que los intereses concretos, parecen ser lo que más rápidamente se comparten. Sin embargo, a nivel de la construcción de una fuerza política para la transformación se deja ver la ausencia de liderazgo nacional para organizarlo.

En **Nicaragua**, las acciones de las organizaciones entrevistadas se han enfocado en la movilización social alrededor de los siguientes temas: contra la privatización del agua, exigencia de servicio eléctrico continuo, mayor presupuesto para educación y salud, en pro y en contra del aborto terapéutico, contra el “pacto”; la incidencia política a nivel local, regional y nacional (apertura de espacios políticos y participación ciudadana, aprobación de determinadas leyes); campañas de comunicación (para posicionar temas como financiamiento a los partidos políticos, derechos sexuales y reproductivos de la mujer, derechos de la niñez y la adolescencia, importancia de invertir en la educación y la salud); y generación de información para la toma de decisiones en las temáticas de la democracia y la gobernabilidad (desem-

peño de las instituciones, financiamiento de los partidos y participación ciudadana).

Las movilizaciones sociales demandaron básicamente el acceso a servicios básicos y el efectivo ejercicio de los derechos humanos y políticos.

En términos más específicos, las principales movilizaciones fueron: el “Movimiento por Nicaragua”, que impulsó marchas en contra de los acuerdos entre los partidos mayoritarios (el “pacto”) relacionado con la partidización de los poderes del Estado, contra la penalización del aborto terapéutico, cuestionamiento de la “calidad del crecimiento económico”, mayores recursos para la descentralización, la alianza “Ciudadanos por la Transparencia (relativa a transparentar los recursos utilizados en la política), por el presupuesto para la Universidad Nacional, por el presupuesto para Educación, la “Red de Defensa del Consumidor”, por la crisis del transporte urbano colectivo, por reclamar indemnizaciones a las empresas transnacionales y atención médica al Estado (esto en Leon y Chinandega).

Pese a las experiencias referidas, no hay aun un plan de movilizaciones conjuntas y una agenda compartida entre ONGs y movimientos sociales. Todas las entrevistas señalaron que las alianzas han sido establecidas sobre temas puntuales y de forma esporádica. Sin embargo, las organizaciones sociales están conformando redes y consorcios y han podido definir misiones y visiones compartidas, alrededor de temas puntuales. Esto es resultado, en alguna medida, de las presiones de la cooperación internacional y el contexto político institucional interno.

Por su parte, las ONGs para sostener sus acciones recurren principalmente al apoyo de la cooperación internacional.

Se considera que los principales temas movilizadores podrían girar en torno a lo siguiente:

- Lucha por la equidad y la reducción de la pobreza,
- Mayor apertura del sistema político para desarrollar un diálogo entre los poderes del Estado y la Ciudadanía,
- Fortalecimiento de los mecanismos de la participación ciudadana.

En términos sintéticos, los temas que hasta ahora han producido mayores resultados para construir redes entre las organizaciones de la sociedad civil son: la descentralización, la participación ciudadana y la transparencia.

En la búsqueda de la formulación de una agenda y estrategia común no se puede dejar de considerar que la fragmentación de los actores sociales y los enormes niveles de pobreza hacen compleja la posibilidad de encontrarlas. La sociedad civil, como ya se dijo, es reactiva, no proactiva. No hay discusión a profundidad de los temas. Los diálogos son intermitentes y expresan competencias y protagonismos entre actores. Uno de los aspectos que se señala como causa de las divisiones en los movimientos sociales es de naturaleza ideológica (diferentes perspectivas del mundo y del cambio social).

Las Organizaciones y Movimientos están conscientes del diagnóstico de su situación actual y están demarcando estrategias para enfrentar los desafíos existentes. Entre las estrategias está la creación de plataformas de diálogo interinstitucional y la construcción de redes de acción alrededor de determinados temas. Esto parece ser prometedor.

Los liderazgos existentes están centrados en personas que se han enquistado en algunas organizaciones y movimientos.

Con relación a los partidos políticos, se señala que éstos son poco receptivos ante los procesos de comunicación y diálogo sobre temas claves para el país, debido a la falta de discusión que ellos mismos tienen a lo interno sobre aspectos como desarrollo y democracia.

En **Costa Rica**, han surgido elementos innovadores en el tema de las movilizaciones. Emergen nuevos actores sociales que no están nucleados alrededor de la lucha de clases, sino que de reivindicaciones más transversales a toda la sociedad (espacio urbano, ecología, mujeres, etc.). Algunos de estos sectores luchan por legitimar nuevas identidades, nuevas formas de ser, relacionarse y vivir. En otras palabras, surgen y se manifiestan nuevos intereses que no son necesariamente intereses clasistas.

Uno de esos actores que es importante destacar es el movimiento comunal, que ha desarrollado luchas relacionadas con vivienda, equipamiento para salud, agua potable, transporte público, concesiones de transporte y seguridad ciudadana.

El agua potable y la protección del recurso hídrico se ha convertido en un tema movilizador de organizaciones comunales, de pequeñas organizaciones ecologistas y de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, que buscan proteger el recurso ante la explotación de transnacionales del turismo y de embotelladoras de bebidas.

Por su parte, los indígenas ticos siguen luchando por su autonomía cultural y política y por el desarrollo social de sus comunidades, a través de la organización local y la incidencia política nacional.

Las organizaciones de pequeños y medianos productores impulsan alternativas de producción y cambios en las políticas públicas para favorecer el sector y proteger la producción nacional. En este sentido es de destacar al movimiento orgánico y sus logros en la legislación nacional.

El movimiento de mujeres y el movimiento feminista siguen obteniendo logros en la aprobación de leyes que protegen la vida, integridad y derechos de las mujeres.

Se advierte además, un resurgimiento del movimiento estudiantil en las universidades públicas y colegios de secundaria.

Existe también un conjunto de organizaciones articuladas alrededor del tema de la inmigración y los derechos de los migrantes y, de la misma manera, otro sector nucleado alrededor de VIH SIDA y los derechos de minorías relacionados con el tema de la preferencia sexual.

Sin embargo, pese a esta irrupción de nuevos actores, es importante señalar que los sindicatos del sector público siguen teniendo un papel importante en la lucha por mantener condiciones laborales, salariales y sociales favorables para la clase media y trabajadora del país y por defender el estado social de derecho.

En relación a las diversas formas de lucha, las tradicionales basadas en la demanda y la confrontación comienzan a combinarse con otras, a partir de nuevas concepciones del Estado, por la nueva realidad política de América Latina y las nuevas características de los movimientos.

Se conforman nuevas estrategias de lucha para generar cambios y lograr reivindicaciones socio económicas y políticas. Se genera un viraje en la participación social y se operacionalizan estrategias, tratando de sacarle el máximo provecho a las condiciones que brinda la democracia liberal. Ya no se privilegia la toma y la transformación del poder, sino que se utilizan formas institucionalizadas para influir en los que toman las decisiones, buscando sobre todo, incidir en la definición de las políticas públicas.

Negociación, incidencia y generación de consensos se convierten en elementos que devienen centrales en este nuevo contexto.

Pero lo más trascendental e innovador en las movilizaciones sociales costarricenses es, como ya se ha referido, la amplia e inusitada convergencia que en términos de agenda, actores y mecanismos de relacionamiento se produjeron alrededor de la oposición al TLC con Estados Unidos.

Sin embargo, aunque existe un proceso de unidad nacional entre el movimiento social costarricense, aún se mantienen una serie de contradicciones y diferencias que le restan poder, sobre todo porque algunas de las organizaciones que confluyen en esta unidad no cuentan, ni se han propuesto, la generación de un proyecto de país.

En **Panamá**, el esfuerzo más significativo en términos organizativos para la movilización y articulación de los movimientos sociales es el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESOS) (2003), el cual ha demostrado capacidad propositiva frente a las políticas económicas y los problemas sociales. Es, sin duda, socialmente respetado. El FRENADESOS ha demostrado incidencia en las políticas públicas y algunos sectores lo ven como una alternativa social.

También es significativo el papel que ha jugado la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, de la que es parte el Sindicato Único Nacional de Trabajadores

de la Construcción y Similares, que es el más grande del país.

Los temas que en este país han provocado mayor movilización son: Seguridad Social y Ampliación del Canal.

En opinión de algunos de los entrevistados, los supuestos espacios de diálogo para llegar a consensos que ha impulsado el gobierno reúnen a personas que no son representativas, donde el gobierno ejerce proceso de cooptación entre los participantes. Estos escenarios son utilizados por el ejecutivo para “apagar fuegos, sembrar falsas ilusiones y enfriar las luchas sociales”. Por consiguiente, el tema de la formulación de decisiones por consenso, en lugar de ser un mecanismo democrático, se ha convertido en un freno a la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que demandan los pueblos.

No se percibe una articulación y construcción de agenda entre ONGs y movimientos sociales.

Las principales movilizaciones giraron alrededor de tres ejes: lucha nacional en torno al referéndum para la ampliación del Canal; luchas gremiales y jubilados por reivindicaciones salariales, ajuste de pensiones y condiciones de trabajo; y problemas ambientales.

Sin embargo, sigue prevaleciendo la desarticulación organizativa de la sociedad civil, el bajo nivel de convocatoria y la falta de liderazgo. Muchos de los esfuerzos de articulación social se gestan en medio de luchas reivindicativas coyunturales, que desaparecen una vez alcanzada o fracasada la reivindicación.

Las razones que explican el debilitamiento de las organizaciones sociales se pueden resumir en las siguientes: el proceso de cooptación de la dirigencia durante la dictadura militar; la burocratización de ciertas organizaciones; la ausencia de renovación de cuadros a través de los procesos de organización y capacitación; las restricciones legales para la conformación de nuevas organizaciones; y las medidas de política económica neoliberal que a través de la flexibilización laboral debilitan las estructuras sindicales.

En correspondencia con ese debilitamiento, no hay una visión de largo alcance en las organizaciones sociales que pudiera permitir articular un programa de igual temporalidad que recoja las aspiraciones de los más diversos sectores de la sociedad.

Se considera, que en las actuales condiciones nacionales, los siguientes podrían ser los temas con mayores posibilidades de convocar movilización:

- La reforma de la justicia y la independencia del poder judicial.
- El problema de la corrupción y la impunidad
- Las políticas económicas neoliberales, la globalización, los tratados de libre comercio.
- La lucha para realmente frenar el avance de la epidemia del VIH/SIDA.

- La educación, la salud y la seguridad social.
- La ampliación del Canal de Panamá.
- La defensa de los recursos naturales y el ambiente, centrados fundamentalmente contra los proyectos mineros, hidroeléctricos, la caza de ballenas y delfines, etc.
- Las reivindicaciones sociales y laborales
- El aumento de las tarifas de los servicios básicos (luz, teléfono, agua, aseo).
- La lucha por que se haga justicia en el caso de los más de 400 panameños fallecidos y población afectada con los medicamentos envenenados con dietilenglycol que entregarán las autoridades de salud del país (MINSA y CSS).

Un tema que podría movilizar, si no fuera aún tabú en el país, es el de la homosexualidad, el lesbianismo e, inmerso en ellos, el grave problema del VIH/SIDA.

Por último, en lo que se refiere a la alianza con los partidos políticos, ésta parece distante, porque no hay partidos comprometidos con el cambio. Hay en los movimientos sociales un debate donde se enfrentan dos visiones: entrar en la configuración de los partidos políticos versus cambiar las reglas del juego que discriminan la participación.

2.2. LOS ELEMENTOS COMUNES EN LA SUB REGIÓN SOBRE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES Y SUS INNOVACIONES

En este tema, las situaciones nacionales se aprecian con bastantes diferencias. Sin embargo, pueden plantearse algunos elementos comunes que pueden ser bastante coincidentes o bien en perspectiva de convenir.

Un primer elemento trascendental es el referente a los actores que han irrumpido en el escenario nacional y a sus reivindicaciones. Los protagonistas tradicionales, vinculados a las contradicciones estructurales propias del sistema, es decir a definiciones clasistas, se han debilitado. Hay actores que han asumido nuevos roles protagónicos, convirtiéndose en sujetos sociales, los cuales están relacionados con actividades que algunos han denominado “inmateriales” (educación, salud, ...) o bien a reivindicaciones que convocan a actores con diversas identidades (recursos naturales, por ejemplo, especialmente el caso del agua y la minería).

Una dificultad no resuelta para los movimientos sociales de los sectores de educación y salud es que sus acciones, aunque son de cara al Estado, en la práctica perjudican directamente a los usuarios de dichos servicios, que son los pobres. Esto afecta su legitimidad ante la población y la posibilidad de construir alianzas populares.

En el tema de actores, y en correspondencia con las múltiples

identidades que algunas reivindicaciones pueden convocar, es importante resaltar las luchas locales y comunitarias. De igual manera, se ha acentuado una valoración positiva sobre la horizontalidad de la organización social.

Es relevante la fuerza que ha mostrado la articulación territorial de diversos sujetos sociales y políticos que construyen agendas coyunturales capaces de hacerlos converger e incidir. El elemento territorial se ha convertido en un espacio de construcción y articulación de luchas y movimientos sociales beligerantes e incidentes.

Sin embargo, en general, hay una lamentable situación de dispersión de los movimientos sociales, aunque se han dado importantes convergencias alrededor de temas coyunturales, manifestando así una actitud reactiva. Estas convergencias han impactado, pero la ausencia de agendas más integradoras, de largo plazo, que rebasen las visiones sectoriales o específicas, es una gran limitación. Esta realidad es contradictoria con un discurso anti neoliberal e, inclusive anti sistema, que suele expresarse en las organizaciones sociales. Los procesos de diálogo entre las organizaciones sociales tienden a estar afectados negativamente por las luchas de protagonismos.

Es importante subrayar que la proliferación de organizaciones, aunque pueda ser significativa, no resuelve por sí misma la calidad de las movilizaciones, en términos de agenda, actores, sostenibilidad de las luchas, visiones compartidas y perspectiva estratégica de las mismas.

También es relevante señalar la influencia que ha logrado la cooperación internacional en los movimientos sociales, así como el rol de las ONGs que tiende a confundirse tanto con el correspondiente a los partidos como al Estado.

Es generalizada la brecha entre los partidos y los movimientos sociales, pero hay indicios en algunos casos y avances significativos en otros, que apuntan a un reencuentro, siempre que se flexibilice el sistema político y se supere el monopolio de participación que tienen los partidos. Esto sin menoscabo de los animadversiones que se manifiestan en muchos movimientos sociales respecto de las prácticas de los partidos (no democráticas, clientelistas, sectarias, etc.). Es evidente el avance en la aspiración de su “autonomía” que tienen las organizaciones sociales respecto de los partidos (particularmente de cara a los partidos de izquierda, por las prácticas del pasado).

La relación movimientos sociales/partidos políticos es especialmente polémica. Se confronta el planteamiento de cuidar cualquier tinte partidario en los movimientos sociales con la necesidad de darle fuerza y proyección política a las luchas sociales.

Teóricamente, las dirigencias sociales asumen la necesidad de formular agendas que los unifiquen con perspectiva de largo plazo, así como la necesidad de trascender la lucha de resistencia, vinculándola a reivindicaciones más estratégicas, que se han denominado luchas de transformación. La diferencia es que estas últimas sostienen un proyecto político,

mientras que las primeras sólo resisten decisiones del poder que son adversas a sus intereses y su proyecto.

En tal sentido, empiezan a manifestarse, con diferente nivel de trascendencia, las luchas por reivindicaciones políticas de orden democrático.

Las formas de lucha que se expresan son diversas y, aunque subsiste el debate respecto de la visión estratégica que debe inspirarlas, en la práctica persiguen influir en las políticas públicas de manera más concreta.

De igual forma, aunque hay conciencia sobre la necesidad de la argumentación, persuasión y negociación en el proceso de definición de las políticas públicas, también es evidente la necesidad de la movilización que presione las decisiones finales del Estado en general y del gobierno en particular.

Diferentes gobiernos en la región se han esforzado por criminalizar y judicializar las luchas sociales, de tal manera que se legitime la respuesta represiva. Los grandes medios orquestan esta estrategia de desprestigio y deslegitimación de los movimientos sociales y, además, imponen en gran medida su agenda mediática en el debate y definición de las políticas públicas.

3. LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

3.1. A NIVELES NACIONALES

En **México**, estamos en una nueva etapa de construcción social y política de los movimientos sociales. Se trata de construir agendas comunes, demandas estratégicas, incidencia política. Construir desde la diversidad, sin protagonismos ideológicos ni políticos.

Construir desde la diversidad implica respetarse, colocar lo prioritario por encima de cualquier diferencia política o ideológica, dejar protagonismos ideológicos y políticos, ponerse de acuerdo en lo sustancial de las demandas estratégicas para que sea posible una mayor incidencia política. Superar el corporativismo, la idea de la “vanguardia” del proceso, las desconfianzas y las viejas diferencias acumuladas. “El movimiento es de bases, no de líderes”.

Es necesario encontrar las formas de organización que se ajusten mejor a la dinámica de los procesos sociales, porque ello permite mantener la unidad dentro de la diversidad.

También hace falta mayor claridad en las alianzas, en términos estratégicos (proyecto común) y tácticos, para poder aprovechar todas las posibilidades de acumulación de fuerzas, pero sin terminar neutralizados.

Se considera que los movimientos sociales pueden tener las siguientes opciones:

1. Incorporarse a las instituciones o a la institucionalidad democrática en el país y desde ahí luchar por los cambios políticos (CND).
2. Estar fuera de la dinámica institucional, pero dentro de la lógica del sistema (APPO).
3. Generar, mediante las luchas sociales, poder popular o un contrapoder que permita generar acciones antisistémicas y anti capitalistas (La Otra Campaña).

Un criterio que puede contribuir a definir estas opciones es recurrir a lo que hemos denominado las luchas de resistencia y las de transformación, entendiendo que entre ellas puede haber una relación de complementariedad.

Al analizar los avances e innovaciones de los movimientos sociales, a juicio de uno de los entrevistados “El principal logro ha sido alcanzar la unidad programática y orgánica entre ONGs, sindicatos y organizaciones campesinas en torno a la promoción de reformas...”

Este logro es correspondiente con uno de los principales objetivos que se han propuesto los movimientos sociales en México: “...alcanzar la unidad programática y orgánica entre los diferentes actores sociales que lo integran: organizaciones sociales y civiles, sindicatos y organizaciones campesinas, movimientos sociales y de ciudadanos independientes, partidos políticos de izquierda y movimientos políticos opositores...”

Se trata, en este rumbo, de vincular no sólo las demandas, sino que también los actores sociales y políticos, entendiendo que puede haber diferentes identidades en un mismo sujeto, así como sujetos diversos (y hasta divergentes) que convergen en una misma identidad.

En esta etapa, se considera que los siguientes temas pueden constituirse en factores de movilización:

1. Reformas estructurales (económicas, políticas y jurídicas del Estado).
2. Contra la impunidad y el autoritarismo, por la defensa de los derechos humanos. En general el tema de los derechos.
3. Tema indígena y defensa de la autonomía municipal.
4. La democracia: la participación ciudadana, ejercicio democrático de gobierno.
5. Enfrentar el poder mediático que suele ser adverso a los movimientos sociales, creando opinión pública contraria a ellos, para lo cual es necesario promover la información alternativa.

En **Guatemala**, uno de los principales retos es superar la gran dispersión que existe en los movimientos sociales, así como su escasa capacidad de convocatoria y movilización.

También se enfrenta el reto de cómo incorporar a nuevos actores a las luchas sociales, particularmente a las capas

medias que actualmente son manipuladas por la opinión mediática en contra de los movimientos sociales.

Pareciera que el reto es “ser capaces de volver a la agenda nacional alimentada y nutrida por agendas sectoriales, pero donde la prioridad sean los temas nacionales y no la agenda del sector”. Se trata de cómo incorporar nuevos actores a la lucha social, cómo impulsar prácticas novedosas para promover el cambio social, ya que la resistencia no alcanza para avanzar hacia el logro de cambios estratégicos.

En síntesis, pareciera que el esfuerzo prioritario a realizar giraría en torno a dos cuestiones fundamentales:

1. Estructurar mas el movimiento social y popular, así como incorporar capas medias;
2. Estructurar un movimiento político-electoral fuerte, capaz de disputar el poder por medios electorales y revertir la situación del país. Esto pasa por una REFORMA CONSTITUCIONAL, lo cual requeriría de una expresión político electoral fuerte desde las izquierdas sociales y políticas.

En **El Salvador**, el país pareciera enredado en una lógica de lucha del pasado en lo referente a las movilizaciones sociales. Hay necesidad de desarrollar una verdadera movilización social, con nuevas formas de protesta, que no permitan que los sectores conservadores las presenten como desordenes o, incluso, terrorismo.

El problema central actual es que el movimiento social y popular no tiene un proyecto estratégico. Se trata de superar la situación prevaleciente, donde si bien ha habido movilizaciones, no existe una clara bandera de lucha que unifique a los sectores, a pesar de que la gente y sus organizaciones sociales y políticas aspiran a transformar la situación nacional.

Es importante analizar cuáles son los temas que pueden convocar alianzas más perdurables, tanto a escala nacional como internacional, uno de los cuales puede ser la lucha contra la minería.

Para la construcción de una agenda compartida, la pregunta es ¿quién debe convocar para elaborarla? Esto parece que genera desconfianzas en diferentes actores. La desconfianza es terrible, por eso se sugiere que los convocantes tendrían que ser ciertas ONGs que gocen de credibilidad en la región. También se piensa que debería partirse de un diagnóstico elaborado de manera cerrada para luego ser puesto a una discusión abierta. Ya existen ciertos espacios para impulsar un proceso de esta naturaleza.

Debe tomarse conciencia que el problema es que la agenda que suele discutirse es social y económica, pero para producir un cambios social/institucional también debe ser política, en la cual los partidos políticos no deberían ser ignorados.

En **Honduras**, los retos que vislumbran los entrevistados van desde la creación y fortalecimiento de alternativas políticas nacionales con programas centrados en la participación política amplia y transparente, hasta la generación de reformas que quiebren el monopolio político que existe a nivel del poder local.

A nivel de lo democrático procedimental se considera que no habiendo una cultura democrática en el país, deben fortalecerse las prácticas democráticas a partir de las organizaciones de base.

Es decir que el reto es superar la desconexión entre democracia y desarrollo, construyendo una cultura democrática desde la base.

Persiste la necesidad de construir una fuerza política para la transformación, para lo cual es indispensable el surgimiento de un liderazgo nacional, hasta ahora ausente, que tenga la capacidad de organizar lo común.

En **Nicaragua**, al nivel más general, los retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil se manifiestan alrededor de dos espacios que contienen los problemas centrales:

El espacio político – institucional: aquí tiene importancia el rescate de la legitimidad en la ejecución de las instituciones, vinculándola al marco de legalidad y no de los intereses personales de líderes políticos. O sea que la legitimidad está referida a la necesidad de fortalecer la democracia participativa como medio para la inclusión de las personas en la toma de decisiones.

El espacio de la equidad y justicia social: implica un mayor y mejor acceso a servicios y condiciones básicas para su desarrollo humano, tales como empleo, educación y salud, atendiendo a los grupos históricamente excluidos, como lo son las mujeres, grupos étnicos y rurales.

También se enfrentan los movimientos sociales a la necesidad de reducir el estilo de liderazgo centrado en las personas, al cual ya hemos hecho referencia.

Un desafío importante es que a pesar de la riqueza organizacional de Nicaragua, la desarticulación temática y el establecimiento de nudos impiden desenvolver acciones sostenidas y acciones políticas estratégicas para fortalecer el cambio social. Nicaragua es uno de los países mas organizados, con una enorme diversidad. Esta diversidad por si misma no es un problema, sino que la dificultad radica en que hay muchas visiones distintas, las cuales nunca se han discutido entre la misma sociedad civil. Y es que, si bien el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales aliadas ha posicionado algunos temas referidos a los derechos humanos, la defensa de necesidades básicas y la participación como aspectos claves para el desarrollo,

se percibe también que hay muchas tareas pendientes por delante, siendo la inicial y central la articulación de los esfuerzos que actualmente se realizan.

Entre los principales retos para mejorar la acción conjunta entre ONGs, y Movimientos Sociales están: fortalecer el diálogo para no tratar solo temas puntuales; mayor reflexión sobre las luchas propias, sociales, y no en función de líneas partidarias; y fortalecer su acción y beligerancia. También es fundamental trascender el “activismo” en la relación ONGs/movimientos sociales y establecer un enfoque más estratégico.

En **Costa Rica**, como ya se adelantó, hay una irrupción de nuevos actores sociales con reivindicaciones más transversales que clasistas, los cuales deberían consolidarse.

En el nuevo escenario, es prioritario convencer más que imponer, negociar y llegar a acuerdos, forjar alianzas que potencien el poder que se tiene para producir los cambios que se buscan.

De igual manera, se requiere de formular e impulsar nuevas estrategias de lucha para generar cambios y lograr reivindicaciones socio económicas y políticas. En este viraje, de lo que se trata es de sacarle el máximo provecho a las condiciones que brinda la democracia liberal. Si ya no se privilegia la toma y la transformación del poder, lo que se requiere es la utilización de formas institucionalizadas para influir en los que toman las decisiones, buscando sobre todo, incidir en la definición de las políticas públicas.

Negociación, incidencia y generación de consensos se convierten en elementos que devienen centrales en este nuevo contexto.

Sin embargo, es evidente que la institucionalidad del Estado resulta un campo desventajoso para los propósitos que persiguen los movimientos sociales, lo cual implica definir cómo, en sus estrategias de lucha, se articulan las reglas institucionales de discusión y decisión política con las manifestaciones y la lucha desde otros métodos no formales o institucionales.

Aunque existe un proceso de unidad nacional dentro del movimiento social costarricense, aún se mantienen una serie de contradicciones y diferencias que le restan poder, sobre todo, porque algunas de las organizaciones que confluyen en esta unidad no cuentan ni se han propuesto la generación de un proyecto de país.

La sola resistencia no basta; es necesario contar con alternativas económicas, socio – políticas y culturales que le den viabilidad a un tipo de país y sociedad en donde desaparezca la desigualdad y la exclusión. La responsabilidad, la credibilidad y la vigencia del movimiento se juegan en la originalidad y viabilidad del tipo de cambio sustancial que se proponga.

Los problemas principales que enfrentan los movimientos sociales costarricenses y que deben ser enfrentados se pueden resumir en dos:

Uno, se relaciona con las agendas compartidas y los compromisos necesarios para llevarlas a la práctica. Los entrevistados mencionan que ponerse de acuerdo sobre los temas aglutinadores es relativamente sencillo en la actual coyuntura, pero es más difícil generar los compromisos para llevarlos a la práctica.

Dos, el hecho que las agendas y acciones propias de cada institución no siempre permiten el encuentro. Pareciera que el punto medular es construir la agenda propia en articulación con las agendas compartidas; en otras palabras, que al construir la agenda propia ya se estén tomando en cuenta las articulaciones con las otras organizaciones.

La experiencia de lucha contra el TLC aporta un proceso que contribuye a enfrentar ambos problemas arriba referidos. Este proceso tiene cinco componentes: el estudio del contenido del Tratado; la divulgación y la comunicación con recursos muy limitados; las marchas masivas en la capital y otras ciudades; la negociación, la presión y el cabileo en la Asamblea Legislativa; y la construcción de una propuesta alternativa conjunta. La enumeración de estos pasos no implica que se haya sido exitoso en todos, sino que trazan una hoja de ruta.

El reto con las ONG pasa por: primero, construir las confianzas necesarias para crear los puentes entre ONG y movimiento social; segundo, clarificar en conjunto el papel de la ONG y el papel de las organizaciones sociales y sus aportes compartidos en el contexto general del movimiento social; tercero, definir cómo se articulan y coordinan las dinámicas y acciones entre organizaciones que tienen lógicas organizativas e institucionales diferentes. Y cuarto, pero no menos importante, por clarificar el papel de los donantes en la orientación de las ONG en su relación con las organizaciones sociales.

En la actual coyuntura es básico definir cómo fortalecer y dar sustentabilidad a los lazos que ya se han generado y cómo terminar de construir una propuesta consensuada de modelo de país, así como encontrar las maneras de darle viabilidad política a esta propuesta, definiendo con claridad el papel y posición de cada organización y sector social.

Respecto de la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos podemos definir cuatro retos: Uno, la construcción de canales de comunicación y análisis conjunto de la realidad. Dos, y muy vinculado a lo anterior, es muy importante la definición de visiones y estrategias conjuntas.

Tres, definir nuevas formas de articulación entre la representación política y los procesos de democracia participativa que impulsan los movimientos sociales; ello implica generar nuevas reglas de relacionamiento más allá de las que genera la democracia formal. A la base de estos retos existe un cuarto, asociado con la concepción y la actitud hacia la política y lo político de parte de los movimientos sociales.

En **Panamá**, los desafíos de los movimientos sociales giran en torno a la articulación de una agenda con los ONGs, a las alianzas a construir con los partidos políticos y a lograr superar visiones cortoplacistas en los movimientos sociales.

Los principales desafíos que enfrentan los movimientos sociales panameños son:

- La urgencia de un plan nacional de desarrollo, diseñado por todas las fuerzas del país, que le dé dirección al acontecer nacional y convoque a todos a la construcción de una sociedad realmente democrática, justa y solidaria.
- La construcción y fortalecimiento de la unidad popular y de todos los sectores de la sociedad, lo que implica la superación de todos los vicios de paternalismo, corrupción, oportunismo, dependencia, etc.
- La educación como mecanismo para la promoción de una conciencia nueva, ciudadana, solidaria, comprometida con el país.
- El respeto, la inclusión y la transversalidad de los derechos humanos en todos los ámbitos.
- La superación de las condiciones que producen las situaciones infrahumanas en que vive la mayoría del pueblo panameño, particularmente en el área campesina e indígena e, incluso, sectores urbanos.

3.2. LOS DESAFÍOS DESDE LA PERSPECTIVA CONJUNTA

Los problemas que enfrentan los movimientos sociales y su relación con ONGs y Partidos Políticos son análogos en la región, planteándose similares vías de solución, aunque con diversos desarrollos. Las elaboraciones teóricas también tienen progresos distintos, pero igual, están enfocados en la misma dirección.

Es posible, por lo tanto, plantear las similitudes regionales a partir de algunos aportes nacionales que reflejan las vías de abordaje y solución. Nuestra síntesis Sub Regional en este apartado será más en términos de concepciones y criterios y no de elementos concretos o específicos y para el efecto recuperaremos, con la mayor literalidad posible, los elementos fundamentales expuestos en las síntesis nacionales que mejor se refieren a la situación sub regional.

Las opciones estratégicas de los movimientos sociales

Los movimientos sociales podrían tener las siguientes opciones para definir y orientar sus luchas:

- Incorporarse a la institucionalidad democrática y desde

ahí luchar por los cambios políticos.

- Estar fuera de la dinámica institucional, pero dentro del sistema.
- Construir, a través de la lucha social, poder popular o un contrapoder, que permita generar acciones antisistémicas y anti capitalistas.

Estas opciones se derivan de una concepción de “resistencia” o de “transformación” en las luchas sociales. El debate que puede aportar a dilucidar el problema podría girar en torno a si son por sí mismas excluyentes o admiten algún nivel de complementariedad. O si es posible tomar una decisión básica, estratégica, y a partir de allí articular las opciones, ya que se podría esperarse que las acciones de resistencia condujeran a encontrar nuevas formas alternativas de convivencia y de lucha social y política.

La Agenda

Otra cuestión fundamental es la comprensión sobre la necesidad de construir agendas comunes, demandas estratégicas e incidencia política. Se trata de formular la agenda nacional alimentada y nutrida por agendas sectoriales, pensadas éstas, desde su construcción, en función de su articulación a la agenda nacional. Esto implica que la prioridad sean los temas nacionales y no las agendas sectoriales.

A nivel más estratégico, la agenda de los movimientos sociales se manifiesta alrededor de dos espacios que contienen los problemas centrales:

El espacio político – institucional: aquí tiene importancia el rescate de la legitimidad de las instituciones democráticas (lo que no incluye aquéllas que obstaculicen su profundización) y, en general, de la democracia, profundizando su dimensión participativa.

El espacio de la equidad y justicia social: implica el ejercicio de los derechos ciudadanos a un mayor y mejor acceso a servicios y condiciones básicas para el desarrollo humano. Subyace acá el tema de la redistribución de la riqueza.

En términos más concretos, podría haber siete ejes centrales para construir la agenda:

1. Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos de manera gratuita y universal;
2. La creciente reducción de la pobreza hasta lograr su eliminación, para lo cual debe enfrentarse el tema de la desigualdad como la principal causa estructural de la pobreza y la exclusión;
3. El fortalecimiento de la democracia participativa,
4. El fortalecimiento del Estado, de su institucionalidad democrática y de su rol en el desarrollo, particularmente en términos de su papel redistributivo de la riqueza;
5. La protección del medio ambiente con una visión integral y de largo plazo.
6. Los derechos humanos, desde los básicos que se han de-

teriorado, hasta los de tercera generación;

7. La lucha por la equidad en todos los planos.

Por último, advirtamos en el tema de las Agendas que aunque sea difícil su formulación, es aún más complicado generar y garantizar los compromisos necesarios para poderla llevar a cabo.

Los Actores

También es esencial, desde una perspectiva de análisis de actores, comprender la necesidad de construir desde la diversidad, sin protagonismos ideológicos ni políticos. Superar el corporativismo, la idea de la “vanguardia” del proceso, las desconfianzas y las viejas diferencias acumuladas. “El movimiento es de bases, no de líderes”, ni de caciques, es el espíritu manifestado en las entrevistas realizadas.

Esta concepción implica la necesidad de comprender que hay actores que juegan nuevos roles actualmente, cuyas identidades no son unívocas, ni correspondientes con los criterios tradicionales de la lucha de clases, sino que tienen anclajes de naturaleza transversal (ejemplos: luchas comunitarias, transparencia, ambiente, género, servicios públicos,...).

Los actores políticos no pueden subestimarse en el escenario latinoamericano, a pesar de las limitaciones conocidas que manifiestan los partidos. Un reto fundamental para ellos es superar la visión electoral y priorizar una visión más integral y estratégica. Otro reto es que efectivamente discutan los temas de democracia y desarrollo, que son los puentes de comunicación con los movimientos sociales. Pero esto implica que los partidos no tengan sólo la agenda electoral en sus preocupaciones y práctica.

También es importante tener presente que las bases partidarias pueden ser susceptibles de participar en convergencias con los movimientos sociales y las ONGs, principalmente a niveles locales, aunque sus respectivas dirigencias no lo hagan, ya sea porque no quieren o porque no se les busca.

En lo que respecto a la construcción de una fuerza política para la transformación, se deja ver la ausencia de liderazgo nacional para organizar lo común. La construcción de ese liderazgo es indispensable, pero buscando que el mismo sea de naturaleza colectiva y no a partir de personalismos como está ocurriendo en la actualidad.

Es fundamental la comprensión de que hay que construir, paralelamente, poder social y poder político, asumiendo los roles correspondientes a los actores respectivos (movimientos sociales y partidos).

Resulta evidente que aún no existen “bisagras” que posibiliten la relación y los acuerdos entre los actores.

Un tema fundamental en este trabajo, por la naturaleza de los sujetos que promueven el presente Informe, es la definición de las relaciones de las ONGs con los movimientos so-

ciales. Al respecto, la experiencia costarricense nos plantea cuatro retos: cómo construir las confianzas necesarias para crear puentes entre ONGs y movimientos sociales; clarificar en conjunto el papel de las ONGs y el que corresponde a las organizaciones sociales, así como sus aportes compartidos en el contexto general; definir cómo se articulan y coordinan las dinámicas y acciones entre organizaciones que tienen lógicas organizativas e institucionales diferentes; y clarificar el papel de los donantes en la orientación de las ONGs en su relación con las organizaciones sociales.

En esta misma línea de análisis, para definir los retos de los movimientos sociales en la construcción de sus alianzas, podemos definir tres: cómo fortalecer y dar sustentabilidad a los lazos que ya se han generado; cómo terminar de construir una propuesta consensuada de modelo de país; y cómo darle viabilidad política a esta propuesta, precisando con claridad el papel y posición de cada organización y sector social.

Y con relación a las alianzas con los partidos políticos, siguiendo la lógica del análisis del Informe costarricense, los retos serían cinco: la construcción de canales de comunicación y análisis conjunto; la definición de visiones y estrategias conjuntas; cambiar la perspectiva electoral en que se mueven los partidos por una perspectiva de acción política y orgánica alrededor de una propuesta de país; generar nuevas reglas de relacionamiento más allá de las que genera la democracia formal; y madurar la concepción y la actitud hacia la política y lo político de parte de los movimientos sociales.

Las formas organizativas

El problema trascendental de las formas organizativas y de los mecanismos de relación entre los actores participantes plantea el reto de decidir las a partir del criterio de que se ajusten mejor a la dinámica de los procesos sociales, buscando construir y conservar la unidad dentro de la diversidad, así como mantener cierta claridad sobre la naturaleza estratégica (proyecto común) o táctica de las alianzas que se expresen al interior de esas formas organizativas. La diversidad organizativa que pudiere existir no es un problema en sí misma. La dificultad radica en la ausencia de visiones y estrategias comunes.

También se plantea la necesidad de generar en las diversas formas organizativas, una cultura democrática, ausente en el país, para lo cual es conveniente partir con un esfuerzo desde las mismas bases, dirigido a fortalecer las prácticas democráticas. Es decir, contribuir a superar la desconexión entre democracia y desarrollo construyendo una cultura democrática desde las organizaciones de base.

Las formas de lucha

Con relación a las formas de lucha, sin dejar de considerar que la movilización es una presión indispensable, dada la naturaleza de los Estados nacionales de la región, compren-

der también el nuevo escenario continental de orden democrático, el cual posibilita la incidencia en las políticas públicas mediante acciones de orden propositivo y argumentativo, recurriendo a herramientas democráticas como el diálogo y la negociación y, por lo tanto, a la decisión estratégica de utilizar al máximo todos los espacios que permite la democracia liberal y buscar su permanente profundización.

O sea que la negociación, la búsqueda de incidencia y la generación de consensos se convierten en elementos que devienen centrales en este nuevo contexto. Esta comprensión posibilita avanzar en el logro de reivindicaciones concretas, pero con la permanente preocupación de construir correlación de fuerzas en la resistencia para caminar en el rumbo de las luchas de transformación.

La experiencia costarricense puede contribuir a definir resultados deseables (lo resaltamos porque mencionarlos no implica que se hayan logrado plenamente) de una estrategia de movilización conjunta de movimientos sociales, ONGs y partidos políticos. Estos son: un propósito nacional, que trasciende reivindicaciones particulares; la creación de vínculos y relaciones de trabajo entre diversos sectores del movimiento social y la sociedad civil; la construcción de una perspectiva común, que permite articular la acción conjunta de los diversos movimientos y organizaciones; la construcción de una nueva manera de representación política que respeta y se fundamenta en la diversidad; y una movilización social que crece cuantitativa y cualitativamente, que se fortalece por su diversidad y heterogeneidad.

Por último, en este tema de las movilizaciones sociales y políticas, es necesario tener presente la estrategia de criminalizar y judicializar las luchas sociales por parte de los distintos gobiernos, para no caer en la trampa de que las acciones de movilización puedan ser deslegitimadas y reprimidas. El reto, para los movimientos sociales, está en el equilibrio adecuado que permita que la presión cumpla su papel y que no se convierta en un elemento funcional a la estrategia referida.

Temas Movilizadores

Podemos sintetizar en los siguientes los temas de trascendencia Sub Regional, en términos de su posibilidad de convocar movilización social y política:

- Lucha por la equidad (de todo tipo), la reducción permanente de la desigualdad y la reducción de la pobreza, así como por servicios públicos, entendidos desde la lógica del ejercicio de los derechos ciudadanos, Particular importancia tienen los temas de la educación y la salud, tal como lo ha demostrado la experiencia reciente de las luchas sociales en algunos países de la región;
- Mayor apertura del sistema político para que se profundice la dimensión participativa de la democracia;
- La lucha por los Derechos Humanos en general, señalando los retrocesos existentes, ya que aunque se trata de alcanzarlos en su integralidad y profundidad, también debe

garantizarse que se mantengan vigentes los más elementales que efectivamente están siendo afectados por las prácticas represivas y excluyentes de los Estado.

Es muy importante que los temas movilizadores a partir de los cuales deberá formularse la Agenda de la alianza entre Movimientos Sociales, ONGs y partidos políticos progresistas, se conciben desde la lógica propia de la identidad ideológica, política y programática de los actores cuya convergencia se pretende.

4. LA INTEGRACIÓN REGIONAL

4.1. LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LOS ÁMBITOS NACIONALES

En **México**, los entrevistados consideraron que América Latina vive un momento histórico, ya que diversos movimientos sociales, a través de partidos políticos de izquierda, han llegado a ocupar el poder ejecutivo en sus respectivos países. Esto ha generado la posibilidad de alianzas entre diversos gobiernos del continente, así como la promoción de procesos de encuentro, convergencias y alianzas entre los movimientos sociales en América Latina.

Una manera de construir la integración regional es por la vía de discutir agendas y actores, es decir, ubicar temas que permitan el acercamiento de actores sociales y políticos y empezar a generar no sólo acciones, sino también reflexiones que nos permitan sustentar nuestras alianzas. Hay temas como la migración, los tratados de libre comercio, la exclusión social, que pueden jugar el papel dinamizador a nivel regional.

Hay también una serie de acciones encaminadas a una integración desde una perspectiva más sectorial o temática, por ejemplo: la lucha por considerar el derecho al agua como derecho humano. Se puede pensar una agenda regional desde esta perspectiva de temas comunes.

Los procesos de integración sin duda serán más claros por la vía de las Agendas. Lo más práctico son los “circuitos específicos” (redes que ya están) y no un círculo único, vital y diverso.

En **Guatemala**, se han creado expectativas de cambio de la situación política por lo sucedido en el sur del continente. Ello tiene una connotación importante para el impulso de las luchas propias.

Los movimientos sociales guatemaltecos suelen estar integrados a redes regionales de naturaleza sectorial. Esto incluye a campesinos, maestros, sector salud y ONGs. Estas vinculaciones han incidido en la ruptura de relaciones de dependencia con algunos partidos de la izquierda, según alguno de los entrevistados. Otro de los entrevistados advierte sobre el riesgo de que estas relaciones internacionales sean irrelevantes y se conviertan sólo en turismo político, particularmente en el caso del Foro Social Mundial.

Desde los movimientos sociales se ha manifestado el interés porque la integración regional se vea más allá de una unión aduanera; planteando que debe entenderse la integración como el contexto óptimo para avanzar en condiciones de reconocerse como pueblos diversos pero unidos por una misma Historia. La recuperación de mercados históricos y la construcción de mercados solidarios para estimular procesos de desarrollo humano y medio ambiental son retos pendientes en la agenda de la integración.

En **El Salvador**, se considera que casi todos los procesos de integración, incluyendo los que surgen como alternativos, están pensados, diseñados y ejecutados con la misma lógica del capital, o sea del sistema de integración que ofrece la teoría del capital, es decir, el libre comercio.

Se considera que tal vez ni el ALCA ni el ALBA se concreten, pero sí otro modelo alternativo.

Para hacer frente a una política neoliberal fracasada, existen posibilidades de ir conformando mecanismos de agenda con un pensamiento global, la cual debería limitarse primero a la subregión centroamericana, para luego establecer compromisos más sólidos con el resto de países y movimientos del continente. Sin embargo, los actores no tienen una visión compartida de la Centroamérica de hoy, por lo que es necesario buscar acuerdo en su diagnóstico, ante el cual hay que tomar posición. Pareciera que los mismos problemas que enfrenta el movimiento social en El Salvador son los que enfrentan sus pares en los demás países de Centroamérica.

Existen amplias relaciones de los diferentes actores con el escenario internacional, compartiendo visiones y esfuerzos. Esta es una fortaleza de los movimientos sociales que puede contribuir a aumentar la dimensión de sus diferentes iniciativas, particularmente en términos regionales.

Se mencionan como importantes los esfuerzos de coordinación regional que se han hecho, tales como la Red Centroamericana de Asociaciones de Consumidores y la Red Hemisférica de Defensa del Agua.

En **Honduras**, hay muchas expectativas respecto de lo que ocurra en Sur América. Se reconocen que son procesos novedosos, no fundados en paradigmas anteriores, sobre todo

en lo referente a los partidos políticos y los movimientos sociales. Se valoran estas experiencias como procesos más amplios y menos centralizados.

La articulación de Honduras a la región “siempre ha sido un déficit en nuestra característica como nación y como movimientos y ello parece ser la tendencia que aun se mantiene”.

En **Nicaragua**, se considera que un obstáculo fundamental a superar para construir una agenda latinoamericana entre ONGs, Movimientos Sociales y Partidos Políticos es enfrentar la “dicotomía política” de los gobiernos (hablar como izquierda y actuar como neoliberal), ya que esto provoca la mediatización de los Movimientos Sociales,

Para tener mayor impacto se debe, entre otras cosas, hacer lo siguiente:

1. Lograr una definición de temas prioritarios entre ONGs y Movimientos Sociales, considerando como posibles los siguientes: derecho a los servicios básicos, reducción de la desigualdad y la lucha por la eliminación de la pobreza, democracia participativa, medio ambiente y Derechos Humanos en general;
2. Identificar formas de acción nacionales y a nivel regional;
3. Evidenciar la dicotomía política de varios gobiernos latinoamericanos (incoherencia gubernamental ya referida);
4. Presentar agenda común de la sociedad civil y los partidos políticos, así como mecanismos de relación entre ellos;
5. Implementar una estrategia de acción y comunicación.

Se considera que para fortalecer la integración de movimientos sociales se precisa conocer, analizar y reflexionar más sobre las implicaciones de otros procesos de integración (el ALBA, por ejemplo). Algo que ha contribuido a fortalecer el vínculo de las organizaciones sociales en América Latina son los temas relacionados con la participación ciudadana y la reducción de la pobreza, enfatizándose lo siguiente: la defensa de los derechos de grupos excluidos, globalización de los beneficios socio económicos y democracia y gobernabilidad.

En **Costa Rica**, las dificultades encontradas en relación al tema de la integración regional están relacionadas con características nacionales, tales como el desarrollo diferencial del Estado y, en general, el tipo de desarrollo que se ha impulsado en el país, lo cual no permiten a veces coincidir en agendas comunes con otros países de la región.

También es importante reconocer que existe una desvinculación de parte del movimiento social costarricense con expresiones del movimiento social en el resto del continente, tal como lo reconoce uno de los entrevistados cuando dice: “La mayoría de organizaciones estamos desvinculados de lo que

son contactos e iniciativas parecidas a nivel de la América Latina y a nivel de la misma Centroamérica". Hay, por lo tanto, una participación débil de los movimientos sociales de Costa Rica en articulaciones regionales.

Sin embargo, en las entrevistas realizadas, lo primero que se plantea es la necesidad de entender el contexto actual por el que pasa Latinoamérica y definir con claridad hacia dónde se dirige el continente y el papel de los diferentes actores políticos y sociales en este camino.

Las condiciones para darle a este proceso un sentido latinoamericano, viable y efectivo, son básicamente dos. La primera es que el proceso tiene que estar fundamentado en expresiones organizativas fuertes, razón por la cual no se pueden dejar de lado esfuerzos tendientes a fortalecer las organizaciones nacionales y sectoriales. En esto, a cada organización le corresponde asumir la responsabilidad del fortalecimiento propio. La segunda condición es que hay que definir con claridad una estrategia de participación e integración. Se sugiere que no se parta de encuentros masivos; por el contrario, se propongan y organicen encuentros pequeños en donde se pueda compartir, analizar y reflexionar con profundidad.

Es posible que la ciudadanía genere prácticas efectivas e idóneas para propiciar el cambio social y dirigirlo a la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria. Sin embargo, ello pasa por un proceso que ya no puede ser sólo nacional o sectorial, lo cual lleva directamente a la necesidad de plantear un nuevo relacionamiento entre los actores interesados en el desarrollo de la democracia y en una economía y sociedad sustentables, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales. Para ello es estratégico plantear un nuevo papel y una articulación creativa entre partidos políticos, movimientos sociales y ONGs, que puede estar basado en los siguientes elementos:

1. Generación de confianzas y tendido de puentes.
2. Creación de metodologías para el encuentro y la generación de agendas comunes que consisten en procedimientos y estrategias de participación libre y en igualdad de condiciones en la definición de los diagnósticos, de las estrategias a seguir y en la determinación de sus acciones.
3. Es vital que se construya un interés general donde los intereses particulares y sectoriales se vean reflejados.
4. Generación de compromisos políticos de acción sobre la definición clara del papel, aporte y beneficio de cada actor.
5. Definición de estrategias que le den viabilidad política y social a las propuestas, así como sostenibilidad económica y cultural.
6. Lo anterior pasa por la generación de corrientes de opinión favorable y la construcción de espacios de participación y movilización pública.

(El reto actual es crear esas condiciones; por lo menos iniciar con las dos primeras.)

La anterior propuesta tiene como contexto la comprensión de que la nueva situación existente en América Latina se caracteriza porque hubo una transición a la democracia y

desaparición de los regímenes militares, hay una visión más positiva del Estado y su institucionalidad (que lo "defiende" ante los esfuerzos por debilitarlo) y que han emergido nuevos actores sociales.

En **Panamá**, se considera que la única forma de integración regional es la que se construye desde los pueblos y no desde la imposición de modelos transnacionales. La preocupación de las organizaciones sociales es el TLC que ha sido negociado a espaldas de la población y que debe pasar a debate legislativo en los próximos meses. No reconocen las organizaciones sociales al TLC como un proceso real de integración.

La mitad de las organizaciones entrevistadas, de manera individual, participan en articulaciones regionales, las cuales no son conocidas en el país. Ello demanda la necesidad de compartir espacios a nivel nacional para tratar estos temas y socializar así el conocimiento sobre las articulaciones regionales en las cuales se participa, sus propósitos e intereses y su radio de acción.

Aunque no se percibe una articulación y construcción de agenda continental entre ONGs y movimientos sociales, existen temas comunes: derechos humanos, ambiente, inequidad social, proyecto alternativo a la política económica neoliberal, justicia, corrupción y salud.

Para algunos sectores de la sociedad panameña (organizaciones populares), el esfuerzo debe encaminarse a la construcción de un proyecto de integración latinoamericana que promueva la consulta, el respeto a las divergencias, la atención de los principales problemas nacionales y regionales, así como la acción frente al proyecto excluyente neoliberal. Se considera que las luchas nacionales se fortalecen con las vinculaciones regionales.

4.2. LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA CONJUNTA

La premisa de la cual habría que partir es que hay en la región procesos de integración actualmente en marcha que responden a la perspectiva de los capitales y los mercados y vistos desde afuera, sea desde los intereses y visiones estadounidenses o de la Unión Europea. En el primer caso, se expresan en los contenidos de los tratados de "libre" comercio ya existentes y en el segundo caso en los procesos de negociación que tienen la misma lógica, ya que aunque formalmente se habla de tres componentes; Libre Comercio, Diálogo Político y Cooperación, el primero tiene una relevancia suprema y está basado en una visión predominantemente arancelaria.

No se ha planteado el tema, de manera seria y consciente por parte de los sujetos sociales y políticos que hemos definido como alternativos (Movimientos Sociales, ONGs y partidos políticos progresistas), pues la pregunta obligada que debería ser el punto de partida es formular la integración en función de los intereses de los pueblos, es decir de los sectores tradicionalmente excluidos. Esta debería ser la razón de ser de la integración y la perspectiva desde la cual se formulen las agendas, los objetivos, un programa básico y una plataforma axiológica. La lógica de la integración no debería ser la correspondiente a la reciprocidad que es de naturaleza mercantil y neoliberal, sino que la de la solidaridad.

Es en este contexto de "integración regional" predominante que se han producido en América Latina experiencias inéditas, que se expresan en el triunfo por la vía electoral de opciones políticas que en general pueden calificarse de izquierda, donde han confluído movimientos sociales y partidos políticos progresistas. Esto ha creado una plataforma política que posibilita el abordaje del tema de la integración desde una perspectiva distinta a la prevaleciente, especialmente porque se podría plantear como contradictoria con el poder hegemónico en la región.

El tema de la integración, por lo tanto, está vigente en América Latina, tanto desde la perspectiva de las fuerzas conservadoras tradicionales como de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. En todo caso, existe la percepción en algunos sectores, de que todos los procesos de integración, incluyendo los que surgen como alternativos, están dentro de la lógica del capital, es decir, del libre comercio.

Pero, en todo caso, existe gran expectativa sobre los procesos políticos que han roto los paradigmas tradicionales de las luchas políticas que impulsaron las izquierdas en el continente.

El nuevo escenario continental plantea el tema de las relaciones entre gobiernos ideológica y políticamente más cercanos (o inclusive coincidentes), así como entre los movimientos sociales del área. Este es un elemento favorable para los procesos de integración que puedan divergir del dominio hegemónico en la región.

De igual manera, existen condiciones económicas, sociales y políticas muy similares en el continente, a las cuales hemos hecho referencia anteriormente, con resultados negativos para los pueblos. Siendo que las causas y los efectos son similares, se impone una respuesta que rebase la dimensión nacional y que permita convergencias, alianzas y el impulso de estrategias acordadas entre los sujetos sociales y políticos que representan los intereses de los pueblos latinoamericanos. Esta es una necesidad que se hace más fuerte a partir de que el discurso político de contenido popular se está generalizando en muchos gobiernos latinoamericanos, pero con una práctica de ejercicio de poder que suele ser funcional a los designios neoliberales.

Asimismo, hay quienes advierten que hay que estar conscientes del riesgo que existe en la región de que la gente puede estar dispuesta a sacrificar democracia y aceptar sistemas y figuras autoritarias a cambio de bienestar. Sin embargo,

esta apreciación no coincide con las demandas que plantan los liderazgos alternativos entrevistados, quienes al criticar la situación prevaleciente, lo que demandan es la profundización de la democracia y no la recurrencia a opciones autoritarias.

En el tema de las relaciones entre movimientos sociales, ONGs y partidos políticos progresistas en Latinoamérica, para impulsar los intereses de los pueblos y enfrentar las políticas neoliberales, el reto radica en encontrar los caminos que permitan la convergencia estratégica entre ellos. Estos caminos son: las agendas, los actores y los mecanismos que posibiliten construir alianzas que funcionen.

El tema de los actores nos lleva a plantear la necesidad de su fortalecimiento nacional, para que sus alianzas regionales sean significativas.

La construcción de una agenda continental de largo plazo debe incorporar los temas prioritarios, ya señalados en el apartado correspondiente del presente trabajo, pero siempre resaltando el horizonte transformador de la agenda, en correspondencia con la identidad ideológica, política y programática de los sujetos que convergen en ella. Un tema que tiene especial relevancia para la subregión Camexca es el de las migraciones.

Ahora bien, la sola resistencia a los procesos de integración que responden a los intereses de los EUA no puede ser la esencia de las relaciones entre los movimientos sociales de la región.

Algo que podría contribuir a impulsar procesos regionales es que a nivel de los movimientos sociales, las ONGs y los partidos políticos, se analizara y discutiera más sobre las implicaciones de otros procesos de integración, como el ALBA, por ejemplo.

También deben definirse formas de acción regional y mecanismos de relacionamiento entre movimientos sociales, ONGs y partidos políticos a nivel latinoamericano. Es muy importante superar el desinterés que claramente expresan estos actores en la agenda de integración regional, en correspondencia con similar situación existente a nivel de los pueblos latinoamericanos.

Las relaciones internacionales de los diversos actores sociales y políticos resultan fundamentales para agregar la dimensión regional a su visión política.

Lamentablemente, las articulaciones regionales a las cuales pertenecen las organizaciones nacionales en lo individual, no son conocidas en sus países, ni por el resto de organizaciones. Cada una sólo conoce de sus respectivas contrapartes. Por lo tanto, sería conveniente dedicar un espacio y esfuerzo nacional para compartir estas experiencias y socializar el conocimiento sobre las articulaciones regionales en las cuales se participa individualmente.

Es importante tener presente que las luchas nacionales se fortalecen cuando se vinculan a articulaciones regionales.

IV. SINTESIS SUB REGIONAL

1. MARCO REFERENCIAL Y AXIOLOGICO

El Informe sobre la Democracia y el Desarrollo constituye básicamente una herramienta de un proceso político que pretende impulsar ALOP en la Región para contribuir a que se logre la necesaria articulación entre Democracia y Desarrollo.

Este Informe parte de la inconformidad existente con el modelo de democracia prevaleciente, el cual se encuentra restringido a una limitada visión representativa, expresada a través de procesos electorales.

La relación entre Democracia y Desarrollo debe ser indisoluble, siempre que se entienda el carácter multidimensional e integral de la primera. El contenido social, político y económico de la Democracia es el correspondiente con una visión del Desarrollo centrada en el ser humano, donde la economía y la política converjan virtuosamente, en favor de los sectores populares, secularmente excluidos, tanto de la democracia como del desarrollo.

La búsqueda del necesario crecimiento económico no puede asimilarse, por sí mismo, al desarrollo, pues la realidad histórica constata que no existe el supuesto efecto de derrame.

De lo que se trata en la presente argumentación sobre Democracia y Desarrollo, es subrayar la necesidad de su correspondencia, evidenciando, por lo tanto, que la experiencia concreta en América Latina es que este tipo de democracia está divorciada de las posibilidades de desarrollo, pensado en términos de las condiciones socioeconómicas de la población.

Desde la perspectiva de los sujetos cuyos puntos de vista expresa este Informe (que son los liderazgos alternativos), la inconformidad con la actual democracia representativa no significa una desvalorización de la democracia como tal, sino que la recuperación de su sentido integral y multidimensional.

Sin embargo, la posibilidad de rescatar esta naturaleza de la democracia está determinada por la capacidad que tengan los actores alternativos para construir agendas comunes y definir estrategias y formas de lucha acordadas entre ellos y ellas y apropiadas a las condiciones prevalecientes. El reto fundamental al que responde este Informe y que demanda la realidad regional y de cada país en particular es la construcción de las alianzas estratégicas entre movimientos sociales, ONGs y partidos políticos progresistas. Estos son los actores alternativos a los que hacemos referencia. En síntesis, este Informe tiene razón de ser en función de su posible aporte a la realización de este propósito, pero no sólo a niveles nacionales, sino que básicamente pensando

en una perspectiva latinoamericana.

Las alianzas que procuramos deben poder conjugar la lucha de resistencia con la lucha por la transformación, haciéndolas complementarias en función de recuperar la utopía que guía el rumbo estratégico de los cambios estructurales que se buscan. Sin embargo, esta visión de carácter histórico no debe limitar la flexibilidad táctica que se requiere y, por lo tanto, la construcción de coincidencias con otros actores distintos en función de objetivos concretos.

2. CONTEXTO

Lo primero que habríamos de definir desde la perspectiva regional, es que el nuevo contexto existente se ha construido a partir de la transición de regímenes autoritarios militares y de la existencia de conflictos armados en Centroamérica, a la pacificación y a modelos de participación política donde prevalece la dimensión participativa de la democracia, con muchas limitaciones. Asimismo, en el caso de México, la diferencia política sustancial ha sido la alternancia en el poder político, al haber sido derrotado electoralmente el PRI, así como la configuración de un nuevo mapa político electoral con la presencia de tres fuerzas políticas principales, ubicándose una expresión democrática como la segunda.

Estructuralmente, la Sub Región en su conjunto ha sufrido los embates a nivel social de las políticas económicas neoliberales, particularmente en el marco de los procesos de “integración” correspondientes con los intereses de los Estados Unidos y expresados en los tratados de “libre” comercio que se han firmado.

En la región de Centroamérica y México prevalecen los gobiernos conservadores, adscritos a las estrategias norteamericanas hacia la región. Esto implica no sólo la subordinación en términos de política económica, sino que también a la política de seguridad hemisférica del gobierno de los EUA, con sus implicaciones militares y policíacas, así como de control territorial.

Es importante hacer ver que ante el debilitamiento que han sufrido los Estados, producto de la implementación de los llamados “procesos de ajuste estructural”, y la hegemonía de las políticas basadas en la beligerancia y apertura de los mercados, los sectores sociales y políticos progresistas han asumido la reivindicación de su fortalecimiento, pero de cara a su rol central en el desarrollo y no únicamente con el propósito de funcionalizar los mercados. Estos sectores progresistas han asumido, en muchos casos, la defensa de la institucionalidad del Estado, pero en términos de garantizar su capacidad de intervención con fines redistributivos, regulando vigorosamente al mercado, así como en su rol de garantizar los derechos humanos en su integralidad. No se trata pues, de una defensa indiscriminada de la institucionalidad.

Se constata también en el análisis del contexto regional, la consolidación de democracias representativas que no logran

resolver dos cosas centrales. Por una parte la persistencia e inclusive aumento de los niveles de pobreza, pobreza extrema y exclusión, en correspondencia con el incremento de la brecha de desigualdad. Y, por la otra, una incapacidad del modelo representativo para contener (en términos de contenido no de sujetar) la demanda ciudadana de participación, así como la crisis de la institucionalidad correspondiente con esa democracia representativa.

En el mismo sentido en que avanza el desgaste de la democracia representativa se produce un creciente agotamiento de los partidos políticos en su rol de intermediación política de la sociedad, dada la pérdida constante de legitimidad que sufren entre la población.

Se reconoce el logro de metas macroeconómicas, con la particularidad del peso que tienen las remesas familiares en la estabilidad lograda. Pero paralelamente a estos logros, hay déficit sociales fundamentales. Las políticas neoliberales no han cedido, a pesar de que ni siquiera han alcanzado los logros económicos pretendidos explícitamente por dichas políticas. El efecto generalizado es que continúa sin superarse el problema estratégico de la debilidad de los Estados.

Las inconformidades sociales que produce la situación prevaleciente han sido enfrentada por la vía de la represión abierta o encubierta, particularmente impulsando una estrategia de criminalización y, cuando es posible, de judicialización, de la protesta social.

También es común en la región, un cierto grado de rebalse de las capacidades del crimen organizado que no puede ser enfrentado por la debilitada institucionalidad del Estado. En correspondencia con esta realidad, se ha incrementado la inseguridad ciudadana hasta el punto de convertirse en una de las principales demandas ciudadanas.

De igual manera, se manifiesta en la región un proceso de polarización social que tiene cada vez más una expresión en la arena política, a lo cual denominamos “politización de la polarización social”, entendida como una creciente (aunque con desiguales desarrollos en los distintos países) toma de conciencia de los actores sociales sobre la necesidad de transitar de la protesta a la lucha por el poder, con diferentes estrategias y formas de lucha, no reduciéndolas a la participación político partidaria.

Sin embargo, los actores sociales y políticos se mantienen dispersos e incapaces de formular una agenda de consenso relativa a las transformaciones nacionales y regionales que se requieren, así como de las estrategias a impulsar.

3. LOS ACTORES

Es relevante la irrupción de protagonistas asumido por actores sociales y políticos con identidades no ancladas fundamentalmente en las contradicciones de clase. Algunos

de ellos han estado presentes históricamente, tal el caso de las mujeres, pero invisibilizados, habiendo ahora asumido prácticas que los ubican en primer plano en los escenarios nacionales y regionales.

Esta realidad impone la necesidad de comprender que hay actores que juegan nuevos roles actualmente, cuyas identidades no son unívocas, ni correspondientes con los criterios tradicionales de la lucha de clases, sino que tienen anclajes de naturaleza transversal (ejemplos: luchas comunitarias, transparencia, ambiente, género, servicios públicos,...).

Hay una dispersión muy significativa de los actores sociales y políticos, así como incapacidad de formular una agenda de consenso que responda a la realidad estructural de los respectivos países y de la región. Sin embargo, se han dado importantes convergencias alrededor de temas coyunturales, manifestando así una actitud reactiva.

En el marco de los propósitos y destinatarios del presente Informe, se conceptualizan como actores alternativos a los Movimientos Sociales, las ONGs y los partidos políticos progresistas en alianza estratégica, así como en las convergencias y alianzas de cualquier tipo que puedan construirse con otros actores y sujetos sociales, en función de enfrentar los problemas nacionales y regionales.

Los problemas que enfrentan los movimientos sociales y su relación con ONGs y Partidos Políticos son análogos en la región, planteándose similares vías de solución, aunque con diversos desarrollos. Las elaboraciones teóricas también tienen progresos distintos, pero igual, están enfocados en la misma dirección.

Es esencial la comprensión de la necesidad de construir desde la diversidad, sin protagonismos ideológicos ni políticos. Superar el corporativismo, la idea de la “vanguardia” del proceso, las desconfianzas y las viejas diferencias acumuladas. “El movimiento es de bases, no de líderes”, ni de caciques.

Los actores políticos no pueden subestimar en el escenario latinoamericano, a pesar de las limitaciones conocidas. Un reto fundamental para ellos es superar la visión electoral y priorizar una visión más integral y estratégica. Otro reto es que los partidos efectivamente discutan los temas de democracia y desarrollo, que son los puentes de comunicación con los movimientos sociales. Pero esto implica que los partidos no tengan sólo la agenda electoral en sus preocupaciones y práctica.

Es generalizada la brecha entre los partidos y los movimientos sociales, pero hay indicios en algunos casos y avances en otros, que apuntan a un reencuentro, siempre que se flexibilice el sistema político y se supere el monopolio de participación que tienen los partidos.

En lo que respecta a la construcción de una fuerza política para la transformación se deja ver la ausencia de liderazgo nacional que sea colectivo para organizar lo común. La construcción de ese liderazgo es indispensable.

Es fundamental la comprensión de que hay que construir,

paralelamente, poder social y poder político, asumiendo los roles correspondientes a los actores respectivos (movimientos sociales y partidos). El problema trascendental de las formas organizativas y los mecanismos de relación entre los actores participantes plantea el reto de decidir las a partir del criterio de que se ajusten mejor a la dinámica de los procesos sociales, buscando construir y conservar la unidad dentro de la diversidad, así como mantener cierta claridad sobre la naturaleza estratégica (proyecto común) o táctica de las alianzas que se expresen al interior de esas formas organizativas.

La diversidad organizativa que pudiere existir no es un problema en sí misma. La dificultad radica en la ausencia de visiones y estrategias comunes.

4. LA AGENDA

Las convergencias coyunturales que han tenido los movimientos sociales, aunque han impactado, no se han desarrollado hacia la construcción de agendas más integradoras, de largo plazo, que rebasen las visiones sectoriales o específicas. Sin embargo, esta realidad es contradictoria con un discurso anti neoliberal e, inclusive anti sistema, que suele expresarse en las organizaciones sociales. Los procesos de diálogo entre las organizaciones sociales tienden a estar afectados negativamente por las luchas de protagonismos.

Teóricamente, las dirigencias sociales asumen la necesidad de formular agendas que los unifiquen con perspectiva de largo plazo, así como la necesidad de trascender la lucha de resistencia, vinculándola a reivindicaciones más estratégicas, que se han denominado luchas de transformación.

Otra cuestión fundamental es la comprensión sobre la necesidad de construir agendas comunes, demandas estratégicas e incidencia política. Se trata de formular la agenda nacional alimentada y nutrida por agendas sectoriales, pensadas éstas, desde su construcción, en función de su articulación a la agenda nacional. Esto implica que la prioridad sean los temas nacionales y no las agendas sectoriales.

A nivel más estratégico, la agenda de los movimientos sociales se manifiesta alrededor de dos espacios que contienen los problemas centrales:

El espacio político – institucional: aquí tiene importancia el rescate de la legitimidad de las instituciones democráticas (no de las que obstaculicen su profundización) y, en general, de la democracia, profundizando su dimensión participativa.

El espacio de la equidad y justicia social: implica el ejercicio de los derechos ciudadanos a un mayor y mejor acceso a servicios y condiciones básicas para el desarrollo humano. Subyace acá el tema de la redistribución de la riqueza.

Temas Movilizadores

Podemos sintetizar en los siguientes los temas de trascendencia Sub Regional, en términos de su posibilidad de convocar movilización social y política:

- Lucha por la equidad (de todo tipo), la reducción permanente de la desigualdad y la reducción de la pobreza, así como por servicios públicos, entendidos desde la lógica del ejercicio de los derechos ciudadanos, Particular importancia tienen los temas de la educación y la salud, tal como lo ha demostrado la experiencia reciente de las luchas sociales en la sub región;
- Mayor apertura del sistema político para que se profundice la dimensión participativa de la democracia;
- La lucha por los Derechos Humanos en general, señalando los retrocesos existentes, ya que aunque se trata de alcanzarlos en su integralidad y profundidad, también debe garantizarse que se mantengan vigentes los más elementales, que efectivamente están siendo afectados por las prácticas represivas y excluyentes de los Estado.

Es muy importante que los temas movilizados a partir de los cuales deberá formularse la Agenda de la alianza entre Movimientos Sociales, ONGs y partidos políticos progresistas, se conciben desde la lógica propia de la identidad ideológica, política y programática de los actores cuya convergencia se pretende.

En términos más concretos, podría haber siete ejes centrales para construir la agenda:

1. Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos de manera gratuita y universal;
2. La creciente reducción de la pobreza hasta lograr su eliminación, para lo cual debe enfrentarse el tema de la desigualdad como la principal causa estructural de la pobreza y la exclusión;
3. El fortalecimiento de la democracia participativa,
4. El fortalecimiento del Estado, de su institucionalidad democrática y de su rol en el desarrollo, particularmente en términos de su papel redistributivo de la riqueza;
5. La protección del medio ambiente con una visión integral y de largo plazo.
6. Los derechos humanos, desde los básicos que se han deteriorado, hasta los de tercera generación;
7. La lucha por la equidad en todos los planos.

Por último, advirtamos en el tema de las Agendas que aunque sea difícil su formulación, es aún más complicado generar y garantizar los compromisos necesarios para poderla llevar a cabo.

5. LA ESTRATEGIA DE LUCHA

Los movimientos sociales podrían tener las siguientes opciones para definir y orientar sus luchas:

- Incorporarse a la institucionalidad democrática y desde ahí luchar por los cambios políticos.
- Estar fuera de la dinámica institucional, pero dentro del sistema.
- Construir, a través de la lucha social, poder popular o un contrapoder, que permita generar acciones antisistémicas y anti capitalistas.

Estas opciones se derivan de una concepción de “resistencia” o de “transformación” en las luchas sociales. El debate que puede aportar a dilucidar el problema podría girar en torno a si son por sí mismas excluyentes o admiten algún nivel de complementariedad. O si es posible tomar una decisión básica, estratégica, y a partir de allí articular las opciones, ya que se podría esperarse que las acciones de resistencia condujeran a encontrar nuevas formas alternativas de convivencia y de lucha social y política.

6. LAS FORMAS DE LUCHA

Con relación a las formas de lucha, sin dejar de considerar que la movilización es una presión indispensable, dada la naturaleza de los Estados nacionales de la Sub Región, comprender también el nuevo escenario continental de orden democrático, el cual posibilita la incidencia en las políticas públicas mediante acciones de orden propositivo y argumentativo, recurriendo a herramientas democráticas como el diálogo y la negociación y, por lo tanto, a la decisión estratégica de utilizar al máximo todos los espacios que permite la democracia liberal y buscar su permanente profundización.

O sea que la negociación, la búsqueda de incidencia y la generación de consensos se convierten en elementos que devienen centrales en este nuevo contexto. Esta comprensión posibilita avanzar en el logro de reivindicaciones concretas, pero con la permanente preocupación de construir correlación de fuerzas en la resistencia para caminar en el rumbo de las luchas de transformación.

Por lo tanto, aunque las formas de lucha que se expresan son diversas y aunque subsiste el debate respecto de la visión estratégica que debe inspirarlas, en la práctica persiguen influir en las políticas del Estado de manera más específica (en las políticas públicas). Los propósitos estratégicos no son contrarios a la necesidad de lograr éxitos concretos.

De igual forma, no obstante hay conciencia sobre la necesidad de la argumentación, persuasión y negociación en el proceso de definición de las políticas públicas, también es evidente la necesidad de la movilización que presione las decisiones finales del Estado

7. LA CONSTRUCCIÓN DE CONVERGENCIAS Y ALIANZA

Se vislumbran cuatro retos en la construcción de las alianzas entre ONGs y Movimientos Sociales, que son: cómo construir las confianzas necesarias para crear puentes entre ellos; clarificar en conjunto el papel de las ONGs y el que corresponde a los movimientos y organizaciones sociales, así como sus aportes compartidos en el contexto general; definir cómo se articulan y coordinan las dinámicas y acciones entre organizaciones que tienen lógicas organizativas e institucionales diferentes; y clarificar el papel de los donantes en la orientación de las ONGs en su relación con las organizaciones sociales.

En esta misma línea de análisis, los retos de los movimientos sociales en la construcción de sus alianzas, son tres: cómo fortalecer y dar sustentabilidad a los lazos que ya se han generado; cómo terminar de construir una propuesta consensuada de modelo de país; y cómo darle viabilidad política a esta propuesta, precisando con claridad el papel y posición de cada organización y sector social.

Y con relación a las alianzas con los partidos políticos, los retos serían cinco: la construcción de canales de comunicación y análisis conjunto; la definición de visiones y estrategias conjuntas; cambiar la perspectiva electoral en que se mueven los partidos por una perspectiva de acción política y orgánica alrededor de una propuesta de país; generar nuevas reglas de relacionamiento más allá de las que genera la democracia formal; y madurar la concepción y la actitud hacia la política y lo político de parte de los movimientos sociales.

8. LA INTEGRACIÓN REGIONAL

La premisa de la cual habría que partir es que hay en la región procesos de integración actualmente en marcha que responden a la perspectiva de los capitales y los mercados y vistos desde afuera, sea desde los intereses y visiones estadounidenses o de la Unión Europea. En el primer caso se expresan en los contenidos de los tratados de “libre” comercio ya existentes y en el segundo caso en los procesos de negociación que tienen la misma lógica.

No se ha planteado el tema de manera seria y consciente por parte de los sujetos sociales y políticos que hemos definido como alternativos (Movimientos Sociales, ONGs y partidos políticos progresistas), pues la pregunta básica debería ser cómo formular la integración en función de los intereses de los pueblos, es decir de los sectores tradicionalmente excluidos, ya que ésta es la razón de ser de la integración y la perspectiva desde la cual se formulen las agendas, los objetivos, un programa básico y una plataforma axiológica. La lógica de la integración no debería ser la correspondiente a la reciprocidad que es de naturaleza mercantil y neoliberal, sino que la de la solidaridad.

Es en este contexto de integración regional que se han producido en América Latina experiencias inéditas, que se expresan en el triunfo por la vía electoral de opciones políticas que en general pueden calificarse de izquierda, donde han confluído movimientos sociales y partidos políticos progresistas. Esto ha creado una plataforma política que posibilita el abordaje del tema de la integración desde una perspectiva distinta a la prevaleciente, especialmente porque se podría plantear como contradictoria con el poder hegemónico en la región.

El tema de la integración, por lo tanto, está vigente en América Latina, tanto desde la perspectiva de las fuerzas conservadoras tradicionales como de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. En todo caso, existe la percepción en algunos sectores, de que todos los procesos de integración, incluyendo los que surgen como alternativos, están dentro de la lógica del capital, es decir, del libre comercio.

El nuevo escenario continental plantea el tema de las relaciones entre gobiernos ideológica y políticamente más cercanos (o inclusive coincidentes), así como entre los movimientos sociales del área. Este es un elemento favorable para los procesos de integración que puedan divergir del dominio hegemónico en la región.

En el presente Informe también se ha expresado que existen condiciones económicas, sociales y políticas muy similares en la Sub Región, a las cuales hemos hecho referencia anteriormente, con resultados negativos para los pueblos. Siendo que las causas y los efectos son similares, se impone una respuesta que rebase la dimensión nacional y que permita convergencias, alianzas y el impulso de estrategias acordadas entre los sujetos sociales y políticos que representan los intereses de los pueblos latinoamericanos. Esta es una necesidad que se hace más fuerte a partir de que el discurso político de contenido popular se está generalizando en muchos gobiernos latinoamericanos, pero con una práctica de ejercicio de poder que suele ser funcional a los designios neoliberales.

En el tema de las relaciones entre movimientos sociales, ONGs y partidos políticos progresistas en Latinoamérica, para impulsar los intereses de los pueblos y enfrentar las políticas neoliberales, el reto radica en encontrar los caminos que permitan la convergencia estratégica entre ellos. Estos caminos son las agendas, los actores y los mecanismos que posibiliten construir alianzas que funcionen.

El tema de los actores nos lleva a plantear la necesidad de su fortalecimiento nacional, para que sus alianzas regionales sean significativas.

La construcción de una agenda continental de largo plazo debe incorporar los temas prioritarios, ya señalados en el apartado correspondiente del presente trabajo, pero siempre resaltando el horizonte transformador de la agenda, en correspondencia con la identidad ideológica, política y programática de los sujetos que convergen en ella. Un tema que tiene especial relevancia para la subregión Ca-

mexca es el de las migraciones.

La sola resistencia a los procesos de integración que responden a los intereses de los EUA no puede ser la esencia de las relaciones entre los movimientos sociales de la región.

Deben discutirse y definirse formas de acción regional y mecanismos de relacionamiento entre movimientos sociales, ONGs y partidos políticos a nivel latinoamericano. Es muy importante superar el desinterés que claramente expresan estos actores en la agenda de integración regional, en correspondencia con similar situación existente a nivel de los pueblos latinoamericanos.

Las relaciones internacionales de los diversos actores sociales y políticos resultan fundamentales para agregar la dimensión regional a su visión política.

Es importante tener presente que las luchas nacionales se fortalecen cuando se vinculan a articulaciones regionales.

Guatemala, 30 de Diciembre de 2007.

NOTAS

1. CEPAL, “Panorama Social de América Latina. 2006”, 1º. Edición, Santiago de Chile, febrero de 2007, Pág. 20.
2. CEPAL, Ob. Cit. Pág. 21
3. CEPAL, Ob. Cit. Pág. 20.
4. CEPAL. Ob. Cit. Pág. 26.
5. CEPAL Ibidem.
6. Cada vez que se encuentre un entrecomillado, la referencia bibliográfica son los respectivos informes nacionales que sirvieron de base para elaborar el presente trabajo.

5. INFORME SUBREGIONAL: PAÍSES ANDINOS



I. EL MAPA DEL CONFLICTO Y SUS RESOLUCIONES

Si uno se imagina a los países de América Latina como una suerte de cadena volcánica, es evidente que la zona que muestra una “mayor actividad” es, justamente, la andina. Ahí se concentran, más allá de toda opinión, los procesos políticos más radicales y al mismo tiempo más conflictivos de la región (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Ahí, igualmente, se expresa lo que se ha llamado hoy día el regreso (nos preguntamos si algún día se fue) del llamado populismo en América Latina. Finalmente, es en esta zona donde se encontraría el proceso más radical, algunos dirían más democrático, de la región: el socialismo bolivariano del siglo XXI o socialismo venezolano con su propuesta de Partido Único.

A estos datos hay que añadirle otros igualmente importantes. En la sub región andina es donde se han producido más reformas políticas que en el resto de países de América Latina. En 1989, en Venezuela y Perú, se dieron inicio a procesos de regionalización y descentralización política. En 1994, Bolivia inicia un proceso de descentralización vía la municipalización. En 1991, en Colombia se instaló una Asamblea Constituyente. Lo mismo sucedió en Perú, previo golpe de Estado, al año siguiente. En 1998, en Ecuador, luego de la caída del Presidente Bucaram en 1997, también se instaló una Asamblea Constituyente. En el año 2003, en Colombia se aprobó una reforma política que buscaba subsanar los excesos de la Constituyente del 91¹. Actualmente en Bolivia viene funcionando una Asamblea Constituyente. En setiembre el Ecuador elegirá también una Asamblea Constituyente, luego que se aprobara su convocatoria mediante una consulta popular meses atrás.

De otro lado, en el año 2000, el Presidente ecuatoriano Jamil Mahuad fue obligado a dejar la presidencia, y Alberto Fujimori, Presidente en el Perú, renunció y se fugó a Japón. Años después renunciaron a sus cargos o fueron destituidos, los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005) de Bolivia, y Lucio Gutiérrez (2005) de Ecuador.

A estos acontecimientos hay que agregarle otros que se dieron en el campo de la economía. Fueron en dos países andinos, Bolivia (1985) y Perú (1990), donde se aplicaron los programas de ajuste económico y las reformas neoliberales más de radicales en la región², que sin embargo no han resuelto, como prometieron sus impulsores, superar la pobreza y lograr el bienestar para todos; muy por el contrario se han acentuado las brechas y diferencias sociales. De otro lado, Ecuador es el único país en América del Sur que ha dolarizado su economía en al año 2000. A ello hay que sumarle que Perú y Colombia, en poco meses, podrían estar suscribiendo un Tratado de Libre de Comercio (TLC) con EEUU³.

Paralelo a estos hechos, en todos los países andinos, desde finales del 2005 y durante el año 2006, han tenido lugar procesos electorales para elegir presidentes, congresistas, autoridades regionales y locales; asimismo constituyentes. A lo que hay que sumar la reciente consulta popular en Ecuador para aprobar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Y si a todos estos cambios y procesos electorales, le añadimos el nacimiento de importantes movimientos indígenas (Bolivia y Ecuador) así como el aumento de los movimientos sociales, es claro que es en la sub región andina donde se ha presentado una mayor actividad política, pero también donde se han procesado una mayor cantidad de cambios políticos, económicos y culturales.

Es por ello, que algunos analistas y estudiosos han comenzado a señalar que la zona andina tendría un sello propio en América Latina; es decir, una suerte de especificidad que determina o define lo que hoy viene sucediendo en cada uno de estos países. No es el caso señalar en extenso las razones de esta especificidad, sin embargo, es importante anotar algunas de ellas⁴:

- a) La crisis del Estado es mayor en los países andinos, particularmente en Ecuador, Bolivia y Perú.
- b) La pobreza en la sub región andina no sólo ha crecido; también tiene un color, un sello étnico⁵.
- c) El tema de la desigualdad se ha convertido en un hecho público que define comportamiento y actitudes políticas.
- d) La crisis de representación es mayor que en el resto de América Latina.
- e) La crisis en algunos países andinos pone en cuestión la unidad territorial de esos países.
- f) La desafección política aumenta mientras que disminuye el apoyo a la democracia.
- g) La crisis del modelo económico basado en el ajuste estructural

De otro lado, podemos afirmar que los principales “problemas” que hoy enfrentan las diversas sociedades andinas es cómo incorporar a nuevos sectores (sociales, económicos, políticos y étnicos) a la democracia, pero sobre todo al ejercicio mismo de una democracia institucionalizada, pluricultural y diversa capaz de soportar una alta conflictividad consecuencia de un cambio de orden social y del sistema política. América Latina –y, también, la sub región andina- está concluyendo un largo ciclo pendular⁶, compuesto por dos momentos, que corresponden a su vez a dos períodos internacionales: el momento populista y el momento neoliberal. Y si bien ambos son distintos, es posible afirmar que tienen problemáticas similares: cómo nos insertamos al mercado mundial y cómo incluimos a más ciudadanos. Vivimos, pues, un momento excepcional al concluir (o estar concluyendo) este ciclo largo y en el cual los avances logrados -que hoy se expresan en las mejoras de la democracia electoral y en la aparición de nuevos actores sociales y políticos- son consecuencias de procesos de inclusión política en casi todos los países de América Latina⁷.

Por eso no es extraño, en este nuevo contexto, que uno de los problemas cruciales y que define, en cierta manera, los procesos nacionales en la casi totalidad de los países andinos, es la creación y conformación de nuevas mayorías nacionales capaces de darle sentido y una nueva legitimidad tanto a un nuevo orden social como a un nuevo sistema político que emerge al concluir este ciclo largo. El proceso boliviano, en ese sentido, es el más interesante porque en ese país hay el intento de crear una suerte de autorepresentación de los sectores populares, incluir a los sectores indígenas y cambiar un orden social a todas luces injusto, desigual y excluyente.

No es extraño, revisando los informes nacionales, que en casi todos los países andinos encontremos tres características centrales: a) alta conflictividad y presencia de una gran diversidad de sectores sociales en estos conflictos; b) cuestionamiento a la propia democracia (representativa) y al modelo neoliberal; y c) el “agotamiento” de partidos y de formas de representación.

Si se observa bien la mayoría de informes (Venezuela, Ecuador y Bolivia), hablan de cambios drásticos, de “mudanzas conflictivas”, de transición hacia algo nuevo. Asimismo, en la mayoría de ellos la palabra “agotamiento” es usada con mucha frecuencia. En todos los países andinos se habrían “agotado” los viejos sistema de representación. Como dice una de las entrevistadas: los partidos no tienen el monopolio de la representación societaria. Asimismo, el modelo de desarrollo calificado de neoliberal también se habría agotado. La idea es que se vive una época de cambios profundos que ha significado el cuestionamiento, entre otros puntos, de la democracia representativa, pero también la emergencia, aparente⁸ de otros nuevos temas: la democracia participativa y hasta incluso la revolución.

Sin embargo, una atenta mirada de estos mismos informes nacionales, muestra claramente que uno de los temas que organiza los distintos discursos de los entrevistados es la construcción de nuevas mayorías políticas en cada uno de los países andinos⁹. Y si bien se puede señalar que estas mayorías son distintas, tanto en la manera cómo se construyen y desde dónde se construyen y hasta, incluso, el signo ideológico que tienen¹⁰, lo que importa señalar es que la existencia de una nueva mayoría conduce necesariamente a la idea de un cambio radical o, si se prefiere, de un cambio del orden social y político. Por eso, la característica principal de los países andinos es el cambio o reforma.

De ahí, como hemos señalado líneas arriba, es que se hable de mudanza, transición, revolución, agotamiento, etc., es decir, palabras todas ellas que evidencian, como muestran los entrevistados y los informes, estaríamos entrando o viviendo un nuevo ciclo político.

Por eso la conflictividad, pero también las disputas, en la mayoría de países (Venezuela, Ecuador y Bolivia) tienen como uno de sus signos emblemáticos la polaridad y como dice el informe venezolano “un reacomodo profundo de las fuerzas de poder”. Se puede afirmar, en este contexto, que casi todo, por no decir todo, esta debate. De ahí también la

sensación de que se ha iniciado una transición o un “momento irreversible, de no retorno”, definido, para el caso ecuatoriano, por la incertidumbre y para el caso venezolano como una “mudanza conflictuada” y conflictiva del viejo orden.

En este contexto, las movilizaciones ciudadanas, incluyendo la de los movimientos sociales y las actividades de la ONGs, tienen un reto por delante: cómo contribuyen a fortalecer, ampliar y profundizar la democracia y, al mismo tiempo, a cambiar el modelo de desarrollo. Y en este punto se observa que en varios países (Ecuador, Perú y Colombia) lo que caracteriza a estas movilizaciones es su fragmentación y dispersión. Como bien dice el informe de Ecuador hay “un movimiento por cada causa ya que los ciudadanos no se encuentran ni identificados ni representado en las actuales estructuras partidarias”.

Se puede decir que seis son los temas que organizan el conflicto y lo que se llama las principales disputas:

- a) Las que se derivan de la crisis del sistema de representación producto del agotamiento del mismo, es decir, en términos ecuatorianos la pelea contra la llamada “partidocracia”. Hay que señalar que esta crisis es producto de la politización de los movimientos sociales, del nuevo rol de los medios de comunicación y de la propia crisis de los partidos al no poder representar esta nueva realidad social.
- b) Las que se derivan de la crisis del modelo económico. En este punto los temas son los recursos naturales, la pobreza y la desigualdad.
- c) Las que se derivan de la crisis del Estado. En este punto el tema qué tipo de Estado queremos construir.
- d) Las que se derivan del proceso de globalización: qué tipo de inserción queremos al mercado mundial y qué tipo de integración regional y sub regional buscamos.
- e) Las que se derivan de los llamados “déficit” democráticos: qué democracia queremos construir¹¹.
- f) Las que se derivan de las propuestas de inclusión. Este punto no sólo guarda relación con el tema de la exclusión y la desigualdad sino también con el de las identidades nacionales y sociales. La idea es que los sectores que buscan su inclusión lo hacen a partir de una identidad determinada, piénsese en los movimientos indígenas. De ahí que el tema de la inclusión es un tema que más va más allá de la inclusión política y/o electoral al plantearse una inclusión social y cultural. Ello, por lo tanto redefine los contornos de la vida social y de la propia cotidianidad, es decir, una nueva forma de convivencia.

UNA BREVE DIGRESIÓN: EL ASUNTO DE LAS NUEVAS MAYORÍAS, RADICALISMO Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN LA REGION

Hace unos meses Manuel Antonio Garretón, en un artículo publicado en el diario argentino El Clarín (25/02/07), señaló que lo que viene sucediendo en Venezuela: “afianzar el

socialismo de la llamada revolución bolivariana y posibilitar la reelección indefinida” de Hugo Chávez, “vuelve a poner un tema que se suponía superado desde la discusión sobre el eurocomunismo, la Unidad Popular en Chile y el derrumbe de los socialismo reales: las relaciones entre democracia y socialismo”.

Para Garretón, los dos primeros temas (el debate sobre el eurocomunismo y la experiencia de la Unidad Popular) “dejaron zanjado que la democracia representativa era el régimen político propio del socialismo (cursivas del autor)” y que, por lo tanto, la izquierda “abandonaba otros modelos como el del partido único”. Este mismo autor sostiene que los procesos de transición a la democracia, luego de años de dictadura militares, “no hicieron sino consolidar esta doctrina”.

De otro lado, las “caídas de los socialismos reales” abrieron las puertas para que las llamadas terceras vías “mostraran el carácter claramente democrático de las izquierdas y su carácter corrector del neoliberalismo”. Para Garretón, uno de los problemas fue que estas apuestas por las terceras vías “no lograron estructurar una alternativa propiamente socialista tanto en la capacidad utópica-movilizadora como de superación del capitalismo en la globalización”.

Hoy en Venezuela, pero también en otros países, se siente una suerte de aparente “revival” (o renacimiento) que nos estaría llevando, palabras más palabras menos, a la retórica de los años sesenta y setenta. Que hoy se discuta en Venezuela la posibilidad de un socialismo del siglo XXI, de un “partido único” de la revolución, la fusión entre nacionalismo y socialismo y, hasta incluso, de un cristianismo progresista, son claras muestras que ese “zanjamiento” entre “democracia socialista” y “democracia representativa” del cual habla Garretón, no se dio y si se dio, fue más bien frágil, pasajero y en pocos países. Y en lo que respecta a la adscripción a la “tercera vía”, ésta también fue reducida y con poca fortuna política en nuestra región, pese al entusiasmo inicial que generó en algunos sectores de izquierda.

Por eso, se le puede criticar a Garretón que su visión no sólo sea, digamos, “chileno-céntrica”, muchos de los procesos de los que habla se han dado en Chile principalmente, sino también incompleta porque no toma en cuenta, por ejemplo, el nacimiento en la década de los noventa del “zapatismo” en México o de los movimientos sociales e indígenas en los países andinos y en Guatemala, también en esos años, en otros países de la región, se cuestionaba la “democracia representativa” y se planteaba superar –y no corregir– el neoliberalismo. El asunto, por lo tanto, es más complejo y más diverso

La pregunta, en este contexto podría ser la siguiente: por qué las fuerzas políticas que quieren transformar el orden, sobre todo en la subregión andina recurren, por lo general, a lo que podemos llamar una “caja de herramientas” de los años sesenta y setenta. Dicho en términos más simples: por qué es tan difícil que aparezcan fuerzas “reformistas” en algunos países andinos, defensoras de la democracia representativa, correctoras del neoliberalismo y promotoras de la tercera vía. Y sí surgen más bien fuerzas partidarias de cambios

drásticos y hasta promotoras de la revolución. A ello hay que sumarle otro dato: la agenda política que plantean estos movimientos de cambio, más allá de la opinión que se tenga de ellos, también tiene un aire de familia con las agenda de los años sesenta y setenta: nacionalización de recursos naturales, antiimperialismo, democracia participativa, etc. En suma, por qué lo aparentemente viejo no quiere morir y lo aparentemente nuevo, como es este reformismo político y económico, no puede nacer¹² y convertirse en la regla política –y no en la excepción– en la región.

Lo primero que habría que hacer, para cuando menos intentar entender lo que viene sucediendo en la sub región andina, es dejar de llamar a estos gobiernos “populistas” como si dicho calificativo fuese una suerte de estigma político, sinónimo de fracaso seguro y de autoritarismo. Ello, además de discutible académicamente, repite esas viejas posturas de la izquierda, en ese tiempo la de los comunistas, y también la de los liberales y de sectores de la oligarquía cuando insurgieron a la vida política los llamados movimientos nacional- populares (o populistas) hace varias décadas en América Latina. Como sabemos, estas posturas terminaron por alejar a los críticos del populismo de las masas populares y convertir a estos movimientos nacional-populares en una suerte de representación monopólica de estos mismos sectores populares que dura hasta ahora y que impide el nacimiento de izquierdas y derechas, pero también de liberales y demócratas como sucedió en el Perú y en otros países andinos¹³.

Si se observa bien, han sido estos partidos nacional-populares los que, según los distintos contextos, han ocupado los espacios de la derecha o de la izquierda del espectro político, desplazando así a otras fuerzas de esos mismos signos. El “menemismo” fue el peronismo de derecha en los noventa como hoy el “kirshnerismo” es el de izquierda en la Argentina. Algo parecido se puede decir sobre el APRA y Alan García en el Perú. En la década de los ochenta representaron posturas progresistas y hoy de derecha.

El resultado de todo ello ha sido un sistema político poco institucional no sólo por el “predominio político”¹⁴ de estos viejos partidos “populistas” en la vida nacional sino también y sobre todo porque las claves de la política no apuntaban, como dice Garretón a asignar “a los mecanismos institucionales, las normas democráticas y su espíritu, un carácter intangible por encima de las mayorías políticas que siempre son circunstanciales” sino más bien a resolver otros problemas, no necesariamente vinculados a la democracia representativa, como la igualdad, la identidad nacional y la pertenencia a una comunidad política nacional, en los cuales la necesidad y el uso de una mayoría política y/o electoral y de un “momento fundacional”, es un asunto de vital importancia.

En estos casos la “cuestión social”, es decir los temas vinculados a la igualdad y a la justicia (legal y distributiva), terminan por subsumir a los temas vinculados a la “cuestión política”, es decir, del autogobierno y a la democracia. En nuestras sociedades, por lo general, ambas “cuestiones” han marchado por separado expresando así esta vieja contradicción entre el ethos liberal (libertad) y el ethos democrático (igualdad).

Por esos en nuestros países las democracias representativas antes que “representativas” deben ser más “democracias”, es decir, propiciar la igualdad y la justicia para que sean, justamente, representativas.

No es casual que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador sigan hoy día un mismo patrón político que se puede resumir en la convocatoria a una Asamblea Constituyente como una forma o mecanismo para construir una nueva mayoría política. Y si bien se puede afirmar que existe una evidente influencia de la experiencia venezolana en los actuales procesos de Bolivia y Ecuador, ello no elimina la necesidad propia a estos gobiernos de construir una nueva mayoría política, electoral y social, para cambiar el orden en sus países.

No hay que olvidar que estos nuevos radicalismos, por llamarlos de algún modo, se han desarrollado luego de la ola neoliberal que “asoló” nuestra región en las décadas ochenta y noventa. Esta ola significó una crisis mayor del Estado por las políticas de desregulación económica, privatización de las empresas públicas y una menor responsabilidad social frente a la sociedad; un mayor desarrollo de un capitalismo globalizado que, como se ha dicho más de una vez, integra al país al mercado mundial global pero lo desintegra internamente al aumentar la desigualdad, la pobreza y la informalidad de la fuerza de trabajo; una mayor precarización de la democracia por el control de los grupos tecnocráticos y de los poderes fácticos del quehacer estatal; y, finalmente, una mayor exclusión que incrementó la sensación de desarraigo y no pertenencia a una comunidad política nacional.

Dicho en otras palabras y guardando toda distancia, la ola neoliberal planteó problemas similares a los que enfrentó el viejo populismo de los años treinta y cuarenta. Por eso como hemos dicho líneas arriba, las claves de la política poco tenían que ver con el fortalecimiento de la democracia representativa y sí más bien con lucha contra un orden injusto, crecientemente desigual y excluyente en el cual la idea de pertenencia a una nación y a una comunidad está severamente cuestionada.

Por eso el radicalismo que se vive en algunos países de la región no es un hecho fortuito o arbitrario; tampoco obra de caudillos o líderes “ególatras” o “megalómanos” sino más bien producto de complejos procesos que en un momento determinado salen a la superficie y que expresan demandas inclusivas, pero también en propuestas de cambio de orden social.

En ese sentido, la radicalidad del ciclo proviene no porque se ejerza o se predique una práctica aparentemente extrema sino más bien porque los temas que se plantean resolver en este ciclo, van a la raíz de viejos problemas y, por lo tanto, suponen la reconfiguración de todos los espacios que integran un orden social: económico, político, cultural e internacional.

En realidad, como hemos señalado líneas arriba, lo que muestran todos estos cambios y procesos, son los intentos de una nueva convivencia en cada uno de los países.

HACIA UNA NUEVA AGENDA

Sin ánimo de agotar esta discusión podríamos decir que los temas de esta nueva radicalidad y que están contenidos en los diversos informes nacionales podrían ser los siguientes:

- La construcción de una democracia mas ciudadana y participativa
- La construcción de un Estado democrático (descentralización, participativo, fiscalidad, poder judicial y administración publica);
- Identidad e integración nacionales;
- La propiedad de los recursos naturales;
- La pacificación del país (Colombia y Perú).
- La construcción de nuevas formas de representación, esto es de un nuevo sistema de partidos, pero también de nuevas prácticas políticas democráticas y participativas; y
- la integración subregional andina y regional frente al proceso de globalización, a la firma de los tratados de libre comercio y al dilema de bilateralismo o multilateralismo.

Cada uno de estos puntos, en mayor o menor medida, expresan la conflictividad y las principales disputas en los países andinos. De la manera cómo se resolverán cada una de ellas determinará el rumbo de cada uno de los países.

II. LA SUBREGIÓN ANDINA: ANÁLISIS DESDE LOS PAÍSES

Esta segunda parte del informe sub regional andino es resultado del análisis de los informes nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela elaborados a partir de entrevistas a algunos líderes sociales en cada uno de estos países. Como podrá verse, en este acápite se analiza a los actores sociales y políticos que protagonizaron e intervinieron en las movilizaciones sociales más resaltantes del año 2006. Es un análisis de sus prácticas, sus demandas, sus logros y dificultades, así como las alianzas que fueron capaces de establecer con otras organizaciones a nivel local, nacional e internacional. Cabe resaltar que se trata prácticas sociales de cinco realidades que, aún cuando guardan elementos comunes, responden a ciertas particularidades propias del proceso político por el que están pasando. En estos procesos el papel del Estado frente a las movilizaciones sociales - de apoyo o freno según el caso- resulta clave para comprender la potencialidad de estos movimientos para el cambio en la sub región.

Se plantea que en la sub región andina aún predominan los movimientos de alcance local y/o regional antes que los

grandes movimientos nacionales, salvo el caso de Bolivia. Sin embargo su potencial radicaría en los actores que las lideran, y en las amplias alianzas y redes que logran tejer con otras organizaciones sociales y algunas ONG que les permite suplir la escasez de recursos de algunas de ellas. Una constante en los movimientos sociales del área andina es su desconexión con los partidos políticos debido, entre otras razones, a la deslegitimidad de éstos.

Con este análisis, se pretende contribuir a comprender la potencialidad de los movimientos sociales andinos en la construcción y el desarrollo de la democracia y el cambio social en América Latina, mostrando sus fortalezas y sus debilidades desde la perspectiva de sus propios actores.

1. LOS ACTORES EN MOVIMIENTO

En los diferentes tipos de movilizaciones que se han realizado en el escenario sub regional andino durante el año 2006, han participado los más diversos actores sociales: urbanos y rurales, hombres y mujeres, trabajadores y estudiantes, de sectores populares y de clase media, campesinos indígenas y gremios empresariales, grupos étnicos y con identidades sexuales diversas, pobladores y desplazados, miembros de organizaciones políticas y civiles, entre otros.

En medio de esa diversidad algunos actores han sido más protagónicos que otros. Las organizaciones sociales, entre las cuales destacan las de indígenas, campesinos, pobladores rurales, pueblos originarios, étnicas, agrarias, vecinales, de mujeres, familias de desplazados, víctimas de conflictos armados, alcaldes y asalariados, han sido los principales líderes de las movilizaciones y acciones de protesta de la sub región.

Los protagonistas

A continuación se caracteriza algunos de las organizaciones que protagonizaron las principales movilizaciones sociales del año 2006 en la sub región andina, recogidas a través de los testimonios de los entrevistados en cada uno de los países analizados.

a) Las organizaciones indígenas, campesinas, rurales, étnicas y agrarias

Actores de las principales movilizaciones sociales y acciones de protesta que se presentaron en el área andina, con algunos matices en cada país, a nivel local, regional y nacional sobre todo. Estas organizaciones, a pesar de las diferencias que presentan en cada país, se caracterizan por su capacidad organizativa que data de varios años, algunos desde la década del setenta. Y por la coherencia de su discurso basada en una defensa integral de sus derechos desde los sociales hasta los culturales, pasando por los económicos, políticos y territoriales.

Estas cualidades les permiten, como a pocas organizaciones sociales en el área andina, contar con una mayor capaci-

dad de convocatoria y articulación con otras organizaciones sociales, civiles y políticos. Así como tener mayor incidencia e impacto con sus acciones a favor de sus demandas. En algunos países como Ecuador y Bolivia la actuación de las organizaciones indígenas, campesinas y étnicas ha sido clave para producir cambios políticos y económicos radicales.

En Ecuador, el movimiento indígena está representado por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), y los movimientos ECURUNARI y CONAIE. Según los actores entrevistados, esta organización está atravesando por un momento de crisis y desgaste de su discurso político, producto de varios años de lucha por demandas que han ido más allá de su ámbito.

En el Perú, estas organizaciones están representadas por tres agrupaciones. Una, la de gremios de productores agrarios de arroz, azúcar, algodón, articuladas básicamente a través de foros de análisis y debate, como la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO), el Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios (CUNGA). Dos, las comunidades campesinas y poblaciones rurales (y urbanas) afectados por la actividad minera, aglutinados por un lado, bajo la Confederación Nacional de Comunidades Campesinas (CONCAMI), y por otro, en el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), integrada además por alcaldes de localidades afectadas por la minería y dirigentes de comunidades campesinas y ronderos de la sierra norte del país. Todas cuentan con redes de articulación a nivel regional y nacional aunque no tienen el mismo alcance al nivel de su representación política ni simbólica.

En Venezuela, la reivindicación indígena ha estado organizada desde una entidad civil¹⁵ una propuesta del oficialismo para la organización del sector campesino, y desde el Parlamento a través de algunos diputados.

Bolivia es quizás el único caso donde los campesinos, hombres y mujeres, indígenas, y los pueblos originarios indígenas están organizados a nivel local, regional y nacional, incluso apoyados en redes internacionales, y que se expresan en partidos políticos uno de los cuales está actualmente en el poder. Específicamente nos referimos a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fundada en 1979, la más antigua de todas, de alcance y cobertura nacional. Actualmente se encuentra fraccionada en dos bloques, uno liderado por el MAS, el partido de gobierno, y otro más distante y crítico concentrado en La Paz. Por otro lado, están los pueblos originarios organizados alrededor del Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), organización de pueblos originarios de las tierras altas de cinco departamentos (de 9) del país; y de la Confederación de Pueblo Indígenas de Bolivia (CIDOB) que agrupa a los indígenas de las tierras bajas de 7 departamentos.

En Colombia algunas de las movilizaciones indígenas han contado con el apoyo de organizaciones campesinas como los cultivadores de coca, grupos afrodescendientes y afrocolombianos, sindicatos agrarios y medianos agricultores, entre otros. Es del caso mencionar a la Asociación Nacional

por la Salvación Agropecuario, la Convergencia Nacional Campesina, Indígena y Afrodescendiente, en las que destacan la ONIC y FENSUAGRO y organizaciones indígenas y campesinas de varias zonas del país. A diferencia de los demás países andinos, en el caso colombiano el contexto de violencia política que se vive en el país, producto de la persistencia del conflicto armado, es un factor que influye en las reivindicaciones sociales de estos grupos.

“...toda la gente está en contra del narcotráfico, el narcotráfico no es sólo en el Putumayo; pero cuando se dan las movilizaciones, por la propaganda de difusión que el gobierno hace, ellos sienten que las movilizaciones es la guerrilla, entonces crea una situación muy complicada de señalamiento. Por eso mismo no se dan las movilizaciones, porque son reprimidas, son macartizadas y finalmente el gobierno si tiene unos elementos para reprimirlas que no es solamente con la policía y el ejército de frente sino que están bien, selectivamente en los caminos, en las viviendas” (Heraldo, campesino del Putumayo, Colombia).

b) El movimiento de mujeres

También las mujeres han sido protagonistas centrales de algunas de las movilizaciones no sólo vinculadas a la temática de los derechos de la mujer sino también a la defensa de la democracia representativa. En Bolivia la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” es una organización de alcance nacional, en base a federaciones departamentales y otras instancias y varias de sus integrantes fueron elegidas miembros de la Asamblea Constituyente. En Colombia el movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres ha protagonizado movilizaciones en en defensa de los derechos humanos, la reparación de las víctimas y en apoyo a otras organizaciones en contra del TLC con EE.UU.

c) Las organizaciones vecinales y de pobladores urbanos

La organización de vecinos y la Central Obrera Regional de El Alto, en Bolivia, han sido actores principales en 2003 de la “guerra del gas” en ese país. Tienen un alto grado de organización e identificación territorial. Tienen importante poder de interlocución con el Estado y con otras instituciones; actualmente ejerce una labor de vigilancia y control del gobierno debido a su cercanía geográfica con la sede de gobierno. En Colombia, los pobladores urbanos protagonizaron el mayor número de protestas durante el año 2006¹⁶, principalmente las de carácter nacional. Una de las más importantes fue el movimiento ciudadano del barrio Carlos E. Restrepo que desde el año 2003 viene luchando por la defensa de la ciudad como espacio público.

d) Otras organizaciones sociales

En la sub región han sido diversos los actores involucrados en las movilizaciones y acciones de protesta realizadas. En este grupo tenemos a gremios laborales de trabajadores urbanos, grupos con identidades sexuales distintas, familias de desplazados por la violencia interna, autoridades

locales, sectores populares y clase media.

Los gremios laborales de trabajadores urbanos y sindicatos de diferentes ramas, han protagonizado algunas acciones de protesta vinculadas a demandas laborales y, en algunos casos, a temas de la agenda nacional como la negociación del TLC con EE.UU, la soberanía nacional y la reelección presidencial. La Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), integrada por alrededor de 120 alcaldes de municipios rurales y campesinos, lideró las principales acciones de incidencia y promoción del proceso de descentralización en este país. En Colombia, los grupos con diversidad sexual y los desplazados por acciones de violencia, han participado activamente en protestas puntuales en demanda de marcos normativos relacionados a los gays y transexuales, por un lado, y a las reparaciones civiles, por el otro. Las clases populares y medias han protagonizado las principales manifestaciones de protesta a favor y en contra, respectivamente, del gobierno venezolano y sus decisiones políticas.

e) Las instituciones civiles

Algunas de las movilizaciones del área andina han estado protagonizadas por instituciones civiles vinculadas al desarrollo y al cambio social. Su participación ha sido de manera individual pero sobre todo a través de redes y colectivos que han fungido además de espacios de debate y de reflexión, en el escenario de las movilizaciones.

En Venezuela, está el caso de SINERGIA, red de 37 ONG de desarrollo social que desarrolla trabajos de promoción a nivel nacional y que promovió una labor de incidencia frente a una norma para regular a los organismos de cooperación internacional. También del movimiento Clase Media en Positivo, una organización con fines de “divulgación y soporte de los principios constitucionales” apoyados por el gobierno y cuya presidenta es diputada oficialista. Su participación en una movilización a favor de los derechos de la mujer la hizo destacar en el 2006. En Perú, Foro Salud, definida como un “foro de la sociedad civil” fue constituida en el año 2002 e integra a ONG y líderes organizados a nivel regional. Ha liderado campañas y movimientos a favor de políticas públicas de salud y ha participado de órganos consultivos a nivel regional. En Colombia, las organizaciones civiles junto a las organizaciones sociales y políticas formaron la Gran Coalición Democrática para oponerse a la reelección presidencial, la firma del TLC y las privatizaciones, entre otros temas.

Los aliados

Los principales aliados de los movimientos sociales han sido los organismos no gubernamentales y las entidades privadas, principalmente organizados en redes nacionales, regionales e incluso internacionales. Su apoyo es básicamente de promoción, asistencia técnica e incidencia política a favor de organizaciones sociales vinculadas al tema en que focalizan su trabajo de desarrollo. También ha sido clave el apoyo de otras entidades tales como la Iglesia católica, las Universidades, los Municipios y algunos líderes locales, principalmente alcaldes y parlamentarios vinculados a organizaciones polí-

ticas de izquierda o progresistas.

Los partidos políticos y los medios de comunicación han sido los grandes ausentes en estas movilizaciones salvo algunas excepciones como algunas agrupaciones de izquierda, de base indígena y algunos medios de comunicación.

a) Las ONG

El apoyo de las ONG se manifiesta en actividades de apoyo y acompañamiento a las organizaciones sociales en el desarrollo de sus movilizaciones. Su aporte radica en la especialización que han logrado en el conocimiento de determinados temas, la estructura organizativa con la que cuentan a través de las redes en las que algunas están insertas, y su capacidad de articular campañas y relaciones con los medios de comunicación, por lo que destacan el apoyo técnico brindado a los actores sociales. También destaca su trabajo en la promoción y desarrollo de potencialidades en materia de liderazgos, capacidad de elaborar propuesta y de movilización en los actores sociales involucrados.

b) Otras organizaciones sociales

El apoyo de otras organizaciones sociales y civiles, cuyas demandas eran más sectoriales y vinculadas a sus gremios, ha sido estratégico para algunas movilizaciones, particularmente aquéllas de alcance nacional o regional, y orientadas a temas de la agenda nacional. Organizaciones como el gremio de trabajadores sindicalizados y asalariados, los estudiantes universitarios y pobladores urbanos son algunas de las que más apoyo brindaron a las movilizaciones y acciones de protesta de otros grupos sociales.

c) Los partidos políticos

La práctica caudillista y el interés meramente electoral, son algunas de las razones esgrimidas para no buscar alianzas con estas organizaciones. Es del caso mencionar que los procesos políticos que se viven en tres países de la sub región, orientados a una democracia más participativa que representativa, y el propio alejamiento de los partidos de los intereses de la población, ahondan este distanciamiento.

Sin embargo, se destaca la presencia de unos cuantos partidos políticos -aunque también con matices- vinculados al pensamiento progresista en algunas de las movilizaciones estudiadas. En algunos casos se trata de partidos de ideología socialista y de izquierda o vinculados en sus orígenes con las organizaciones sociales y populares. También, algunas organizaciones sociales han construido sus propios instrumentos políticos, sea a nivel local, regional o nacional, como medio para acceder al poder. Es el caso del MAS en Bolivia, instrumento político del movimiento indígena campesino y hoy en el poder¹⁷. La participación también del partido de gobierno en Venezuela en los movimientos populares de apoyo al Estado, es otro matiz en la sub región. En estos países destaca también el apoyo de partidos de oposición en algunas movilizaciones de protesta contra el gobierno,

agudizando los conflictos internos y la polarización en estos países.

En algunos casos, el apoyo político se ha restringido a la presencia de liderazgos de personalidades y autoridades, sobre todo del gobierno local o de los parlamentarios. En Perú, los alcaldes de las zonas rurales y del interior del país fueron los principales aliados de los movimientos en contra de las grandes mineras, y también de los movimientos en favor de la descentralización y participación ciudadana en el gobierno local. En Venezuela, se destaca el apoyo de un líder político representante del partido de oposición Un nuevo tiempo, por su actividad política opositora a gobierno; y el de una académica feminista, activista en defensa de los derechos de las mujeres, y que participó en el enfrentamiento con la Fiscalía General de la República por la suspensión de medidas cautelares para las mujeres.

Las demandas de las movilizaciones

La mayor parte de las movilizaciones referidas plantean demandas específicas vinculadas a la defensa de sus derechos, tales como los relacionados con su economía, su territorio, su medio ambiente, su salud, su trabajo, sus recursos, como al cumplimiento de acuerdos con la autoridad. Son demandas que articulan movilizaciones más acotadas en el espacio y en el tiempo. Su nivel de convocatoria es restringido al ámbito local o regional, y limitada a las organizaciones directamente involucradas que, en algunos casos, logran articular redes o espacios de convergencia con otras organizaciones sociales y entidades de intereses similares.

Por otro lado, las demandas nacionales que han motivado algunas movilizaciones se refieren a temas que pertenecen a la agenda pública del país, puestas en la mayor parte de los casos por los representantes y el partido de gobierno, y en otra, por los mismos actores sociales. Las demandas nacionales son principalmente temas de la agenda política y los recursos naturales, vinculadas a la soberanía, la participación y la alternancia en el poder y la democracia.

Por su naturaleza, podemos agrupar las demandas de los actores en cuatro ejes: sociales, económicas, territoriales y políticas. Las demandas económicas han estado referidas a mejores políticas de promoción y protección a sus productos; mejoras salariales y, derecho a los beneficios de la explotación de los recursos naturales. Las demandas sociales se han referido a la defensa de los derechos de los pueblos (urbanos, rurales, campesinos, indígenas, desplazados, etc) a la salud, al medio ambiente, a la paz y a la vida; o la defensa de los derechos de las mujeres, de los gays y de los afectados por la violencia. Las demandas territoriales, se han concretizado principalmente en los recursos naturales como el agua y la tierra, en el uso de los espacios y el derecho a la vivienda; han motivado grandes movilizaciones a nivel local, regional y nacional.

Las demandas políticas se refieren a los derechos de participación de los actores en espacios de decisión y gestión

política, tanto aquellos que buscan crear nuevos espacios como quienes buscan consolidarlos. Aquí destacan las movilizaciones de apoyo y de oposición al gobierno respecto a temas de agenda política como la reelección presidencial, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, las demandas por autonomías regionales, la reducción del centralismo y del caudillismo político, el proceso de descentralización y la participación ciudadana en la gestión de su desarrollo y en la vigilancia de sus gobiernos.

Por otro lado, existen movilizaciones cuyas demandas no solo han sido específicas sino también coyunturales, en reacción a decisiones tomadas por el gobierno o debido al contexto vivido. Son las denuncias levantadas frente a iniciativas legales del gobierno, como algunas modificaciones a la Constitución o nuevas normas que atentan contra los intereses o derechos de los actores movilizados, o casos de corrupción en el gobierno. Es el caso del movimiento alrededor de la ley de regulación de los organismos de cooperación en Venezuela; la Ley de la Tierra en Bolivia; la negociación del TLC con EE.UU. en Perú y Colombia; la ley sobre el aborto en Colombia; y la suspensión de medidas cautelares contra los agresores de las mujeres también en Venezuela.

Resultados de las movilizaciones

Las movilizaciones con mayores resultados han sido aquéllas vinculadas a la recuperación del control sobre los recursos naturales por los procesos de privatización de anteriores años, vinculados a la soberanía nacional; cambios en la propiedad, acceso y gestión de los recursos naturales como la tierra y recursos forestales; el freno a la política neoliberal ha sido uno de los principales logros de las movilizaciones en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela. Las protestas en contra de la firma del TLC con Estados Unidos no tuvieron el efecto esperado ni en Colombia ni en Perú, debido a la prioridad que tiene este tratado en cada uno de estos gobiernos.

También han sido relativamente exitosas las movilizaciones en defensa de los recursos naturales y el derecho de los pueblos rurales y campesinos a opinar sobre la explotación de su territorio. Es el caso de las luchas por la tierra y el agua en Bolivia, aunque aún son temas de agenda y negociación. En el caso de la defensa de los derechos de los pueblos afectados por la minería, en Perú, si bien no se trató de una movilización nacional sino más bien local, logró la mayor parte de sus objetivos al frenar la expansión de la actividad minera en sus territorios y, en algunos casos, llegar a acuerdos para regular la disponibilidad de sus recursos.

Las movilizaciones con demandas políticas lograron la mayor parte de sus objetivos. Aquéllas que demandaban mayores espacios de participación política lograron, en la mayoría de los casos, polarizar el escenario político y electoral; la oposición se abrió espacio en contextos como el boliviano y el venezolano. Las movilizaciones indígenas y campesinas en Ecuador y Bolivia obtuvieron sus mayores logros al ingresar al espacio del poder; en el segundo caso, a través de un instrumento político como el MAS. Los movimientos populares en Venezuela, con el apoyo del gobierno, lograron

contrarrestar las propuestas políticas de la oposición.

Por otro lado, las movilizaciones sectoriales o con demandas más específicas han tenido diferentes resultados en la sub región. Algunas lograron resolver sus demandas de manera concreta y en el ámbito local mientras que otras están a la espera de lograrlo, dependiendo de la decisión política de los representantes. Uno de los principales logros de las movilizaciones sectoriales ha sido incidir en la opinión pública sobre la defensa de sus derechos; influir en las corrientes de opinión pública nacional, regional y local; ampliar sus organizaciones y formar liderazgos locales.

En algunos casos, las organizaciones sociales no han logrado obtener los resultados pretendidos con sus movilizaciones, debido en parte a la desigualdad de condiciones y los escasos recursos con los que cuentan, por ejemplo, la falta de acceso a los medios de comunicación. En otros casos, la magnitud de sus demandas, como la incorporación de prácticas ciudadanas más democráticas en las gestiones gubernamentales, impidieron concretar sus logros salvo en el aspecto de la opinión pública. En Colombia, el movimiento ciudadano del barrio Carlos E. Restrepo¹⁸ no logró sus objetivos debido a la falta de voluntad política de sus autoridades.

“Sólo en el aspecto de generación de opinión pública. Por falta de voluntad política de las autoridades de turno que han sido autoritarios al servicio del mercado y del poder del dinero y continúan desconociendo sistemáticamente este tipo de procesos sociales de defensa de lo público”. (Juan Carlos Posada, líder vecinal, Colombia).

2. RETOS PARA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO

En la voz de los actores sociales y dirigentes de las diferentes organizaciones sociales, representantes de los partidos políticos e instituciones, los siguientes son los retos más importantes en orden a consolidar la democracia y el desarrollo en la sub región andina.

a) Superar la exclusión social, política, económica y cultural

La inclusión de todos los ciudadanos en los beneficios del desarrollo social, económico, cultural y político, es uno de los principales retos para fortalecer la democracia en la sub región. Para ello se hace necesario implementar un modelo de desarrollo que beneficie a los que siempre han sido excluidos de la distribución de la riqueza, a los afectados por el modelo de desarrollo neoliberal, y no sólo a unos cuantos grupos sociales y económicos. Este es un reto sobre todo en Colombia y Perú.

“el destino del país tiene que cambiarse con propuestas que procedan no solamente de arriba, de Lima, sino de las bases, quienes tienen que crear su propio modelo de de-

sarrollo...nuestro pueblo podrá cambiar cuando tengamos conciencia de trabajar por su bien, cuando adquiramos conciencia de darle participación a quienes más están sufriendo. Sólo así llegaremos al verdadero desarrollo” (Wilson Ibáñez, FDSFN, Perú).

“El estado que tenemos es el neoliberal (...). Ese estado no le sirve porque aumenta más la concentración de las oportunidades en unos pocos y se democratiza la pobreza. Está más perdido el desarrollo aquí. Impactos democráticos: tienen que haber procesos democráticos, y tiene que construirse el poder democrático y el estado democrático. Un estado que esté al servicio de esos intereses de la sociedad, o de la mayoría de la población que forman la población” (Heraldo, campesino del Putumayo, Colombia).

La inclusión es reclamada en todos los niveles, y en algunos países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, el proceso implica un cambio radical en el marco legal vigente, a través de una nueva Constitución que logre recoger y procesar las propuestas de los diferentes sectores de manera que se garantice su inclusión. Es un reto también que se constituya en un texto que siente bases sólidas para una convivencia equitativa y democrática a partir de la amplia diversidad cultural de las poblaciones.

“una de las primeras tareas que debemos cumplir es la Asamblea Constituyente. Es de conocimiento público que la Constituyente ha sido promovida por estas organizaciones sociales desde hace años atrás solamente que quienes han estado en el poder no han querido ceder. Ahora estamos en ese escenario y lo más terrible va ser cuando realmente se esté conformando artículo por artículo la nueva carta magna” (Florinda Juchani, Bolivia).

“un momento irreversible, de no retorno. En ese sentido, debemos trabajar para tener una constitución que no solo sea el marco jurídico del Estado o el ‘trazado de cancha’ en el que debemos movernos los ecuatorianos, la nueva Constitución debe condensar un proyecto de nación, incluyendo y popular, proyecto que tiene su propio liderazgo en el Presidente Correa” (Carlos Marx Carrasco, Ecuador).

“es evidente que el mismo presidente Chávez ha dicho que incluso es necesario revisar la constitución. Por eso hoy Venezuela, se está planteando, no solamente una solicitud de poderes habilitantes que dio la Asamblea Nacional al Presidente Chávez, sino que además se plantea la revisión del texto de algunos articulados de la constitución para que puedan impulsar con mucha mayor rapidez lo que tiene que ver con este proceso de cambio acelerado” (Jhonny Milano, Venezuela)

b) Democracia con más participación

Otro reto es construir una democracia más participativa que implique promover y consolidar la participación de los actores más afectados por la pobreza y la exclusión, en las diferentes instancias de gobierno. Es decir promover y, en

algunos casos, fortalecer una forma de gobierno con participación del pueblo y para servir al desarrollo del pueblo.

“la participación ciudadana es fundamental en la gobernabilidad, si un gobierno local, un gobierno comunal, no gobierna con su pueblo yo creo que ningún proyecto es sostenible en el tiempo” (Luis Riofrio, CONACAMI, Perú)

“nunca más una democracia sin nosotros (los indios): que en el Estado nadie actúe por nosotros o en nombre de nosotros; los cambios tienen que hacerse con el pueblo, reconociendo la diversidad” (Blanca Chancoso, Ecuador)

“es el reto nuestro superar como país esa cultura política.. hay una conciencia de que el pueblo debe participar, hay unos mecanismos que son la ley de concejos comunales...” (Gabriela Ramírez, diputada, Venezuela).

c) Ampliar la participación política

Un reto más es promover una práctica democrática, ampliando la participación hacia otros sectores de la población que se sienten excluidos de la toma de decisiones y del gobierno, sectores de la sociedad civil. En ese sentido, el reto es abrir nuevos espacios de participación en la política y ampliar el sentido de representación del Estado al conjunto de la sociedad. Superar la polarización, la intolerancia y la lógica de la eliminación del “otro”, sobre todo la intolerancia cultural y regional que ha marcado la cultura política de la sub región:

“reivindicar los espacios democráticos donde sí funcione lo no gubernamental, lo sindical, donde funcione la y las iglesias....mientras que para lo sindical, lo religioso, lo popular, lo campesino, lo étnico, lo estudiantil, etc. Los espacios son mucho más difícil de conquistar y son más difíciles de mantener” ((Esperanza Hermida, lideresa sindical, Venezuela).

“El principal reto que ahorita estamos confrontando para promover la democracia es la polarización que existe y un sentido de eliminación del “otro” totalmente en el quehacer político. Hay una excesiva intolerancia de blancos contra indígenas, cuando sabemos que estos extremos no existen más que en la construcción ideológica de los que quieren polarizarnos como país” (Lourdes Montero, Bolivia)

“..somos un país que en realidad no somos una nación y lo que hemos llegado en muchos casos a decir es que somos una nación en formación para darle alguna salida” (Federico León, ANPAL, Perú)

c) Fortalecer a los actores sociales y su participación crítica y activa

Otro reto para profundizar la democracia es abrir y mantener vigente la participación política de la población. En algunos países de la sub región las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, son más activas que en otros países. Pero aún hace falta una actitud crítica y con propuestas, que sea capaz de asumir sus propias responsabilidades, lejos de obedecer consignas y slogans.

“lo cual significa fortalecer ciudadanía, acceso a la información, acceso a redes y a recursos (...) las limitaciones de estos movimientos es que muchas veces están desarticulados y no tienen tampoco espacios ni medios suficientes para hacer un discernimiento técnico, político y social de sus procesos” (Marco Arana, Red Muqui, Perú)

“la construcción de un patriarca en el sentido de que una persona nos va a resolver la vida ¿no? Porque el patriarcado tiene mucho que ver con el fortalecimiento de liderazgos caudillistas. Entonces nosotros estamos tratando de de-construir esa idea de que nadie es salvador ni de Bolivia ni de nada...Entonces esta construcción de crítica, pero una crítica que fortalezca y apoye al cambio es muy difícil” (Lourdes Montero, Bolivia).

“La democracia tiene el reto de respetar la autonomía y la independencia de los sectores populares...de no generar organizaciones corporativas del poder popular..” (Esperanza Hermida, lideresa sindical, Venezuela).

Fortalecer a los actores sociales es también otorgarle ciudadanía y reconocimiento de sus derechos a quienes aún no los ejercen: a los pobres, los campesinos, las mujeres y particularmente, a los indígenas para quienes se reclama su incorporación en el proyecto de nación desde sus valores mismos. Y es finalmente otorgarle una mejor calidad de vida y satisfacer sus necesidades más urgentes y básicas:

“que los ciudadanos lleguen a ser considerados como tales. Aquí la zona rural es muy marginal. Si abrirse un espacio para un ciudadano cualquiera es difícil, mucho más lo es en la zona rural y para las mujeres” (Carlos López, Remurpe, Perú)

“esta perspectiva es de inserción, de los pueblos indígenas, en los grandes proyectos” (Arcadio Montiel, Diputado, Venezuela).

“no podemos llenarnos la boca de democracia y democracia cuando realmente no se pueden aplicar las cosas. Yo creo que el desarrollo....debe darse en la salud, la educación, el desarrollo productivo y el desarrollo productivo no solamente debe considerar lo que se trabaja en la tierra sino también los conocimientos, los valores fundamentales, la medicina tradicional” (Florinda Juchan, Bolivia)

Se trata entonces de que los actores sociales gocen de su derecho a ser ciudadanos y al mismo tiempo, a satisfacer sus necesidades básicas.

d) Superar la crisis de los partidos

En la sub región los partidos políticos son cuestionados por los mismos actores sociales razón por la cual están deslegitimados como instrumentos políticos para la democracia. El cuestionamiento a los partidos se debe a su desconexión con la ciudadanía, a su incapacidad para representar los intereses de la sociedad, y a la falta de democracia al interior de los partidos, problema que se refleja en la práctica del

caudillismo y el clientelismo.

“los partidos no han representado los intereses ni las distintas opiniones ciudadanas, sino más bien se han convertido en representantes de intereses corporativos” (Erika Hanekamp, Comité Ecuménico de Proyectos, Ecuador)

e) Equidad en el acceso y propiedad de los recursos naturales

Un reto para lograr democracia y desarrollo es igualar el acceso a los recursos naturales vitales para los pueblos de la sub región andina como son la tierra y el territorio. Estos no son únicamente recursos productivos sino también espacios vitales que posibilitan el desarrollo de los pueblos indígenas, rurales y de las familias campesinas –principales protagonistas de las movilizaciones. Se trata también de propiedad a favor de estos actores, lo que les permite su continuidad como pueblos y actores importantes en la economía y en la vida política del país.

“...consideramos que el tema de la tierra....el recurso tierra para nosotros es vital, no solamente la tierra, sino el territorio para poder sobrevivir como cultura...” (Pedro Nuni, Bolivia).

3. PRINCIPALES MOVILIZACIONES EN LA REGION

Durante el año 2006 la sub región andina fue escenario de algunas movilizaciones sociales con distintos niveles de convocatoria y de impacto. A partir de la información proporcionada por los informes nacionales, podemos distinguir entre movilizaciones de alcance nacional y acciones de protestas regionales y locales.

La comprensión de este escenario nos lleva a plantear que en todos los países del área andina están emergiendo diversas movilizaciones sociales organizadas y estructuradas alrededor de intereses comunes. Sin embargo, la mayoría de ellas aún no logra concretarse en acciones colectivas vinculadas a temas de interés general o del espacio público.

A continuación se detallan las movilizaciones presentadas durante el año 2006 en la sub región andina distinguiéndolas por el nivel de su alcance y las temáticas que las convocaron.

Movilizaciones de alcance nacional

El derecho a la tierra

Uno de los campos de mayor movilización social en la sub región estuvo vinculado a la temática de los recursos naturales -la tierra, el agua y el territorio. Estas movilizaciones estuvieron protagonizadas por diversas organizaciones indígenas, campesinas, vecinales y de pueblos originarios en demanda de la propiedad y uso de estos recursos para fines

de su desarrollo. Estas movilizaciones se dieron, con matices diferentes, en países como Bolivia, Colombia y Ecuador.

En Bolivia, las organizaciones indígenas en ese país realizaron la Quinta Marcha hacia la sede del gobierno, en La Paz, para demandar la aprobación de la modificación de la Ley INRA, de titulación de tierras.

“...se ha entrado a un mutuo acuerdo para hacer esta marcha en defensa de la aprobación de la nueva Ley INRA, nueva ley que es la 3545. Para esto se ha coordinado con los de tierras bajas, con CIDOB, entonces justamente nosotros hemos empezado la marcha. Ellos han empezado desde Santa Cruz y nosotros desde Oruro hemos partido hasta llegar aquí, hasta el Palacio.” (Santos Condorena, Bolivia)

En Colombia, diversas acciones y movilizaciones de los pueblos indígenas y campesinos estuvieron presentes en la escena nacional durante 2006. Los temas de reivindicación han sido las luchas contra las fumigaciones de cultivos ilícitos en el departamento del Cauca y el incumplimiento de pactos adquiridos sobre la tenencia y la repartición de tierras, entre el actual gobierno y las comunidades indígenas; durante el segundo semestre del año 2006 se realizaron las jornadas de Liberación de la Madre Tierra, con el fin de recuperar tierras. En sus acciones se han incluido además otros temas como la demanda de solución pacífica a los conflictos y la paz integral.

Bases para un nuevo Estado

Otras de las movilizaciones importantes que ha convocado la atención de las diversas organizaciones políticas, civiles y sociales han sido el movimiento social alrededor de la convocatoria y elección de una Asamblea Constituyente cuyo propósito ha sido sentar las bases para un nuevo tipo de Estado (en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela).

También lo ha sido el movimiento en contra de la reelección presidencial en Colombia que se inició varios años antes desde la presentación del proyecto de ley para reformar la constitución. Este tema movilizó a la Gran Coalición Democrática, red de diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones políticas de oposición, en una jornada nacional de movilización y paro nacional en noviembre. Además del tema mencionado, se incluyeron temáticas relacionadas con la reforma de las pensiones, la transferencia hacia municipios y departamentos, y el TLC con EEUU, entre otros temas.

En Perú, uno de los movimientos más importantes ha sido el de oposición al TLC, con marchas y paros nacionales acompañada antes y después de eventos de debate y difusión en todo el país, así como de comunicados públicos conjuntos y específicos de CONVEAGRO.

Acciones de protestas regionales y locales

Se refieren a aquellas movilizaciones organizadas alrededor de intereses particulares y de alcance local o regional que, aún cuando promueven la conquista de derechos que benefician a sectores más amplios de la sociedad, no logra convocar a otros grupos sociales o no logran poner el tema de lucha en la agenda pública nacional. También se incluye aquí las acciones de protesta coyunturales en las que participaron los actores sociales entrevistados.

Ha sido la experiencia de movilizaciones en protesta por la negociación y firma del TLC con Estados Unidos en países como Colombia y Perú. A pesar de los beneficios de una negociación más democrática y equitativa, han sido básicamente los gremios agrarios, sindicatos y partidos políticos de oposición los que se han movilizado por este tema.

La defensa de los derechos humanos, desde los derechos de la mujer, de los indígenas, de los grupos con identidades sexuales distintas y de las víctimas de la violencia y del conflicto armado, hasta la lucha por la paz y la solución pacífica de los conflictos así como la restitución de derechos de la población desplazada por el conflicto, han sido temas de movilización de varias organizaciones en Colombia y Venezuela.

La reivindicación agraria ha sido factor de movilización en países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; temas como el cumplimiento de acuerdos adquiridos por el Estado con las comunidades campesinas; reforma agraria; lucha contra las fumigaciones de cultivos ilícitos en algunas zonas; incentivos para los agricultores y mejores precios para sus productos, y el derecho a un medio ambiente sano y de propiedad de sus pueblos originarios, son algunas de las demandas que mayores acciones de protesta ha generado.

La reforma del Estado para beneficio de los excluidos del desarrollo, a través de una mayor descentralización política y económica y el fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales, como en Perú.

La defensa de los derechos vulnerados por la expansión de la actividad minera en zonas rurales y empobrecidas, ha originado las principales acciones de protesta en algunas regiones del Perú. Estas acciones se han caracterizado por llegar en algunos casos a conflictos sociales agudos entre las organizaciones sociales y las empresas mineras demandadas¹⁹.

“Aparte de las tres fuertes movilizaciones populares efectuadas en 2006, es permanente la lucha contra la invasión de la empresa minera y la imposición que hace el gobierno peruano de un proyecto como ése en una zona de alto riesgo y que nosotros protegemos, pues incide en el tema del agua, recurso que es prácticamente el sustento no sólo de miles, sino de millones de agricultores de la región norte del Perú...la lucha la desarrollan primordialmente las comunidades campesinas, conjuntamente con las rondas campesinas” (Wilson Ibáñez, FDSFN)

En Venezuela se destacan tres acciones de protesta coyunturales: a) las movilizaciones de incidencia en contra de la suspensión de medidas cautelares por violaciones a los derechos de la mujer por parte de la Fiscalía General de la República; b) la labor de incidencia en contra de un proyecto de ley para normar la Cooperación Internacional en ese país y que amenazaba el derecho a la libre asociación; y la campaña de denuncia de corrupción en un proyecto del Poder Judicial.

En Colombia, 40 familias en situación de desplazamiento fueron las protagonistas de una de las manifestaciones más visibles, como fue la toma del parque central de la localidad de Bosa en Bogotá. Mediante esta acción se pretendía reclamar la restitución de derechos permanentemente vulnerados de la población obligada al desplazamiento forzado. La toma en la que participaron unas 800 personas se inició en julio y se prolongó hasta el mes de agosto.

También en este año se realizaron varias acciones de protesta en diversos municipios colombianos. La toma de cabeceras municipales de la costa Pacífica; el bloqueo de la vía la mar en Ricaurte y al Diviso, el bloqueo de carreteras en Putumayo y Nariño; y acciones de protesta en Cali son algunas de ellas. La marcha de unos 6.000 indígenas de las zonas coqueras del país en demanda del cese de la aspersión sobre los sembrados de pancoger, fue otra de estas acciones.

Logros y dificultades de las movilizaciones

Detener la lógica del capitalismo

Uno de los logros más importantes de las movilizaciones sociales de la sub región andina ha sido su capacidad de detener las políticas de ajuste económico impuestas por el Estado y contribuir, con ello, al cambio político hacia un nuevo modelo de desarrollo. En países como Bolivia, Ecuador y Venezuela las evidencias están en la institución de nuevos Estados, nuevos marcos normativos y la implementación de reformas basadas en los intereses de las mayorías excluidas.

Además de estos logros macro políticos, algunas movilizaciones sociales obtuvieron respuestas afirmativas a sus demandas y reivindicaciones. En Venezuela, las movilizaciones presentadas en este año tuvieron logros concretos como la aprobación de un nuevo marco constitucional y de normas específicas a favor de los indígenas y las mujeres que sufren violencia; mayor presencia indígena en espacios de decisiones como los Consejos Comunales, las Mesas Técnicas del Agua y de Energía y la destitución de un funcionario por delito de corrupción.

Los movimientos socio ambientales en Perú demostraron la ilegalidad de la ocupación de las empresa mineras demandadas y haciendo visible el impacto negativo que también genera esta actividad en algunos pueblos. Otro logro mencionado es el haber hecho respetar sus derechos colectivos antes que los individuales.

“las organizaciones populares y movimientos sociales han hecho enormes esfuerzos a través de movilizaciones para frenar las políticas de ajuste; en esa línea ha avanzado mucho, se ha logrado impedir que el modelo se afirme, se ha frenado el TLC como uno de los símbolos de ese modelo; se ha logrado frenar todo ese andamiaje del consenso de Washington.” (Byron Coral, Ecuador).

“se puso en agenda, ya a nivel nacional e internacional, la violación de los derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones donde existen actividades mineras (...), hemos cuestionado las políticas públicas del Estado, por ejemplo tener una ley minera totalmente cantada a favor de las empresas transnacionales” (Luis Riofrío, Perú).

Mayor incidencia en la opinión pública

Otro de los logros destacables ha sido la generación de una corriente de opinión pública más informada, y favorable en muchos casos, respecto a las demandas que reivindicaron algunas organizaciones sociales durante 2006. Cabe resaltar que se trata de una imagen positiva sobre los temas de las movilizaciones y sus demandas de manera individualizada, no tanto sobre el movimiento social o la movilización como hecho social en su conjunto.

Aquí también nos referimos a la apertura de nuevos espacios de discusión y debate en algunos sectores del ámbito público sobre problemáticas como el derecho socioambiental de los pueblos, la descentralización, la paz, entre otros.

Las acciones de protesta contra el TLC en Perú no lograron evitar que continúe la negociación con EEUU, el referendo propuesto tampoco fue aceptado, sin embargo, logró generar una corriente de opinión favorable a la causa y un cuestionamiento a la política neoliberal en contra de las comunidades y poblaciones afectadas por las condiciones de negociación agrícola y comercial. Las acciones de incidencia por la descentralización contribuyó a una cultura de diálogo sobre los desafíos del desarrollo local y regional e incrementó el número de municipalidades rurales asociadas.

En Venezuela las acciones de incidencia por la ley de Cooperación Internacional, en base al argumento de defensa de los derechos humanos y de la acción social, también generaron corrientes de opinión favorables a su causa. También las acciones de protesta en contra del gobierno de Hugo Chávez lograron generar más apoyo a la candidatura de una opción distinta a la oficial.

Dificultades

Una de las dificultades que perciben los actores entrevistados es la falta de articulación de los actores sociales en un movimiento conjunto y cohesionado, alrededor de una propuesta única vinculada a los intereses de la nación y no sólo de los grupos sociales que las integran.

Algunas dificultades se generan al interior de las mismas or-

ganizaciones como la dispersión de los intereses de los actores, sin una lógica de acción común y sin una organización con una propuesta real de cambio; la corrupción de algunos de sus líderes, son mencionadas como dificultades para una organización más articulada.

Determinadas acciones en contra de las propias organizaciones sociales y civiles, por parte del Estado, de los grupos de interés o de los medios de comunicación también han hecho más difícil el logro de sus objetivos. Se ha hecho referencia a la penalización de las movilizaciones y las campañas de desprestigio en contra de algunos dirigentes sociales.

“es una presencia amorfa, existe interés pero no una lógica en el accionar, no presentan una propuesta de país, pudiendo esto agotarlos y dejarlos sin credibilidad sino logran concretar una propuesta y no logran establecer alianzas” (Galo Sánchez, Ecuador)

“La principal y permanente dificultad ha sido la colusión entre la prensa y el Estado para que se piense que nosotros, los dirigentes, somos miembros de partidos políticos de izquierda, de Patria Roja, de Sendero Luminoso, organización ésta que es de lo más perjudicial para nuestro país y el desarrollo de la política nacional. Han tratado de que aparezcamos de esa manera. ¿Y para qué? para que nuestros pueblos no puedan reclamar sus derechos” (Wilson Ibáñez, FDSFN).

Las movilizaciones: ¿cambios o resistencias?

Sobre las movilizaciones en la sub región existen hasta tres percepciones diferentes.

La más común, es aquella que dice que las movilizaciones sociales son expresiones básicamente de resistencia y de lucha frente a decisiones ya tomadas o por tomar. Son manifestaciones de la búsqueda de un espacio propio para luchar por sus derechos vulnerados. Las caracteriza su falta de organicidad. Las razones para que estas movilizaciones no constituyan giros más radicales es la falta de recursos económicos para diseñar una campaña más poderosa o porque sus líderes no cuentan con la influencia política necesaria. Es el caso de las movilizaciones que se articularon en contra del TLC en Perú o el movimiento indígena en Ecuador, percibidas como espacios de resistencia, de lucha, contra una opinión, acción o decisión política que atenta contra los derechos de sus protagonistas; particularmente contra la política neoliberal aplicada en varios países. Es el caso también de las movilizaciones en contra la reelección presidencial en Venezuela, a favor de las mujeres y de los trabajadores del sector justicia:

“el pueblo ecuatoriano ha resistido la ofensiva más dura del neoliberalismo, aunque las trole y todas las cosas que vinieron encima, se vinieron a pesar de toda esta movilización, pero hasta aquí lo que hemos logrado es frenar, pero avances reales hacia el futuro están por verse” (Jaime Breilh, médico, Ecuador)

“han tenido que ver más con luchas de resistencia...porque de lo que se trataba era de evitar que se termine una negociación que sabíamos podría ser dañina...Y después que no tienes medios económicos para contrarrestar toda una campaña.....La cosa que tienes que hacer es prácticamente de resistencia” (Roberto López, Foro Salud, Perú)

“no son movilizaciones de protestas ciudadana reclamando alguna reivindicación, algún derecho que consideran legítimamente que le está siendo negado, sino que es una confrontación electoral. Ese era el primer carácter evidente que podían tener el segundo carácter podría ser en que quienes se manifestaban en esas movilizaciones a favor de la opción de Manuel Rosales, de la candidatura unitaria de oposición, estaban manifestando su descontento general con la reelección de Chávez” (Gerardo Blyde, Venezuela)

Existe una visión positiva y alentadora sobre los movimientos sociales en a sub región, particularmente en países como Bolivia y Venezuela, que percibe que estamos frente a movilizaciones sociales que están produciendo cambios sociales y políticos más profundos en la democracia de sus países. En Bolivia, las movilizaciones por la Asamblea Constituyente, la tierra y la institucionalidad de los municipios, han estado orientadas a mejorar y profundizar los cambios; los protagonistas del cambio social están dirigiendo el país:

“Entonces no son luchas de resistencia no hay una resistencia, lo que sí hay es un control social y la búsqueda para llevar más allá los cambios sociales y políticos que plantea el gobierno” (Lourdes Montero, Bolivia)

“Yo lo veo como luchas que contribuyen a cambios profundos porque la resistencia se gesta cuando hay algún interés del poder constituido en obstaculizar o no querer catalizar lo que tú estás viendo en la sociedad” (Gabriela Ramírez, Venezuela).

Una tercera percepción es de quienes ven en los movimientos sociales ante todo movimientos de incidencia política cuyos logros se miden por cambios concretos en la legislación en materia del tema de lucha o por la inclusión de nuevas prácticas en los espacios de gobierno. En Perú este sería el caso de los movimientos descentralistas y participativos, dirigidos a recrear nuevas formas de gestión municipal basadas en la participación ciudadana y en la concertación. Es el movimiento que mayores cambios ha logrado al incluir iniciativas y propuestas de gestión alternativos en la normatividad municipal.

Pero también existe una corriente de opinión más radical que piensa que no estamos frente a movimientos sociales verdaderos sino a entidades que se agrupan coyunturalmente y muchas veces con intereses sólo políticos. Para algunos actores no se tratarían de movilizaciones sociales verdaderas.

“hay muchas veces membretes que incluso a veces son alimentados por partidos políticos para tener una cara más social... yo encuentro actores sociales vinculados a propuestas ecológicas, a propuestas de género, a propuestas de consumo, pero no encuentro realmente movimientos

sociales fuertes como no sea movimientos que tengan origen en trabajadores estatales” (Javier Ponce, periodista, Ecuador).

“En Venezuela nunca ha habido movimiento de calle. La movilización de calle de mujeres, y eso lo puedes ver en los 8 años de Chávez, todas las movilizaciones de mujeres de Venezuela, han sido contra Chávez o a favor de Chávez. O salen de la Plaza Altamira, o Chuao o salen de la Plaza Bolívar o llegan ahí.” (Gioconda Espina, Venezuela).

4. LAS ALIANZAS CON LAS ONG Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las organizaciones sociales movilizadas lograron tejer redes y alianzas con otras entidades principalmente sociales antes que políticas. Fueron articulaciones a nivel individual y de redes, tanto del ámbito nacional como internacional, con otras organizaciones sociales, ONG, agencias de financiamiento, organismos internacionales; entidades vinculadas a la Iglesia católica y con Universidades.

La discriminación y la exclusión fueron en algunos casos factores que promovieron la alianza entre unas y otras organizaciones, las mismas que fueron extendidas en algunos casos a líderes y autoridades políticas no vinculadas a partidos políticos.

En Perú, el movimiento en defensa de los derechos socio ambientales frente a la minería y el movimiento de incidencia descentralista, son los que han generado alianza de mayor amplitud y alcance con otras organizaciones. Y en Bolivia las organizaciones campesinas conformaron una alianza denominada “Pacto de Unidad” que agrupa a cinco organizaciones de campesinos, campesinas, indígenas y colonizadores de nivel nacional. La COB estableció alianzas entre organizaciones departamentales y regionales de trabajadores de diferentes sectores.

“consideran de suma importancia la consolidación de lazos de solidaridad e interacción con diversas organizaciones sociales, sector académico, etc. para una real incidencia” (Dirigente social, Colombia).

“Hemos estado en alianzas y hemos actuado en conjunto con la Confederación nacional Agraria, con la CPP, con la Confederación Campesina del Perú, hemos actuado con los maiceros, con los arroceros tuvimos grandes luchas y con mucho éxito” (Federico León, Perú).

“Para nuestra lucha política sí hemos buscado aliados y nos acercamos a ACOBOL, ANDECRUZ, mujeres políticas, Bartolinas, mujeres indígenas, etc. ... Y como mujeres se han buscado alianzas con otros sectores... nos hemos aliado con los pueblos indígenas, por existir una razón, como los sectores sociales que han permanecido excluidos o dis-

criminados. Los indígenas han sido históricamente discriminados y las mujeres lo mismo”. (Miriam Suárez, Bolivia)

Otras alianzas también han sido importantes con las ONG a nivel nacional, quienes han brindado una labor de apoyo y acompañamiento en las movilizaciones, aunque a veces de manera limitada. Nuevamente el contexto de violencia interna en Colombia dificulta un compromiso mayor de algunas ONG con algunos movimientos campesinos.

“..uno de los aliados principales del movimiento indígena son instituciones de apoyo, ONG en los distintos departamentos del país... en este proceso de cambios han contribuido bastante. ... Muchas de las ONG tienen potencialidad en alguna rama, están especializados en materia agraria y su contribución es importante puesto que posibilitan también organizarnos y tener una propuesta consolidada, una propuesta unificada...” (Pedro Nuni, Bolivia)

“Ahí hay una situación. Los campesinos, los obreros, los indígenas son actores sociales. Hasta donde pueden se movilizan cuando pueden, pero cuando las condiciones son calientes, la ONG se declara acompañante y se hace a un lado. Es débil. Uno dice que son aliados porque a nombre de los indígenas mueven presupuestos y tienen cargos y tienen trabajo; pero ya comprometerse en sus movilizaciones es a otro precio”.(Heraldo, campesino del Putumayo, Colombia)

En otros países, como Venezuela, Colombia y Bolivia, las alianzas traspasaron al ámbito internacional con organizaciones sociales, organismos internacionales y financieras extranjeras y suprarregionales particularmente alrededor de temas relacionados con los derechos humanos y el movimiento indígena. La Ruta Pacífica de Mujeres, en Colombia, está articulada a nivel internacional al movimiento Mujeres de Negro. Los movimientos indígenas y organizaciones de afrodescendientes, en Venezuela, están aliados con el Observatorio de Derechos Humanos, MERCOSUR y la Organización Internacional del Trabajo.

Las expresiones de solidaridad han ido desde la firma de documentos de apoyo y de sanción hasta el financiamiento económico, pasando por espacios de debate y reflexión, acompañamientos, asesoría y manifestaciones simbólicas. Ello hace que se trate de alianzas coyunturales.

Alianzas con los partidos políticos

En general, los partidos políticos han estado ausentes en estas alianzas, debido a la imagen negativa que se tiene sobre estos, a la desconfianza en el aparato partidario y la poca receptividad de sus líderes hacia las agendas de las movilizaciones. Las razones que exponen algunos líderes de los movimientos sociales entrevistados para no buscar alianzas con los partidos, son el descrédito de los mismos por su interés esencialmente electoral antes que de representación de los intereses del pueblo o porque no se encontraron respuestas de acercamiento.

“el partido desde el mes de septiembre ha buscado diferenciarse como primer objetivo de la propia oposición...y no interconectarse con esos movimientos..” (Gerardo Blyde, Venezuela).

“No se buscaron alianzas con partidos políticos, pues como criterio prioritario de actuación se tuvo que la defensa de lo público no puede tener color político, máxime en un país donde los partidos políticos han sido excluyentes y fragmentadores de la población”. (Juan Carlos Posada, líder vecinal, Colombia).

“muchos gobiernos cuando tienen o asumen directivas nacionales, a veces obedecen a los de su partido político y no a las necesidades o a las iniciativas del pueblo” (Luis Riofrío, Perú).

“los partidos no ha representado los intereses de las distintas opiniones ciudadanas, sino más bien se han convertido en representantes de intereses corporativos” (Erika Hanekamp, Ecuador).

Las alianzas existentes con algunos partidos fueron propiciadas de manera aislada y singular por determinados movimientos sociales. Los acercamientos que ha habido han sido, en algunos casos, con el objetivo de informar sobre las acciones realizadas; a través de líderes regionales o locales o con algunos representantes del Congreso con el fin de hacer incidencia política sobre el tema. Se trata en general de alianzas muy frágiles y coyunturales.

Problemas y retos de las alianzas

a) Con las organizaciones sociales

Se reconoce el papel importante de las entidades aliadas al interior de los movimientos sociales, anteponiendo lo que los une y respetando las diferencias. Un reto que se identifica es impulsar la participación de las organizaciones en redes más amplias y mayores espacios de reflexión y debate, yendo más allá de las ONG. Es decir, crecer en número de organizaciones pero defendiendo su autonomía y su propio espacio.

“cuando ... formamos ese Comité Unitario de Gremios partimos de un punto elemental decía Unidad reconociendo nuestras diferencias, y así actuamos sabíamos que éramos diferentes en todos los trece gremios que nos habíamos reunido pero nuestras plataformas de luchas sí concentraban los qué haceres del país” (Federico León, Perú).

“la participación del indígena tiene que ser bajo los conceptos constitucionales, es decir, respeto al concepto de pueblo indígena, respeto al derecho lingüístico” (Arcadio Montiel, Venezuela).

En Bolivia, debido al empoderamiento de algunos niveles

dirigenciales de las organizaciones sociales, una de las ONG entrevistadas considera que es necesario trabajar con el propósito de fortalecer los liderazgos locales y de volcar el esfuerzo al trabajo con bases.

“A partir de este año hemos concluido que nuestras alianzas tienen que ser más con las organizaciones de base para fortalecerlas y hemos bajado a las Junta Vecinales de los Distritos. (...) Porque consideramos que en este momento las organizaciones sociales, las organizaciones matrices no necesitan nuestro apoyo, están empoderadas tienen el vínculo con el gobierno central, están haciendo política y nosotros más tenemos que volcar a aquellos sectores que necesitan empoderarse como las Juntas Vecinales, las bases”. (Lourdes Montero, Bolivia)

b) Con las ONG

Se perciben distintas visiones sobre las ONG. Hay quienes reconocen su importante papel en su alianza con los movimientos, sobre todo por su papel de incidencia y la difusión de sus propuestas en la opinión pública; también por sus aportes y asesorías desde el punto de vista legal y técnico a las organizaciones sociales.

“sino hubieran sido las ONG nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de llegar al pueblo y hacer de alguna manera con los poco medios contrarrestar la tremenda campaña que ha hecho el gobierno anterior” (Luis Zúñiga, Perú).

“...las ONG que nos han apoyado y gracias a ese apoyo solidario y su políticas de apoyo al campesinado nos ha dado también solidez para poder movilizarnos y alcanzar lo que queríamos, nuestros campesinos se lanzaban a la lucha sabiendo que tenía a causa defender su tierra, sin importarle nada, iba a las movilizaciones” (Undarico Pinto, Bolivia)

Y hay otras organizaciones que son críticas con las ONG, ya que muchas de ellas no saben a qué se dedican:

“... no conozco muchas ONG, sólo en teoría existen varias ONG pero en la práctica no conozco y no conozco aporte a este proceso de cambio, podemos citar sí algunas de las ONG que han apoyado a este proceso de cambio... He tenido la suerte de extraer un directorio del viceministerio de inversión pública en el que dice que hay centenares de ONG, pero en la práctica no conozco, no se a qué se dedican, no se para qué captan recursos, si conocemos algo es a través de los medios de comunicación que dicen que están haciendo algunas cositas...”. (Florinda Juchani)

También hay quienes creen que hay que evitar que las ONG contribuyan al desmantelamiento del Estado, y que se debe impulsar una mayor vinculación de las ONG con lo público o el estado, siempre al servicio de la población y de su desarrollo. En ese sentido se expresa la necesidad de recomponer o redefinir la categoría de sociedad civil, y distinguirla de una sociedad política.

“las ONG deben plantearse una defensa urgente de lo público lo que no significa que dejen de cumplir su rol como agentes del privado social sino que exista una articulación de estas dos instancias y para eso se debe generar una agenda de debate entre las ONG y lo público” (Jaime Breilh, Ecuador)

“yo no pienso que las ONG son una parte muy importante del Foro Salud, el Foro salud no se agota ni mucho menos se queda en las ONG, creemos que la participación de las organizaciones sociales de base que son organizaciones naturales de la sociedad civil, son las que deben estar presentes en el Foro Salud...” (Roberto López, Perú).

“la sociedad intermedia no tiene nada que ver con la toma del poder, sino que más bien está organizada para la toma del poder...las ONG fueron invadidas por los partidos políticos” (Feliciano Reina, Venezuela).

Se advierte también un desgaste del modelo actual de las ONG, definidas de manera negativa, por lo que se sugiere una definición positiva de ellas, como “organizaciones civiles de desarrollo o sociales de desarrollo”.

“el modelo de las ONG se esta agotando enormemente, le veo poca perspectiva realmente por que a la vez hay una tendencia del Estado, particularmente del Estado seccional ha tercerizar sus campos de intervención creando fundaciones y corporaciones para ejecutar acciones que bien podían haber sido ejecutadas por las ONG” (Javier Ponce, Ecuador).

Uno de los problemas que se reconoce en la alianza MS-ONG es la falta de una plataforma integrada de demandas, que se centre en la lucha por la democracia y contra la pobreza. En esta alianza, el reto es incorporar a los partidos políticos y establecer niveles de diálogo y una agenda con intereses comunes.

c) Con los partidos políticos

El principal reto es reconstruir la relación de representación con los movimientos sociales. Esta nueva relación pasa por recuperar la confianza en la búsqueda de intereses comunes y perder el miedo a ser utilizados o manipulados.

“en este momento los partidos políticos no tienen el monopolio de la representación societaria, a tal punto que está de moda en el Ecuador, crear un movimiento por cada causa ya que los ciudadanos no se encuentran ni identificados ni representados en las actuales estructuras partidistas” (María Paula Romo, Ecuador).

“La CSUTCB no ha buscado ninguna alianza con los partidos políticos, la experiencia nos enseña que no debemos mantener relación con los partidos políticos tradicionales, porque sólo se aprovechan para usar a los campesinos e indígenas como masa votante. Los partidos políticos son causantes de la división de nuestras organizaciones sociales, especialmente de la CSUTCB” (Rufo Calle, Bolivia).

“hay una enfermedad que es de caudillismo...las direcciones no son direcciones programáticas, no son propuestas de gobiernos, son direcciones de tipo personal” (Wilbert Rozas, Perú).

La excepción a esta idea es Bolivia, en donde el MAS, instrumento político del movimiento indígena, tiene mayor poder de convocatoria y legitimidad en las organizaciones sociales con intereses similares (indígenas, obreros y de mujeres).

Plan de movilizaciones o articulación coyuntural

La articulación que sustentan algunas de las movilizaciones sociales presentadas en la sub región, a juicio de las personas entrevistadas, no responde a un plan conjunto de acciones sino a una articulación coyuntural, y a veces más bien reactiva. No hay una estrategia conjunta para un movimiento más amplio y para construir una agenda común, más allá de los intereses de cada sector. En parte, la explicación de este rasgo efímero es la fragmentación de intereses al interior de los movimientos, su debilitamiento y los escasos recursos con que cuentan. En general, se percibe muy poca articulación de intereses con los partidos políticos y con las ONG.

“todos respondemos a cosas de coyuntura, no respondemos a una estrategia conjunta, cada uno tiene su propia estrategia pero no hay una estrategia conjunta si se trata de hacer un movimiento más amplio” (Wilbert Rozas, alcalde, Perú)

“han hecho un trabajo importante a favor de la democratización en el país, sin embargo, creo que a pesar de esto, estos grupos son relativamente dispersos y aún no se ve un panorama en el que confluyan todos para la conformación de un partido político por ejemplo” (Erika Hanekamp, Ecuador)

Articulaciones internacionales

Algunas organizaciones sociales en la sub región han logrado establecer una articulación más amplia con otras entidades afines a sus intereses, sobre todo a nivel regional y con organismos internacionales a nivel mundial. También se han articulado algunas redes de solidaridad con partidos políticos de la región. Otras organizaciones en cambio carecen de relaciones y contactos más allá del ámbito nacional.

En Perú los procesos de integración están recién comenzando; el MS agrario es el que tiene la mayor articulación con otros gremios de sus sector a nivel de AL; la solidaridad con los movimientos socio ambientales está surgiendo a nivel continental y se expresa en el interés de algunos organismos internacionales en defensa de los derechos humanos; y el movimiento descentralista sólo ha tenido alianzas con redes similares de otros países de la sub región andina. En Bolivia, la CSUTCB está articulada con varias organizaciones de nivel continental y mundial.

“hay niveles de solidaridad muy importantes; por ejemplo, las redes de derechos humanos han comenzado a interesarse por lo que les está sucediendo a los activistas ambientales en el Perú. Amnistía Internacional comienza a interesarse en el tema, también el Observatorio Internacional de Derechos Humanos y la Federación Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ya está el tema de la persecución a líderes ambientalistas en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, de la OEA. Entonces, hay un movimiento que está surgiendo, y si bien se trata todavía de un proceso muy incipiente, están creciendo las redes de solidaridad continental, incluso a nivel Norte-Sur. (Marco Arana)

“... nosotros estamos afiliados a la organización CLOC que es Latinoamericana y la Vía Campesina que es mundial..., también nos articulamos con otras organizaciones indígenas con las cuáles hemos estado participando y hay una solidaridad... Entonces la solidaridad internacional hay, por eso ha habido muchos encuentros indígenas en Bolivia en los cuáles hemos participado y organizado y hay también los organismos internacionales que quieren apoyar nuestras causas y que quieren mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos que viven la gran pobreza... entonces creo que hay solidaridad de afuera” (Undarico Pinto, Bolivia)

En algunos países la cooperación internacional mantiene el interés en apoyar en su desarrollo. En términos de la solidaridad internacional, se aprecia que algunas experiencias en Colombia han contado con apoyos tanto económicos, como de acompañamiento y asesoría. En los procesos de laboratorios de paz, la Organización de Naciones Unidas, la comunidad europea y agencias de cooperación europeas, han demostrado su solidaridad, de manera coyuntural, puntual o de más aliento. El tema de paz y derechos humanos genera todavía bastante solidaridad con diversas organizaciones sociales. Existe una preocupación internacional para contribuir en la solución negociada y política del conflicto armado, lo que lleva a contribuir en el apoyo a demandas y reivindicaciones sociales en esa materia.

“la cooperación internacional tiene expectativas positivas con este nuevo gobierno, hay expectativas en el sentido de que el gobierno presente un plan a largo plazo que nos permita a la cooperación trabajar con mayor fluidez y continuidad” (Erika Hanekamp y Galo Sánchez, Ecuador).

En Venezuela ya hay articulaciones con entidades de mayor alcance internacional como MERCOSUR, la OIT, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, el parlamento Indígena de América, y con partidos políticos de otros países de la región.

5. LAS MOVILIZACIONES Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

En la sub región se reconocen como importantes las iniciati-

vas y los procesos encabezados por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como espacios visibles de integración latinoamericana, sobre todo en el aspecto económico. En algunos casos, estos espacios son percibidos como claves para la defensa o garantía de intereses específicos de algunas organizaciones sociales, así como para la visibilización de la sociedad civil, propiciando su inclusión en los espacios de deliberación. Por ejemplo, en el tema de los subsidios y créditos agrarios; o de los derechos humanos; o de los derechos laborales.

Pero al mismo tiempo, se percibe la limitada capacidad de integración de estas entidades particularmente respecto al objetivo de lograr un desarrollo integral de los pueblos andinos. Se menciona concretamente el riesgo que corren sus esfuerzos de integración comercial con la negociación del TLC con Estados Unidos, particularmente en cuanto al campo de la salud y de la agricultura en Perú. En ese sentido, se percibe una distancia entre el discurso y la realidad, debido a que las políticas de integración no van de la mano con los intereses de la población mayoritaria. En Venezuela y Bolivia, hay una percepción distinta de estas iniciativas, como un espacio potencial para la integración latinoamericana completa, más allá de los intereses de cada nación.

“los verdaderos procesos de integración significan el dejar de lado los nacionalismos puritanos extremos, los patriotismos baratos, para subrogar parte de la soberanía de cada estado en obtener mayor fuerza en una comunidad que podría ser muy fuerte si los estados y, quienes lo manejan, entendieran que los procesos de integración implican dejar esos vicios pequeños para poder obtener mejores frutos en esas asociación para el bienestar de los pueblos” (Gerardo Blyde, Venezuela).

“... yo creo que la integración no sólo debe ser comercial, debe pasar más allá de buscar sólo utilidades a algo más social, más saludable, de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad,... si pensamos de otra forma estaremos pensando primero en la sociedad, en la vida humana. A mi me gustaría que la integración con los otros países se haga de esta forma” (Florinda Juchan, Bolivia)

“una integración económica no es suficiente y así está demostrado por ejemplo en la Unión Europea” (Gerardo Blyde, Venezuela).

“la comunidad Andina, MERCOSUR y la Integración Sudamericana, mi impresión es que avanzan a un ritmo que esta muy debajo de las necesidades que se tienen, de alguna manera en estos años, hubo cierta expectativa de que un cambio de tendencia en los gobiernos hubiera facilitado la construcción de un proyecto compartido... Pero eso no se ha transformado en la posibilidad de generar un proyecto de unidad sudamericana que nos permitirá tener un rol nuevo” (Javier Azpur, Perú).

El TLC es uno de los procesos más conocidos por los actores sociales entrevistado, pero en países como Perú y Colombia, la

percepción que se tiene sobre sus efectos es muy negativa.

“El TLC es una imposición de las políticas que se deben establecer y las normas; eso afecta la democracia y la soberanía nacional” (dirigente afrocolombiano, Colombia)

“ha sido torpedeada por el TLC, precisamente uno de los acuerdos de propiedad intelectual torpedea a la legislación de la Comunidad Andina, o sea a una regulación que es vinculante y lo que se ha hecho con este TLC ha tirado por tierra eso, entonces hay experiencias de integración como la Comunidad Andina que están en peligro” (Roberto López, Foro Salud).

Un aspecto que llama la atención es que estos niveles de integración están más centrados en relaciones que se establecen entre los gobiernos nacionales, con las ONG y, en menor proporción, con los partidos políticos. No existen muchas experiencias de integración con las organizaciones sociales; un proceso que convoca a movimientos sociales son los cambios sociales que se van dando en torno a la caída del paradigma del neoliberalismo; aunque no haya suficiente claridad sobre el sustituto, sí hay una diversidad de formas de encarar estos procesos.

“... hemos participado de los foros mundiales de resistencia, hemos participado en la búsqueda de la integración latinoamericana, en torno a los procesos penales latinoamericanos internacionales, estamos buscando que surja la Corte Penal Internacional en cuanto a los derechos de las mujeres y la violación de estos. Estamos buscando aliados en todos los procesos de integración sindical transnacional, es decir que los sindicatos no sean vistos como defensa local sino pactos, que se centre entre por ejemplo la lucha contra el ALCA quienes están a favor quienes en contra busquemos aliados veremos las partes críticas de los sindicatos, incluso norteamericanos que son muy críticos en el tema de integraciones económicas. Por ahí hemos estado avanzando en la integración latinoamericana” (Lourdes Montero, Bolivia)

Existen también espacios alternativos de integración. En Perú se menciona la Conferencia Latinoamericana de Organizaciones. Y en Bolivia el gobierno está implementando el ALBA y el TCP con el propósito de lograr alianzas económicas mayores; pero aún no se tienen resultados ni éxitos claros. Un escenario por excelencia de confluencia de varios movimientos y alianzas a nivel internacional es el Foro Social Mundial. Este es un espacio en el cual confluyen diversas organizaciones sociales, ONG, sindicatos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, indígenas, comunidades afro, etc; las cuáles construyen propuestas e iniciativas alrededor de temas globales.

“La CLO, Conferencia de Organizaciones Latinoamericanas y Organizaciones, tiene temas muy importantes como el de los TLC —tratados de libre comercio—, el de los excluidos —los más pobres en América— y el de las mujeres. Y la política latinoamericana tiene que ver mucho con el tema de los recursos naturales, que es muy importante y debemos trabajarlo en la red... ese tema moviliza a todos” (Carlos López, Perú)

“Existen muchos tratados de integración y lo que se está conociendo es el TCP. Tratado de Comercio de los Pueblos y el ALBA, y con propuestas interesantes que todavía se tienen que seguir trabajando sobre la viabilidad de estas propuestas políticas de integración de los pueblos, porque lo que hemos visto hasta ahora sólo integración de los gobiernos, ni siquiera de los Estados... el TCP y el ALBA son una alternativa para buscar la integración de los pueblos. (Miriam Suárez, Bolivia)

Articulación regional de entidades y movimientos de la sociedad civil

Las organizaciones sociales sí participan en redes o agrupaciones de organizaciones sociales de otros países. Los gremios agrarios, indígenas, de mujeres e incluso de autoridades locales están articulados con otros gremios latinoamericanos o andinos.

“Hemos participado en todo lo que es el movimiento de las mujeres rurales, ... Esta red ha surgido en 1988, y continua donde nosotros somos parte de esa red” (Miriam Suárez, Bolivia)

CONACAMI, en Perú, forma parte de los fundadores de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas, en el que participan:

“ECUARUNARI-Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Kichwas de Ecuador que es una organización indígena de Ecuador, CONAMAQ-Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo de Bolivia, ONIC-Organización Nacional de Indígenas de Colombia y el Observatorio Chileno también es gran aliado a nivel de América del Sur, CITEM-Coordinadora de Identidades Territoriales Mapuche, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria” (Luis Riofrío, Perú)

Las ONG también están insertas en redes latinoamericanas vinculadas a su temática de interés. La participación de las ONG en espacios de articulación junto con movimientos sociales sin duda que fortalecen las alianzas y la pluralidad de actores que la conforman; sin embargo hay que tener especial cuidado en no sustituir ni imponer, pero participar con propuestas y voz propia.

“En todos aquellos que tienen que ver con género específicamente, la Corte Penal Internacional somos parte de ella, me refiero a las organizaciones que impulsan la Corte Penal Internacional, después tenemos redes de mujeres en defensa de los derechos humanos, participamos en redes latinoamericanas también que tiene que ver con la articulación de agenda común en los movimientos de mujeres. No participo en ninguna red específica que tenga que ver más allá con los movimientos de la sociedad civil, porque nosotros no queremos asumir la voz de los movimientos sociales, en eso somos muy cuidadosas, somos una ONG que tiene voz propia” (Lourdes Montero, Bolivia)

La escasa preparación, desintegración o dispersión de las organizaciones, al interior de los países, hace que la incidencia en los espacios de integración sea mínima o de poco impacto como lo define Esperanza Hermida, de Venezuela.

III. A MODO DE CONCLUSIÓN: POSIBILIDADES PARA UN CAMBIO SOCIAL EN LA SUB REGIÓN

La construcción de una agenda común entre las organizaciones sociales, civiles y políticas en la sub región no sólo es posible sino que resulta necesaria para lograr el desarrollo y superar las inequidades que todavía sufren las mayorías sociales. Aún cuando existen diferencias entre unas y otras organizaciones, superarlas y articularlas en prácticas e intereses comunes constituye todo un desafío para las organizaciones sociales, civiles y políticas.

Los actores sociales, protagonistas de las principales movilizaciones en la sub región, tienen una posición clara y crítica sobre las brechas que existen entre un desarrollo económico, marcado por las cifras del crecimiento económico de un lado, y las inequidades sociales que se generan al interior de las sociedades, del otro. De ahí sus demandas orientadas principalmente a subvertir la exclusión –en todos sus aspectos- y exigir una mayor participación en la toma de decisiones. En tres países de la sub región (Bolivia, Ecuador y Venezuela), estas prácticas están acompañadas por los propios Estados.

La inclusión de todos los ciudadanos en los beneficios del desarrollo social, económico, cultural y político, es uno de los principales retos para fortalecer la democracia en la sub región. Lo es también el abrir nuevos espacios de participación en la política y ampliar el sentido de representación del Estado al conjunto de la sociedad. Superar la polarización, la intolerancia y la lógica de la eliminación del “otro”, sobre todo la intolerancia cultural y regional que ha marcado la cultura política de la sub región

En voz de los propios actores, las condiciones para una agenda común están dadas: los problemas y las aspiraciones son las mismas. Sin embargo falta crear más espacios de diálogo e interlocución que vayan más allá de los encuentros esporádicos que por ahora reúne a algunos de ellos, incluso a nivel regional. En este escenario posible resulta un desafío incluir a los partidos políticos e incluso a las propias organizaciones no gubernamentales. Para algunos actores sociales, las ONG sólo cumplen una labor de acompañamiento y apoyo. Las fortalezas estarían al interior de las propias organizaciones sociales y su capacidad para aliarse entre sí

en niveles que vayan más allá de lo regional.

Se propone como necesaria la articulación de los actores sociales a partir del respeto a la diversidad de sus intereses y a un rol equitativo entre las ONG, las organizaciones sociales y los partidos, sin sumisión de unos a otros. Se debe incentivar ese trabajo y, desde la sociedad, trabajar para crear y generar espacios de integración y de adecuar agendas conjuntas. El mecanismo que se plantea es a través de redes con entidades similares desde el nivel nacional hasta el regional, por medio de acuerdos en los que hay que ir aglutinando a cada uno de los actores políticos, los gobiernos locales, las empresas y a las ONG.

Se puede afirmar que las movilizaciones y acciones de protesta realizadas en el área andina han tenido éxito sobre todo en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, y con menor impacto en países como Colombia y Perú. En los tres primeros países, las movilizaciones alrededor de demandas nacionales han obtenido mayores logros que en los otros dos debido a la orientación política de sus gobiernos. En los tres primeros, los gobiernos –con sus matices- han aplicado reformas y políticas progresistas con el apoyo de los movimientos sociales. En Perú y en Colombia, gobiernan regímenes orientados a la política del neoliberalismo y con pocos canales para la solución de las demandas sociales.

A pesar de las diferencias entre los actores sociales, en cuanto a su nivel y alcance de organización y de la plataforma central de sus demandas, y de los diferentes proyectos políticos en los cuales están insertos en sus países, la construcción de una agenda común a nivel regional es un reto en el que hay todavía que avanzar mucho, con el propósito de consolidar la democracia y lograr el desarrollo de toda la sub región.

NOTAS

1. Nos estamos refiriendo a la multiplicación de listas parlamentarias y partidos que se dio luego de la Asamblea Constituyente del 91. No hay que olvidarse que uno de los temas de dicha Asamblea fue como abrir el sistema político que, hasta ese momento, estaba dominado por el bipartidismo. La reforma del 2003 buscaba disminuir tanto el número de listas como de partidos.

2. También se puede añadir el ajuste económico en Venezuela en el año de 1991.

3. Hasta el momento en América del Sur solo Chile ha firmado un TLC con EEUU. A ello hay que agregarle que en pocos meses se iniciarán las conversaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea para un Acuerdo de Complementación Económica (ACE).

4. Al respecto leer: Adrianzén, Alberto: ¿Crisis de gobernabilidad o inicio de un nuevo ciclo político en América Latina” en Democracia, Descentralización y Reforma Fiscal en América Latina y Europa del Este. Lima, 2006.

5. Un estudio del Banco Mundial, “Reducción de la Pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos”, publicado en febrero de 2006, señala siguiente: “En los últimos quince años, la pobreza disminuyó ligeramente en América Central (de 30% a 29%), aumentó en la Comunidad Andina (de 25% a 31%) y se redujo en la zona del Cono Sur (de 24% a 19%). Este mismo estudio muestra que: “la raza y la etnia constituyen una fuente más significativa de desventaja en los ingresos que el género. La población indígena de la región percibe en promedio 46% a 60% de los ingresos que reciben quienes no son indígenas”.

6. Un movimiento pendular contiene siempre un doble movimiento: de ida y de vuelta.

7. Cuando hablamos de inclusión política no estamos hablando de inclusión económica, social y cultural.

8. Decimos aparente porque el tema de la democracia participativa fue una de las banderas del “Gobierno Revolucionario” peruano (1968.-1975).

9. La excepción es el Perú. En el informe de ese país este tema no está planteado. Lo nuevo es la emergencia de nuevos movimientos sociales, especialmente, al interior del país. Por eso se dice que lo más “previsible” a largo plazo “sea la continuidad del patrón de crecimiento primario exportador liderado por la gran minería” y “la continuidad de los conflictos sociales y el progresivo endurecimiento de políticas autoritarias”.

10. Es obvio que la mayoría política que esta construyendo Álvaro Uribe en Colombia es muy distinta a la de Evo Morales en Bolivia.

11. Nos parece que el dilema democracia representativa o

democracia participativa es falso. La democracia participativa no es sinónimo de democracia directa. De ahí que toda “democracia participativa” se sustenta en una “representativa”.

12. Por ejemplo, esta es una frase que emplea una de las entrevistadas, María Paula Romo, del Ecuador: “hay momentos en donde lo viejo no se acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, entonces hay que comprender que este es un momento de transición fundamental (...) es un momento de transición entre romper con lo que es este viejo país o estas viejas estructuras que criticamos, lo que no necesariamente significa que el resultado va a ser mejor, pero significa que tenemos la oportunidad y el desafío de reconstruir este país”.

13. La excepción fue Colombia.

14. El concepto “predominio político” se emplea como contrario a lo que podemos llamar hegemonía política en el cual la institucionalidad juega un papel importante. Así existen “partidos hegemónicos” y “partidos dominantes” donde su fuerza social y/o electoral es clave. Al respecto leer: Godio, Julio: “No es lo mismo hegemonía que predominio político”. Clarín, Buenos Aires. 05/03/07.

15. La Coordinadora Ezequiel Zamora vinculada al tema agrario.

16. 163 protestas de un total de 388. Base de datos de luchas sociales de CINEP, Informe de Colombia.

17. A nivel regional y local se han constituido por ejemplo el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) y el Movimiento Originario Popular (MOP)

18. El barrio Carlos E. Restrepo es un barrio de estrato socio económico Medio y Medio Alto (Estrato 4), ubicado en la zona Comuna 11, Zona Centro Occidental (Laureles-Estadio) con un Índice de Calidad de Vida de 81,57 (Rangos en el total de la ciudad entre 70,72 y 83,53) y un indicador de Desarrollo Humano de 90,52. (Rango Inferior de 73,47 y Superior de 92,92), es decir, es la segunda zona de la ciudad con mejor calidad de vida y de desarrollo humano. Fuente: Plan de Desarrollo de la ciudad 2004 -2007

19. La CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería) –una de las organizaciones sociales entrevistadas en el informe del Perú- ha apoyado parte de las principales movilizaciones locales que se han desarrollado frente a la expansión de las actividades mineras en zonas del Perú como en el ande de Piura y Cajamarca, y a la contaminación con efectos tóxicos para la salud de actividades mineras en actual explotación – La Oroya e Ilo



6. INFORME SUBREGIONAL: CONO SUR Y BRASIL

I. INTRODUCCIÓN

El Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina es el principal instrumento de trabajo conjunto de las ONG asociadas de la ALOP (Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción). Se realiza cada dos años y en él se analiza y evalúa la realidad latinoamericana, las movilizaciones en defensa y por la ampliación de la democracia, las posibilidades y luchas por la conquista del desarrollo.

El estudio investiga las relaciones entre las ONG, movimientos sociales y partidos políticos comprometidos con el cambio social a partir del análisis de las movilizaciones sociales con el fin de fortalecer alianzas y ampliar una agenda común. Su objetivo general es elaborar propuestas y mejorar la capacidad de incidencia de los sectores democráticos de la sociedad civil latinoamericana en el escenario internacional alrededor de los ejes de acción Democracia y Desarrollo.

El informe no pretende hacer un diagnóstico de la situación de cada país ni de la región, sino que constituye un diagnóstico de las prácticas ciudadanas por el cambio social y sus alianzas, según el punto de vista de los entrevistados.

Hasta el momento se han realizado dos IDD (2002-2003, 2004-2005). Este nuevo planteo del IDD no pretendió incluir en su elaboración a todas las ONG, ni todos los Movimientos Sociales, ni todos los Partidos políticos de la región cualquiera sea la orientación política de su trabajo, sino que su objetivo fue observar qué hay de nuevo en términos de propuestas y cambios sociales y políticos que se estén impulsando en la región, en el sentido de construcción de un campo político, popular y democrático por algunos de estos actores. De esta forma se estaría abordando el análisis de procesos políticos y sociales más largos y complejos de una forma más ambiciosa que lo hecho en los dos informes anteriores.

Metodología

La metodología utilizada es de tipo cualitativo y el instrumento de recolección de información es la entrevista. La pauta de entrevista fue elaborada por el Comité Ejecutivo de ALOP. En cada país miembro se realizó una cantidad variable de entrevistas a líderes de Movimientos sociales, Partidos políticos y ONGs, las que fueron analizadas a nivel nacional en primera instancia, luego a nivel sub regional y, finalmente, continental.

Se realizaron 140 entrevistas en los 19 países latinoamericana-

nos donde hay ONGs asociadas a ALOP. En la sub región Cono Sur + Brasil se realizó un total de 59 entrevistas (correspondientes a 57 organizaciones) y el trabajo de terreno se llevó a cabo entre diciembre de 2006 y abril de 2007. Por país el número de entrevistas realizadas es el siguiente:

- Argentina = 13
- Brasil = 21
- Chile = 9
- Paraguay = 8
- Uruguay = 8

Una vez realizadas las entrevistas y elaborado un pre informe por cada país, se realizó un Taller de devolución con presencia de las organizaciones entrevistadas en el estudio más otras que se consideró relevantes en cada uno de ellos. En base a los resultados de los talleres, se elaboraron los informes definitivos por país. En el mes de Abril 2007, en Santiago de Chile, se realizó una reunión sub regional (Cono Sur + Brasil) en la que se revisó los informes nacionales y un primer esbozo del informe sub regional. En Julio se envió la primera versión del informe a los 5 países para su revisión. La versión revisada del borrador fue discutida en el Taller Sub regional realizado en Buenos Aires a fines de Agosto, al que asistieron los redactores de los informes nacionales y algunos de los entrevistados en cada país, además del director de ALOP, el encargado sub regional y representantes de cada una de las ONG asociadas. Esta versión final recoge los aportes de todos estos actores.

II. EL CONO SUR EN UN TIEMPO DE CONTINUIDADES Y CAMBIOS

América Latina enfrenta un momento en que los paradigmas de análisis político y social requieren de una nueva configuración. Se trata de una evolución perceptible y notoria, que se evidencia en el giro en la orientación política de la mayoría de los gobiernos de la región y en los debates que cruzan a nuestros países. Los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, Daniel Ortega y la situación anti-gua de Cuba, ahora con Raúl Castro, ello por una parte, la particular situación del cono sur de Latinoamérica con Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez, Bachelet, el ascenso en las encuestas de la candidatura de Lugo en Paraguay, junto a situaciones particulares como la polarización en México, la misma situación de Ollanta Hunala en Perú, la alta votación del no al plebiscito por el TLC obtenida en Costa Rica van expresando la materialización de esta nueva situación, donde se abren nuevas posibilidades, que podemos calificar de insospechadas en relación a la realidad de hace 10 o 15 años atrás, y por ello se requiere de miradas atentas y sutiles,

para discernir las complejidades de este proceso. Los conceptos tradicionales parecen vacíos y se requiere de nuevas palabras para nombrar lo que no cabe en las categorías simplificadoras del pasado.

Este contexto general se ha verificado también en la sub-región Como Sur¹ durante el bienio 2006-2007. Por una parte, si bien los informes nacionales muestran elementos de continuidad con el bienio anterior (2004-2005), al mismo tiempo son muy notorios los factores que indican una nueva coyuntura, que pueden ser percibidos en cada uno de los países observados. Pareciéramos enfrentados a vivir un tiempo en que se mezcla el crepúsculo de las políticas neoliberales ortodoxas con un amanecer, aún en ciernes, a un modelo no plenamente definido, impreciso, y no exento de ambigüedades. Es una hora de pocas claridades y muchas sombras, en la cual cuesta distinguir lo que está muriendo y lo que está por nacer. Sin embargo, en medio de estas incertidumbres, no es posible negar que ha comenzado un momento enteramente distinto a los años en que el fatalismo y el pensamiento único parecían envolver el continente.

Se trata de un escenario en el que los matices nacionales y el curso mismo de los acontecimientos impiden la formulación de afirmaciones definitivas. Es necesario, por este motivo, abrirse a afirmaciones más genéricas pero que nos permiten delinear las tendencias generales que desafían a nuestros pueblos a impulsar la agenda de transformaciones democráticas que luego de años de retroceso, parece abrirse a nuevas posibilidades de avance, no exentos de riesgos y dificultades.

La clave parece radicar en distinguir las oportunidades transformadoras que se abren, sin deslumbrarse por espejismos ni tampoco desesperarse por la permanencia de lo que continúa inalterado. Por lo tanto, se trata de aprender a reconocer en las sutiles tramas de las luchas sociales aquellos elementos que empiezan a prefigurar un nuevo momento en la búsqueda de un modelo de democracia y de desarrollo, capaz de acoger las demandas históricas por la dignidad que desde hace tanto tiempo han impulsado nuestros pueblos.

1. IDENTIFICANDO FACTORES DE CONTINUIDAD

A. Un contexto de desigualdad, marcado por los efectos del modelo neoliberal. Los países del Como Sur comparten un modelo de desarrollo que no ha experimentado transformaciones sustanciales a pesar de los grandes cambios políticos y sociales que se han producido en la región en los últimos años. Esta persistencia es explicable debido a la profundidad de las reformas implementadas en los años noventa y que determinan la dificultad de romper la continuidad en las grandes políticas financieras de los gobiernos de la sub-región. Como afirma el informe democracia y desarrollo de Argentina, en relación a su proceso nacional: “la crisis ha operado como una bisagra entre el modelo Neo liberal y Post-neoliberal, si bien el modelo sigue

sin tocar los intereses que lo sostienen”. Esta constatación, si bien no es generalizable de forma mecánica a toda la sub-región, es una clave de lectura que puede marcar el análisis del momento.

Son evidentes los cambios en los discursos de los gobiernos y de los parlamentos de la región que podrían hacer pensar en un cambio más de fondo. Pero al mismo tiempo, los movimientos sociales parecen estar enfrentados a una agenda que no ha experimentado grandes cambios. Por esta razón mantienen dentro de sus primeras prioridades la superación de la injusta distribución de la riqueza, que ha instalado condiciones de extrema desigualdad en nuestras sociedades. Incluso en los debates de la prensa comercial, la desigualdad y los efectos de la pobreza ha logrado ocupar un espacio central en los análisis de los distintos países. Nuevas discursividades, y viejos problemas, conviven en un momento en que la sensibilidad de la ciudadanía parece menos tolerante con las inequidades acumuladas históricamente.

Desde los informes nacionales es posible constatar que la desigualdad es percibida como el principal problema de nuestros países, lo que constituye un desafío de carácter económico, pero sobre todo de carácter político. Es una constatación compartida en cada país, que impone la necesidad de enfrentar el debate sobre mecanismos que rompan con la concentración de la riqueza en las manos de una minoría, y que permitan su distribución de una forma más justa y equitativa. Lo interesante de esta meta, es que pone en debate el tipo de políticas que efectivamente afectan el núcleo de reproducción de la pobreza y de las desigualdades.

B. Persistencia de conflictos sociales y ambientales, que escapan al control democrático: La continuidad de los efectos negativos del modelo neoliberal ortodoxo se constata en la permanencia de altos niveles de pobreza, exclusión y degradación ambiental. Los conflictos que los entrevista de los constatan en el período muestran de modo evidente que muchos de los espacios de confrontación del período anterior permanecen abiertos. Los núcleos temáticos movilizadores se siguen articulando en torno a problemas como la demanda de redistribución de la tierra, la lucha por el acceso a la vivienda social, por la calidad de los servicios públicos, contra la privatización de la educación y la salud, contra la concentración de los medios de comunicación, en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, el reconocimiento de minorías y la superación de todas las formas de discriminación.

En todos estos casos, las luchas sociales se topan con un límite común, caracterizado por la naturalización de las diferencias en la distribución de los recursos económicos y simbólicos en nuestras sociedades. El Como Sur aparece como un territorio fracturado, en el que coexisten grandes riquezas, avanzadas tecnologías y proyectos empresariales innovadores, junto a estructuras “arcaicas” en términos económicos y sociales, como lo demuestran los índices de trabajo infantil, de maltrato a los niños y niñas de la calle, y las prácticas escandalosas de sobreexplotación laboral. En sociedades tan dispares como las nuestras la democracia se puede llegar a percibir más como una aspiración a alcan-

zar, que como un proceso en curso. Al respecto, las entrevistas vinculan frecuentemente este contexto de desigualdad con la debilidad o fragilidad de las democracias, ya que calidad e intensidad democrática son al mismo tiempo causa y efecto de los problemas de distribución y discriminación que afectan a nuestras sociedades. Las organizaciones que aborda el informe poseen una percepción generalizada que interconecta la equidad en la distribución del ingreso con el establecimiento de una verdadera democracia. Las personas entrevistadas designan a la exclusión social como el mayor obstáculo a la democracia en nuestro contexto latinoamericano.

Esta situación se relaciona con la percepción de un Estado debilitado que cede ante las presiones corporativas de las empresas. Las entrevistas muestran experiencias recurrentes en las cuales se percibe a los Estados como instituciones permeables a las presiones de las empresas e intereses financieros, en desmedro de la ciudadanía. El gran argumento que intenta justificar esta actitud es el temor a perder las inversiones, especialmente las provenientes del extranjero. Algunos de los entrevistados consideran que estas concesiones, avaladas teóricamente en nombre de la estabilidad económica, son una muestra de la persistencia de un Estado cooptado por los intereses de las transnacionales. Esta mirada es notoriamente evidente en el caso de las empresas que provocan fuertes impactos en el medioambiente.

C. Los límites de la democracia representativa continúan siendo evidentes: Otro elemento de continuidad en nuestros países es la persistencia de las limitaciones de los mecanismos de representación democrática con que cuentan nuestros Estados. Se evidencia en las demandas y reclamos, cada vez más masivos, por espacios de participación más efectivos, que superen la participación formal y se conviertan en momentos en que efectivamente se decidan ciertas políticas de interés público.

Se constata que en los parlamentos de nuestros países se han incorporado la discusión leyes y mecanismos innovadores para la participación ciudadana. Pero en general ni los gobiernos centrales, ni los parlamentarios, ni las administraciones regionales y locales demuestran un compromiso efectivo con la promoción de un modelo de participación realmente profunda. En general continúa predominando la lógica clientelar, en la cual la participación suele permanecer tutelada bajo los criterios e intereses de las autoridades, lo que no contribuye a formar ciudadanos ni líderes comunitarios conscientes y autónomos.

En algunos informes se analiza con detenimiento el hastío ciudadano ante los mecanismos de clientelismo que han dominado los procesos políticos por largo tiempo. Se los identifica como un sistema patrimonialista-clientelar donde predomina el uso discrecional del poder. Por este motivo, pese a los avances de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de control y vigilancia, se percibe a un Estado donde existe confusión o fronteras porosas entre lo público y lo privado, ya que la administración pública es concebida como conquista de un grupo en el poder.

Esta realidad es especialmente grave en contextos económicos precarizados, ya que las agencias estatales asumen un papel clave como empleadoras, y bajo este diseño los cargos públicos, a todo nivel, son instrumentalizados dentro de una transacción patrón/cliente. Las designaciones o contrataciones no se rigen por el reconocimiento de méritos y aptitudes, sino que responden lealtades políticas y relaciones personales.

Junto a estas percepciones los entrevistados muestran una gran indignación ante la incapacidad de los sistemas políticos de nuestros países para resolver las demandas de participación que se vienen gestando desde los periodos anteriores. Estos reclamos apuntan a formas de decisión más deliberativas y extendidas, que permitan superar los actuales marcos de inclusión política. Sin embargo, la continuidad de prácticas clientelísticas, la influencia de miradas tecnocráticas en los Estados y la frecuente cooptación de los liderazgos de la sociedad civil se transforman en elementos que coadyuvan en el detrimento de la calidad de nuestras democracias y postergan los procesos de ciudadanía. En muchos países de la región, los límites de la democracia se explican por factores ligados a la cultura política imperante desde muy antiguo en algunas sociedades. Es el caso del sistema presidencialista-patrimonialista y clientelista de Paraguay. En otros países los límites de la democracia radican en límites jurídicos y constitucionales, que intencionalmente imposibilitan el ejercicio pleno de la soberanía popular. Es el caso que denuncia el informe chileno debido al mantenimiento de un sistema electoral binominal, que excluye explícitamente sectores políticos, y en ciertas ocasiones transforma el sistema representativo en un ritual en el que no existe una real expresión de la soberanía popular.

Por otra parte, se observa una mirada escéptica y de sospecha ante algunos espacios de participación que aparentemente se han abierto desde los gobiernos, pero que en la visión de varios actores entrevistados, no permiten incidir en las políticas públicas que se decide implementar. La crítica que se plantea en los informes nacionales radica en que existirían muchos procesos de participación en consejos y conferencias en las cuales las propuestas y las políticas defendidas y aprobadas en estos espacios, no son incorporadas o asumidas por los Gobiernos, lo que desilusiona a quienes participaron y deslegitima los espacios de participación que se han alcanzado.

A modo de ejemplo algunos entrevistados se refieren a los límites que han tenido los espacios abiertos a nivel del MERCOSUR, a pesar de esos mismos entrevistados valorizan en términos generales estos esquemas de incidencia y participación. Otros actores destacan la inviabilidad de espacios que se conquistaron por medio de la movilización social, como es el caso del “Consejo Asesor presidencial para la calidad de la educación” de Chile. En estos casos, luego de un tiempo de entusiasmo inicial ante este tipo de experiencias, caracterizadas oficialmente como espacios consultivos de los gobiernos, deviene una gran desilusión ya que en definitiva se les percibe controlados y manejados desde la esfera gubernamental. La crítica se basa en su carácter meramente “decorativos”, lo que implica que sus propuestas están

totalmente dependientes de la disposición y acogida de los Gobiernos.

Desde la perspectiva de género, la democracia de nuestros países también se ve fuertemente cuestionada. Son evidentes las resistencias masculinas a los procesos de empoderamiento y participación de las mujeres. Estas actitudes van más allá del ámbito doméstico, instalándose a todas las dimensiones del espacio público con distintos grados de visibilidad. Algunas de las expresiones de esta resistencia son las normas institucionales discriminatorias, las modalidades implícitas de funcionamiento de los partidos políticos, la falta de decisión política para incluir la perspectiva de género en las políticas públicas, la dificultad para aceptar acciones afirmativas como las cuotas de representación en los partidos políticos o en los cargos parlamentarios.

D. Dificultades de la Sociedad Civil para ejercer incidencia pública: La persistencia del neoliberalismo y las limitaciones de la calidad e intensidad de las democracias de la región se han conjugado como un marco que limita estructuralmente a la Sociedad Civil, impidiendo su fortalecimiento como un actor con plenos derechos, capaz de incidir de forma determinante en el proceso político.

Esta debilidad se expresa en la invisibilidad de sus prácticas y en el cerco al que se le somete desde los grandes medios de comunicación. En un contexto sociedades tan desiguales como las nuestras la concentración de la propiedad de los medios de comunicación origina un agravamiento de nuestras frágiles democracias. Pese a que en ciertos momentos los movimientos sociales han logrado una gran capacidad de organización y movilización, no se ha conseguido romper los cercos informativos que imposibilitan la continuidad y la articulación de sus demandas.

Tras esta situación se evidencia la ausencia de una voluntad política, por parte de gobiernos que teniendo la posibilidad de hacerlo, no se atreven a revertir este proceso. Es muy común la constatación de la ausencia de medios de comunicación que cubran las agendas de los movimientos sociales y al respecto se asigna una responsabilidad directa a las políticas de los actuales gobiernos, que no han contemplado destrabar el acceso a los medios para todos los ciudadanos. Por otra parte, también la sociedad civil reconoce sus propias responsabilidades en esta situación, al admitir que desconoce los códigos y estrategias comunicacionales que le permitirían abrir algunas puertas. Se requiere por lo tanto de la búsqueda de alternativas a este factor de debilidad estructural.

Por este tipo de factores es entendible que las entidades entrevistadas no muestren satisfacción por su capacidad de incidir en la opinión pública por medio de sus movilizaciones. Esta insatisfacción se explica desde la falta de eco que sus propuestas tienen en los medios de comunicación y la ausencia de estrategias específicas para dar mayor visibilidad a sus acciones. Se constata que el corporativismo e inmediatez de muchas de las demandas sociales impiden avanzar en agendas compartidas de modo amplio, que permitan tejer alianzas entre sindicatos, movimientos sociales y ONG's.

En este sentido, se considera que la sociedad civil no tiene actualmente la articulación necesaria como para poder gestar propuestas y realizar iniciativas que puedan dar un salto cualitativo hacia la región.

Finalmente, este estado de maduración todavía insuficiente de la sociedad civil se ha visto agravado en el último período debido a la creciente criminalización de los movimientos sociales por parte de los medios de comunicación como también por actores estatales, que recurren a la persecución judicial de las movilizaciones sociales. Esta campaña se ha sumado a los intentos ya tradicionales de criminalizar a las ONGs, tratando de desacreditarlas y disminuir su legitimidad social. Se trata de una realidad emergente que es necesario observar con detenimiento en el tiempo que se avecina. E. Persistencia de las tensiones entre Partidos los, movimientos sociales y ONG's: La fragilidad de la sociedad civil incide en las tensiones recurrentes que se detectan entre los partidos políticos, las demandas sectoriales que expresan los movimientos sociales y la elaboración teórico-práctica de las ONG's. Esta tensión se explica además por una dificultad propia del período, que consiste en establecer criterios de acción común frente a los gobiernos, en especial aquellos que proviene de partidos los progresistas o de izquierda. Este dilema ha llevado recurrentemente a situaciones en las que los actores suelen ver desdibujado el rol específico que les cabe en los debates que cruzan nuestras democracias. Esta tensión puede desembocar incluso en descalificaciones y exclusiones mutuas, que impiden su reconocimiento compartido como sujetos legítimos.

La emergencia de los gobiernos progresistas ha instalado un debate sobre la actitud a tomar, ahora, ante el nuevo panorama gubernamental. En este punto es posible constatar que las entrevistas plantean visiones contradictorias que pueden ir desde la voluntad de ganar mayor o menor autonomía, hasta la subordinación completa a la agenda gubernamental. Por ejemplo, el informe Brasil es bastante explícito al describir un debate en el que algunas organizaciones sociales afirman que el Gobierno Lula es un gobierno que impulsa cambios, aunque graduales en procesos largos y permanentes, mientras que otros movimientos y entidades entrevistadas aseguran lo contrario, ya que a su juicio se trataría de un gobierno que busca mantener las actuales estructuras, y el modelo de desarrollo neoliberal.

Al mismo tiempo, los entrevistados los reconocen que los partidos de gobierno “estatalizan” muchos de los liderazgos de la sociedad civil, lo que debilita la capacidad reivindicativa del mundo social. Como señala un entrevistado del informe Chile “no se puede al mismo tiempo administrar soluciones que reivindicar, y los partidos los han perdido la dimensión reivindicativa. Eso ha producido que, primero, los movimientos –aún cuando allí participen militantes- no respondan para nada a los partidos. Es decir, los propilos militantes viven la esquizofrenia de militar en horas distintas a las de su ejercicio como dirigente social. ¿Por qué?, porque el partido no les sirve de nada a la hora de ejercer su rol de dirigente social.” Por este motivo, las relaciones y vínculos entre partidos los y movimientos asumen un tono confrontacional o de sospecha.

Por este motivo, más que un tiempo de avances evidentes, muchas organizaciones destacan en este período nuevas dificultades en la consecución de logros y objetivos. Debemos reconocer que los análisis se polarizan entre la necesidad de politizar lo social de un modo radical y una visión más moderada que reconoce la importancia de avanzar en una agenda “corta” o en aspectos más minimalistas, de tipo legal reconocimientos o políticas públicas que transfieran activos a los sectores vulnerables en sus derechos. En lo inmediato afirman la necesidad de perseverar en las prácticas de resistencia de largo aliento. De esta forma se puede inducir que los movimientos sociales en los países en los que se han instalado gobiernos que hipotéticamente poseen mayor apertura a las demandas ciudadanas, siguen considerando como muy relevante desarrollar movilizaciones y procesos de presión pública, debido a que sigue siendo muy difícil alcanzar resultados concretos. Por este motivo, algunas voces plantean que a pesar de los cambios políticos, la sociedad civil del Como Sur debería considerarse enfrentada a un período de resistencia y de acumulación de fuerzas.

Por otra parte, en varias entrevistas es posible encontrar reseñas y análisis de alianzas exitosas entre partidos los políticos y ONG’s, basadas en la construcción de consejos básicos y metas compartidas, que impiden la cooptación de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, por parte de los partidos políticos. Sin embargo, se trata de contextos puntuales que requerirían análisis ulteriores más detallados, que permitan mostrar las singularidades y especificidades de estas situaciones.

2. RECOMOCIENDO LOS ELEMENTOS DE CAMBIO

A. Emergencia de perspectivas post-neoliberales:

A pesar de la continuidad de muchos elementos esenciales al modelo neoliberal, es evidente un cambio en los debates y propuestas que cruzan nuestros países. Se ha hecho más explícita, desde las organizaciones políticas, sociales y desde los mismos gobiernos, la voluntad de avanzar, aunque sea parcialmente, en procesos que rebasan los límites de los consejos políticos anteriores. Se debate cada vez más abiertamente entre un esquema de reformas parciales al dogmatismo neoliberal, avalado por los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, o un nuevo modelo de desarrollo que contemple la complementación e integración solidaria entre nuestros países, basada en estrategias más profundas de transformación política, económica, social y cultural.

El informe Argentina es el que más destaca esta discontinuidad, al enfatizar con mucha claridad la “vuelta al desarrollismo” como expresión de la crisis del pensamiento único neoliberal y el aumento del interés por los proyectos de integración regional. Bajo ese análisis, Argentina estaría en un momento de pasaje desde un modelo predominantemente financiero-especulativo a un modelo productivo-social, marcado por la recuperación del rol del Estado. Este diagnóstico no es generalizable de ninguna manera a toda la sub-región,

sin embargo, puede ser una pista que indique hacia donde se podrían orientar los procesos del conjunto de nuestros países en un mediano plazo.

Sérgio Haddad ha descrito esta situación recalando las posibilidades que se abren en este contexto para los movimientos sociales: “Estamos frente a un movimiento de cambio de sectores neoliberales a sectores progresistas de centroizquierda. Es una novedad que no debemos dejar pasar, pero también sabemos que esta oportunidad se puede convertir en una decepción si la dimensión de las demandas sociales no es atendida. En ningún lado se está dando tanta sintonía entre gobiernos y sociedad como en América latina. Ahora son más fáciles el diálogo y la participación, y esto abre posibilidades efectivas de modificar el proceso de concentración de la riqueza. Pero el riesgo de nuestros países es la muerte de la sociedad civil, porque los gobiernos pasan pero las demandas quedan.”³

Un ejemplo de esta situación es la búsqueda en los gobiernos de la región de planes que tiendan a dar respuesta a los problemas de vulnerabilidad y pobreza mediante la creación de políticas de cohesión social en nuestras sociedades. Estas nuevas políticas de protección social buscan construir una red que permita sustentar esquemas capaces de mejorar la calidad de vida de la población desde el nacimiento a la vejez de modo interconectado y focalizado.

Hoy no es extraño ver a las autoridades de muchos de nuestros países involucradas de modo activo en algunos de los debates y campañas contra la discriminación y la exclusión, y en la búsqueda un nuevo trato para los ciudadanos en todos los aspectos de la acción pública. Esta mayor voluntad política debería, en teoría, permitir que la sociedad civil alcance mayor incidencia política. Sin embargo, se trata todavía de un proceso acotado y no exento de contradicciones. A modo de ejemplo, el informe de Uruguay caracteriza la actual coyuntura en ese país por medio de esta matizada distinción: “A nivel nacional, se reconocen esfuerzos del gobierno, para generar espacios de participación y “de escucha”. Pero se considera que es una participación de primer grado dado que se escuchan propuestas pero se bloquean las iniciativas de elaboración y diseño de las propuestas, bajo el argumento de “soy gobierno, fui elegido para gobernar, voy a gobernar”. (IDD Uruguay)

B. Emergencia de nuevas prácticas democráticas y participativas:

Los informes nacionales destacan la mayor disposición de los gobiernos a desarrollar discursos que asumen el objetivo de ampliar la participación social. Se habla de impulsar una sociedad civil vibrante, y con capacidad de ejercer poder, que interactúe con un Estado acogedor y receptivo a las ideas emanadas de la sociedad. Sin embargo, desde la ciudadanía, esta situación todavía se evalúa precaria y ambigua.

Los actores sociales valoran, esta nueva disposición, por precaria que sea, ya que constituye un logro político que ha sido fruto de la presión y movilización anterior de los movimientos de la sociedad civil. Por otra parte, se trata de nuevos espacios de participación, que se transforman en desafíos, ya

que exigen participar de discusiones a las que no se tenía acceso con anterioridad y a las cuales no se está habituado, tanto a nivel social como gubernamental.

C. Nuevas estrategias y herramientas de incidencia y transformación

Las experiencias de la sociedad civil y los movimientos sociales que recogen los informes nacionales muestran una voluntad clara de experimentar nuevas estrategias de incidencia pública. Muchas organizaciones han buscado de forma más explícita fortalecer su acción colectiva y las articulaciones y alianzas. Esta búsqueda se expresa constantemente en los informes nacionales lo que indica que se trata de un objetivo ampliamente compartido. Sin embargo, más allá de esta buena voluntad, se evidencian las dificultades de hacer operativo este deseo.

Es posible identificar en varios países algunas experiencias exitosas de articulación entre movimientos sociales urbanos y rurales, estudiantiles y de defensa de los derechos sociales, basados en una búsqueda de una agenda común de movilización. De estas experiencias surgen propuestas y demandas que impactan con gran fuerza sobre las agendas de los gobiernos, incluso imponiendo temáticas que no estaban consideradas en sus programas.

En algunos casos puntuales, las nuevas articulaciones surgen por coyunturas abiertas por la acción del Estado, y no por la acción de las organizaciones sociales. Se trata de casos específicos, en coyunturas ligadas a temáticas de género y salud reproductiva o por procesos en los cuales los gobiernos impulsan reformas que amplían los derechos laborales, por medio del reconocimiento de la negociación colectiva y del fuero sindical.

En las diferentes situaciones, se trate de articulaciones impulsadas por la fuerza de las movilizaciones sociales o facilitadas por los espacios que abre la institucionalidad oficial, las experiencias de avance dan cuenta de una subjetividad marcada por la sensación de logro, que rompe con el fatalismo que predomina en experiencias de aislamiento y desvinculación.

III. LA AGENDA PENDIENTE DEL COMO SUR

Una convicción que parece de forma muy nítida en las entidades entrevistadas es que el momento político de nuestros países está marcado por la redefinición de las posiciones tanto de los gobiernos, los partidos políticos, como las organizaciones de la sociedad civil. Esta situación se ve con fuerza por la discursividad de los “gobiernos progresistas”, que tratan de marcar distancia de los factores que generaron

la crisis de la hegemonía neoliberal, a inicios de esta década. Es evidente que el lenguaje usado, y especialmente los énfasis de algunas políticas públicas es diferente al de los gobiernos anteriores, lo que no implica que las políticas de fondo se puedan caracterizar de la misma forma.

En los informes nacionales es posible advertir que el momento político de la sub-región sigue atravesado por los debates referidos al impacto de las políticas neoliberales, la relevancia de la crisis de la gobernabilidad, las tensiones relativas al carácter de la integración continental, el resurgimiento de una nueva cultura autoritaria o discriminatoria y las respuestas de la sociedad civil, que está comprometida con nuevas prácticas democráticas.

La novedad es que estos temas se han constituido en una trama compleja e interconectada que ha obligado a los gobiernos de la región a contar, de alguna forma, con la mirada ciudadana a la hora de administrar las crisis del período. Se trataría de una reacción ambigua y todavía difícil de evaluar, que surge como consecuencia de la crisis de la gobernabilidad democrática que han vivido los países de la región. Frente al diagnóstico de la década de los noventa, que evidenciaba un profundo divorcio entre la sociedad civil y el sistema político debido a la desmoralización de los partidos y a la corrupción en la gestión pública, se aprecia en los actuales gobiernos una mayor sensibilidad ante las demandas sociales, lo que se expresa en un intento de recomponer los lazos con la ciudadanía, de una forma todavía titubeante y contradictoria.

Se ha instalado un nuevo debate entre los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, ya que implica desarrollar constantemente un riguroso ejercicio de discernimiento respecto a las ofertas de diálogo y consulta que se han venido creando en estos años. En los diferentes países es posible apreciar el establecimiento de comisiones, procesos de participación y mesas de debate nacional que han incorporado a actores sociales que estuvieron sistemáticamente ausentes en periodos anteriores. Sin embargo, los resultados de este proceso, todavía en curso, parecieran ser desigualmente evaluados por los movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

Este escenario hace evidente las diferencias y contradicciones al interior de la ciudadanía. En los informes algunas organizaciones y liderazgos sociales se expresan de un modo en el que no queda clara su distinción del gobierno, sino más bien se identifican casi como una parte del proyecto gubernamental, que respondería al calificativo de “nuestro gobierno”. Simultáneamente, otros movimientos y entidades tratan de demostrar un claro distanciamiento de los gobiernos, caracterizándolos como muy parecidos a los gobiernos anteriores, o asumiendo un discurso que plantea que el desarrollo electoral de la región es irrelevante para las luchas sociales.

En algunos casos esta situación revelaría una crisis en los roles que tradicionalmente se ha asumido frente a los gobiernos. Específicamente, desde algunos entrevistados de los movimientos sociales, se pueden apreciar ciertas reticencias ante los efectos inesperados que generan los gobiernos

progresistas. En algunos casos, como en Uruguay, se habla del vaciamiento de las ONG's para proveer cargos dentro del gobierno. En otros casos se analizan los efectos de las nuevas relaciones entre ONG's y los Estados los debido a la demanda hacia estas organizaciones para la implementación de políticas sociales. Este tipo de relaciones ha traído aparejado un debilitamiento de la autonomía de las ONG's, ya que se espera desde las agencias oficiales una aceptación casi sumisa de los programas de gobierno. Por otro lado, esta situación hace que los partidos los políticos de oposición vean a las ONG's como un brazo del gobierno y la misma ciudadanía puede verse confundida al momento de relacionarse con las ONG's.

En cierta forma, este nuevo escenario ha instalado miradas e interpretaciones diversas. Por un lado es posible identificar un punto de vista muy crítico, que se centra en las continuidades fundamentales de los actuales gobiernos en relación a los del período anterior. Por otro, una segunda mirada da mayor énfasis a las posibilidades y oportunidades que se han abierto con los "gobiernos progresistas". Estas miradas si bien parecen ser irremediablemente antagónicas, en la práctica ambos sectores reconocen la desigualdad y la pobreza como los principales problemas de la región. Los análisis de la gran mayoría de las organizaciones señala como la principal causa de dicha situación la imposición del modelo neoliberal, la captura de los gobiernos nacionales por los intereses del capital financiero internacional y de las grandes corporaciones y las políticas de ajuste estructural y de pago de la deuda externa que retiraron la capacidad de los gobiernos de poder atender las necesidades y demandas sociales.

Silvio Caccia Bava caracteriza estas lecturas distintas del momento de América Latina de la siguiente manera: "Algunas de estas interpretaciones, considerando las nuevas configuraciones del poder en la fase actual del capitalismo, la marginalidad del peso económico de la región en el escenario mundial, los conflictos crecientes, la violencia y la inseguridad social apuntan hacia un escenario de desintegración social y de quiebra de los Estados los nacionales. Otras identifican a América Latina como un espacio de disputas donde la capacidad de incidencia de sectores populares organizados en defensa de la democracia y de la equidad es creciente y puede transformar este continente en el laboratorio mundial de la sociedad futura, pos-neoliberal. Hay análisis que quedan a medio camino entre estas de los interpretaciones, considerando como objetivos la promoción de reformas graduales, que van configurando nuevos escenarios de poder".⁴

A. Entendiendo la mirada optimista:

Se puede decir que existe una mirada más "optimista" respecto a los gobiernos que enfatiza los avances en los procesos de integración regional, en la condena judicial a los violadores a los derechos humanos durante las dictaduras militares, los debates sobre educación y salud y en las nuevas condiciones que se han abierto a las luchas sindicales. Por ejemplo, un entrevistado de Brasil expresa muy gráficamente sus expectativas respecto al segundo período de gobierno del presidente Lula: "Aparentemente, el fenómeno traza para el escenario político un Gobierno Lula más comprometido con los cambios e menos rehén de las clases

dominantes. Primero porque no estará más disputando elecciones al final de su mandato lo que, ciertamente, da una tranquilidad para la realización de los proyectos y acciones de cambios. Segundo, porque hubo un peso significativo de las clases populares en la victoria lo que desnudó el apoyo interesado de las elites en el proceso de división del poder". (IDD Brasil)

Los logros que más se destacan en las entrevistas tienen relación con el campo de los Derechos Humanos. Basta recordar la anulación de las leyes de "punto final" y "obediencia debida" en Argentina, la implementación del informe y los programas de reparación de la comisión Valech en Chile, y las nuevas investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos en Uruguay.

Sobre la integración regional, si bien las tensiones en el MERCOSUR parecieran haber paralizado al bloque, también es explícita la voluntad de los gobiernos de avanzar en este proceso por medio del establecimiento de reglas de juego que contemplen las asimetrías existentes entre los países que lo integran. Al mismo tiempo, desde la cumbre de las Américas de Mar del Plata, que supuso un freno decisivo al ALCA, se han sucedido nuevas iniciativas integradoras, como el nacimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas, (UNASUR) y el Banco del Sur, iniciativas aún germinales pero que hubieran sido impensables bajo otros contextos políticos.

En el campo sindical, se destacan las reformas laborales impulsadas por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. En varios casos se ha abierto nuevos espacios a la instauración de la negociación colectiva y al pleno reconocimiento del fuero sindical. El sindicalismo parece vivir un buen momento, ya que ha aumentado la afiliación sindical en los últimos de los años.

En referencia al derecho a la educación se destaca la reforma universitaria de Brasil, que incorporó una reserva del 50 por ciento de las plazas en las universidades públicas para alumnos que cursaron la escuela media en el sistema público, en particular a estudiantes negros e indígenas. Y el establecimiento de la comisión asesora presidencial sobre educación en Chile, como respuesta a las movilizaciones de los estudiantes secundarios de 2006.

Finalmente, las opiniones optimistas destacan también el desarrollo de los nuevos programas de transferencia de renta que han implementado los gobiernos de la región, como "Chile Solidario", el plan "PANES" en Uruguay, "Jefes y Jefas de hogar" en Argentina, y "Hambre Cero" en Brasil, que apuntan al establecimiento de un sistema de protección social que vaya más allá de los planes de empleo de emergencia y permitan además garantizar ciertos derechos mínimos, elevando los niveles de escolaridad, de cobertura previsional y de salud, entre otros factores.

En el informe de Uruguay se describe uno de estos programas, mostrando los elementos comunes a este tipo de políticas públicas: "Una de las grandes apuestas del gobierno actual, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES, creado en el año 2005)...Este Plan de Equidad, presentado en

el año 2007, apunta a la mejora del sistema de protección social "fortaleciendo los dispositivos públicos existentes, introduciendo transformaciones sustantivas en la organización e instrumentos de protección y mejorando sensiblemente la provisión y regulación de servicios sociales", y está pensado como plan para toda la sociedad. Es decir, aunque pone énfasis en los sectores más desfavorecidos, el Plan de Equidad abarcará al conjunto de la población, apuntando a desarrollar una Red de Asistencia e Integración Social que evite la consolidación o instalación de situaciones de pobreza y articularla con las prestaciones tradicionales, al tiempo que se propone mejorar la equidad intergeneracional, territorial y de género". (IDD Uruguay)

En relación a la participación política de las mujeres, es destacable que las entrevistas reflejan altas expectativas, relacionadas con el creciente protagonismo de mujeres en altos cargos de nuestros países. Las entrevistas reflejan que se espera de este protagonismo femenino una oportunidad que permita generar nuevos espacios participativos, de valores igualitarios, la creación de normas y de leyes que legitimen los derechos humanos de las mujeres, la implementación de políticas sociales que habiliten y promuevan la equidad.

B. Comprendiendo las miradas pesimistas:

Las posiciones críticas a las políticas de los "gobiernos progresistas", si bien no dejan de reconocer que millones de personas se benefician de sus programas sociales, argumentan que bajo un sistema de seguridad social universal, la transferencia de rentas no sólo sería una prioridad sino un derecho que se extendería bastante más allá de la mera ayuda contra la pobreza.

Los argumentos críticos ponen énfasis en las dificultades que existen en el actual momento político para mantener una posición independiente ante este tipo de gobiernos, que poseen una enorme capacidad de cooptación y división de los movimientos ciudadanos. Bajo esta mirada, el Como Sur estaría ante una segunda oleada neoliberal, que a diferencia de la primera oleada que fue implementada por gobiernos conservadores, estaría siendo impulsada por los nuevos gobiernos progresistas. Si los movimientos resistieron con empeño y coraje la primera, la relación de fuerzas actual hace mucho más compleja la oposición.

El informe Brasil recoge una opinión que afirma: "Hay una clara afirmación que los movimientos sociales brasileños viven un momento de resistencia y reorganización con motivo del Gobierno Lula. Primero, porque el Gobierno Lula posee una gran capacidad de llevar hacia el aparato de Estado los liderazgos que otrora lideraron las luchas. Segundo, porque el Gobierno ejerce un gran poder de cooptación de los movimientos, presentando programas y proyectos para que sean realizadas acciones en la base de la sociedad colocando, por veces, los liderazgos de los movimientos como delegados del Gobierno en la relación con la sociedad". (IDD Brasil). Esta situación amenazaría la autonomía de la sociedad civil, e impediría su resistencia ante políticas gubernamentales que profundizarían el neoliberalismo.

Un entrevistado de Chile, por ejemplo expresa su desilusión

ante la falta de voluntad real de escuchar a la ciudadanía por parte de las nuevas autoridades: "hay muchas decisiones que se están tomando en este país que se toman absolutamente en contra la voluntad de la gente, o sea, acá no se avanza en términos de que tener elecciones o elegir una autoridad cada 4 años, esto es un cheque en blanco y que pueden tomar las decisiones que quieran" (IDD Chile).

En el caso de Paraguay se caracteriza la emergencia de este tipo de políticas directamente con el clientelismo: "Como lo señala Milda Rivarola (2007), en un sistema clientelar, el gobierno y por extensión el partido de gobierno se legitima por su predisposición a distribuir, por ser dador de "ayuda" o asistencia social a los pobres o pobres extremos según el grado de focalización de la llamada intervención, que por lo general se diseña bajo forma de programa o proyecto, así también cargos públicos a operadores políticos, y la ampliación de servicios como luz, agua, línea telefónica, caminos a comisiones vecinales según la disposición de seccionales, células de base territorial del partido, y autoridades locales. A esto hay que agregar, que cuando se trata de bienes de terceros o de créditos sin muchos controles, dependiendo de la presión y negociación en juego, tierras a campesinos y viviendas a sin techos, así también subsidios a productores e industriales y obras a empresas consultoras". (IDD Paraguay)

Respecto a la participación política de las mujeres, desde esta mirada se enfatiza que alcanzar ciertos cargos de alta notoriedad no asegura la incorporación de la perspectiva de género en los programas ni en las políticas de las instituciones. Esas decisiones (democratización, incorporación de la perspectiva de género) se toman a otro nivel y obedecen a lineamientos políticos e institucionales generales. Permear a las instituciones para que se hagan cargo e implementen efectivamente políticas sociales con perspectiva de género y democratizen su accionar internamente y en relación a la población implica cambios institucionales profundos que sólo pueden habilitarse si hay una fuerte voluntad política y los recursos para hacerlo.

IV. LAS MOVILIZACIONES DEL PERÍODO Y SU IMPACTO

El contexto político descrito con anterioridad marca también las evaluaciones que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales expresan en relación al carácter y al impacto de sus movilizaciones.

Lo que es ampliamente compartido es la necesidad de mantener una estrategia de movilizaciones pertinente al contexto actual. Como el informe de Brasil sintetiza: "Hay una afirmación común entre todas las respuestas indicando que en las movilizaciones sociales una clara tentativa de cambios

sociales y políticos entre los movimientos y entidades” (IDD Brasil). El impulso movilizador es una instancia que permite unificar en la acción a actores que no poseen visiones políticas homogéneas: “Crece un sentimiento de unidad política, a pesar de las estrategias y acciones tácticas muchas veces diversas” (IDD Brasil).

Al mismo tiempo, las evaluaciones de la incidencia están determinadas también por las posibilidades específicas con que cuentan los actores movilizados. Por ejemplo, el informe Uruguay expresa que “Las entidades entrevistadas no muestran satisfacción con respecto a su capacidad de incidencia, en particular en lo que refiere a la formulación de las políticas públicas. Si bien se reconocen convocados a instancias de diálogo sobre éstas, no tienen peso en las decisiones, en parte porque no son convocadas a instancias de “decisión” y en parte por incapacidad propia de generar una agenda alternativa consensuada”. (IDD Uruguay)

El informe Argentina ofrece pautas interesantes sobre las condiciones que potenciarían este objetivo: “Y en general las ONG’s y movimientos sociales en el 2006 - 2007 han obtenido logros (ej. El movimiento ambientalista y movimientos sociales de trabajadores sindicalizados, movimiento de trabajadores desocupados, de mujeres, docentes y estatales provinciales y municipales, etc.) sobre todo cuando han sido más específicos con sus propuestas, unidos en cuanto a organización y ganado a la opinión pública y menos cuando han sido generalistas, no han contado con el apoyo de la prensa y han Estado carentes de organización de base” (IDD Argentina)

En algunos casos, la capacidad de movilización e incidencia de la sociedad civil está gravemente condicionada por la baja permeabilidad de los gobiernos a la presión ciudadana. En algunos informes esta situación se explica como un producto de la escasa valoración que las autoridades estatales tienen de los aportes de la sociedad civil. Por otro lado los informes muestran también la fragmentación y a las actitudes fatalistas que atraviesan la ciudadanía. Como lo expresa el informe de Chile: “Los problemas, dificultades y desafíos que mencionan los entrevistados dicen relación con el desgaste del movimiento social en Chile, por la fragmentación que existe y la falta de entusiasmo por la participación” (IDD Chile).

También se diagnostica la necesidad de cambiar las metodologías de incidencia, que permitan a las organizaciones de la sociedad civil realizar propuestas en el nuevo escenario de participación que han abierto muchos de los gobiernos de la región. El informe Uruguay afirma al respecto que “Se percibe una falta de cultura en la generación de estrategias de incidencia política sistemática por parte de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual parece estar condicionado por el nivel de cercanía en las relaciones sociales a nivel del país y además porque históricamente no ha sido una práctica necesaria para consensuar estrategias entre los distintos actores”. (IDD Uruguay)

En relación a los ejes temáticos que han marcado las agendas de movilización en el período es necesario destacar las

peculiaridades nacionales. Por ejemplo en el caso de Brasil posee una gran centralidad el tema de la reforma agraria, mientras que en los otros países los escenarios de movilización son preferentemente urbanos: Al respecto destaca el informe Brasil: “Es posible desprender que uno de los principales temas de movilización está ligado a cuestión de la tierra, la propiedad de la tierra y de las políticas agrarias. Aquí hay, por un lado un enfrentamiento entre el agro-negocio – sea el de producción de alimentos o de reforestación – y la agricultura familiar y agro-ecológica.” (IDD Brasil)

El informe Argentina caracteriza el momento de las movilizaciones de su país es su des- institucionalización de las convocatorias, en parte por la crisis de representatividad de partidos los y referentes tradicionales. Esta situación se expresa en que “a diferencia de etapas anteriores en que la participación de la ciudadanía era en base a temas agregados y a grandes movilizaciones, ahora se observa una declinación de las grandes movilizaciones como voluntad del pueblo en su conjunto y nuevas formas de participación más puntuales y de la proliferación de protestas sectoriales locales y muchas veces por derechos difusos (seguridad, medio ambiente)”. (IDD Argentina)

El informe Uruguay plantea que la capacidad de movilización está en relación con vincular las convocatorias “sentidas” por un conjunto amplio de organizaciones, ligadas a demandas concretas, de carácter más bien inmediato pero de gran relevancia: “las cosas que más han movilizado a la gente son las que tienen que ver con las empresas públicas”. Esto se relaciona con la cultura política de la sociedad en su conjunto estando fuertemente arraigado el concepto de Estado, además en general, es más propicio que los uruguayos se movilicen por cuestiones concretas y que requieren acciones de corto plazo”. (IDD Uruguay)

En el caso de Uruguay se detallan varios ejemplos al respecto. Por ejemplo: “El rechazo a la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio de Uruguay con EE.UU., sin embargo, constituyó un punto de encuentro entre todas las agrupaciones sindicales que, junto a la amplia mayoría del Frente Amplio, la FEUU, ONAJPU, FUCVAM y otras numerosas organizaciones sociales conformaron un Comité de Defensa de la Soberanía y realizaron manifestaciones exitosas contra la firma de ese tratado”. (IDD Uruguay)

Por otra parte, los informes muestran que es fundamental para lograr los objetivos de incidencia pública vincular temas que tienen capacidad de complementar y ampliar las agendas específicas de un movimiento. Por ejemplo, en Brasil se destaca la relación entre las luchas por la tierra y las temáticas medioambientales: “Otro tema indicado como articulador de movilizaciones y que está completamente agregado al tema de la reforma agraria, atañe al respeto de la cuestión ambiental”. (IDD Brasil)

En el caso de Chile destaca la movilización estudiantil de 2006 que correspondió a una serie de manifestaciones realizadas por estudiantes secundarios de Chile entre abril y junio de 2006 y reactivadas entre septiembre y octubre del mismo año. Esta movilización es conocida informalmente

como “Revolución de los pingüinos” o “Revolución pingüina”, debido al tradicional uniforme utilizado por los estudiantes. Se estima que más de 100.000 estudiantes de más de 100 colegios del país se encontraban en movilizaciones el viernes 26 de mayo, antes del paro nacional de estudiantes convocado para el 30 de mayo, el cual habría contado con una adhesión de más de 600.000 escolares, convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile. En Paraguay se destacaron las movilizaciones convocadas por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) que incluyeron ocupaciones de tierras y cierre de carreteras. Las demandas están centradas además en el fin de la violencia en el campo y la persecución a los dirigentes campesinos: “2006 fue un año marcadamente político, las opciones de los movimientos sociales, su vinculación o no con partidos y tangencialmente con ONG’s, tienen como común denominador ahora las elecciones del 2008; y las esperanzas de cambio que se van perfilando a partir del hartazgo con el modo tradicional de hacer política, en un contexto de persistente estancamiento económico y social, con sus efectos en términos de desempleo, emigración al exterior y deterioro de la situación política”. (IDD Paraguay). Pero la gran novedad política fue sin duda el nacimiento de la “concertación nacional” opositora, encabezada por el entonces obispo Fernando Lugo, que organizó una serie de actos públicos de protesta en contra del proyecto de reelección del presidente Nicanor Duarte. Esta irrupción del ex obispo, hoy candidato presidencial, comprometido con el Movimiento Campesino en la vida política del Paraguay, puede crear por primera vez en muchas décadas condiciones reales para disputar la presidencia al Partido Colorado. “La emergencia de Fernando Lugo, ya no como obispo emérito sino como un “referente de confianza”, ante la desconfianza que suscita en la ciudadanía los liderazgos de la oposición, genera críticas y adhesiones por igual, o sea confrontaciones y reposicionamientos de diversa índole. A mediados del 2006, los partidos de oposición en el Parlamento, constituyen la Concertación Nacional que se propone como meta derrocar al Partido Colorado, con 6 lustros en el poder”. (IDD Paraguay)

Finalmente, las organizaciones también recalcan que las movilizaciones no son la herramienta exclusiva en el objetivo de alcanzar la incidencia política. Al respecto el informe Argentina afirma que “la movilización es un aspecto importante pero no lo central para lograr incidencia o conseguir transformaciones más visibles -en el sentido de que los reclamos y demandas populares se conviertan en agenda y se traduzcan en políticas públicas y derechos. De este modo, la promoción de organización de redes de información y comunicación, debate y articulación a diversos niveles, la construcción de agenda y opinión hacen del proceso de incidencia algo más amplio que solo el centrado en el proceso movilizatorio”. (IDD Argentina)

Es necesario, por lo tanto, saber graduar los itinerarios y formas de incidencia y de movilización para no perder el contacto con la ciudadanía. El informe Uruguay ejemplifica al respecto: “En el campo sindical, los principales conflictos se canalizaron mediante una estrategia de ocupación de los puestos de trabajo durante la mayor parte del año. Final-

mente, en el mes de octubre baja el índice de conflictividad sindical, cuando la central de trabajadores decide parar la estrategia de ocupación que se venía dando y que había sufrido una pérdida de apoyo de la opinión pública”. (IDD Uruguay)

Por este motivo es necesario destacar que la incidencia de las movilizaciones está fuertemente condicionada por la capacidad de penetrar en los medios de comunicación. Ese factor puede ser una de las barreas que se convierte en límite cada vez más difícil de superar en diversos países de la región. Al respecto el informe de Chile afirma que: “Uno de los aspectos de la inequidad es la concentración de los medios de comunicación en las mismas manos, que no permite una real libertad de expresión, lo que resulta fundamental en una verdadera democracia” (IDD Chile). Otra limitación que se constata en el período tiene relación con fallos judiciales que revierten o imposibilitan las conquistas de los movimientos sociales, tal como lo señala el informe de Brasil: “No hay ningún control sobre la gestión del poder judicial, lugar donde buena parte de las demandas sociales son anuladas y, actualmente, se sabe que hay prácticas antidemocráticas e corruptas en la promulgación de las sentencias”. (IDD Brasil)

V. ALIANZAS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En general, las entrevistas manifiestan con convicción que generar alianzas y mayores instancias de articulación permanente con otros actores constituye una necesidad permanente. Al mismo tiempo, perciben esta dimensión como una debilidad estructural en su quehacer. Esta situación la explican por la necesidad apremiante de responder a agendas de corto plazo, lo que hace muy difícil articular agendas de largo plazo. Sin embargo, se expresa con mucha frecuencia la necesidad de superar el inmediateismo para construir alianzas sociales más estables.

En el informe Uruguay por ejemplo, expresan esta idea de un modo muy explícito al afirmar que “Todos los entrevistados los manifestaron la tendencia de sus organizaciones o movimientos a generar alianzas, tanto entre ellos mismos, como con el Estado y a nivel regional e internacional” (IDD Uruguay). Sin embargo, es necesario matizar este juicio general destacando que en la conformación de alianzas estables y profundas existen factores nacionales que pueden beneficiar o perjudicar este objetivo.

En otros casos se expresa el mismo escepticismo por ejemplo, en Brasil hay referencias a las dificultades geográficas propias de un país “continente” y en Argentina a las diferencias que atraviesan a la sociedad en relación al actual

gobierno: “Algunos entrevistados pertenecientes a ONG`s plantean una autocrítica respecto del sentimiento antiestatal de la institución como forma de preservar autonomía respecto del gobierno. Esto limita las capacidades de promover políticas a las que adhieren. Así lo expresa Marta Alanis “en este momento todo el feminismo está de acuerdo con la interlocución con el Estado; para algunos sectores es siempre el enemigo, para otros se da la posibilidad de dialogar”. (IDD Argentina)

El caso de Uruguay expresa que justamente la construcción de alianzas entre estos actores ha sido una de sus fortalezas históricas: “La clave del uruguayo han sido los aliados, y esto tiene que ver con la historia más profunda del Uruguay, porque entendieron eso, por la realidad, por la dimensión de la sociedad uruguaya”. (IDD Uruguay). Las condiciones necesarias para lograr este objetivo son variadas. Aparece con fuerza la idea de “ponerse de acuerdo en los temas y definir los roles de cada uno”. Esta meta presupone una clara voluntad política al respecto. Y como primer paso se afirma con frecuencia que se requiere que las propias organizaciones de la sociedad civil y movimientos clarifiquen y definan sus agendas propias, ya que no siempre ha sido así. Este punto aparece como un primer elemento necesario para el diálogo intersectorial.

Por otra parte “la posibilidad de aumentar o no la incidencia de las organizaciones sociales, tienen que ver no sólo con la mayor o menor progresividad de los gobiernos sino también con cambios producidos en la ciudadanía”. (IDD Argentina). Por este motivo es importante definir las convocatorias y alianzas desde un marco de temas capaces de convocar a la articulación.

Al respecto surgen ideas muy concretas. Por ejemplo, el informe Brasil afirma que “Los movimientos de defensa de derechos humanos, económicos, sociales, culturales e ambientales combinados con los movimientos contra cualquier forma de discriminación sociales son temas con gran capacidad de articulación y movilización de la sociedad pudiendo, inclusive, extrapolar el ámbito de los movimientos sociales tradicionales arrastrando un abanico bien amplio de la sociedad”. (IDD Brasil)

En otros casos se acentúa convocar desde una agenda amplia capaz anticuar de un modo pluriclasista: “La necesidad de generar trabajo y renta, principalmente, para la juventud. Este tema tiene un carácter altamente movilizador en varios segmentos de la sociedad, inclusive, para partes de la clase media y media alta que ve la solución de los problemas de trabajo para la juventud una forma de disminución de la violencia urbana”. (IDD Brasil)

En el informe de Chile estos temas convocantes se caracterizan de un modo muy similar: “Los temas que tendríamos en común son la reivindicación de derechos de las personas y de la ciudadanía, partiendo por la desigualdad. Piensan que sería más fácil entre organizaciones de la sociedad civil que entre partidos los políticos, quienes tienen objetivos específicos (llegar al poder) de corto plazo y compromisos que no les permitirían participar libremente de estas articulaciones”.

(IDD Chile)

Algunos entrevistados enfatizan el potencial articulador de enfrentar conjuntamente la tarea de dar seguimiento y proponer ideas en el campo de las políticas públicas: Por ejemplo un entrevistado del informe Brasil afirma: “De esta forma, me parece que a lucha por la realización concreta de políticas públicas es un tema movilizador que puede promover acciones conjuntas en el ámbito local, regional o nacional dependiendo de las banderas y acciones que sean organizadas”. (IDD Brasil)

Otros entrevistados los destacan las articulaciones centradas más bien en la movilización, como lo expresa el informe Brasil: “Talvez la cuestión más importante surgida nos últimos años es la creación del proceso de Asamblea Popular (AP) articulada en torno al movimiento del “Mutirão por un nuevo Brasil”, que es un intento de articulación e unificación de los movimientos sociales urbanos e rurales, agrarios e obreros, estudiantiles y de defensa de los varios derechos sociales en torno de una agenda común de movilización. En este mismo sentido, hay un intento de articulación de la Coordinación de los Movimientos Sociales (CMS) que pretende crear una unidad de los movimientos sociales e populares en torno de un conjunto de banderas de luchas nacionales” (IDD Brasil) Sin embargo, en lo que parece haber gran acuerdo en los informes es en torno a la necesidad de establecer estrategias coherentes, que sustenten la acción común y permitan incidir en quienes toman decisiones. Solo de esa manera las movilizaciones pueden producir cambios profundos. Para ello se requeriría además de liderazgos renovados y creíbles: “Los movimientos sociales no están consiguiendo presentar sus propuestas de forma palpable por la sociedad. Faltan nuevas liderazgos y una acción sobre temas que aglutinen las variadas luchas. Falta una integración con las entidades y articulaciones nacionales”. (IDD Brasil)

En el terreno práctico se destaca la necesidad de contar con recursos financieros que permitan sostener este tipo de articulaciones. Se argumenta al respecto el derecho a contar con fondos para sostener la democracia, salvaguardando la autonomía de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, bajo la perspectiva de que estos recursos vayan al sostenimiento de organizaciones de interés público, sin las cuales la democracia pierde envergadura y profundidad. Al respecto el informe Brasil señala que “Solo enfrentado el tema del financiamiento de la democracia, es posible imaginarse un proceso de participación social sin dependencia del Estado. Otro gran desafío es dejar de pensar y actuar sobre la base de las demandas y banderas individuales e intentar articular la lucha por demandas colectivas, que tengan respeto al nuevo modelo de desarrollo y como este modelo es capaz de promover a redistribución de la renta, de garantizar los derechos de todas las personas y la preservación del medio ambiente” (IDD Brasil).

VI. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL

En los informes nacionales es posible notar que la integración regional es un tema que no todavía ocupa un espacio central en las reflexiones de las organizaciones y movimientos sociales del Cono Sur. Además, las referencias a la integración se expresan más desde el campo de los deseos y las intenciones que sobre un plano de experiencias reales, basadas en procesos concretos de incidencia al respecto.

Como lo indica el informe de Brasil, entre los movimientos sociales existe una alta valoración y una buena disposición hacia los procesos de integración: “Todas las entidades indicaron como necesario y posible la construcción de una agenda común latinoamericana. Sin embargo, a mayor dificultad fue la indicación de la creación de consejos en torno de temas y políticas de integración regional. Fue apuntado como problema la cuestión de las diferencias culturales y regionales como un elemento que dificulta la integración de los pueblos”. (IDD Brasil). Es posible extrapolar esta actitud sea común a las organizaciones de todo el Cono Sur.

Las entrevistas diagnostican una falta de estrategias sectoriales para enfrentar los procesos de integración, lo que impide avanzar hacia la concreción de agendas regionales y latinoamericanas desde la sociedad civil. Esta situación se explica por las dificultades inherentes a un proceso en que es muy difícil lograr dar visibilidad pública a las propuestas que no provienen desde los actores estatales o empresariales. Como afirma el informe Uruguay: “Desde las Organizaciones de la sociedad civil se visualiza al MERCOSUR Social como una estrategia válida pero que aún le faltan contenidos y estrategias de largo plazo, que le permitan tener presencia a nivel de los países miembros. De hecho se rescata la escasa visibilidad pública de las acciones emprendidas por las Organizaciones de la sociedad civil en las distintas Cumbres de Presidentes realizadas en los últimos años”. (IDD Uruguay)

El informe Paraguay muestra las opiniones más escépticas ante la integración regional, debido a que los distintos proyectos en curso parecen ser percibidos por los entrevistados “En un tema polémico, las opiniones también difieren o resultan contradictorias. Así, por ejemplo, el ALCA y el Mercosur pueden ser vistos como proyectos similares, de los “otros”, los que buscan escala de producción o “juntar a los pequeños para negociar volumen” (TZ). En ambos casos, una misma apuesta fuerte por los agro-negocios. Y esto es así, porque “tanto en el caso del Mercosur como en los acuerdos de bilaterales, sustitutos ahora del ALCA, la esencia es el libre mercado, la competencia, y ahí gana el que es más fuerte. Y eso no resulta cuando un país es chico”.(IDD Paraguay)

Esta mirada revela que en el proceso de integración diseñado por los gobiernos continúa centrado en los causes exclusivamente formales e institucionales y por eso la participación de la ciudadanía sigue siendo débil. Los propilos gobiernos han dado poca visibilidad al proceso y han generado confusión lo que ha derivado en que la propia agenda de los gobiernos sea un factor que dificulta entender y participar de este proceso.

Por otra parte, junto a estas críticas a los procesos de integración también se perciben crecientes expectativas en las organizaciones sociales que tienen relación con las propuestas de los gobiernos de la región, aunque todavía no se vean concretamente sus resultados.” Al parecer ofertas recientes como la del Banco del SUR, iniciativa de Venezuela, pueden estar influenciando ciertas opiniones, de ahí expresiones de deseo como las de: “queremos cambiar el sistema crediticio, a más largo plazo, préstamos blandos, que sean cimiento para un desarrollo sostenible. Con planteos adecuados, en cinco años podemos salir de esta ruina, Paraguay tiene aún recursos para salir adelante” (BB). (IDD Paraguay)

A nivel de propuestas se plantea con insistencia “que si bien han logrado articular agendas de debate regional e internacional en cada uno de los sectores, la construcción de agendas colectivas con el consenso de actores diversos parece ser un desafío inabordable en la actual coyuntura”. (IDD Uruguay). También se sugieren algunos núcleos temáticos que pueden generar mayores niveles de articulación: “Posiblemente las alianzas que tengan mayores posibilidades de profundizarse sean las vinculadas a cuestiones de género y temáticas indígenas, de hecho, estas últimas se expresan en organizaciones regionales y globales altamente vinculadas” (IDD Argentina)

Respecto a los problemas más destacados por los entrevistados los es el de las asimetrías que afectan a los países pequeños en el MERCOSUR. El informe de Uruguay afirma al respecto que “En las distintas Cumbres ha quedado en evidencia la dificultad de las organizaciones de la sociedad civil de incidir en los procesos, más aún si se consideran las asimetrías propias del proceso de integración, en donde Uruguay no escapa a ser un país por escala pequeño y con escasas posibilidades de negociación en muchos temas, siendo un aspecto sentido el de la participación de la sociedad civil”. (IDD Uruguay). La ciudadanía y las ONG`s ,según el informe de Argentina “no ven al MERCOSUR todavía como un espacio propio, tal vez porque hasta ahora el proceso de integración estuvo muy recostado sobre los gobiernos y con un estilo básicamente presidencialista” (IDD Argentina)

El informe Paraguay plantea que para se destaca la necesidad de cambiar el modelo de integración criticando los paradigmas que lo sostienen: “Así también se propone debatir para construir una integración “desde abajo”, o sea un proceso no excluyente, puesto que “desde arriba ellos hacen acuerdo los que sólo benefician a los poderosos nuevamente”; mientras que “van desapareciendo los pequeños almacenes, se elimina nuestras formas de relación comercial”, y hasta se corre el riesgo de que la “gente deje

de producir y se convierta en consumidor”. Y se señala al “Banco Mundial como responsable de la adopción de una política agro-exportadora de materia prima (soja, algodón) exclusivamente”. (IDD Paraguay)

El caso de Chile representa una especial singularidad frente a este tema, ya que por no participar del MERCOSUR aparece como un país que vive en un relativo aislamiento frente a los otros países de la sub-región y con mayor desconocimiento y desvinculación a los procesos de integración regional. Una de las escasas referencias concretas que se citan en los informes nacionales es el caso del proyecto Mercociudades, citado en el informe Uruguay: “Desde uno de los entrevistados los, se hace énfasis en la Red de Mercociudades, como un buen ejemplo de alianzas estratégicas sobre la base de temas consensuados y con una importante articulación regional, aunque se destaca lo incipiente de esta experiencia como para extraer aprendizajes”. (IDD Uruguay).

VII. TENSIONES LATENTES Y EXPLÍCITAS ENTRE LOS ACTORES

En los informes nacionales se evidencia una tensión permanente entre movimientos sociales, partidos los políticos y ONG’s, que se expresa en la mutua incomprensión de sus roles específicos. La principal consecuencia de esta falta de reconocimiento mutuo es la dificultad de establecer alianzas, ya sea coyunturales o más estables entre los distintos actores. Para entender la naturaleza de estos desencuentros es necesario caracterizar con claridad las especificidades que explican esta situación.

Las tensiones entre movimientos sociales y ONG’s suelen estar relacionadas con la representatividad. Como lo caracteriza un entrevistado del informe Brasil: “Tenemos muchas disputas entre ONG’S y movimientos por la representación, por ejemplo, en los consejos nacionales. Esa diversidad es un retrato de la democracia, mas confunde mucho en el momento de articular acciones conjuntas... Precisamos también tratar la cuestión de que entendemos por sociedad civil”. (IDD Brasil)

En algunos casos, los representantes de los movimientos sociales acusan a las ONG’s de cambiar las temáticas que abordan de acuerdo a sus posibilidades de financiamiento, lo que es percibido como una actitud oportunista o interesada. Al respecto en el informe de Chile un entrevistado señala: “Respecto de las ONG’s, como problema para relacionarse en términos de alianza, se menciona la forma de operar de éstas, que se han transformado en proveedoras de trabajo, que han perdido el rumbo, cam-

biando los temas que las convocaban por los que resulten más rentables”. (IDD Chile). El informe Argentina cita a un dirigente del movimiento ambientalista de Gualeguaychú que expresó: “El problema con las ONG’s fue mucho más grande del que debería ser. Uno supone que las ONG’s están todas- supuestamente- con cierta uniformidad en sus objetivos y con claridad con lo que quieren respecto al interés público, pero no fueron a un entendimiento sobre estos puntos. Incluso algunas se posicionaron en contra de los objetivos del movimiento social” (IDD Argentina)

Por otro lado los movimientos sociales también reconocen la necesidad de establecer alianzas con las ONG’s, especialmente por los recursos humanos y materiales que pueden proveer a sus agendas. Sin embargo, para hacerlo demandan que se les reconozca su autonomía y representatividad específica. Esta idea es muy claramente expresada por un entrevistado del informe de Brasil: “Hay una cierta concordancia en que los movimientos sociales son compañeros de las ONG’s, mas está claro que hay situaciones de conflicto. Los militantes de los movimientos sociales se sienten más legítimos para actuar, entendiendo que las ONG’s deben apoyar estas acciones. Por eso, algunos movimientos critican el poder de las ONG’s, su capacidad de captar recursos y de tener mayor infraestructura lo que hace que los movimientos más desestructurados dependan del trabajo de las ONG’s” (IDD Brasil).

Por otra parte, los mismos movimientos sociales acusan una ausencia de articulaciones de largo plazo, y se reconoce la dificultad de ponerse de acuerdo cuando se trabaja en conjunto o se crean alianzas ya que en sus estrategias prima la reacción coyuntural: “Ninguna de las organizaciones entrevistadas tiene un plan de movilizaciones conjuntas acordado. Las articulaciones son más o menos estables, pero en general, dependen de los acontecimientos coyunturales” (IDD Uruguay).

El informe Paraguay plantea la necesidad de distinguir los roles sin la necesidad de compartir agendas comunes: “Entre ONG’s y organizaciones sociales pueden existir acuerdos o espacios de encuentro y formación, más no forzosamente agendas compartidas. Desde la década pasada, las ONG’s han promovido redes y a través de las mismas se busca construir agendas sobre temas que se consideran prioritarios o estratégicos. Algunas redes temáticas o que tratan de sujetos específicos han tenido más éxito que otras en este intento, lo que significa más visibilidad, informes periódicos o experiencias de interacción con instituciones públicas como en el caso de ONG’s que trabajan en los temas de derechos humanos, niñez, género; aún así hay desniveles entre propuestas y prácticas concretas, y desafíos que no son fáciles de enfrentar cuando se opera en un contexto adverso”. (IDD Paraguay)

En relación a partidos políticos las tensiones están atravesadas por factores de mayor complejidad, que tienen relación con la desconfianza con sus prácticas, y además con sus posiciones frente a las agendas de los gobiernos, ya sea como partidos de oposición u oficialistas.

El informe Paraguay describe estas relaciones de modo especialmente conflictivo: “Entre actores sociales y políticos las relaciones no son fáciles, y hasta se admite un “divorcio” entre movimientos sociales y partidos con representación parlamentaria, salvo casos individuales. En otros casos, la desconfianza remite a problemas de identidad y a posturas personalistas, autoritarias o dogmáticas que también impiden avanzar hacia relaciones más fructíferas, aunque según los relatos últimos, el tapé (camino) se ha destrabado y eso al menos garantizaría una necesidad sentida: profundizar en el debate, o sea dotarse de capacidad para reorientar el presente” (IDD Paraguay)

La relación con los partidos políticos viene a ser un factor que define posiciones divergentes en el campo de la sociedad civil y los movimientos sociales. Al respecto el informe Brasil es muy gráfico al describir como opera esta situación en su contexto: “Varias respuestas fueron en el sentido de afirmar la autonomía de los movimientos e entidades en relación a los partidos políticos. Otras, en tanto, afirmaron buscar alianzas en el ámbito de los llamados partidos de carácter popular, citando al PT, PSB, PC do B, PSTU y al PDT. Hubo una clara tendencia a cerrar el espectro partidario en torno de estos partidos llamados populares, así mismo, dejando claro que las alianzas son apenas puntuales. En tanto, todos reconocen que la mayoría de los militantes sociales se identifica con algún partido político de carácter popular y militan en estos partidos “. (IDD Brasil)

Desde las ONG’s se escuchan voces que acusan a los partidos de desconocer su rol como Sociedad civil organizada, funcionalizando sus relaciones con ellas bajo el criterio de la externalización de servicios del Estado: Un entrevistado de Uruguay afirma como junto a esta posibilidad también existen funcionarios públicos que tiene una mirada más amplia, que reconoce el papel de las ONG’s: “algunos nos ven como tercerizaciones neoliberales y que estamos para buscar un beneficio lucrativo, otros nos ven como un actor social importante que ha jugado un rol fundamental en el país y que ayuda a profundizar la democracia”. (IDD Uruguay). Por otra parte, varios testimonios refieren a la posibilidad de establecer alianzas en el contexto de las agendas de los gobiernos progresistas. Pero incluso en esos casos se afirma que llegar a tener un grado de incidencia importante requiere de un largo tiempo y de mucha persistencia. En el informe de Chile esta situación se describe afirmando que: “Otras organizaciones de la sociedad civil tienen una estrategia de lobby con el Estado y en algunos casos de trabajo conjunto con el que han obtenido resultados los concretos en términos de participación en decisiones de política pública, aunque después de un proceso largo “.

Entre las posibilidades que abren las eventuales alianzas con los gobiernos de la región se señala la posibilidad de abrir mayores espacios de visibilidad pública en los medios de comunicación. Se señala que cuando existe una decisión de parte de los gobiernos de apoyar una demanda, incorporándola a su programa legislativo, suele incidir de modo activo en la construcción y visibilidad de la agenda pública propuesta por las ONG’s y Movimientos sociales. Esta situación puede potenciar el liderazgo de las organizaciones

como también socavar su autonomía y representatividad.

Al respecto, el informe Uruguay es optimista, ya que diagnostica que en el actual marco político de su país: “Por otro lado, el movimiento sindical, se manifiesta haber avanzado en la generación de alianzas con los partidos los políticos y/o con sectores dentro de estos, lo cual ha quedado –según el entrevistado- en evidencia en los distintos plebiscitos llevados adelante por la Sindical desde la década del 90” (IDD Uruguay).

Por otra parte, el informe Paraguay matiza este optimismo mostrando los aspectos conflictivos de la relación con los Estados: “Ante el fracaso de “pactos de gobernabilidad”, y las fallas en las mediaciones políticas, se requiere repensar y diseñar modalidades de relacionamiento Estado/Sociedad Civil basados, entre otros, en el rescate de la dimensión ética de la gestión pública del desarrollo, en la construcción de instancias y espacios que faciliten la participación ciudadana, en distintos niveles, tiempos y circuitos, en la depuración de los partidos los, etc”. (IDD Paraguay)

Otras dificultades recurrentes en la construcción de alianzas y que aparecen en los informes tienen relación con la dificultad de hablar y consensuar agendas de largo plazo. Prima la acción conjunta por temas puntuales y acotados. Esta falta de estrategias consensuadas tiene directa relación con factores como la excesiva competencia, el corporativismo y luchas de poder entre las organizaciones y al interior de las mismas, la escasez de recursos humanos con capacidades de interlocución y negociación y la debilitada capacidad institucional para llevar adelante propuestas.

Se denuncia que desde los políticos existe, en muchas ocasiones el interés de cooptación de militantes y de captación de votos que éstos tienen por sobre cualquier apoyo a las causas de las organizaciones o movimientos. Esta situación agrava la distancia y la desconfianza general hacia todos los partidos, incluso si no cae en esas prácticas. Como lo expresa el informe Brasil: “Como problema en la relación con los partidos políticos se puede indicar que muchas veces los liderazgos partidarios buscan los movimientos en momentos pre-electorales cuando interesa reforzar el vínculo, próximo a una disputa política. Después, pasada la elección, los liderazgos partidarios se distancian nuevamente de los movimientos”. (IDD Brasil)

La misma mirada despliega el informe Paraguay: “Los gobiernos de la transición han buscado cooptar, manipular o controlar a las organizaciones sociales o a sus dirigentes y, por lo general, las experiencias de relacionamiento son negativas o nulas cuando predomina la lógica clientelar que instrumentaliza y desvirtúa la participación en beneficio de pocos. Pero dichas organizaciones, en especial aquellas que defienden su “autonomía”, han avanzado en sus procesos y han madurado, al punto que hoy se apuesta a la participación en democracia, para visualizar otros rumbos y aportar a lo programático; algo que compete en primera instancia a los partidos y que comienza con los esbozos de programas de movimientos políticos hoy en gestación”. (IDD Paraguay) Se requiere superar además prejuicios que están enclavados

en el Estado hacia el campo de las ONG's, situación que no siempre es tenida en cuenta desde la sociedad civil. Por ejemplo, el informe Uruguay destaca que "en las primeras etapas (del gobierno del Frente Amplio) algunos sectores del gobierno descalificaron el trabajo de las ONG's con generalizaciones negativas hacia el trabajo de las mismas. A pesar de que se considera que en el año 2006 se avanzó en el relacionamiento, estas suspicacias han estado presentes en el trabajo cotidiano, lo cual repercute en el tipo de alianzas que se están gestando. Pero además, consideran que si bien se reconoce el trabajo de la sociedad civil organizada como un espacio para la consolidación de las prácticas democráticas, no se avanza más allá del discurso, dado que no existen políticas específicas de fortalecimiento de las mismas". (IDD Uruguay).

La experiencia acumulada por las organizaciones de mujeres, puede dar pistas interesantes a la hora de buscar modelos de complementación entre diferentes actores sociales y políticos. En los países del Cono Sur, se ha logrado cierto grado de articulación entre las ONG, los partidos políticos, y el movimiento de mujeres que ha permitido concretar avances relevantes en materia de legislación y en la institucionalización de la perspectiva de género. Ha sido un primer paso para incluir en el espacio público las demandas privadas de las mujeres. Las leyes de salud sexual y reproductiva, educación sexual, violencia familiar y/o de género, la trata de mujeres, el debate sobre el aborto, entre otros, ha sido posible por esta articulación.

VIII. CONCLUSIONES

Los informes nacionales de la sub-región Como-Sur nos muestran que sopla un viento fuerte y desde abajo en América Latina. Es necesario crear las condiciones y los contextos para que este aire fresco pueda expresar todas las esperanzas y proyectos que han estado postergados por demasiado tiempo en nuestras naciones.

Para ello se hace necesario asumir que la lucha contra la desigualdad se ha convertido en un núcleo articulador de las demandas concretas de la población, porque es un objetivo concreto que vincula de forma real a diversas aspiraciones fragmentarias, que tienden a la dispersión. Se trata de una aspiración difusa, pero extendida, y que atraviesa todas las demandas particulares centradas en la superación de la discriminación de género, raza, clase, cuna, tipo de escuela, tipo de barrio, tipo de trabajo. Se trata, por lo tanto, de un núcleo temático a trabajar con mayor cuidado, buscando que este despierte las potencialidades aglutinadoras y movilizadoras que contiene.

Esta constatación, tal vez explique porqué las entidades entrevistadas por los informes nacionales vinculan de modo integrador las demandas democratizadoras y las búsquedas de desarrollos más sustentables y productivos, lo que no siempre se manifestó con igual claridad en el pasado. A modo de ejemplo, el informe Argentina concluye al respecto

que: "El balance en principio es positivo, dado que los de los conceptos, Democracia y Desarrollo no se escinden como en décadas anteriores". (IDD Argentina)

Es más, en diversas entrevistas se llega a plantear que la democracia constituye en sí una forma de combate a la exclusión, por lo tanto, se puede afirmar que las concepciones meramente instrumentales y formales de la democracia han dado espacio a percepciones que conciben la democracia de una manera más sustancial y definitoria de los procesos de desarrollo. El informe Argentina expresa que "el problema ya no consiste en la defensa del régimen democrático, ni de problemas de ingobernabilidad, sino de que calidad o modelo de democracia se quiere, y qué modelo de desarrollo y sociedad se aspira" (IDD Argentina)

De esta forma, surge una agenda que no sólo busca distinguir entre democracia representativa y democracia participativa. La tendencia parece ser el reconocimiento de la validez de ambos tipos de espacios democráticos, pero bajo la exigencia de que en todos los procesos deliberativos se desarrolle una alta representatividad y un tipo de participación efectiva. De esta forma, se evidencia una tendencia común a superar los discursos que plantean una dicotomía irresoluble entre democracia electoral y democracia de base, para dar paso a la búsqueda de alternativas integradoras.

Las condiciones que permiten superar esta tradicional antinomia suponen una estrecha relación entre la agenda democratizadora y la agenda del desarrollo. No sólo se reclama el derecho a participar en procesos de elección de autoridades mediante el sufragio, sino que se comprende la democracia como una relación social y política que permite avanzar en el ejercicio de derechos postergados, mediante el fortalecimiento del poder de los ciudadanos. Y más allá en la estructuración de un tipo de democracia en la cual la solidaridad se institucionaliza para avanzar hacia una sociedad de pares.

Por este motivo, se evidencia la necesidad de nuevos espacios de participación, más efectivos, que superen los límites de las experiencias actuales. Las organizaciones ciudadanas mantienen, en términos generales, la percepción de no ser contadas verdaderamente como contrapartes legítimas en las negociaciones y procesos políticos de la sub-región. Esta es una de las deudas más difícilmente explicables, en el contexto de los avances democratizadores de este período. Al respecto, se sugiere implementar procesos de deliberación por medio de esferas públicas no estatales, como son los consejos tripartitos o las experiencias de presupuesto participativo donde la población participe de forma directa en la planificación y aplicación de recursos y ejerce su ciudadanía por medio del debate directo de las políticas sociales. Se apela a la necesidad de priorizar las reformas políticas de mayor nivel, que no sólo permitan la participación formal de la ciudadanía sino también posibilidades más fuertes de control de la actividad política. Se trata de un concepto de ciudadanía que se ha ampliado para incorporar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Se escuchan voces que piden avanzar hacia reformas de carácter estructural, en la línea de lograr controles a la actuación de los partidos y de las instituciones de representaci-

ón popular. ¿Se trataría de reformas electorales profundas? ¿O de la ampliación de los mecanismos de democracia participativa a ámbitos sociales y geográficos extensos? ¿O demandas por asambleas constituyentes, como las que se han vivido en otros países de Latinoamérica? Las respuestas a estas preguntas deben permanecer abiertas, ya que los planteamientos de las entrevistas pueden dar pie a interpretaciones diferentes. Pero que no se puede descartar que en los próximos años este tipo de inquietudes atreviese las discusiones de la sociedad civil del Cono Sur.

IX. ANEXO

INFORMACIÓN SOBRE LOS ACTORES ENTREVISTADOS

En la sub región Cono Sur se entrevistó un total de 57 entidades distintas que comprenden ONG, Partidos políticos y Movimientos sociales. No resulta fácil establecer claramente la categoría a la que corresponde cada organización, puesto que en muchos casos pertenecen a más de una. Hay movimientos sociales que también son ONG. Para cada país aparece la categoría en la descripción de cada entidad.

ARGENTINA

En Argentina se realizaron 13 entrevistas

Marcelo Mateo, Director de CECOPAL - Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal. ONG de Córdoba dedicada a promover y acompañar la reconstrucción y/o consolidación de las formas organizativas de los sectores populares, en procura de satisfacer sus necesidades básicas y generar crecientes procesos autogestionados. Tiene 5 actividades principales: Radio, Revista, Centro de Documentación, Capacitación a Organizaciones de Base y Video. Durante el 2006 participó en diferentes movilizaciones (entre 10 y 15 de distinto tipo) relacionadas, fundamentalmente, al Foro de Instituciones del desarrollo de esta ciudad. Destaca la radio comunitaria que logra ser un instrumento de difusión de las movilizaciones de movimientos populares en Córdoba.

Jorge Taillant, Director del CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente ONG. Su objetivo es construir una relación más armoniosa entre el ambiente y las personas. Su trabajo se centra en mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos producto de la degradación ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los recursos naturales, y prevenir futuras violaciones. Para ello impulsa la generación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social y ambientalmente sustentable e incluyente a través de la participación comunitaria, el litigio de interés público, el fortalecimiento de instituciones democráticas y la capacitación de actores clave. Las movilizaciones principales en que participó CEDHA en 2006 fue-

ron respecto del conflicto con las pasteras (Gualeduaychú), minas a cielo abierto, contaminación de grandes ciudades y avance de los monocultivos. Logran involucrar a los medios de comunicación y generar opinión pública.

Laura Conte, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Movimiento de DD.HH y ONG respectivamente. Movilizaciones en torno a la exigencia de justicia en temas de derechos humanos (desaparición reciente de dos personas). Participaron en marchas para fechas emblemáticas (24 de marzo, en abril semana del desaparecido). Considera avances en el tema con la nulidad de las leyes que permitían la impunidad.

Claudio Lozano, Diputado Nacional, Bloque unipersonal y Central de Trabajadores Argentinos CTA. La CTA es una nueva central de trabajadores, ocupados y desocupados, fundada el 14 de noviembre de 1992, sobre tres conceptos esenciales: la afiliación directa, una democracia plena y la autonomía política.

Desde hace una década la CTA trabaja para cambiar la sociedad y hacer realidad esa Argentina con trabajo, salud, educación y justicia para todos en base a tres conceptos:

- afiliación directa: por primera vez en nuestro país, la afiliación de cada trabajador es directa. Todos los trabajadores, ocupados o no, pueden afiliarse a la Central.
- elecciones directas: cada afiliado tiene voz y elige en forma directa a su conducción en los diferentes niveles (local, provincial y nacional). Se legitima la representatividad, se fortalece la democracia y se reivindica al trabajador en la nueva fábrica que es el barrio.
- autonomía: el único interés al que obedece la CTA es al de la clase trabajadora. La central es autónoma de los grupos económicos, los Gobiernos y los partidos políticos.

Juan González, dirigente de la CTA (Central de trabajadores Argentinos). La CTA es una nueva central de trabajadores, que surge como alternativa a la Confederación General del Trabajo para enfrentar la división del movimiento obrero que provoca el gobierno de Menem. Incluye a trabajadores ocupados y desocupados, y está fundada sobre tres conceptos esenciales: la afiliación directa, una democracia plena y la autonomía política. Las principales movilizaciones en que participaron están relacionadas con el tema del salario y en torno a las negociaciones colectivas en distintas partes del país. Considera que sus luchas son de resistencia.

Laura Sesna, Diputada Provincial Partido Socialista. (Córdoba). Las movilizaciones principales en que participó son en el tema de género del movimiento de mujeres y en el tema de Gualeduaychú. Principales logros obtenidos son: la ley que autoriza la ligadura de trompas, la ley de Educación Sexual y la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Elisa Carrió, Diputada nacional Partido ARI (afirmación para una República Igualitaria). No participaron en movilizaciones durante el 2006, tienen experiencias anteriores al 2000.

Marta Alanís, Presidenta de Católicas por el Derecho a Deci-

dir, Movimiento social y ONG, Movimiento feminista – Movimiento de Mujeres. Participaron en amplias movilizaciones y en los Encuentros Nacionales de Mujeres del 2005-06 reclamando derechos de salud reproductiva (legalización del aborto, distribución masiva de métodos anticonceptivos). Algunos logros son: Ley que autoriza la ligadura de trompas, la ley de Educación Sexual y la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductivos.

Eduardo Soria, presidente de la Organización de Naciones Indígenas de Argentina, Movimiento social Indigenista de Argentina, pertenece al pueblo guaraní. También es representante de la CTA en Salta. Los temas que los movilizan principalmente son los de tierras. Están creando un partido político indígena y pidiendo asesoría a organizaciones y autoridades indígenas de Bolivia.

Rafael Gigli, de Chacareros Federados, organización perteneciente a la Mesa Federal Agraria. Representa a pequeños y medianos productores rurales. El 2006 fue un año de baja movilización para este sector, debido a los altos precios de algunos productos agrícolas en el mercado internacional. Sin embargo, los pequeños ganaderos y agricultores de las provincias del interior se vieron afectados por las políticas estatales, y realizaron movilizaciones pidiendo políticas diferenciales para ellos en relación a los grandes productores exportadores. En esto último no han tenido muchos avances debido a que el sector está dividido.

Carlos Sánchez, Dirigente de la FTV (Federación de Tierra y Vivienda). La Federación de Tierra y Vivienda se constituye a partir de las demandas, problemas y necesidades que afectan a barrios y asentamientos de las grandes ciudades. Apoyan al actual gobierno y han decidido no hacer movilizaciones (“abandonamos las calles”), sino trabajar en conjunto, apoyando el proceso de cambio. Lideran la Subsecretaría de Tierras para el Habitat Social (dependiente del Ministerio de Planificación Federal) desde su creación en febrero del 2006.

Rubén Núñez, dirigente del MTD-Evita (Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita). Es un Movimiento Social de trabajadores desocupados de extracción peronista, afín al actual gobierno, que hoy se llama Movimiento Evita por Trabajo y Dignidad. Los temas que los convocaron durante el 2006 son el control de precios y las tarifas de los servicios públicos. Plantean la construcción de un nuevo espacio político en el que los movimientos sociales tengan un rol protagónico.

Mario Clavell, integrante del Área de Descentralización de la Comisión Institucional de los Equipos Técnicos de Daniel Filmus. Apoyo al Frente para la Victoria. Es un movimiento social.

BRASIL

En Brasil se entrevistó al mayor número de actores en la sub región Cono Sur, un total de 20 (2 corresponden a la CUT, por eso suman 21).

Ari, FETRAF :Federação dos Trabalhadores da Agricultura

Familiar es una entidad que integra sindicatos de trabajadores del sur, sudeste y centro oeste brasileiro, todos comprometidos con la agricultura familiar.

Paulo Becker, MTD: Movimento dos Trabalhadores Desempregados es un movimiento que nace de la lucha por el empleo. Su foco es la garantía del trabajo como política pública permanente para combatir el desempleo y la adopción de políticas que promuevan un desarrollo con inclusión social.

Mariane, MMC: Movimento de Mulheres Camponesas es un movimiento nacional que tiene una organización independiente de los sindicatos rurales. Su principal lucha, más allá de las cuestiones de género en la lucha por la tierra, es la preservación de las semillas criollas y de las culturas alimentarias tradicionales.

Cristiane, MAB: Movimento dos Atingidos pelas Barragens es un movimiento que lucha contra el modelo energético centrado en la construcción de represas y la privatización de las aguas. Su lucha es contra la discriminación de las tasas de pago de la energía eléctrica que subsidia las grandes empresas y hace pagar una sobre tasa al consumidor doméstico.

Luciana Genro, PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos. Partido político que nace de una disidencia del PT luego del fin del primer año del gobierno de Lula.

Sérgio, CUT: Central Única dos Trabalhadores: es una de las principales centrales sindicales brasileiras y una de las mayores de América Latina. Está enraizada en todo el territorio nacional y cuenta con mas de 6000 sindicatos afiliados.

Antônio Spies, CUT: Central Única dos Trabalhadores.

Alacir – Daniela, Rede Alerta Deserto Verde es una articulación de entidades y movimientos que luchan contra la expansión del mono cultivo de do eucaliptos y por el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios. (indígenas y quilombolas)

Fátima Melo, REBRIP: Rede Brasileira pela Integração dos Povos es una red de entidades y movimientos que luchan contra las leyes de libre comercio y se articula con otras campañas internacionales como la Alianza Continental.

Maria Elena, Plataforma Internacional do DHESC es una red de entidades y movimientos que lucha por la aplicación de derechos económicos, sociales y culturales expresados en los acuerdos internacionales suscritos por Brasil.

Dito, União dos Movimentos de Moradia es un movimiento que lucha por la vivienda, está centrado en el Gran São Paulo y lucha por el derecho al techo de todo ser humano independiente de su condición económica.

Celina, União dos Movimentos Populares da Saúde es una articulación de varios movimientos de salud del Gran São Paulo y que tienen como principal objetivo garantizar el Sistema Único de Salud – SUS.

Renato Simões, Partido dos Trabalhadores PT es un de los mayores partidos brasileiros, fue creado en 1980 por sindicalistas, estudiantes y militantes sociales como un nuevo ideário de izquierda. Luego de varias tentativas eligió a su mayor líder como Presidente de la República.

Célia Rick, GAJOP Grupo de Apoio Jurídico das Organizações Populares es una entidad que actúa directamente ligada al Movimiento Nacional de Derechos Humanos en apoyo a las luchas por la exigibilidad de derechos sociales.

João, ASA: Articulação do Semi Árido Nordeste es una articulación de mas de 700 entidades del Semi Árido Nordeste que lucha por la emancipación de los pueblos de la región, en especial, ejecuta el Programa “Un Millón de Cisternas”.

Rebeca, MLB: Movimento de Luta nos Bairros es un movimiento de lucha por los derechos de las poblaciones urbanas de la Grande Recife. Tiene su lucha en torno de las ocupaciones urbanas, las luchas por transportes y la defensa de las radios comunitarias.

Tatiana, ABONG: Associação Brasileira das ONGs es una asociación de ongs que representa cerca de 280 entidades en el ámbito nacional. Tiene como foco de actuación la articulación de luchas democráticas, el apoyo a las articulaciones nacionales y a la representación de sus asociadas en la relación con el Estado Brasileiro. Uno de sus principales proyectos es la participación en el Foro Social Mundial.

Regina Ferreira, FNUR: Fórum Nacional de Reforma Urbana es una red que articula movimientos urbanos, entidades de clase y universidades en la lucha por la reforma urbana. Su principal actuación ha sido la defensa y realización de políticas públicas centradas en la vivienda, saneamiento y transporte urbano.

Janaina, MST: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Es un movimiento nacional que organiza a los trabajadores sin tierra para conquistar tierra, construir asentamientos para la producción de alimentos y garantizar una política agraria que democratice el acceso a la tierra. Su principal lucha es contra el latifundio y en defensa de la agricultura orgánica.

Flavio da Silva, CONEN: Coordenação das Entidades Negras. Es una entidad que busca integrar varias entidades del movimiento negro en Brasil. Tiene como principal lucha la afirmación de los derechos de las poblaciones negras.

CHILE

En Chile, los actores entrevistados son nueve:

Lucio Cuenca, coordinador nacional de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esta ONG se dedica a trabajar en conflictos medioambientales, especialmente en torno al impacto de la gran minería. Cuentan

con varios aliados internacionales, apoyo de la opinión pública que conoce su trabajo como algo serio, sin embargo tienen baja cobertura en los medios de comunicación. Sus principales demandas tienen que ver con el tema de la instalación del proyecto de explotación minera Pascua Lama en el norte de Chile.

Marina Carrasco, asesora de política interna de Vivo Positivo, organización de personas viviendo con VIH. Actualmente, trabajan a la par con el Estado, cuentan con financiamiento del Fondo Global y tienen un alto poder de convocatoria a los MCM. Destaca su autodefinición como Movimiento Social y ONG.

Pía Matta, directora de Radio Tierra, estación de radio comunitaria. La propiedad de Radio Tierra es colectiva, reside en la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, una asociación (ONG) de mujeres de amplia trayectoria en temáticas de comunicaciones, salud y subjetividades de las mujeres.

Aucán Huilcamán, máximo dirigente del Consejo de todas las Tierras, movimiento social indígena mapuche que agrupa a 300 comunidades, cuyo objetivo es reivindicar los derechos de este pueblo originario. Sus temas principales son: derechos humanos indígenas, biodiversidad, patrimonio genético, autodeterminación, reconocimiento constitucional al pueblo mapuche.

Pepe Auth, Secretario general del PPD, Partido por la Democracia, Partido político de la coalición gobernante, en cuyo origen convergen elementos de la izquierda más socialdemócrata y algunos elementos liberales de la derecha opositora a la dictadura militar.

Rolando Jiménez, presidente del MOVILH, Movimiento de integración y liberación homosexual.

Es una ONG, pero funciona como movimiento social. Es una de las agrupaciones más importantes de minorías sexuales. Sus objetivos son: visibilizar la realidad de los gays, lesbianas bisexuales, transgéneros y transexuales en los espacios públicos y privados, trabajar a favor de acciones jurídicas, legislativas, culturales, sociales, policiales que terminen con la violación a los derechos humanos de este grupo, establecer contactos con líderes políticos, sociales y académicos y participar de diversos foros de discusión. La participación ha sido principalmente a través de lobby en el parlamento para avanzar en temas como la ley de participación, ley de unión civil, ley contra la discriminación.

Claudina Núñez, dirigente Movimiento poblacional, comuna Pedro Aguirre Cerda, de larga trayectoria, siendo conocida nacionalmente por la representación de la Población La Victoria, un barrio emblemático en la lucha contra la dictadura. Está presente en temas urbanos y de vivienda, en problemas que enfrentan los pobladores “con techo” que son las deudas habitacionales y los planos reguladores y los pobladores “sin techo” que quieren acceder a la vivienda propia a través de programas habitacionales.

David Suazo, estudiante de 4° medio, dirigente del Movimiento estudiantil secundario, Región de Valparaíso, militante Demócrata Cristiano. El Movimiento estudiantil secundario fue el más destacado y logró poner en jaque al gobierno durante el año 2006. “La revolución de los pingüinos” como se la llamó, marcó un hito como movimiento social con proyección de impacto nacional. Logran la creación por parte del gobierno de una comisión de trabajo sobre calidad de la educación y la revisión de la LOCE, donde se los incluye junto a otros actores relevantes.

Nancy Arancibia, comisión de comunicaciones del Foro Social Chile (además es miembro de ATTAC). No es fácil de clasificar como movimiento social, es un conglomerado ciudadano, auto convocado, sin estructuras, sin directivas. Distinto a lo ya conocido. En el 2006, logra convocar a más de 4 mil personas.

PARAGUAY

En Paraguay los actores entrevistados son 8:

Tomás Zayas, Secretario General de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígena y Popular CNO-CIP, nueva articulación social; miembro de la organización campesina ASAGRAPA y del Partido de los Trabajadores PT, de orientación trotskista, y vinculado al Bloque Social y Popular, movimiento que apoya la candidatura del ex obispo Fernando Lugo.

Marcial Gómez, Secretario General adjunto de la Federación Nacional Campesina FNC; Responsable de la Coordinación del Frente por la Defensa de los Bienes Públicos y de País para la Mayoría (Frente de derechos). La FNC así como la CNOCIP y la MCNOC son consideradas organizaciones campesinas representativas y con poder de convocatoria.

Belarmino Balbuena, Secretario de Organización de la Dirección Nacional del Movimiento Campesino Paraguayo MCP, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas MCNOC; Ex candidato a Intendente en el distrito de Capiibary, San Pedro, en las últimas elecciones municipales (noviembre 2006).

Marielle Palau, Coordinadora General de BASE- Investigaciones Sociales- BASE-IS (ONG).

José Parra, Secretario de Finanzas, representante por el Departamento de San Pedro en la Dirección Nacional del Movimiento Popular Tekojoja, también vinculado a la candidatura de Fernando Lugo; Presidente de la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado ACADEI y de Tesai Reka Paraguay, programa de salud preventiva y comunitaria.

Aída Robles, Presidenta del Sindicato de Enfermeras y Personal de la Salud del Hospital de Clínicas.

Lilian Soto, Partido País Solidario PPS, renunciante; Ex candidata a la Intendencia municipal de Asunción (2006).

Estela Ruiz Díaz, Periodista. Editora de la sección política del periódico Última Hora.

URUGUAY

En Uruguay los actores entrevistados son 8[1]:

Plenario Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores PIT-CNT. Nuclea al movimiento sindical en su conjunto. Tiene representación en la Junta Nacional de Empleo junto al sector empresarial y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como en las Juntas Locales de Empleo que incluyen también a los gobiernos departamentales.

Confederación Uruguaya de Cooperativas (CUDECOOP) es la organización de representación y defensa gremial del movimiento cooperativo uruguayo. Nuclea a las instituciones representativas de todos los sectores cooperativos existentes en el país. Además de cumplir con funciones de representación de las cooperativas a nivel nacional e internacional, CUDECOOP desarrolla programas dirigidos a promover el fenómeno cooperativo en Uruguay, favorecer las condiciones para su desarrollo y generar nuevas iniciativas articuladoras y de colaboración e intercambio entre las entidades del sector.

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo ANONG. Nuclea a más de 70 instituciones organizaciones no gubernamentales de Uruguay, dedicadas a actividades vinculadas al desarrollo en diversas áreas. Sus objetivos son: defender los derechos de las ONG consagrados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y promover una normativa jurídica que reconozca la identidad de las ONG; Fortalecer la presencia y visibilidad de las ONG en el espacio público; Promover el intercambio de información y la coordinación de actividades de interés común.

Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay AMRU. integra más de 200 grupos de mujeres rurales de todo el país. Las asociadas trabajan en distintos rubros de producción y comparten la característica de ser mujeres rurales asalariadas. La asociación organiza su trabajo en tres áreas: área social-gremial; área de formación y área de proyectos y convenios.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Nació en 1983, de la unión de 3 grupos de familiares de desaparecidos: AFUDE (Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982. Desde sus comienzos, los grupos intentan llegar a la verdad respecto a la situación de sus familiares. Trabajan por recuperar la verdad total para la memoria colectiva y para que la sociedad genere mecanismos que hagan posible que en Uruguay no se repitan la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas.

Debate Educativo. En el año 2006, el Ministerio de Educación y Cultura, en acuerdo inicialmente con la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la Re-

pública y más adelante con la Comisión Coordinadora de la Enseñanza y con organizaciones sociales, designan una Comisión Organizadora del Debate Educativo, que a su vez realiza una convocatoria a todos los colectivos interesados en la educación. En el marco de este Debate, desarrollado a lo largo de todo el año 2006, se realizaron más de 700 asambleas territoriales e intercambiaron más de 400 aportes documentales de las distintas entidades participantes, desembocando en un Congreso Nacional de Educación en el que se reunieron representantes de asambleas de vecinos, organizaciones sociales, estudiantes, colectivos de educadores y otros trabajadores de todos los ámbitos del país. El Debate Educativo, constituyó una de las grandes movilizaciones del año 2006 en Uruguay y se espera que sus aportes sean recogidos en una nueva Ley de Educación.

Espacio 609 (Encuentro Progresista-Frente Amplio). Desde 2004 constituye un sub lema del conglomerado gobernante, cuyos principios fundacionales son el cambio y la justicia social, de concepción nacional, progresista, democrática, popular, anti oligárquica y antiimperialista, que se integra por todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos establecidos tanto en las Bases Programáticas como en los sucesivos Acuerdos Políticos. Ha conformado una organización con carácter de coalición movimiento caracterizada por el mantenimiento y defensa de la unidad, al mismo tiempo que coexiste la pluralidad ideológica y al acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos pertinentes. En 2004 es el sub lema más votado dentro del EP-FA-NM, obteniendo el 39,64% del 50,45% del lema. Una vez en el gobierno, se han escindido algunos de los movimientos que formaban parte del Espacio 609, y otros han conformado nuevas corrientes de pensamiento dentro del mismo.

Alianza Nacional (Partido Nacional, opositor al actual gobierno). La fundación del Partido Nacional, se enlaza con los orígenes del país. Entre sus principios básicos esta la voluntad de construir una “sociedad pluralista y participativa, donde los ciudadanos no sólo tengan el derecho, sino también el deber de compartir su conducción y realizaciones”. Si bien, se ha caracterizado por ser un partido con escasas oportunidades frente a la Presidencia de la República, estando solo por un período desde la apertura democrática, ha tenido una constante representación en la Asamblea General y los gobiernos departamentales. A nivel nacional, ha estado tradicionalmente signado por una conducta política de gobernabilidad y coparticipación de gobierno, siendo parte del sustento de sus bases programáticas e ideológicas. El Partido Nacional obtiene en su conjunto el 34,3%.

NOTAS

1. La descripción detallada de las entidades entrevistadas aparece en anexo al final del documento.
2. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.
3. Lloret Rodrigo. “La otra lucha”. En SURCOS, n° 15. enero 2007. <http://www.surcos.net/verautor.php?idautor=47>
4. Silvio Caccia Bava. “América latina y la crisis de la democracia”. http://www.polis.org.br/artigo_interno.asp?codigo=141 (28/06/2006)
5. Plan de equidad: lineamientos y propuestas, MIDES, 2007 (disponible en http://www.mides.gub.uy/archivo_doc/plan_equidad.pdf).
6. Se refiere al caso de la relación de “Vivo Positivo” con el Ministerio de Salud de Chile.



7. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA

El presente informe sobre participación política de las mujeres en América Latina ofrece una visión panorámica del acceso de las mujeres latinoamericanas a instancias de poder político. Se centra en su presencia en los Parlamentos de los países de la región, en cargos ministeriales y en los distintos niveles del poder local.

Al considerar los avances en el aumento de la presencia femenina en los cargos de decisión política a lo largo de los últimos años —el análisis cubre aproximadamente entre 1995 y 2006—, se releva la influencia que en ello han tenido tanto la adopción de leyes de cuotas, como las propuestas y acciones de los movimientos de mujeres en Latinoamérica.

Se destaca en este sentido la importancia de conformar un campo político relativo a los temas de equidad de género que incluya a diferentes actores, y ello con el fin de instalar en la sociedad en su conjunto la conciencia respecto de que un elemento clave para la profundización de las democracias latinoamericanas es el desarrollo de mayores grados de igualdad de género.

El informe destaca los principales avances en la presencia de mujeres en cargos de elección popular y de designación durante la última década en América Latina y señala algunos de los elementos que han permitido aquello.

EQUIDAD DE GÉNERO Y PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA

En América Latina, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX se vivió un proceso de recuperación y profun-

dización de los sistemas democráticos, luego de un largo periodo de dictaduras militares y conflictos armados. En este proceso, el movimiento femenino/feminista² latinoamericano tuvo un papel indiscutible. De igual forma, la capacidad de acción y concertación que las mujeres organizadas desplegaron constituyó un importante aprendizaje para la etapa de democratización política, por cuanto pudieron irrumpir de manera relevante en el escenario político y plantear allí sus demandas en torno a la igualdad de género.

Durante esta etapa, dos factores fueron clave para que las demandas de equidad de género se vincularan a los debates respecto de la calidad de la democracia: una mayor sensibilidad respecto de aquellas estrategias de profundización democrática y consolidación de una institucionalidad estatal fuerte que se generaron en las sociedades latinoamericanas; y la creciente incorporación del discurso de la igualdad de género en el contexto internacional. Fue así que las mujeres de diversos países de Latinoamérica participaron activamente en la elaboración de nuevas constituciones, modificaciones en la legislación electoral y en la institucionalidad del Estado. Todas estas intervenciones fueron posibles gracias al llamado triángulo de empoderamiento, constituido por el movimiento de mujeres, femócratas³ y feministas políticas (Lycklama et al., 1996).

Los elementos mencionados confluyeron en la construcción de una nueva subjetividad colectiva respecto de las desigualdades provocadas por el orden de género. Con ello surgieron nuevos campos políticos desde los cuales fue posible dar cuenta del carácter sistémico de dichas desigualdades, identificar las diferentes formas en que la discriminación concomitante opera en todos los espacios de la vida social, y hacer visibles los mecanismos específicos que adopta en cada uno de tales espacios: en el mercado, la política, las instituciones, las interacciones de la vida cotidiana, la cultura y la política.

En el marco descrito, estos últimos decenios han visto la instalación y consolidación de los mecanismos institucionales de género en todos los países de la región. Ciertamente, la mayoría de los mecanismos institucionales a favor de la equidad de género fueron creados entre los años ochenta y los noventa, con posterioridad a la III Conferencia Mundial sobre la Mujer (1985), o bien a partir de la Conferencia de Beijing. En la década de los noventa, las demandas del movimiento de mujeres, las Conferencias y acuerdos internacionales firmados por los gobiernos y el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, fueron preponderantes en la instalación, estabilidad y fortalecimiento institucional de dichos mecanismos. En diversos países de América Latina se produjeron cambios significativos en los marcos jurídicos relativos a estas materias, orientados a dar mayor estabilidad a la demanda de la equidad género y a la creación de instrumentos para enfrentar la discriminación. Junto con ello, y reforzando tales tendencias, la creación de redes trasnacionales de mecanismos de avance de la mujer, en conjunto con el apoyo proporcionado por la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL —a través de las Conferencias Regionales de la Mujer y las Mesas Directivas periódicas de esas Conferencias—, han constituido un espacio de debate, generación de consensos, aprendizajes y apoyo para la gestión de la equidad de género a nivel nacional.

La experiencia de los países revela que un elemento clave en la consolidación de los logros en materia de participación política femenina es la consolidación de alianzas entre diferentes actores sensibles a los temas de equidad de género: movimiento de mujeres, autoridades, mujeres en el Estado, mujeres políticas, ONG dedicadas a la temática de la equidad de género, feministas, entre otros.

En efecto, una especificidad latinoamericana respecto de la participación social y política de las mujeres es la interpenetración que se ha producido entre los movimientos de mujeres, las ONG, las políticas de desarrollo y la cooperación internacional. En este sentido, cabe señalar que América Latina es la región que más temprano y de manera unánime ha firmado y ratificado la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

De igual forma, en el avance en la institucionalización de los mecanismos de género es destacable la implementación de Planes de Igualdad de Oportunidades, y ello por distintas razones: permiten establecer nexos con los distintos poderes del Estado; posibilitan orientar la incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas, haciendo presente el carácter complejo y sistémico de las desigualdades basadas en el género; y facilitan desmontar la idea de que la desigualdad está asociada a la vulnerabilidad, dando pie a leerla en clave de igualdad y derechos. En la actualidad, la mayoría de los mecanismos institucionales de género implementados en la región considera dichos planes; así ocurre en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En la actualidad, en la mayoría de los países de América Latina —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana— los mecanismos institucionales de género incluyen Planes de Igualdad de Oportunidades.

En el caso latinoamericano, el grado de articulación y concertación nacional, regional y global que alcanzaron el movimiento femenino/feminista y las organizaciones de mujeres en los últimos treinta años ha sido un aporte fundamental a la construcción y difusión de un discurso de derechos. A la vez, ha permitido que el campo político que se ha conformado

en torno a los temas de género participe en forma creciente en acciones de lobby, de vigilancia a los Parlamentos y a los gobiernos, en la elaboración de propuestas de políticas en distintos sectores del Estado y, sobre todo, en la presentación de propuestas legislativas que eliminen normas discriminatorias existentes en los textos legales, o bien que implementen acciones positivas, como las leyes de cuotas.

REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN CARGOS DE PODER POLITICO

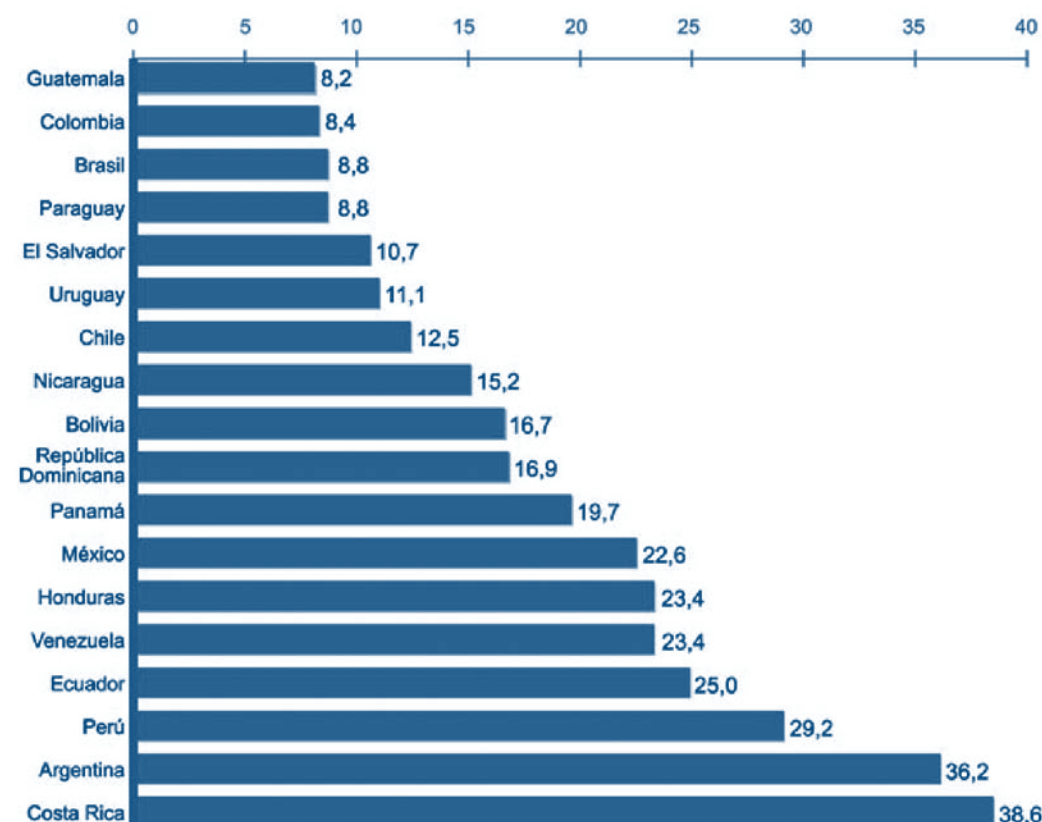
En varios países de la región, la concertación entre el movimiento de mujeres y la institucionalidad de género ha sido decisiva para la implementación de reformas electorales y administrativas que apunten a aumentar la participación política de las mujeres y a avanzar en materia de equidad de género entre los funcionarios públicos. Los logros en este plano no sólo pasan por la inclusión de sus propuestas en materia de no discriminación y leyes de afirmación positiva, sino, sobre todo, por la ampliación del debate público hacia temas que figuraban hasta ese momento en el espacio privado.

Todas estas acciones y contextos se han articulado para que en los últimos años se haya producido un cambio significativo en la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones. En muchos países se han postulado candidatas a la Presidencia de la República, y en algunos han sido elegidas.

En cuanto a la participación femenina en los Parlamentos, se constata que, a fines del año 2006, siete países tenían una representación de mujeres en sus instituciones legislativas igual o superior al 20 por ciento. El país que muestra un mejor acceso de las mujeres a la Cámara Baja es Argentina, con 36,2 por ciento de mujeres elegidas como diputadas en la última elección. Asimismo, Argentina es el único país que presenta cifras superiores a 20 por ciento de representación de mujeres en el Senado, donde llega a 41,7 por ciento.

Entre los países que cuentan con Cámara Única, los que cuentan con una mayor representación de mujeres en este poder son Costa Rica, con 38,6 por ciento; Perú, con 29,2 por ciento; Ecuador, con 25 por ciento; y Honduras con 23,4 por ciento.

Gráfico 1. América Latina (18 países): Representación de las mujeres en el Parlamento (Cámara Baja o Única) (2006). (En porcentajes).



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la Unión Interparlamentaria. *Women in National Parliaments*: [en línea]. [fecha de consulta: 6 de septiembre de 2007].

Si se agrupan los porcentajes de participación femenina parlamentaria en 18 países de la región y se estima que una cifra superior al 20 por ciento da cuenta de un alto nivel de participación, al año 2006, el 39 por ciento de los cuerpos legislativos de América Latina presentaba una alta representación de mujeres. Igual porcentaje (39 por ciento) tiene una participación media (entre 10 y 20 por ciento), mientras que 22 por ciento de los países posee una baja presencia de mujeres en sus Parlamentos (hasta 10 por ciento).

Si se compara la situación actual con la que presentaba la región a fines de 1995, los avances son evidentes: sólo 6 por ciento, es decir, un país (Argentina) contaba con más de 20 por ciento de representación femenina en el Poder Legislativo; el 39 por ciento poseía un nivel medio de participación, en tanto que algo más de la mitad (56 por ciento) tenía una baja presencia de mujeres.

Un elemento importante en la mayor presencia de mujeres en los Parlamentos latinoamericanos, en las candidaturas, los cargos ministeriales y en el poder local en los últimos diez años, es la adopción de medidas de acción positiva por un número destacado de países latinoamericanos. Sin embargo, en el movimiento de mujeres, en las organizaciones para el avance de la mujer, las feministas y los mecanismos institucionales de la región, existe consenso respecto de que los avances han sido lentos, difíciles y muchas veces inestables.

Hasta la fecha, cuentan con medidas de acción afirmativa para la participación política de las mujeres 11 países de la región, de los cuales dos —Argentina y Costa Rica— han superado en las últimas elecciones parlamentarias los porcentajes mínimos de mujeres establecidos por las respectivas leyes de cupo.

En este sentido, los resultados de las elecciones antes y después de la aplicación de las leyes de cuotas muestran efectos positivos en los 11 países que actualmente cuentan con una ley de cuotas (Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana). Se observa un aumento de la representación femenina, sobre todo en la Cámara Baja y en la Cámara Única. Pese a ello, igualmente se constata que la mayoría de los países no logra el porcentaje de representación establecido por la ley.

Al comparar los resultados obtenidos por los países con sistema de cuotas antes de su aplicación y la última elección, las diferencias son relevantes. En Costa Rica, los porcentajes de representación femenina pasaron de 15,8 a 38,6 por

ciento; en Argentina, de 6 a 36,2 por ciento; Honduras saltó del 5,5 al 23,4 por ciento; en México se avanzó desde 14,2 a 22,6 por ciento; y en Ecuador, de 3,7 a 25 por ciento. Los países en que en la última elección la representación femenina estuvo alrededor del 30 por ciento o lo superó, muestran un patrón de crecimiento sistemático y ascendente, sobre todo Argentina, Costa Rica y Perú.

En aquellos países que tienen un porcentaje de participación de mujeres en la Cámara Baja o Única de entre 10 y 20 por ciento, el crecimiento es más moderado, pero constante. En el caso de los países que en la última elección no superaron el 10 por ciento —Brasil y Paraguay—, la implementación de la ley de cuotas no ha significado un cambio significativo en el patrón de evolución de la representación femenina en el Parlamento.

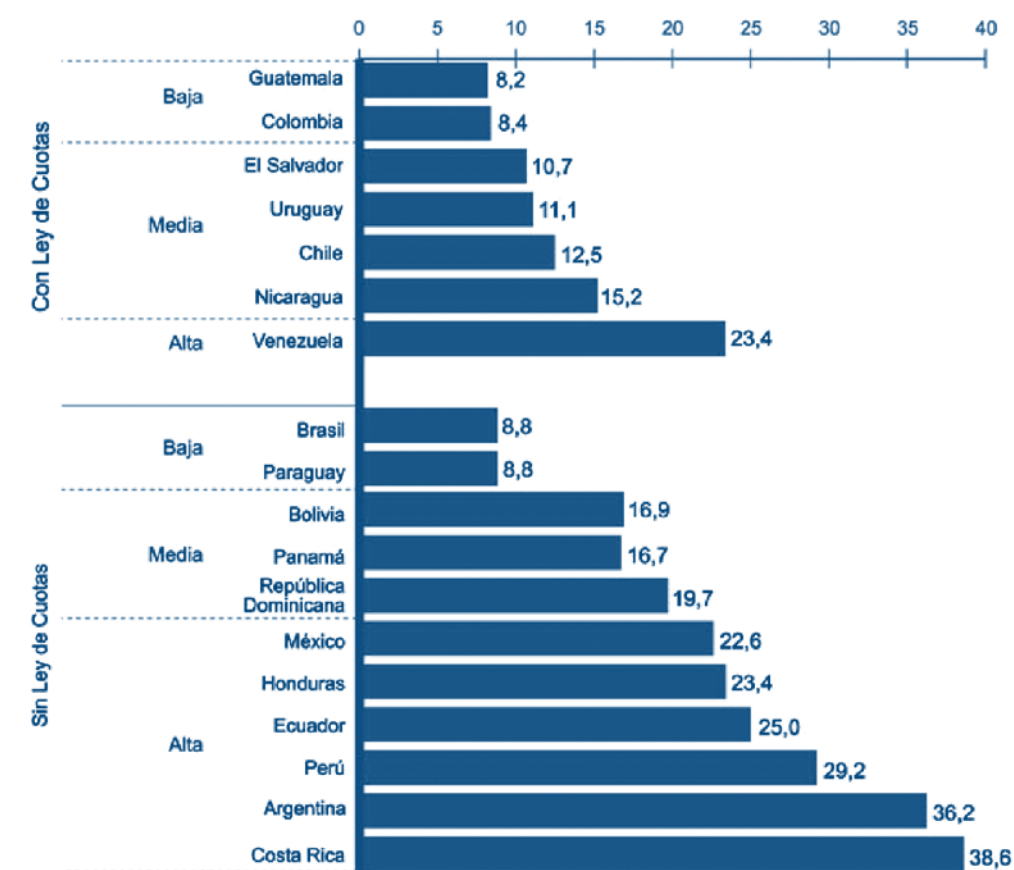
La sola sanción de sistemas de cuotas para cargos de elección popular, aun cuando permite subsanar las desigualdades de género en la participación política, no asegura que se logre un acceso más equitativo para las mujeres en este campo. En

ello también pesan elementos de la cultura política del país, el sistema electoral, la existencia de mecanismos de género, y —sobre todo— un campo político de género fuerte y consolidado.

El logro del cumplimiento de la cuota asignada en tres países —Argentina, Costa Rica y Perú— demuestra la relevancia de que allí las mujeres se hayan constituido en una masa crítica que ha dado estabilidad a los logros y proporcionado una plataforma para avanzar hacia la paridad. Fueron capaces de desarrollar alianzas interpartidarias amplias, trabajos intensos en el interior de los partidos, apoyos de los mecanismos de género, un liderazgo fuerte del movimiento de mujeres y contextos democráticos en los que se ha reconocido, en la sociedad en su conjunto y de manera gradual, la necesidad de adoptar medidas afirmativas como forma y medio de alcanzar mayores grados de igualdad.

Aun cuando los países que cuentan con un sistema de cuotas tienen mejores resultados que los países que no lo poseen, también en estos últimos la representación femenina ha crecido, pero de modo más inestable y lento.

Gráfico 2. América Latina (18 países): Representación de las mujeres en el Parlamento (Cámara Baja o Única) según existencia de ley de cuotas y nivel de participación (2006). (En porcentajes)



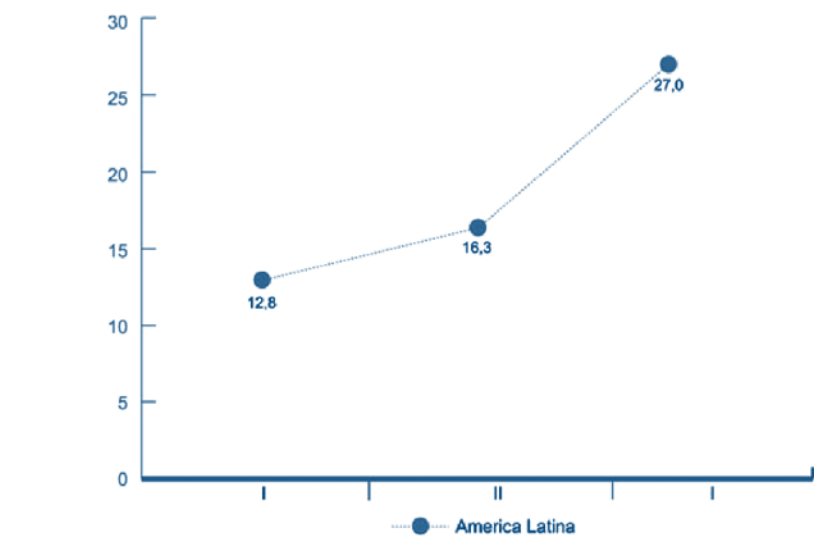
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la Unión Interparlamentaria. *Women in National Parliaments*: [en línea]. [fecha de consulta: 6 de septiembre de 2007].

El análisis de los resultados en el plano de la representación política femenina en los Parlamentos latinoamericanos indica que es menester atender a la estructura y organización de los partidos políticos, puesto que es a través de ellos que se determina quiénes serán los candidatos, y también el apoyo que éstos les dan a los postulantes. Esto es aún más evidente en aquellos países donde todavía no se cuenta con leyes de cuotas. No obstante, en los países que sí cuentan con tales normativas, su efectividad también está fuertemente asociada a las resistencias a su cumplimiento cabal.

En cuanto a la presencia de mujeres en cargos de ministra

en América Latina, se puede comprobar que ha tenido un incremento. De acuerdo con los datos de la CEPAL, en los últimos tres periodos presidenciales —aproximadamente 1995–2006—el porcentaje de ministras ha pasado de 12,8 por ciento en el primer periodo a 27 por ciento en el tercero. En Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú la tendencia muestra un aumento del número de ministras más o menos regular. En Brasil, Ecuador, Honduras y Uruguay el incremento se da sólo en el último periodo. En tanto, la participación de las mujeres en carteras ministeriales de Argentina, El Salvador y Panamá bajó en el tercer periodo.

Gráfico 3. América Latina (15 países): Mujeres en cargos de ministra en los tres últimos periodos presidenciales (promedios simples). (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de respuestas al Cuestionario sobre trabajo no remunerado y participación política, enviado a los países el 15 de septiembre de 2006.

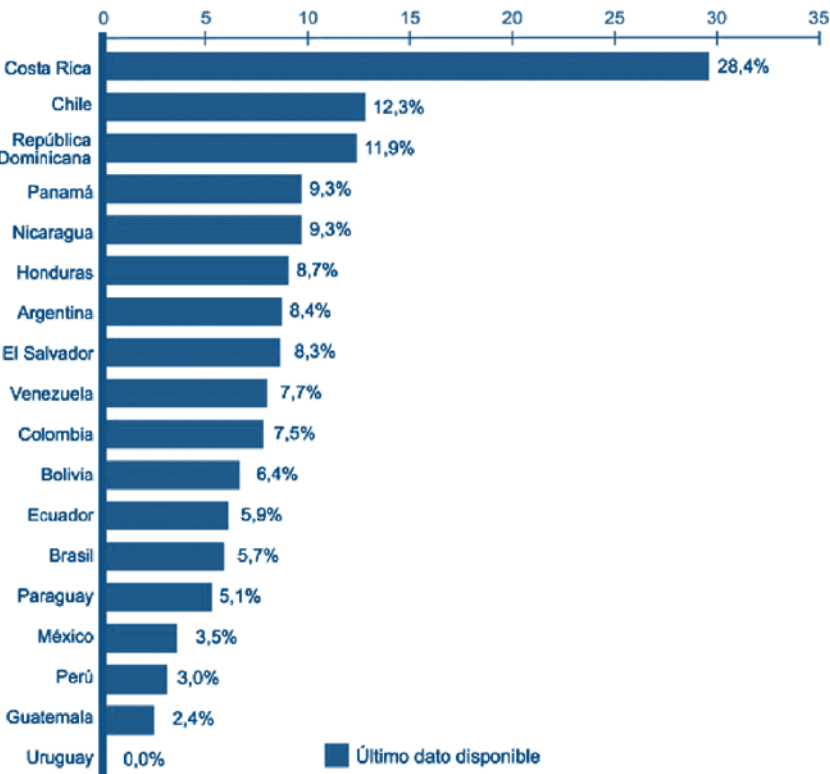
Sin duda, la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales de los países latinoamericanos se ha hecho habitual en el último tiempo, constituyéndose en parte de la cultura política de la región. A pesar de ello, es prematuro decir que éste sea un hecho consolidado, por cuanto la representación femenina en tales cargos es aún minoritaria.

Respecto de las carteras asignadas a mujeres, en general son nombradas en los ministerios del área social, donde su participación alcanza al 38 por ciento de los cupos ministeriales de esta área en el último periodo. Esto constituye un incremento de 17 por ciento en relación con el primer periodo presidencial analizado. En el área política y económica, en cambio, su presencia es muy baja o casi mínima. No obstante, entre el primer y el tercer periodo se observa un avance de 11 por ciento en el área política y de 7 por ciento en el área económica. Asimismo, es significativo que en el último periodo presidencial, en cuatro países (Argentina, Chile, Colombia y Ecuador), el Ministe-

rio de Defensa, una cartera tradicionalmente ocupada por hombres, esté asignado a mujeres.

En cuanto a los cargos de decisión en el poder local, la representación de las mujeres latinoamericanas en cargos de alcaldesa en la región, si bien presenta avances, no es tan significativa como en los cargos de concejales. Entre el primer periodo analizado y el último, las mujeres en cargos de alcaldesa en Chile aumentaron de 7,2 a 12,1 por ciento; en Ecuador, la cifra se mantiene en torno al 6 por ciento; en República Dominicana, las mujeres pasaron de 1,7 a 11,9 por ciento; El Salvador se ha mantenido en porcentajes en torno al 8 por ciento, con altibajos entre periodos; Costa Rica presenta un aumento importante, habiendo pasado de 7 a 28,4 por ciento; en el caso de Panamá, se bajó de 13 a 9,3 por ciento; Honduras varía de 11 a 8,7 por ciento; Venezuela se mantiene en torno al 7 por ciento; México también se mantiene alrededor del 3,5 por ciento; en tanto, en Uruguay, entre 1995 y 2006, ninguna mujer ocupó ese cargo.

Gráfico 4. América Latina (18 países): Mujeres en cargos de alcaldesa (en torno a 2005)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos utilizados para la construcción del Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano. En el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela la referencia del último dato corresponde a datos aportados por los mecanismos de género de los respectivos países. Los mecanismos son: Instituto Nacional de la Mujer (Costa Rica), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (El Salvador), Instituto Nacional de las Mujeres (Honduras), Instituto Nacional de las Mujeres (México), Dirección Nacional de la Mujer (Panamá), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Perú), Secretaría de Estado de la Mujer (República Dominicana) y el Instituto Nacional de la Mujer (Venezuela).

El establecimiento de cuotas para cargos en el poder local es un factor determinante para el aumento de la presencia de mujeres en este ámbito en algunos países. Es el caso de la elección de alcaldesas en Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Sin embargo, en otros países la aplicación de cuotas no ha tenido el efecto esperado, como ocurre en Bolivia y Honduras, donde ha habido una disminución en los porcentajes.

Uno de los factores primordiales en la mayor presencia de mujeres en cargos de elección popular y de designación en los países de América Latina ha sido el tenaz trabajo de las mujeres organizadas para establecer y fortalecer una amplia alianza política, a fin de perfeccionar las leyes y desarrollar estrategias que permitan cerrar las brechas que entorpecen su cumplimiento.

EL ÍNDICE DE COMPROMISO CUMPLIDO LATINOAMERICANO

Otra forma de dar cuenta de la participación política de las mujeres en Latinoamérica, y que va en consonancia con el ejercicio de una ciudadanía activa por parte del campo político de género, pero sobre todo de las organizaciones de mujeres y que trabajan en torno a los temas de equidad de género, es la experiencia realizada a partir de la elaboración del Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano (1995-2003). Este índice responde a la propuesta hecha por la Coordinadora Regional de ONG de América Latina y el Caribe en 1996, que planteó la selección de un conjunto de indicadores que permitan mostrar los avances y retrocesos en materia de equidad de género. El Grupo Iniciativa Mujeres, articulación de ONG de mujeres chilenas, asumió el desafío de elaborar un Índice de Compromiso Cumplido (ICC).

Uno de los principales aportes del Índice de Compromiso Cumplido es que conjuga la dimensión técnica y la dimensión política. Por una parte, los indicadores y las metas surgen de las propuestas de las propias mujeres y se basan en la evaluación que ellas hacen de los compromisos planteados en las conferencias de Beijing y El Cairo, de los compromisos nacionales y de su cumplimiento. Por otro, el ICC permite la

comparabilidad objetiva de una misma situación a lo largo del tiempo respecto de las metas establecidas; vale decir, posibilita el monitoreo y la fiscalización a partir de una evaluación de avances y retrocesos independiente del escenario político y gubernamental, a través de la sistematización de las estadísticas oficiales disponibles en torno a la equidad de género. Además, mediante la delimitación temática del ICC en tres áreas —participación y acceso al poder, autonomía económica y pobreza, y salud de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos—, determina en de cada una de ellas los desafíos prioritarios en términos de equidad de género, focalizando las acciones, agendas y argumentos.

El enfoque técnico-político que sustenta al ICC contribuye al fortalecimiento del movimiento de mujeres, al afirmar la autonomía e independencia de los planteamientos y acción política de ellas y de sus organizaciones, así como la legitimidad de sus demandas. Le otorga capacidad de presión y crítica en el espacio público, al avanzar desde lo discursivo a la demostración concreta del logro de sus demandas gracias a un instrumento que da cuenta objetivamente de su realidad y les permite actuar. En definitiva, hace visible lo invisible, al mostrar las expectativas de las mujeres, su real cumplimiento y los alcances que esto tiene para el resto de la sociedad.

El ICC Latinoamericano⁴ constituye un instrumento de control ciudadano del movimiento de mujeres latinoamericano, en el entendido de que el veredicto internacional pesa de manera cada vez más importante en los debates locales, y que la región posee desafíos comunes que son un piso mínimo para afirmar el logro de la equidad de género en las tres áreas clave que lo componen.

Pese a que el ICC consta de tres áreas, para efectos de este informe se pondrá atención a los resultados obtenidos en el Área de Participación y Acceso al Poder. El aumento de la participación política de las mujeres y de su representación en los espacios de poder permite enfrentar de mejor manera las deficiencias, discriminaciones y problemas que encuentran las mujeres en los demás ámbitos de la vida social. La meta de esta área es la paridad (50 por ciento cada género), por lo que los resultados arrojados por este subíndice responden al porcentaje de logro de esta meta en cada país y en la región en su conjunto, y consideran tres indicadores: mujeres

en cargos de ministra, mujeres en cargos parlamentarios y mujeres en cargos de presidencia del gobierno local.

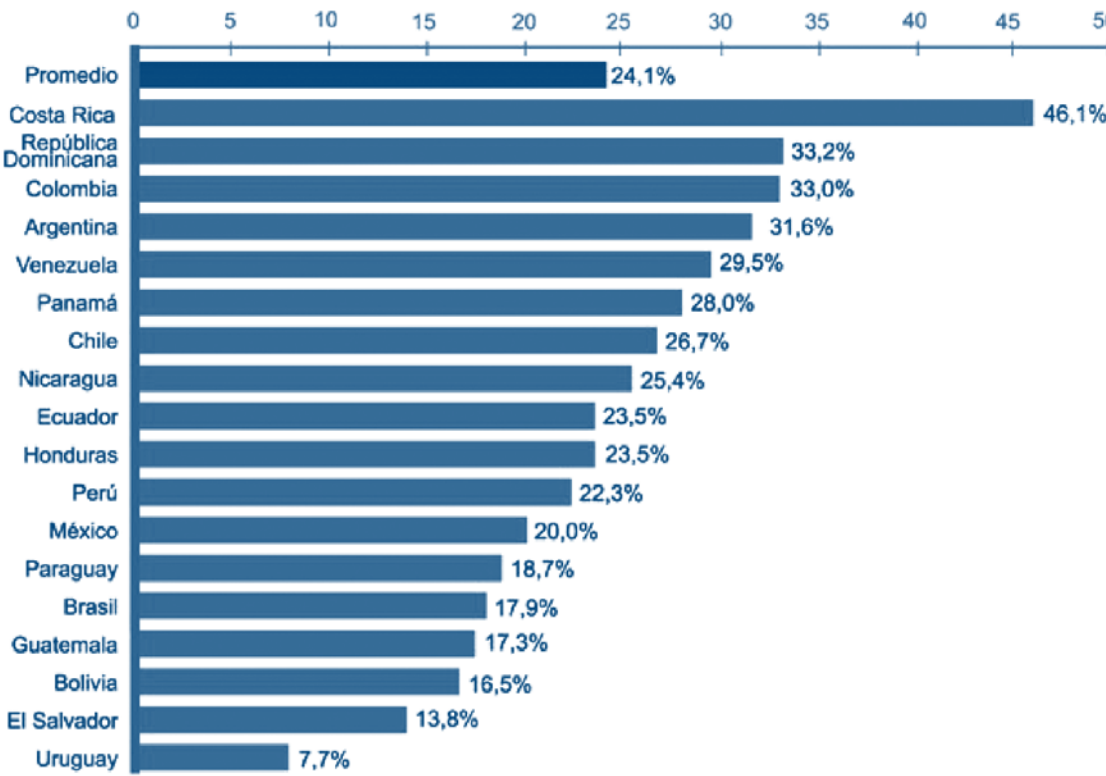
La presencia de las mujeres en los más altos niveles de decisión y representación política constituye un indicador de la equidad de género real y simbólico. La ausencia o subrepresentación de mujeres en los ámbitos de decisión es reflejo y consecuencia de la subordinación e invisibilidad femenina en la sociedad.

De acuerdo con los resultados del área en el logro de la meta, que es la paridad, en general se pueden apreciar algunos avances respecto de 1995, pero no una trayectoria homogénea. El porcentaje promedio de logro (24,1 por ciento al año 2003) obtenido por los países de la región en esta área evidencia que se está lejos de alcanzar la paridad en lo que a participación política se refiere, lo que da cuenta de la persistencia de las barreras existentes para el reparto equitativo del poder.

En términos generales, el país que cuenta con la mayor participación femenina para los tres cargos considerados —ministerios, parlamentos y gobiernos locales— es Costa Rica, con 24 por ciento de mujeres en esas instancias, esto es, con 46,1 por ciento de logro de la meta del área para el año 2003. Por su parte, Uruguay es el país que —a esa fecha— presentaba la participación femenina más baja, con apenas 4 por ciento, lo que equivale a un porcentaje de logro de la meta, a 2003, de 7,7 puntos.

Durante los ocho años que comprende el análisis del ICC (1995–2003), Guatemala, México y Nicaragua presentan retrocesos en la participación política femenina. En México y Nicaragua, esta caída se aprecia tanto en la participación en los gabinetes ministeriales como en el poder local; en tanto, en Guatemala sólo se ve afectada la participación en los cargos ministeriales.

Gráfico 5. América Latina (18 países): Área de participación política y acceso al porcentaje de logro de la meta de paridad (en torno a 2003)



Fuente: Valdés, Muñoz, Donoso (2005).

SOBRE LA PARIDAD EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La representación equitativa no sólo implica la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; también reviste la igualdad de resultados, en tanto es la demostración de la superación de las restricciones estructurales que enfrentan las mujeres. Es decir, les da la certeza, a ellas y a la sociedad en su conjunto, de que dicha igualdad de oportunidades es real y efectiva. El sentirse bien representada/o pasa necesariamente por que ello se refleje en los representantes, y no sólo en el ámbito de los ideales e intereses compartidos.

En definitiva, la paridad en el ámbito de la representación política supone avanzar en la redistribución del poder social y político, conmina a las instituciones y sistemas normativos a incorporar las demandas de mayor equidad por parte de la sociedad civil, y pone a prueba la consistencia de la propuesta ética y política de la democracia como sistema de relaciones y representación. Históricamente las mujeres latinoamericanas han dado cuenta de sus capacidades de liderazgo social y de su contribución cotidiana a la producción y reproducción social, y su exclusión sistemática de los

espacios públicos y de poder ha ido en desmedro de sus posibilidades de ejercicio ciudadano y de negociación con otros actores sociales.

La situación actual de las mujeres en América Latina en el ámbito de la participación política exige potenciar la asociatividad y las alianzas entre diversos actores, puesto que ha sido a través de estas estrategias que las mujeres históricamente han logrado sus demandas. Las reivindicaciones por una sociedad más inclusiva y que tenga como uno de sus principios rectores la equidad de género, no puede quedar librada a la sola aplicación de medidas desde el Estado. Ahora, igual que antes, es preciso el ejercicio de una ciudadanía activa por parte de las organizaciones y redes de mujeres latinoamericanas

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Anthony, C. (2000). ¿Qué es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? En J. Hurtado y V. Matus, La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Una herramienta para la acción. Santiago de Chile: Corporación de Desarrollo La Morada – Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.

Bareiro, L. et al. (2004). Sistemas electorales y representación femenina en América Latina. Serie Mujer y Desarrollo 54 (LC/L.2077-P/E). Santiago de Chile: CEPAL.

Bobbio, N. (1985). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

CEPAL (2007). El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe. X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.2738 (CRM.10/3). Santiago de Chile: CEPAL.

De Barbieri, T. (1992). Sobre la categoría de género. Una introducción teórico-metodológica. En Fin de siglo. Género y cambio civilizatorio. Ediciones de las Mujeres 17. Santiago de Chile: Isis Internacional.

Equidad de Género, Trabajo y Familia, A. C. (2005). Índice de Compromiso Cumplido. México 1995-2003. Una estrategia para el control ciudadano de la equidad de género. México, D.F.: Equidad de Género, Trabajo y Familia, A. C.

Facio, A. (1991). El principio de la igualdad ante la ley. El Otro Derecho, vol. 8. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (LSA).

Fraser, N. (1998). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes.

Gómez, C. J.; (2005). Índice de Compromiso Cumplido. Un instrumento de control ciudadano de la equidad de género (República Dominicana). Santo Domingo: Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

Guzmán, V. (2001). La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis. Serie Mujer y Desarrollo 32 (LC/L. 1962-P). Santiago de Chile: CEPAL.

— — — — (2003) Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible. Serie Mujer y Desarrollo 48 (LC/L. 1511-P). Santiago de Chile: CEPAL.

Guzmán, V. y C. Moreno (2007). Hacia un horizonte paritario en América Latina: representación política de las mujeres (LC/L.2670(CRM.10/4)). Santiago de Chile: CEPAL.

Jelin, E. (1996). La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad. En E. Jelin y E. Herschberg, Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.

— — — — (1997). Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina. En Cuadernos de Estudios Políticos 7. Buenos Aires: Agora.

Lamas, M. (2000). La antropología feminista y la categoría “género”. En M. Lamas (comp.), El género: construcción cultural de la diferencia sexual. México D.F.: PUEG, UNAM.

Lycklama, N. et al. (1996). Triángulo de poder. Bogotá: TM Editores.

Marques-Pereira, B. (1997). Los derechos reproductivos como derechos ciudadanos. Ediciones de las Mujeres 25. Santiago de Chile: Isis Internacional.

— — — — (2003). La citoyenneté politique des femmes. Paris: Armand Colin.

Marx, J.; J. Borner; M. Caminotti (2006). Cuotas de género y acceso femenino al Parlamento: los casos de Argentina y Brasil en perspectiva comparada. Política, vol. 46. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Massolo, A. (2007). Participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina. Santo Domingo: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).

Molina, N. (1997). De la denuncia a la construcción de la igualdad: nuevas articulaciones entre ciudadanía y género. En E. Correa y M. Noé (eds.), Nociones de una ciudadanía que crece. Santiago de Chile: FLACSO-Chile.

Muñoz, E. y M. Peart (2005). Índice de Compromiso Cumplido. Panamá. Una estrategia para el control ciudadano de la equidad de género. Ciudad de Panamá: Unión de Mujeres Panameñas (UNAMUP).

Peschard, J. (2003). El sistema de cuotas en América Latina: Panorama general. En Internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas. Estocolmo: IDEA.

PNUD (2003). Informe de Desarrollo Humano de Género en Bolivia. La Paz: PNUD.

Rico, S. y E. Salguero (2004). Índice de Compromiso Cumplido. Bolivia. Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). La Paz: UNFPA-Bolivia – FLACSO-Chile – UNIFEM-Región Andina.

Rubin, G. (2000). El tráfico de mujeres. Notas sobre una Economía Política del sexo. En: Lamas, M. (comp.). El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUEG, UNAM.

Schutz, A. (1974). Algunas ambigüedades de la noción de responsabilidad. En A. Schutz, Estudios sobre teoría social. Buenos Aires: Amorrortu.

Scott, J. (2000). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas (comp.), El género: construcción cultural de la diferencia sexual. México, PUEG, UNAM.

Valdés T. (2000). De lo social a lo político. La acción de las mujeres latinoamericanas. Santiago de Chile: LOM.

Valdés, T.; E. Gomáriz (coords). (1995). Mujeres latinoamericanas en Cifras. Tomo comparativo. Santiago: FLACSO, Instituto de la Mujer (España).

Valdés, T.; A. M. Muñoz; A. Donoso (2005). 1995-2003: ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano. Santiago: FLACSO – UNIFEM.

Valdés, T.; M. Fernández (2006). Género y política: un análisis pertinente. Política, vol. 46. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Valdés, T. et al. (2006). ICC: Índice de Compromiso Cumplido. Una herramienta para el control ciudadano de las mujeres latinoamericanas. Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Santiago: FLACSO-Chile — LOM Editores.

Vargas, V. (1996). Disputando el espacio global. El movimiento de mujeres y la IV Conferencia Mundial de Beijing. Revista Nueva Sociedad 141. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.

— — — — (2000). Un tema en debate. La ciudadanía de las mujeres. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, <http://www.rcp.net.pe/FLORA>.

Vázquez, L. E. (2005). Constitución y acciones positivas. El sistema de cuotas de participación política para las mujeres en Ecuador. En Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. [En línea] www.juridicas.unam.mx [fecha de consulta: 16 de septiembre de 2007].

Villanueva, R. (2003). Balance de la aplicación de las cuotas en el Perú. En Internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas. Estocolmo: IDEA.

Viveros, F. (1998). La participación de la sociedad civil en acciones de interés público. Ciudadanía e interés público. Enfoques desde el derecho, la ciencia política y la sociología. Cuadernos de Análisis Jurídico, Serie Publicaciones Especiales 8. Santiago de Chile: Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.

NOTAS

1. Las responsables de este Informe son investigadoras del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM, Chile), expertas en género y políticas públicas en América Latina. Coordinaron el proyecto Índice de Compromiso Cumplido (ICC): un instrumento de control ciudadano de la equidad de género. Teresa Valdés ha sido dirigente feminista desde hace 25 años.

2. La distinción que aquí se hace entre movimiento femenino o de mujeres y movimiento feminista se hace cargo de la existencia de una pluralidad de experiencias colectivas de mujeres, cuyos objetivos y filosofías difieren, pero que apuntan, en términos generales, al mejoramiento de la situación de las mujeres. El primero connota a aquellas organizaciones o grupos de mujeres que buscan la satisfacción de necesidades y demandas concretas para el mejoramiento de su situación, mientras el movimiento feminista se basa en una filosofía política y una propuesta ética que cuestiona las bases del orden social, cultural, político y económico que subordina a las mujeres, a fin de superarlo y cambiar las condiciones de subordinación y opresión de género. Para ello reivindica los derechos de las mujeres y actúa políticamente. Como movimiento ha contribuido a importantes transformaciones en la perspectiva de la profundización de la democracia, la inclusión y la justicia social. En determinados momentos históricos estas distintas organizaciones han actuado en conjunto, y es así que en México y otros países se habla del “movimiento amplio de mujeres”, para subrayar la acción conjunta de esa vasta gama de formas de acción colectiva. El feminismo como propuesta político-filosófica se expresa en una pluralidad de formas, reconociéndose el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo socialista, el feminismo liberal, entre otros.

3. “Femócratas” es el nombre que se ha dado a las feministas que se han incorporado a trabajar en el Estado.

4. Fue presentado durante la Sesión de Naciones Unidas: Beijing+10 (2005), en Nueva York, como ejemplo de monitoreo y fiscalización de los Acuerdos de Beijing por parte de la sociedad civil.



8. ANEXOS

ANEXO 1:

METODOLOGIA Y AMUESTRA PARA LA REALIZACIÓN DEL IDD

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ¿QUÉ ES EL IDD?

El Informe Sobre Democracia y Desarrollo en América Latina es el principal instrumento de trabajo conjunto de las ONG asociadas de la ALOP. Se trata de una encuesta directamente realizada por las asociadas de la ALOP en sus países que después será analizada a nivel nacional, regional y continental. Cada dos años producimos nuevos conocimientos, nuevos análisis y evaluaciones sobre la realidad latinoamericana, sobre las movilizaciones en defensa y por la ampliación de la democracia, sobre las posibilidades y luchas por la conquista del desarrollo en nuestro continente.

A partir de este IDD 2006-2007 pasamos a articular el Informe con una Campaña que se propone promover el debate de su contenido en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales comprometidos con la conquista y la ampliación de los derechos humanos, comprendidos en su lato senso como derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Pretendemos, en particular, profundizar el debate sobre los resultados del IDD con las ONG asociadas a la ALOP y con las redes regionales y asociaciones nacionales de ONG que son nuestros principales aliados.

2. ¿CÓMO DECIDIMOS SU CONTENIDO?

La realización de dos IDD por parte de la ALOP ha dejado varias experiencias. Nuestra encuesta no debe tratar de manera genérica los temas de la democracia y del desarrollo, es necesario que responda a cuestiones de interés directo de los actores colectivos de la sociedad civil comprometidos con las luchas y movilizaciones por la democratización y por la equidad en nuestro continente, es necesario que responda especialmente a los intereses de las ONG comprometidas con esas causas.

Desde esta perspectiva, el Comité Ejecutivo de la ALOP ha propuesto y debatido con todas las ONG asociadas, en las Asambleas Subregionales de este año de 2006, la propuesta de este IDD que ahora se inicia. Esta propuesta fue aprobada en todas las instancias de dirección de nuestra Asociación.

3. ¿DE QUÉ TRATARÁ EL IDD 2006-2007?

En nuestro Plan Trienal 2005-2008 definimos como objetivo general:
Elaborar propuestas y mejorar la capacidad de incidencia de los sectores democráticos de la sociedad civil latinoamericana en el escenario internacional alrededor de los ejes de acción Democracia y Desarrollo. En términos más concretos, nos proponemos estimular el debate alrededor de estos temas y participar de la construcción de una agenda común ante la perspectiva de fortalecer un trabajo regional.

- Investigar las relaciones entre las ONG, movimientos sociales y partidos políticos comprometidos con el cambio social.

Para responder a estos objetivos escogimos investigar las relaciones entre las ONG, los movimientos sociales y los partidos políticos comprometidos con el cambio social, con la defensa de los derechos humanos y con la conquista de la democratización y de la equidad en nuestras sociedades.

- A partir del análisis de las movilizaciones sociales

A partir del análisis de las movilizaciones sociales en las cuales estas entidades y movimientos participaron en el último año, queremos oír las declaraciones de liderazgos sobre la importancia de estas movilizaciones, sus conquistas y fragilidades, así como el papel que han tenido las ONG, los movimientos sociales y los partidos políticos en estas movilizaciones, sus diferencias y complementaciones.

Esta encuesta, inédita, deberá traer para el debate público las identidades y diferencias entre actores colectivos que se movilizan y construyen un campo político común en el cual todos se alinean en la defensa de derechos, en la lucha por la democratización y por la equidad, pero que posiblemente guardan diferencias de concepciones, estrategias y evaluaciones de coyuntura.

- Fortalecer alianzas y ampliar una agenda común

¿Habrá condiciones para que las alianzas se fortalezcan y para ampliar una agenda común de intereses a partir de este reconocimiento? ¿Cuál es el papel que deben tener las ONG en estos procesos?

4. MUESTRA DE LA ENCUESTA

Se realizarán 140 entrevistas en total, distribuidas por 19 países de América Latina.

En cada país las ONG asociadas van a elaborar una propuesta conjunta de quiénes serán los movimientos sociales, las ONG y los partidos que serán entrevistados.

En cada país habrá una ONG asociada coordinando los trabajos y realizando el análisis nacional de la encuesta. Y todas

las ONG asociadas deberán realizar al menos una entrevista. Las entrevistas serán realizadas por un(a) investigador(a) senior de cada ONG asociada, teniendo como referencia un guión de preguntas discutido y aprobado por el CE. Esta persona que va a hacer la entrevista preferiblemente no debe tener relaciones con la entidad/movimiento entrevistado. Serán entrevistas necesariamente grabadas, que posteriormente serán transcritas. El tiempo previsto para cada entrevista es de cerca de una hora. Tanto la transcripción como la entrevista grabada deberán ser entregadas a la ONG responsable de la coordinación de los trabajos en el país.

Región	Países	Población (millones/hab)	GINI	Nº Asociadas	Nº Entrevistas
CAMEXCA	México	106,1	0,516	3	9 + 1
	Nicaragua	5,5	0,579	(1)	3
	Guatemala	12,7	0,543	2	6
	R. Dominicana	9,1	0,544	1	3
	Cuba	11,4	0,	1	3
	El Salvador	6,9	0,525	2	6
	Costa Rica	4,3	0,488	1	3
	Panamá	3,2	0,515	2	6
	Honduras	7,3	0,588	1	3
Total		9	166,5	13	43

Región	Países	Población (millones/hab)	GINI	Nº Asociadas	Nº Entrevistas
ANDINA	Perú	27,9	0,523	4	8 + 1
	Venezuela	26,6	0,500	2	4 + 1
	Bolivia	9,4	0,614	4	8 + 1
	Colombia	46,0	0,572	4	6 + 2
	Ecuador	13,2	0,513	4	8
Total		5	123,1	17	39

Región	Países	Población (millones/hab)	GINI	Nº Asociadas	Nº Entrevistas
CONO SUR	Argentina	38,6	0,537	3	12 + 1
	Brasil	187,6	0,621	5	20
	Paraguay	6,2	0,570	2	8
	Uruguay	3,4	0,455	2	8
	Chile	16,3	0,552	2	8 + 1
Total		5	252,1	14	58

Criterios:

- fueron distribuidas las 140 entrevistas según la población de cada subregión
- fueron distribuidas las entrevistas de cada subregión por el número de asociadas
- fue corregido el residual del cálculo considerando una mezcla que incluye población, Gini y procesos políticos nacionales.

5.GUIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA

5.1. Presentación de la Encuesta
(para leer antes de la entrevista):

Esta encuesta es una iniciativa de la ALOP, que la está realizando a través de sus asociadas en los 19 países de América Latina donde las mismas están presentes.

La encuesta quiere recoger la opinión de los entrevistados con relación al significado político de las movilizaciones promovidas por sus entidades y movimientos, sus logros y dificultades, así como el reconocimiento de quiénes son los aliados en sus luchas.

Sus opiniones serán confidenciales y el resultado de esta encuesta se le enviará posteriormente para su conocimiento.

Usted será invitado para una reunión, conjuntamente con los demás entrevistados, para conocer y debatir los resultados del análisis nacional.

Queremos agradecerle la disponibilidad y pasar entonces a las preguntas.

5.2. Guión de Preguntas para las Entrevistas

1. ¿Cuáles han sido las principales movilizaciones en los que su entidad/su movimiento fue líder o participó en este año de 2006?

2. ¿Cuáles han sido los logros pretendidos y cómo usted evalúa los resultados de dichas movilizaciones? Señale los avances y las dificultades.

3. ¿Usted considera que estas movilizaciones contribuyen para que haya cambios sociales y políticos más profundos o se caracterizan más como luchas de resistencia? ¿Por qué?

4. ¿Ha habido alguna iniciativa por parte de su entidad/movimiento para buscar aliados? ¿Cuáles? ¿Cómo se expresa esta solidaridad?

5. ¿Y con relación a los partidos políticos, se buscaron alianzas o no? ¿Con qué resultados?

6. ¿Cuáles son los problemas, los retos, que estas alianzas han traído?

- Con las ONG
- Con los movimientos sociales
- Con los partidos políticos

7. ¿Cuáles temas son, o pueden ser, importantes factores de movilización?

8. ¿Existe un plan de movilizaciones conjuntas, una agenda compartida, entre ustedes y sus aliados?, ¿o una mayor articulación sólo ocurre a veces, dependiendo de los acontecimientos? Explique con más detalles.

9. ¿Cómo usted considera que la opinión pública evalúa estas movilizaciones y el papel político de su entidad/movimiento?

10. ¿Existe alguna solidaridad internacional o una articulación más amplia que apoye sus movilizaciones? Explique con más detalles.

11. Considerando el momento actual, haga un balance y díganos cuáles son los principales retos para promover la democracia y el desarrollo en su país.

12. ¿Cuáles son los procesos de integración latinoamericana que usted conoce y cómo usted evalúa estos procesos?

13. ¿Ustedes participan o ya han participado de alguna articulación regional de entidades y movimientos de la sociedad civil en América Latina? Explique. ¿Para hacer qué?

14. ¿Usted cree que sea posible la construcción de una agenda común entre las ONG, los movimientos sociales y los partidos políticos de América Latina comprometidos con el cambio social? ¿Cómo usted imagina que eso se pueda llevar a cabo?

II. GUIÓN PARA EL
ANÁLISIS DE LAS
ENTREVISTAS

Esta es una investigación latinoamericana. Por esto es necesario que la metodología y el análisis tengan una estructura común que permita después que se haga un análisis regional y latinoamericano.

En las líneas abajo sugerimos una estructura para los responsables por país puedan hacer sus relatorías, las análisis nacionales.

1. Un primer capítulo es una contribución del analista que ayude a caracterizar el escenario de las movilizaciones de 2006 en su país y los actores y conflictos que se establecen en torno a los desafíos del desarrollo y de la democracia. (máximo 10 páginas).

Es importante que se reconozcan las tensiones distributivas presentes en el funcionamiento de las instituciones democráticas, pero que se miren también las prácticas innovadoras presentes en las movilizaciones ciudadanas buscando identificar si están se organizando nuevos actores, el significado que tienen en la coyuntura y el sentido político que apuntan en tanto que tendencias.

2. Un segundo capítulo se propone a identificar los movimientos y entidades entrevistadas y aclarar las razones de su selección. (máximo 5 páginas)

3. En un tercer capítulo proponemos que se agreguen y se analicen las respuestas de las entrevistas en 4 bloques y que en lo posible se utilicen expresiones de los entrevistados a título de ilustración. (máximo 20 páginas)

BLOQUE 1

SOBRE EL MOMENTO POLÍTICO

1. Considerando el momento actual, haga un balance y díganos cuáles son los principales retos para promover la democracia y el desarrollo en su país.

2. ¿Cuáles temas son, o pueden ser, importantes factores de movilización?

BLOQUE 2

SOBRE LAS MOVILIZACIONES Y
SU IMPACTO

3. ¿Cuáles han sido las principales movilizaciones en los que su entidad/su movimiento fue líder o participó en este año de 2006?

4. ¿Cuáles han sido los logros pretendidos y cómo usted evalúa los resultados de dichas movilizaciones? Señale los avances y las dificultades.

5. ¿Usted considera que estas movilizaciones contribuyen para que haya cambios sociales y políticos más profundos o se caracterizan más como luchas de resistencia? ¿Por qué?

6. ¿Cómo usted considera que la opinión pública evalúa estas movilizaciones y el papel político de su entidad/movimiento?

BLOQUE 3

SOBRE LAS ALIANZAS,
SUS FORTALEZAS Y DÉBILIDADES

7. ¿Ha habido alguna iniciativa por parte de su entidad/movimiento para buscar aliados? ¿Cuáles? ¿Cómo se expresa esta solidaridad?

8. ¿Y con relación a los partidos políticos, se buscaron alianzas o no? ¿Con qué resultados?

9. ¿Cuáles son los problemas, los retos, que estas alianzas han traído?

- Con las ONG
- Con los movimientos sociales
- Con los partidos políticos

10. ¿Existe un plan de movilizaciones conjuntas, una agenda compartida, entre ustedes y sus aliados?, ¿o una mayor articulación sólo ocurre a veces, dependiendo de los acontecimientos? Explique con más detalles.

11. ¿Existe alguna solidaridad internacional o una articulación más amplia que apoye sus movilizaciones? Explique con más detalles.

BLOQUE 4

SOBRE EL PAPEL DE
LA CIUDADANÍA EN LA
INTEGRACIÓN REGIONAL

12. ¿Cuáles son los procesos de integración latinoamericana que usted conoce y cómo usted evalúa estos procesos?

13. ¿Ustedes participan o ya han participado de alguna articulación regional de entidades y movimientos de la sociedad civil en América Latina? Explique. ¿Para hacer qué?

14. ¿Usted cree que sea posible la construcción de una agenda común entre las ONG, los movimientos sociales y

los partidos políticos de América Latina comprometidos con el cambio social? ¿Cómo usted imagina que eso se pueda llevar a cabo?

4. Un cuarto y último capítulo es el de las conclusiones. Es importante reconocer que no se está haciendo un diagnóstico de la situación del país, sino que un diagnóstico de las prácticas ciudadanas por el cambio social según el punto de vista de los entrevistados.

Tratase de analizar más bien procesos y sus actores donde la pregunta es sobre la capacidad que ellos tengan de incidir en la política y en la opinión pública, de sumarse y construir una agenda común. En este sentido vale la pena destacar la cuestión de la conformación o no de redes de entidades y movimientos, su inserción internacional o no, así como las relaciones entre movimientos, partidos e

ongs, sus avances y dificultades. (máximo 10 páginas).

Contamos con su importante contribución para este nuestro esfuerzo colectivo de interpretar el actual escenario de las movilizaciones y luchas sociales, su incidencia en lo político, nuestro papel en tanto que ongs.

Nuestro deseo es que este análisis, inédito, permitirá que cada uno de nosotros y todos con los cuales nos relacionamos podamos tener una visión más general sobre nuestras relaciones con las instituciones y movimientos sociales que actúan hoy en América Latina en defensa de la democracia y del desarrollo así como permita que tengamos la oportunidad de orientar mejor nuestras acciones y alianzas hacia la búsqueda de la equidad, de la justicia social, de la democratización de la sociedad y del Estado.

III. GUIÓN PARA EL ANÁLISIS SUBREGIONAL DE LAS ENTREVISTAS

Esta es una investigación latinoamericana. Por esto es necesario que la metodología y el análisis tengan una estructura común que permita después que se haga un análisis regional y latinoamericano.

1. EL MAPA DEL CONFLICTO Y SUS RESOLUCIONES

Un primer capítulo debe permitir que el analista pueda caracterizar en la región cuales son las principales disputas y conflictos, y en este escenario el sentido que tienen las movilizaciones ciudadanas y sus impactos, incluso expresiones electorales de sus posiciones en relación al régimen democrático en que viven.

Es importante que se reconozcan las tensiones presentes en el funcionamiento de las instituciones democráticas, pero que se miren también las prácticas innovadoras presentes en las movilizaciones ciudadanas buscando identificar el sentido político que apuntan en tanto que tendencias. (máximo 10 páginas)

2. LOS ACTORES EN MOVIMIENTO

Un segundo capítulo se propone a identificar quien son los protagonistas de los movimientos, con que apoyo cuentan, sea de la opinión pública, sea de sus aliados, su agenda de demandas y proposiciones, sus resultados (máximo 5 páginas)

3. LA AGENDA DE LA DEMOCRATIZACIÓN

En un tercer capítulo proponemos que se agreguen y se analice las análisis nacionales (considerando las respuestas de las entrevistas) en 4 bloques y que en lo posible se utilicen expresiones de los entrevistados a título de ilustración. (máximo 20 páginas)

BLOQUE 1 SOBRE EL MOMENTO POLÍTICO

1. Considerando el momento actual, haga un balance y díganos cuáles son los principales retos para promover la democracia y el desarrollo en su región.
2. ¿Cuáles temas son, o pueden ser, importantes factores de movilización?

BLOQUE 2 SOBRE LAS MOVILIZACIONES Y SU IMPACTO

3. ¿Cuáles han sido las principales movilizaciones en la región y como los partidos políticos, movimientos sociales y ongs participaron en este año de 2006?
4. ¿Cuáles han sido los logros pretendidos y cómo se evalúan los resultados de dichas movilizaciones? Identifique los avances y las dificultades.
5. ¿Estas movilizaciones contribuyen para que haya cambios sociales y políticos más profundos o se caracterizan más como luchas de resistencia? ¿Por qué?
6. ¿Cómo la opinión pública evalúa estas movilizaciones y el papel político de la ciudadanía y de los movimientos sociales?

BLOQUE 3 SOBRE LAS ALIANZAS, SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

7. ¿Ha habido alguna iniciativa por parte de los ciudadanos movilizadas para buscar aliados? ¿Cuáles? ¿Cómo se expresa esta solidaridad?
8. ¿Y con relación a los partidos políticos, se buscaron alianzas o no? ¿Con qué resultados?
9. ¿Cuáles son los problemas, los retos, que estas alianzas han traído?
 - Con las ONG
 - Con los movimientos sociales
 - Con los partidos políticos
10. ¿Existe un plan de movilizaciones conjuntas, alguna agenda compartida en la región?, ¿o una mayor articulación sólo ocurre a veces, dependiendo de los acontecimientos? Explique con más detalles.
11. ¿Existe alguna solidaridad internacional o una articulación más amplia que apoye las movilizaciones? Explique con más detalles.

BLOQUE 4 SOBRE EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL

12. ¿Cuáles son los procesos de integración latinoamericana que los actores entrevistados conocen y como evalúan estos procesos?

13. ¿Estos actores (identificar cuales) participan o ya han participado de alguna articulación regional de entidades y movimientos de la sociedad civil en América Latina? Explique. ¿Para hacer qué?

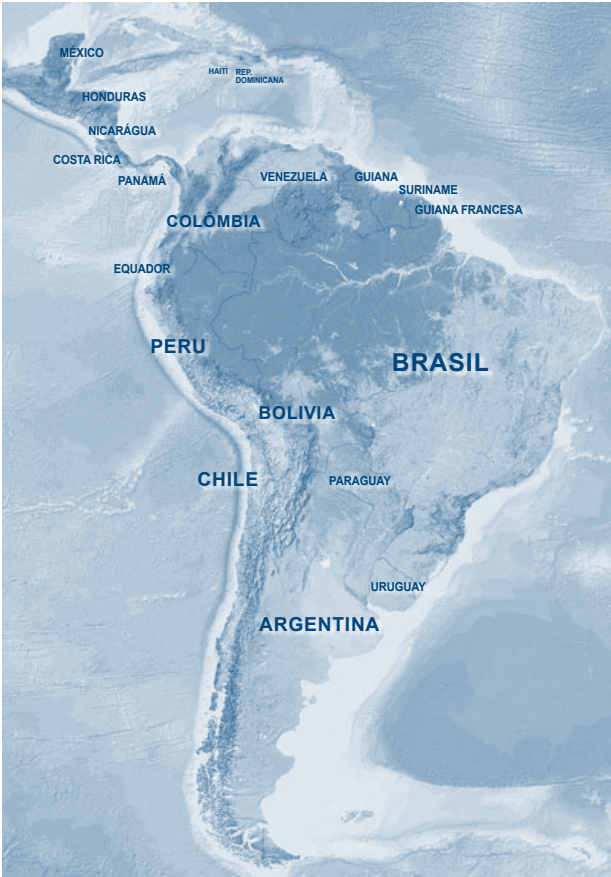
14. ¿Es posible la construcción de una agenda común entre las ONG, los movimientos sociales y los partidos políticos de América Latina comprometidos con el cambio social? ¿Cómo los análisis nacionales imaginan que eso se pueda llevar a cabo?

4. CONCLUSIONES:

LAS RELACIONES ENTRE MOVIMIENTOS, PARTIDOS E ONGS, SUS AVANCES Y DIFICULTADES.

Es importante reconocer que no se está haciendo un diagnóstico de la situación de la región, sino que un diagnóstico de las prácticas ciudadanas por el cambio social y sus alianzas, según el punto de vista de los entrevistados.

Tratase de analizar más bien procesos y sus actores donde la pregunta es sobre la capacidad que ellos tengan de aliarse, incidir en la política y en la opinión pública, de sumarse y construir una agenda común. En este sentido vale la pena destacar la cuestión de la conformación o no de redes de entidades y movimientos, su autonomía y capacidad de elaboración crítica, su inserción internacional o no. El foco principal de las conclusiones son las relaciones entre movimientos, partidos e ongs, sus avances y dificultades.



I. SOBRE LA(S) IDENTIDAD(ES) Y EL PAPEL DE LA ALOP

Silvio Caccia Bava
Abril de 2008

1. ANTECEDENTES

En la última Asamblea General de la ALOP, ocurrida en mayo de 2005, el colectivo de sus asociadas decidió realizar un proceso orgánico y articulado de discusión sobre su identidad y su papel, entendiéndose que la actualización de sus compromisos institucionales es una prioridad dados los importantes y recientes cambios en el escenario político y de desarrollo de América Latina.

Para darle impulso a este proceso de discusiones internas, la Asamblea General decidió que el Comité Ejecutivo prepare un documento de discusión con la antecedencia necesaria para circular por varios meses entre las asociadas. En mayo de 2007 este documento fue presentado en las asambleas subregionales de ALOP y recibió críticas, aportes, comentarios de las asociadas. Estos comentarios fueron sistematizados y discutidos por el Comité Ejecutivo y el le encargó a la presidencia de la ALOP que elabore la versión a ser presentada a las asociadas y debatida en nuestra Asamblea General de mayo de 2008.

2. COMO LEER EL DOCUMENTO

Pasado el ciclo de discusiones en las asambleas subregionales y recibidas las contribuciones originadas de este proceso se entiende que la identidad de ALOP es una construcción permanente, por lo tanto inacabada, que se beneficia de los aportes de nuestras experiencias y reflexión colectiva, especialmente de la formulación aprobada en nuestras Asambleas. Comprendemos este esfuerzo colectivo como un elemento importante para animar las definiciones de nuestro que hacer político en tanto que Asociación, nuestras alianzas estratégicas, nuestro plan de trabajo.

La identidad de ALOP se basa en principios y valores comunes que son referencias mas permanentes, pero que se traducen en formulaciones que buscan comprender y interpretar los cambios acelerados de nuestra realidad latinoamericana y de la situación vivida por las ongs asociadas, respetando las tensiones y contradicciones vividas por nuestro campo,

la diversidad y pluralidad de pensamiento y la riqueza de experiencias que vienen de la inserción particular de cada asociada en su territorio.

Reconocemos que a partir de nuestra defensa de la democracia y de la búsqueda del bien común integramos un campo político más amplio, lo que nos requiere esfuerzos para superar el aislamiento y trabajar en tanto que Asociación en conjunto con otras instituciones y movimientos, beneficiándonos de esta integración y, a su vez, contribuyendo para formulaciones más amplias de estrategias y acciones conjuntas.

3. LOS COMPROMISOS FUNDACIONALES REVISITADOS

Desde la Asamblea General de 1983, realizada en Río de Janeiro, se planteó la necesidad de una redefinición del papel institucional de la ALOP, 4 años después de su fundación. Una demostración de vitalidad de una Asociación que crecía, que incorporaba nuevos socios y que buscaba profundizar la dimensión colectiva de los compromisos asumidos.

En la AG de 1990, realizada en Caracas, después de haber cumplido más de 10 años de vida institucional, se consideró importante la realización de un balance de los cambios ocurridos en el movimiento popular latinoamericano para examinar, a partir de este análisis, los nuevos desafíos que se imponían a las ONG. En esta ocasión, se reafirmó la importancia del papel propositivo de la ALOP, es decir, una entidad capaz de formular propuestas alternativas de desarrollo a partir de la sistematización de experiencias en diversos niveles: sectorial, regional, nacional, etc.

Este esfuerzo colectivo de actualización de los compromisos institucionales decidido en Caracas dio origen a un documento elaborado por el CE "Diseño Estratégico de la ALOP", debatido en talleres sub-regionales y regionales, aprobándose una versión enriquecida por las sucesivas discusiones en la X AG, realizada en 1992, en Santiago de Chile.

En esta ocasión, reconociendo un proceso acelerado de cambios en el escenario internacional con fuertes implicaciones en las políticas de cooperación de las entidades de solidaridad del Norte, la ALOP se coloca el desafío de promover redefiniciones y cambios, así como darle énfasis a su modernización institucional y a la de sus asociadas. Fue en esa ocasión que se decide la creación de la Antena de Bruselas y se propone también la creación de otra antena en Washington, con el fin de darles seguimiento e influir en los cambios en curso de las políticas de cooperación.

En ocasión de la AG de Santiago, en 1992, la ALOP ya contaba con 33 asociadas presentes en 19 países de AL. La identidad de la red se definía, según los documentos, por un marco doctrinario común, por la intensidad de los intercambios entre las mismas, por ser ONG consolidadas en sus países y por poseer un trabajo serio con los movimientos populares.

Se identificaba entonces que la principal contribución de las ONG latinoamericanas ha sido fortalecer corrientes democráticas en la región, actuando en estrecha relación no solo con sus beneficiarios, sino también con otras fuerzas sociales. La prioridad era la relación con los movimientos sociales, pero las relaciones con las universidades, con las asociaciones profesionales, con las instituciones eclesiásticas y con los partidos políticos, eran valorizadas y deseadas.

Una relectura de los compromisos fundacionales de la ALOP nos permite identificar una trayectoria de cambios, pero también la permanencia de un conjunto de proposiciones que garantiza su identidad.

En ocasión de la AG de 1992, la misión de la ALOP era definida de la siguiente forma:

Misión:

Promover el intercambio de experiencias entre las ONG asociadas con la finalidad de elaborar propuestas alternativas de desarrollo y actuar para su implantación efectiva.

Y sus objetivos eran formulados como sigue:

Constituir un espacio de encuentro de las ONG de Desarrollo que la constituyen que permita la elaboración de propuestas de desarrollo globales y sectoriales, teniendo en cuenta el acervo de sus experiencias y sobre esta base establecer una relación proactiva con los actores de desarrollo latinoamericano y del Caribe.
Elevar la eficacia de las ONG en los procesos de desarrollo promoviendo su modernización gerencial e instrumental y su sustentabilidad.
Desarrollar la capacidad de diálogo y de negociación de las organizaciones de la sociedad civil en la región, en los foros de integración regional y en los foros internacionales.

Con la reformulación de los Estatutos realizada parcialmente en la AG de Bogotá, en 2005, la ALOP define como misión:

Misión:

"la promoción y el apoyo a las iniciativas y acciones de los sectores sociales democráticos, especialmente los sectores excluidos, que luchan contra la pobreza y la exclusión en la construcción de un desarrollo humano integral y sustentable".

Siguiendo las definiciones de los nuevos Estatutos, sus objetivos son:

Apoyar en la región las políticas y procesos democráticos de desarrollo sustentable, que aseguren una mayor equidad en la distribución de los recursos y potencien la participación de los movimientos sociales en la gestión de ese mismo desarrollo.

Apoyar los procesos de integración de las Sociedades Civiles de nuestros países, constituyendo una instancia de

interlocución con los organismos regionales.

Fortalecer, económica, jurídica y organizativamente a los grupos y organizaciones que trabajan en la promoción de los sectores populares excluidos.

Constituir una instancia de interlocución y relación entre las organizaciones privadas que en América Latina y El Caribe apoyan a los sectores excluidos y las agencias regionales o extra regionales que apoyan dichos esfuerzos.

Promover la articulación de las ONG de desarrollo de la región en la búsqueda de respuestas consensuadas frente a la situación de América Latina.

Vincular entre sí y apoyar solidariamente a las organizaciones miembros, promoviendo una relación cada vez más estrecha y coordinada entre ellas, con el fin de incrementar la eficacia de sus acciones.

Difundir información sobre temas de interés en y para el trabajo de las organizaciones asociadas.

Promover relaciones equitativas de género en el accionar de las asociadas y en el suyo propio.

Como se puede observar, existen importantes cambios en las definiciones de identidad de la ALOP, si se comparan las formulaciones de 1992 y 2005. Estos cambios expresan una señal de vitalidad y madurez de la Asociación y de la capacidad de sus asociadas de actuar de manera más articulada en los nuevos tiempos. La misión y los objetivos que la ALOP se plantea en 2005 es el resultado de debates internos, que llevaron la Asociación a afirmarse como un actor político regional.

El deseo de actuar políticamente en pro de la democratización de la democracia y en pro de un desarrollo con justicia, equidad y sustentabilidad, expresado en su Plan Trienal 2005-2008, abre un nuevo campo de debates. Abre la discusión sobre los cambios en América Latina y el Caribe en estos 13 años que separan las dos Asambleas Generales; abre la discusión sobre el futuro, sobre la nueva sociedad que queremos construir, provoca la discusión sobre los nuevos paradigmas de desarrollo, sobre los nuevos procesos políticos que ocurren en el continente y la participación de la ciudadanía organizada en los mismos.

Ya en la AG de Santiago, en 1991, Mariano Valderrama, presidente de la ALOP en el período 1988-1992, afirmaba la necesidad de repensar nuevas estrategias. Según su punto de vista, "el trabajo de las ONG, anclado en las teorías del desarrollo y de la transformación estructural, se ve afectado por la crisis de los paradigmas. Hoy se hace necesario darles un nuevo contenido a conceptos básicos como los de desarrollo y protagonismo popular". Como se ve, lidiamos con estas cuestiones desde hace mucho tiempo.

Hobsbawn dice que vivimos una aceleración del tiempo en términos históricos. Y podemos percatarnos de ello si seguimos de cerca los cambios ocurridos en la coyuntura en los últimos años, que son muchos. Ciertamente cada una de las asociadas ha tenido que enfrentar muchos nuevos desafíos y también ha cambiado mucho en este período. Buscar el debate sobre nuestra identidad y nuestros compromisos tiene la virtud de crear un espacio y una dinámica donde las ONG asociadas y la ALOP en conjunto van produciendo nuevos

consensos, se fortalecen, se articulan y actúan lado a lado.

Actualizar nuestros compromisos en razón de nuestra madurez, de nuestra voluntad de actuar en la política y de la nueva realidad latinoamericana, pasa a ser determinante para el éxito de nuestra Asociación. Es un proceso colectivo que necesita contar con la participación, la apertura para el debate y la producción colectiva del conocimiento.

En la AG de 2005, en Bogotá, se presentaron un conjunto de proposiciones que definen compromisos, un papel político para la Asociación y un campo de alianzas. Y la Asamblea General decidió abrir un proceso de debates internos para contribuir con el perfeccionamiento de esta propuesta y someterla a votación en la AG de 2008.

Los compromisos que asume la ALOP se sustentan en distintos valores que entendemos como siendo fundamentales en nuestra acción: la ética, la solidaridad, la justicia social, la equidad de géneros, el respeto y la valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad y la transparencia. Basados en ellos, y como parte de nuestro mandato, asumimos distintos compromisos estratégicos que fortalecen nuestro perfil político y que son el sustento de nuestra acción:

América Latina y sus organizaciones constituyen un universo heterogéneo y plural. La defensa de esta diversidad, que es una de sus riquezas fundamentales, es una de las tareas políticas centrales de la Asociación. Entendemos el desarrollo desde un enfoque de desarrollo humano lo que supone poner a la gente como centro. Con este enfoque, estamos comprometidos con la erradicación de la miseria, la pobreza, la discriminación y por lo tanto con la lucha contra la desigualdad y la exclusión que las explican en buena medida, así como con la afirmación irrestricta de los derechos humanos. Desde la sociedad civil, de la que formamos parte, defendemos y propugnamos el pluralismo, la autonomía y la participación como condiciones indispensables para garantizar la soberanía popular.

Entendemos que nuestro papel como Asociación de ONG es el de ser actores sociales y políticos de la democratización de nuestras sociedades; en este marco ponemos en discusión pública nuestras propias opiniones y propuestas y acompañamos la acción transformadora de los movimientos y organizaciones sociales y los apoyamos en su construcción de propuestas y en su movilización frente a un orden que los excluye, así como el fortalecimiento de las capacidades de este campo político. Esto define nuestro papel en los terrenos de la información, la producción de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades, la construcción de una ciudadanía interamericana y global y la movilización social.

Desde esta perspectiva estamos interesados en la construcción de alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad civil y con los diversos movimientos sociales que son parte importante del sentido de nuestra acción, alianzas estratégicas que nos permitan incidir tanto en el escenario global como en los espacios regionales y nacionales.

En el mundo de la cooperación para el desarrollo, del que formamos parte, nos regimos por los principios de soberanía, independencia y reciprocidad, comprometiéndonos a impul-

sar relaciones de solidaridad Sur-Sur, Sur-Norte y Norte-Sur, en una lógica en la que queremos contribuir para una mejor redefinición y trazado del perfil del sector.

Nuestra identificación y nuestro compromiso sustantivo con la democracia prioriza la participación de la gente en el escenario público, la lucha contra los poderes autoritarios y fácticos y el desarrollo y fortalecimiento de los sectores democráticos de las sociedades civiles locales como parte del proceso de construcción de la ciudadanía.

La ALOP, definida hoy más claramente como un espacio deliberativo y expresivo de las ONG cuyo valor agregado resulta de la articulación de esfuerzos para la acción y la indispensable incidencia en los espacios supranacionales, pretende, en consecuencia, contribuir para responder a seis grandes desafíos, como signo distintivo de su intervención:

Afirmar la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, lo que implica luchar contra toda forma de discriminación y exclusión, sea ésta del carácter que fuere: género, raza, etnia, religión, opción sexual, etc.

Democratizar la democracia, impulsando la incorporación de nuevos actores sociales y apoyando la redefinición de los viejos, como camino para lograr una democracia y un Estado que incluyan plenamente a la sociedad en sus decisiones.

Socializar la política, para lograr una región de ciudadanos y ciudadanas capaces de tener representaciones políticas legítimas y plena participación en la esfera pública terminando con su privatización.

Politizar lo social, como forma de desnudar el carácter y el origen de la pobreza y recuperar el control de los bienes públicos, pero también y especialmente como camino para politizar la economía y hacerle frente al pensamiento “único” neoliberal.

Distribuir lo que tenemos y crecer distribuyendo, como forma de enfrentar la inequidad y la desigualdad que nos caracterizan hoy día.

Afirmar la integración ciudadana regional, en función de la generación de solidaridad, lo que supone subordinar el mercado a la generación y al ejercicio de derechos.

Por el historial anteriormente citado podemos percibir que existe una constante discusión sobre la identidad de nuestra Asociación. Evidentemente hay diferencias. El trabajo rural, el trabajo urbano, la educación popular, el apoyo a las cooperativas de producción, los movimientos indígenas, negro, feminista, ecológico, y tantas otras cuestiones. ¿Y qué es lo que nos une entonces? ¿Cómo reconocer el sentido de las solidaridades y acciones conjuntas que practicamos? ¿Cómo reconocer y evaluar nuestra acción pública? ¿Cómo evaluar la importancia y los resultados de las políticas que practicamos?

A partir de estos referentes y comprendiendo que esta discusión sobre la identidad de la ALOP es un proceso continuo de construcción de nuestros consensos en una realidad que se transforma de manera acelerada, presentamos a seguir un documento, fruto de las consideraciones, críticas y comentarios que se presentaron durante las asambleas sub-regionales y de la discusión del Comité Ejecutivo, que se presentará en la Asamblea General de mayo de 2008.

4. NUESTRA INSERCIÓN

Las ONG de la ALOP son entidades que se posicionan entre las más importantes ONG de sus países, caracterizándose por su capacidad de producción de conocimientos y por animar redes temáticas y articulaciones nacionales. Muchas de ellas tienen una actuación en varios puntos del país, construyeron una legitimidad con su trabajo que es reconocida por organizaciones comunitarias, por movimientos sociales y por los gobiernos.

Estas ONG tienen, en razón de su inserción social y de su perfil analítico, una capacidad de cuestionar, analizar e interpretar las dinámicas del conflicto social y extraer de esta lectura una agenda de politización de lo social y socialización de la política.

En algunos casos este papel de análisis crítico de la realidad local y nacional, así como de las políticas públicas, dio origen a articulaciones de segundo nivel, que algunos identifican como “el segundo piso de las ONG”, como ocurre en Perú con “Propuesta Ciudadana”; en Colombia con “Viva la Ciudadanía”; en Bolivia con “Apostamos por Bolivia” y en Brasil con el “Fórum Nacional de Participação Popular”.

La importancia creciente de los trabajos en redes de ciudadanía y su incidencia en los escenarios políticos nacionales ha venido trayendo una evaluación de que las ONG de la ALOP presentes en estas redes ocupan un importante espacio en la articulación de las capacidades de análisis crítica que transforman las demandas de los movimientos sociales y de las redes de organizaciones ciudadanas en propuestas de incidencia política.

En el marco de América Latina y el Caribe, hemos establecido alianzas estratégicas con otras redes de defensa de la ciudadanía, principalmente con el Consejo de Educación de Adultos de América Latina y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, y somos fundadores, conjuntamente con la ABONG, de la Mesa de Articulación de las Asociaciones Nacionales de ONG y Redes Regionales de ONG de AL.

Como una Asociación regional, nos incumbe el esfuerzo de contribuir para la construcción de una agenda que permita articular el local con el regional e el internacional de tal manera que esta agenda exprese las inquietudes, necesidades, demandas y contribuciones afirmativas de los movimientos en defensa de la ciudadanía en los cuales nuestras asociadas están inscritas y que ofrezca las condiciones de articulación de estos trabajos con los niveles transnacionales y globales.

5. ¿CÓMO DEBATIR LA IDENTIDAD DE LA ALOP?

La primera cuestión por enfrentar es sobre el método. ¿Con cuáles herramientas, con qué instrumental conceptual y metodológico nos vamos a aproximar a este debate sobre la identidad de la ALOP?

Hubo un tiempo en que la cuestión de la identidad era tratada como algo natural o divino. La identidad era dada. La sociología moderna dice que la identidad se establece en la relación con los otros y mutuamente transforma a los involucrados, pero cada uno pertenece a un grupo social o clase que determina su forma de actuar y hacer política en la sociedad. Las corrientes actuales de la sociología, así como la filosofía postmoderna, afirman que no hay una identidad, sino múltiples identidades en un único sujeto, a veces contradictorias, y que incluso estas identidades se van transformando en una situación histórica dada.

Desde esta última perspectiva, la cuestión de la identidad se separa de la lectura marxista de las relaciones de producción, así como del análisis estructuralista de las clases sociales, y pasa a ser tratada más como una construcción cultural, como la producción de una narrativa común y de una subjetividad transformadora.

Si adoptamos esta óptica de que tanto las asociadas de la ALOP como la propia Asociación poseen múltiples identidades, que se refieren a su vez a las múltiples formas de trabajo y de inserción social, y que compartiendo un análisis común del escenario latinoamericano (construyendo una narrativa común) nos proponemos construir una subjetividad (valores, demandas, necesidades, solidaridades, aspiraciones) que nos una, que exprese nuestra voluntad colectiva, y que le dé sentido a nuestra intervención en el espacio público y en la política, podremos abrir nuestra discusión tomando como referencia nuestras prácticas y analizándolas a la luz de dos ejes que asumimos como centrales: la conquista y ampliación de la ciudadanía, la democratización de la democracia, la lucha por la reducción de las desigualdades sociales, por la repartición de la riqueza y de la renta. Este es “un punto de partida para la constitución de una unidad que no está dada por una sola posición de sujeto, sino por una pluralidad de posiciones de sujetos que piensan establecer entre sí un cierto grado de solidaridad”.

La ALOP, en sus compromisos fundacionales, reafirmados en todos los momentos de su historia, expresa su participación activa en la “promoción y el apoyo a las iniciativas y acciones de los sectores sociales democráticos, especialmente los sectores excluidos, que luchan contra la pobreza y la exclusión en la construcción de un desarrollo humano integral y sustentable”, nuestra misión definida de la AG de 2005.

La cuestión democrática se coloca como una cuestión central. Sin la misma, no hay como pensar el desarrollo teniendo como centro al ser humano, su dignidad y su realización. Y, justo por su carácter polisémico, apropiado según intereses particulares por cada grupo social y político, es preciso buscar construir colectivamente lo que entendemos por la democratización de la democracia.

La democratización de la sociedad es la elevación de toda la cultura a la condición de cosa pública. La democracia, entendida en su radicalidad, como socialización del poder para permitir la socialización de la riqueza, contiene un ape- lo interno al socialismo, “implicando la transformación de las

bases materiales del poder y la transformación de la sociedad privatizada en cosa pública”.

6. NUESTRA IDENTIFICACIÓN CON LOS EXCLUIDOS

Nuestra identificación con las luchas por la socialización del poder, especialmente con las movilizaciones de los sectores excluidos y con sus demandas por inclusión social y política, permiten un doble movimiento: que la Asociación actúe contribuyendo con la politización del trabajo de sus asociadas y, al mismo tiempo, que se inscriba en movimientos más amplios como las luchas por la integración continental y por la construcción de nuevos paradigmas de desarrollo.

A la concentración de la riqueza, el aumento de la desigualdad, la diseminación de la pobreza, la precariedad creciente de la vida para las amplias mayorías, el hambre para muchos millones, las discriminaciones de todo tipo, se suman ahora nuevas cuestiones como son los cambios climáticos y las nuevas amenazas de conflictos armados, todas ellas generan la lucha por la vida, por la paz, generan resistencias, generan movimientos sociales, redes de defensa de la ciudadanía.

La identidad de los excluidos, de los desposeídos, de los discriminados, se construye a partir de su capacidad de resistencia. La pobreza se experimenta en primer lugar como resistencia. No hay experiencia de la pobreza que no sea, al mismo tiempo, resistencia contra la represión del deseo de vivir. Resistencia es, aquí, afirmación de sí mismo. Demanda por derechos, por dignidad, por justicia, por equidad.

La misma se expresa concretamente en sus manifestaciones colectivas por tierra, trabajo, vivienda, salud, educación, cultura, sustentabilidad ambiental, equidad de género, etc. Y encuentra su punto común en la lucha por la conquista y ampliación de la ciudadanía y de una democracia que los incluya – a estos viejos y nuevos actores – en las decisiones de interés público.

Estas prácticas alimentan vínculos socioeconómicos y culturales que incluyen a cada uno de estos actores en nuevas esferas, más amplias, de sociabilidad y de la política. Alimentan estas nuevas esferas y, a su vez, se alimentan de ellas. Un ejercicio de reconocimiento de las diferencias, que exige comprensión y solidaridad.

Esa diversidad requiere la construcción de narrativas más generales, en las cuales todos puedan reconocerse. Narrativas que estructuren proyectos políticos, que configuren un campo de identidades en el cual una densa red de movimientos sociales y asociaciones de carácter diversificado se reconozcan. Como dice Castoriadis, todo movimiento social tiene que inscribirse en un mundo mayor, del cual haga parte: “La verdad propia del sujeto es siempre participación en una verdad que lo sobrepasa, que se enraíza finalmente en la sociedad y en la historia, incluso cuando el sujeto realiza su autonomía”.

La noción de proyectos políticos a que nos referimos no se reduce a estrategias de actuación política en el sentido estricto, sino que “expresan, transmiten y producen significados que integran matrices culturales más amplias, como la lenta emergencia de una cultura más igualitaria, que confronta las varias dimensiones del autoritarismo social de las sociedades latinoamericanas. Son proyectos colectivos que se caracterizan fundamentalmente por su dimensión societaria, es decir, que contienen visiones de lo que debe ser la vida en sociedad.”

7. ALGUNOS ELEMENTOS DE LA NUEVA COYUNTURA

Todos los análisis sobre los procesos electorales recientes en AL señalan el descrédito de los ciudadanos con en el sistema político actual, así como con los partidos políticos tradicionales, expresando una crítica a un modelo de democracia que continúa siendo incapaz de operar los cambios sociales que anuncia y que son las grandes demandas de nuestras sociedades: la distribución de las riquezas y el bienestar de las mayorías.

Este modelo de democracia representativa que escapa al control ciudadano contamina también las formas de democracia directa que se han institucionalizado y vienen desarrollándose en los últimos años, por las mismas razones: la participación no trae como resultado la redistribución de la riqueza.

Enfrentando el poderoso esquema de la política institucional y de los medios de comunicación, que afirma la imposibilidad del cambio, esos ciudadanos que se organizan por la defensa de los derechos se movilizan porque creen que es posible un mundo mejor. Y los recientes resultados electorales que desplazan a las elites del poder, así como sus victorias parciales, a veces pequeñas, como la “guerra de la agua” o las luchas contra los TLC, traen el simbolismo de que es posible vencer y resisitir.

La integración de las comunicaciones a nivel planetario permite que estos acontecimientos sean conocidos en todas las partes y que sean apropiados como expresiones locales de un movimiento social global emergente, en contra el modelo neoliberal, la actuación de las IFIs, el dominio de las transnacionales y de la lógica del mercado sobre nuestras sociedades. Bajo esta denominación genérica del altermundialismo, de un discurso compartido por aquellos que se oponen al modelo de la globalización actual, se organizan las redes globales de resistencias y se alinean las más diversas luchas sociales.

Lo local y lo global aparecen como expresiones del mismo conflicto, contra el neoliberalismo y sus efectos sociales perversos. Las enormes manifestaciones que desde Seattle, en 1999, recorren el mundo contra las instituciones financieras y del comercio internacional, así como los Foros Sociales Mundiales, se combinan con la lucha por el agua como un bien público, que conquista importantes victorias en territorios específicos en Bolivia, Argentina y Uruguay, por ejemplo, o

con la lucha por la tierra, liderada por la Vía Campesina y por el MST de Brasil. Son expresiones de esta integración planetaria solidaria, que lucha por otro mundo posible.

Estas manifestaciones, que en los últimos 5 años ocurren en un número cada vez mayor de países de AL, en lugar de expresar un descrédito por la democracia, como quieren hacer ver algunos analistas, muestran una vitalidad y una disposición de cambios por parte de una ciudadanía organizada que era hasta ahora insospechada o mejor, invisibilizada por análisis que impedían la interpretación de estos procesos vistos como la construcción de un sentido de pertenecer a un mundo común.

“No es que hayamos entrado en un nuevo período de apatía política, la idea de un retorno creciente a la esfera privada no tiene ningún fundamento. Lo que estamos viviendo no es un declive de la ciudadanía, sino su mutación. Los ciudadanos hoy cuentan con muchos más medios de expresar su satisfacción y sus inconformidades y ello nos demanda un análisis en un marco ampliado de las mutaciones por las que pasan las actividades democráticas”.

Varios de los nuevos gobiernos electos luchan por la reapropiación de las riquezas naturales, otros organizan programas de atención a los más pobres, invierten en servicios públicos, buscan una integración regional autónoma, se organizan para negociar en conjunto mejores condiciones en el comercio internacional y cuestionan las instituciones financieras internacionales. En varios países surge una agenda que expresa compromisos electorales y que es compartida por muchos movimientos. Lo que coloca en nuevos términos las relaciones de la ciudadanía con el Estado, donde la participación ciudadana pasa a ser decisiva para la ampliación de las políticas públicas en el marco de la universalización de los derechos humanos. Los procesos de la participación ciudadana en apoyo a las propuestas de cambio en las Asambleas Constituyentes son apenas uno de los múltiples ejemplos de este nuevo tipo de relación Estado y Sociedad que se va afirmando.

Hay una importante “diferencia entre el momento en que estar en la oposición era resistir – lo cual significaba reaccionar al poder – y el momento en el que hacer oposición es presentar propuestas de transformación cuyo grado de avance haga imposible su apropiación por los dirigentes”. En varios casos estas dos formas – resistir y negociar – se combinan. Las banderas de la Reforma del Estado y de la Reforma Política, defendidas en varios países por sectores organizados de la sociedad civil con la participación de nuestras asociadas, traducen la expectativa de inclusión política de estos nuevos actores, que buscan construir una articulación sistémica con las instituciones democráticas legales.

8. UNA AGENDA PARA LA ALOP

Por tratarse de una asociación de varias ONG, la ALOP trabaja con los temas y los desafíos que se colocan para sus asociadas. Su papel de actor político regional procura articular las dinámicas locales, en las cuales las ONG aso-

ciadas están involucradas, con problemáticas más generales – nacionales y regionales – que politizan las prácticas de estas redes de ONG y al mismo tiempo las inscriben en un mundo más amplio.

Estos distintos niveles de incidencia requieren también distintos niveles de análisis que aquí vamos a enunciar solamente, y en cada uno de estos niveles la ALOP necesita encontrar las formas de contribuir con el fortalecimiento de la democracia, de la ciudadanía, y de las luchas de los excluidos.

Nivel local – ¿cómo apoyar una organización con una implantación social que enfrenta los mecanismos de poder, la miseria y la marginalización y se coloca como objetivo superar esta condición?

Nivel nacional – ¿cómo reforzar las exigencias por democracia, justicia, libertad, formuladas por parte de la ciudadanía y de los movimientos locales, que permiten la creación de un lugar de encuentro de la voluntad democrática del país, inciden en la vida política nacional y en las representaciones sociales de los distintos sectores sociales?

Nivel transnacional – ¿cómo reforzar la expresión de un movimiento de solidaridad en varios países, que se estructura como una red transnacional de apoyo y que actúa como grupo de presión de la opinión pública transnacional sobre las instituciones nacionales?

Nivel global – ¿cómo la red transnacional de solidaridad al movimiento local se inscribe en la red global de resistencias que configura el naciente movimiento altermundialista o antiglobalización?

Si estas preguntas enunciadas anteriormente definen, de alguna manera, objetivos, es igualmente importante identificar las estrategias que persiguen estos objetivos. Señalamos a seguir algunos desafíos que nos pueden ayudar a formular las nuevas estrategias.

Construir la historia de las luchas y movilizaciones recientes en defensa de la ciudadanía - y señalar sus elementos comunes - es construir una narrativa en la cual muchos puedan reconocerse. Este reconocimiento crea posibilidades de adhesión de nuevos actores y crea oportunidades de movilización, recalifica las prácticas locales, permitiendo que los propios actores locales se reconozcan a su vez como integrantes del altermundialismo. El zapatismo – y su “¡Ya basta!” – tal vez sea de los mejores ejemplos que expresan ese proceso dialéctico.

Desvendarle a la sociedad como se da la producción de la desigualdad y de la injusticia generadas por las políticas públicas locales, nacionales e internacionales. Identificar las causas y los procesos que determinan la pobreza y la exclusión social. Promover análisis que permitan politizar lo social, cuestionando concretamente los déficits sociales y las políticas públicas, y señalar alternativas. La lucha por los ingresos generados por la explotación del petróleo, por su transformación en un bien público, el cuestionamiento de las privatizaciones, es un importante ejemplo que ha tenido lugar en varios países.

Articular estos grupos de ciudadanos, sus entidades y movi-

mientos, en redes regionales e internacionales por la defensa y universalización de los derechos humanos nos ofrece el catalogo de valores de la democracia y del desarrollo que aspiramos y nos permite participar del proceso de socializar la política, es decir, estimular la reapropiación por parte de los ciudadanos de su derecho de decidir, colectivamente, sobre su vida y su futuro.

Construir una nueva institucionalidad democrática, descentralizada y abierta a la participación ciudadana en las decisiones de las políticas, con nuevos mecanismos de control social sobre los gobiernos. El Foro Nacional de la Reforma Urbana, en Brasil; el Presupuesto Participativo en varios países; y las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza, en Perú; con sus límites, ilustran estas experiencias.

Construir políticas públicas que fortalezcan y financien el desarrollo de las capacidades en la sociedad civil para que esta participación en la gestión pública y el ejercicio del control social sean posibles. Y construir en los gobiernos la cultura de socializar las decisiones y someterse a la voluntad democrática expresada también de forma directa.

“Nuestra tarea es la de escuchar, investigar e inventar. Ayudar a los movimientos y organismos que tienen por misión resistir a la política neoliberal. Debemos darnos como tarea apoyarlos proveyéndolos de instrumentos, en particular de instrumentos contra los efectos simbólicos producidos por “especialistas” comprometidos con las grandes empresas multinacionales...los investigadores pueden también hacer algo más nuevo, más difícil: favorecer la aparición de las condiciones organizativas de la intención de inventar un proyecto político colectivo y, en segundo lugar, las condiciones organizativas para el éxito de la invención de tal proyecto político. Que será evidentemente un proyecto colectivo. ¿Cuál puede ser nuestro papel allí? El de trabajar para una invención colectiva de estructuras colectivas de invención que harán nacer un nuevo movimiento social, es decir, nuevos contenidos, nuevos objetivos y nuevos medios internacionales de acción”.

Teniendo en cuenta nuestros límites y capacidades, nuestros desafíos son de:

- Colaborar en generar condiciones para elevar el grado organizativo de los grupos de ciudadanos y ciudadanas que se organizan por la defensa y ampliación de los derechos humanos.
- Fortalecer instancias y procesos de participación ciudadana.
- Generar y fortalecer redes y articulaciones ciudadanas. Fortalecer capacidades de presión y control social
- Trabajar por la emergencia de una cultura solidaria, antagónica al individualismo.
- Analizar y tomar posiciones en relación a los conflictos sociales.
- Fortalecer la presencia de la ciudadanía en los foros internacionales y nacionales.

Este punto se apoya en la publicación “ALOP: un perfil institucional”, de Mariano Valderrama, publicado por la ALOP en 1993.

ALOP; “Directorio de Asociadas”; Comité Ejecutivo 1999-2002.

Ver “ALOP: un perfil institucional”, de Mariano Valderrama, publicado por la ALOP en 1993.

BIBLIOGRAFÍA

HALL, Stuart; “A identidade cultural na pós-modernidade” (“La identidad cultural en la postmodernidad”); DP&A Editora; Río de Janeiro; 2000.

LACLAU, Ernesto; “Inclusão social e as perspectivas pós-estruturalistas da análise social” (“Inclusión social y perspectivas post-estructuralistas del análisis social”) conferencia de apertura del seminario internacional con el mismo nombre ocurrido en Recife, Pernambuco, en 2005.

CHAUÍ, Marilena; “Cultura e Democracia; o discurso competente e outras falas” (“Cultura y Democracia; el discurso competente y otros decires”; Ed. Moderna; São Paulo; 1981; pp. 132.

NEGRI, Antonio; “Kairós, Alma Vênus, Multitudo: nove lições ensinadas a mim mesmo”; DP&A Editora; Río de Janeiro; 2003; pp. 130-132.

DAGNINO, Evelina; OLIVERA, Alberto; PANFICHI, Aldo (organizadores); “A disputa pela construção democrática na América Latina”; Ed. Paz e Terra; São Paulo; 2006; pp. 32.

Castoriadis, Cornelius;

Dagnino et alii; op. cit.; pp 40.

SANCHO, Guiomar Rovira; “El zapatismo como ejemplo de las redes globales de resistencias” in CALVEIRO, Pilar (co-ord.); “El Estado y sus otros”; Libros de la Araucaria; Buenos Aires; 2006.

ROSANVALLON, Pierre; “La contre-démocratie: la politique à l’âge de la défiance”; Ed. Seuil; Paris; septembre 2006.

CHAUÍ, Marilena; “Cultura e Democracia; o discurso competente e outras falas”; Ed. Moderna; São Paulo; 1981; pp. 177.

Estos distintos niveles de análisis son elaborados por SANCHO, Guiomar Rovira; op. cit.

BOURDIEU, Pierre; “A Produção da Crença: Contribuição para a Economia dos Bens Simbólicos” (“La Producción de la Creencia: Contribución para la Economía de los Bienes Simbólicos”); São Paulo; Ed. Zouk; 2002.

ANEXO 3

RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS

I. REGIÓN CAMEXCA

MÉXICO

Servicios de Asesoría para la Paz – SERAPAZ
Consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca – APPO
Alianza Democrática de Organizaciones Civiles – ADOC
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco
Convención Nacional Democrática
Partido de la Revolución Democrática – PRD
Sindicato Mexicano de Telefonistas
Junta de Buen Gobierno – Chiapas
Red Oaxaqueña de Derechos Humanos
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho AL Agua - COMDA

PANAMÁ

Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales – FRENADESO
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá – AHMNP
Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por VIH/SIDA – PROBIDSIDA
Programa Veraguense de Desarrollo Ecológico Sostenible – PROVERDES
Alianza Ciudadana Pro Justicia
Asociación de Profesores de la República de Panamá - ASOPROF

NICARAGUA

Centro de Investigaciones y Comunicación – CINCO
Fundación Popol
Grupo Fundemos

EL SALVADOR

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – FMLN
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEI-COM
Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador - CSTC
Comite de Defensa Del Consumidor – CDC
Cambio Democrático – CD
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños – APROCSAL

COSTA RICA

Partido Acción Ciudadana - PAC
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – ANEP
Asociación de Servicios y Promoción Laboral – ASEPROLA
Centro de Amigos para la Paz – CAP

HONDURAS

Colégio de Enfermeras Profesionales
Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo – FOPRIDEH
Partido Unificación Democrática - UD

GUATEMALA

Colectivo de Organizaciones Sociales – COS
Proyecto E – por uma agenda nacional del pueblo Maya
Coordinación de Organizaciones Cooperativas - CONGCOOP

II. REGIÓN ANDINA

PERU

Movimiento Descentralización Democrática en Peru
Red de Municipalidades Rurales del Perú - Remurpe.
Movimiento social de oposición al TLC con EE.UU
Asociación Nacional de Productores de Algodón – ANPAL
Grupo Propuesta Ciudadana
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería - CONACAMI
Movimiento social de oposición al TLC con EE.UU
Convención Nacional del Agro - CONVEAGRO
Movimiento social en conflicto con las empresas mineras metálicas
Foro de la Sociedad Civil para la Salud - FORO SALUD
Partido Socialista
Frente de Defensa del Medio Ambiente de la provincia de Huancabamba

COLÔMBIA

Mesa Permanente por el Desarrollo del Putumayo.
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
Movimiento Hijos e Hijas
CIMA - Popayán
PCN – Buenaventura
Ruta Pacífica de las Mujeres
Comitê Cívico y Junta de Acción Comunal Del Barrio Carlos E. Restrepo

BOLIVIA

Centro de la Mujer Gregoria Apaza. El Alto, La Paz
Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
Movimiento Al Socialismo – MAS

ECUADOR

Universidad laica Eloy Alfaro de Manta
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras – FENOCIN

Movimiento Político Alternativa Democrática
 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
 - CONAIE
 Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del
 Ecuador - ECURUNARI
 Comité Ecumenico de Proyectos
 Fundación para El desarrollo y la creatividad productiva –
 FUNDES
 Cooperación Suiza para el Desarrollo
 Centro de Estudios y Asesoría en Salud - CEAS

VENEZUELA

Acción Campesina
 Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea
 Nacional.
 Partido Patria Para Todos - PPT
 Sinergia, Asociación Nacional de Organizaciones de
 la Sociedad Civil
 Partido Un Nuevo Tiempo.
 Central Latinoamericana de Trabajadores.

REGIÓN CONO SUR Y BRASIL

ARGENTINA

Central de Trabajadores Argentina - CTA
 Afirmación por una República Igualitaria - ARI
 Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA
 Central Geral de los Trabajadores - CGT
 Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS
 Partido Socialista
 Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal -
 CECOPAL
 Comisión Institucional de los equipos técnicos de Daniel Fil-
 mus 2007
 Católicas por el Derecho a Decidir, Córdoba
 Mesa Federal Agraria
 Movimiento indígena de la República Argentina
 Mesa Nacional del Movimiento Evita

CHILE

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -
 OLCA
 Vivo Positivo, organización de personas viviendo con VIH
 Radio Tierra, estación de radio comunitaria
 Consejo de todas las tierras, movimiento social indígena
 Partido por la Democracia PPD
 Movimiento de integración y liberación homosexual.-
 Movimiento poblacional, comuna Pedro Aguirre - MOVILH
 Movimiento estudiantil secundario, Región de Valparaíso
 Foro Social Chile/ATTAC

PARAGUAI

Sindicato de Enfermeras y Personal de la Salud del Hospital
 de Clínicas
 Central Nacional Campesina, Indígena y Popular - Cenacip
 Federación Nacional Campesina (FNC)
 BASE - investigaciones sociales
 Movimiento Campesino Paraguayo - MCP
 Movimiento Tekojoja

URUGUAI

Plenario Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de
 Trabajadores - PIT-CNT
 Confederación Uruguaya de Cooperativas
 Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamen-
 tales orientadas al Desarrollo –ANONG.
 Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay -AMRU
 Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
 Federación Uruguaya de Magisterio - FEM
 Espacio 609
 Encuentro Progresista-Frente Amplio
 Alianza Nacional (Partido Nacional)

BRASIL

Central Única dos Trabalhadores - CUT
 Central de Movimentos Populares - CMP
 Associação Brasileira de ONGs - ABONG
 União dos Movimentos Populares de Saúde - UMPS
 Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Popula-
 res - GAJOP
 União dos Movimentos de Moradia - UMM
 Coordenação Nacional das Entidades Negras - CONEN
 Articulação do Semi-Árido - ASA
 Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar-
 FETRAF
 Movimento dos Afetados por Barragens - MAB
 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST
 Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 Partido Socialista Brasileiro - PSB
 Movimento de Mulheres Camponesas - MMC
 Movimento dos Trabalhadores Desempregados -MTD
 Partido dos Trabalhadores – PT
 Fórum Nacional de Reforma Urbana - FNRU
 Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos,
 Sociais, Culturais e Ambientais - PIDHESC
 Rede Brasileira pela Integração dos Povos - REBRIB
 Rede Alerta Deserto Verde